



BOLETÍN JURÍDICO

AÑO X – N° 8 – JUNIO 2015

NORMAS JURÍDICAS PUBLICADAS

Informa realización del proceso de consulta indígena según lo establecido en el Convenio 169 de la OIT en el marco de la Evaluación Ambiental del proyecto "Central Hidroeléctrica Rucalhue"
(pág. 6)

Autoriza a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso para realizar pesca de investigación que indica (pág. 6)

NUEVOS PROYECTOS DE LEY

Reforma constitucional sobre ejercicio del derecho a reunión
(pág. 11)

Modifica disposiciones legales que indica para establecer un sistema de selección con inclusión en los establecimientos educacionales reconocidos como tradicionales o de alta exigencia
(pág. 12)

ANEXOS

Chile

Observaciones finales del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas sobre el cuarto informe periódico enviado por Chile (selección) (pág. 36)

Ley n° 20.843, Elimina la prohibición de participación de estudiantes y funcionarios en el gobierno de las instituciones de educación superior, publicada en el Diario Oficial de fecha 18 de junio de 2015 (pág. 38)

Argentina

Extracto del "Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo", promulgado por el Ministerio de Salud de la Nación (pág. 100)

Guatemala

"Nos duele Guatemala", comunicado de prensa de la Conferencia Episcopal de Guatemala ante la situación actual que vive el país (pág. 185)

México

Tesis Jurisprudencial de la Corte Suprema que se pronuncia sobre la constitucionalidad del matrimonio homosexual, declarando como contraria a la Carta Fundamental una norma que considere la procreación como finalidad del matrimonio o que lo defina como un contrato celebrado entre un hombre y una mujer (pág. 190)

Centro de Libertad Religiosa (CELIR) – Derecho UC: Todos los derechos reservados.

Se autoriza la reproducción de textos íntegros y no alterados, siempre que se individualice al Centro de Libertad Religiosa (CELIR) – Derecho UC como titular de los derechos de autor.





ÍNDICE GENERAL

I. Normas Jurídicas Publicadas

Normas Reglamentarias

Resoluciones

[Autoriza a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso para realizar pesca de investigación que indica](#) 6

[Informa realización del proceso de consulta indígena según lo establecido en el Convenio 169 de la OIT en el marco de la Evaluación Ambiental del proyecto “Central Hidroeléctrica Rucalhue”](#) 6

[Colectas Públicas](#) 7

[Derechos de Aprovechamiento de Aguas](#) 8

[Concesión de Radiodifusión Sonora](#) 9

II. Proyectos de Ley en Trámite

Derecho y Religión

A. Religiones y Creencias en el Espacio Público

- Otros

[Reforma constitucional sobre ejercicio del derecho a reunión](#) 11

B. Educación

- Establecimientos Educacionales

[Modifica disposiciones legales que indica para establecer un sistema de selección con inclusión en los establecimientos educacionales reconocidos como tradicionales o de alta exigencia](#) 12

C. Derecho de Propiedad

- Patrimonio Cultural

[Reforma constitucional sobre patrimonio histórico cultural de la nación](#) 13

Matrimonio y Derecho de Familia

Familia

- Maltrato hacia la Tercera Edad

[Impone el deber de los Establecimientos de Larga Estadía \(ELEAM\) de prestar asistencia social y representación administrativa y judicial de los derechos de los adultos mayores, cuyo cuidado se les haya encomendado](#) 14

Varios

- Bingos con fines de beneficencia y esparcimiento

[Establece marco de autorización para la realización de bingos con fines de beneficencia y esparcimiento](#) 14

- Lobby

[Modifica la ley n° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, para considerar las actuaciones diplomáticas](#)



entre aquellas no reguladas por dicha ley	15
- Personas jurídicas receptoras de fondos públicos	
Modifica la ley N° 19.862 que Establece registros de las personas jurídicas receptoras de fondos públicos, estableciendo la prohibición de que estas contraten con personas relacionadas	16
Proyectos de ley en trámite que han experimentado modificaciones o variaciones desde el último Boletín Jurídico	17

III. Anexos

Chile

A. Acápite relativo a libertad religiosa en Informe Anual de Situación de Derechos Humanos en Chile 2014, elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos	21
B. Observaciones finales del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas sobre el cuarto informe periódico enviado por Chile (selección)	36
C. Ley n° 20.843, Elimina la prohibición de participación de estudiantes y funcionarios en el gobierno de las instituciones de educación superior, publicada en el Diario Oficial de fecha 18 de junio de 2015	38
D. Ley n° 20.851, Regula la realización de bingos, loterías u otros sorteos similares, con fines de beneficios o solidaridad	41

Santa Sede

A. Carta encíclica LAUDATO SI' del santo padre francisco sobre el cuidado de la casa común (selección)	43
B. Discurso del Papa Francisco a los participantes en el encuentro organizado por la Asociación Ciencia y Vida	50
C. Intervención del Cardenal Parolin en la UNESCO, en el marco del foro "Educar hoy y mañana"	52
D. Intervención del Monseñor Paul Gallagher en el Consejo de Europa sobre la dimensión religiosa del diálogo intercultural	62
E. Discurso del Papa Francisco a los estudiantes que acaban de terminar el curso en la Academia Pontificia Eclesiástica	73
F. Comunicado del Vaticano en relación al envío a juicio del ex nuncio Józef Wesolowski, a petición de la Oficina del Promotor de Justicia	76
G. Firma del acuerdo entre la Santa Sede y Estados Unidos de Norteamérica para combatir la evasión fiscal	77
H. Intervención de la Santa Sede en la 39ª Conferencia de la FAO	80
Discurso del Santo Padre en la 39ª Conferencia de la FAO	85
I. Informe de la Oficina de Prensa de la Santa Sede sobre la conclusión de la décima reunión del Consejo de Cardenales	89
J. Intervención de la Santa Sede en la 29ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos	92
K. Discurso del Santo Padre Francisco a los Obispos de la Conferencia Episcopal de Puerto Rico en Visita "Ad Limina"	96



L. Firma del Acuerdo General entre la Santa Sede y el Estado de Palestina	99
Argentina	
A. Extracto del “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, promulgado por el Ministerio de Salud de la Nación	100
B. Comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina en relación al Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo	108
España	
A. Nota de prensa del Arzobispado de Granada en la cual informa que, finalmente, se entrega al Juzgado de Instrucción nº4 la documentación requerida sobre el “Caso de los Romanones”	110
Notas de prensa que niegan la calidad secreta de la investigación judicial del “Caso de los Romanones”	111
B. Notas informativas del Arzobispado de Oviedo relativas a la expulsión del estado clerical del sacerdote Jesús María Menéndez Suarez por delitos de grave conducta inmoral contra el sexto mandamiento y el abuso de menores según las normas canónicas vigentes	115
C. Ley 12/2015 que concede la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España (selección)	117
D. Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Galicia que confirma que la Cruz de los Caídos del Monte do Castro de Vigo habría perdido el significado original de exaltación de la guerra civil, de modo que desapareciendo su carga política, puede ser contemplada como un elemento religioso, siendo innecesaria su remoción tal como lo pedía inicialmente la asociación demandante, Asociación Viguesa Pola Memoria Histórica Do 36	122
Estados Unidos de Norteamérica	
A. Sentencia de la Corte Marcial de la Marina de Estados Unidos, que considera como indisciplina el mantener una cita bíblica en el escritorio de una infante de marina, condenándola a una rebaja de rango (selección)	131
Apelación presentada ante la Corte de Apelaciones para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, patrocinada por Liberty Institute (selección)	141
B. Sentencia de la Corte Suprema que decide, conforme a la 14ª Enmienda, que un Estado debe permitir y reconocer el matrimonio entre dos personas del mismo sexo cuando su matrimonio ha sido legalmente celebrado fuera de aquél estado (selección)	155
Voto de minoría del Ministro Thomas (selección)	169
C. Sentencia de la Corte Suprema que rechaza incluir a Israel, como lugar de nacimiento, en pasaportes de norteamericanos nacidos en Jerusalén debido a que Estados Unidos no reconoce la soberanía de ningún país sobre esa ciudad (selección)	177
Guatemala	
A. Comunicados de prensa de la Conferencia Episcopal de Guatemala ante la contaminación reciente del río La Pasión	183
B. “Nos duele Guatemala”, comunicado de prensa de la Conferencia Episcopal de Guatemala ante la situación actual que vive el país	185
Marruecos	
Nota del Consejo de Comunidades Marroquíes en el Extranjero sobre el Primer Encuentro Internacional sobre “El Imán y los desafíos del contexto europeo”	188
México	



[Tesis Jurisprudencial de la Corte Suprema que se pronuncia sobre la constitucionalidad del matrimonio homosexual, declarando como contraria a la Carta Fundamental una norma que considere la procreación como finalidad del matrimonio o que lo defina como un contrato celebrado entre un hombre y una mujer](#) 190

Reino Unido

A. [Nota de prensa relativa a la prohibición, en dos escuelas primarias judío ortodoxas del norte de Londres, para que las madres condujeran automóviles al llevar a sus hijos a clases](#) 192

B. [Iglesia Metodista publica informe sobre 1.885 casos de abuso en su interior, desde 1950 a 2014. En representación de la iglesia, el Secretario de la Conferencia Metodista, el reverendo Martyn Atkins, ha expresado una disculpa sin reservas en nombre del metodismo](#) 194

Venezuela

A. [Comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana en relación a la violación de Derechos Humanos del ex alcalde Daniel Ceballos](#) 196

B. [Carta del Arzobispo de Caracas al líder opositor, Leopoldo López, para que deponga su huelga de hambre](#) 198

Tierra Santa

[Comunicado de prensa de la Asamblea de Ordinarios Católicos de Tierra Santa que condena el atentado incendiario contra la Iglesia de Tabgha](#) 199

I

Normas Jurídicas Publicadas

Normas Reglamentarias

Resoluciones

**Resolución n° 1.234, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
de 6 de mayo de 2015.
Autoriza a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso para realizar pesca
de investigación que indica
Diario Oficial: 9 de junio de 2015.**

Se autoriza a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso para efectuar una pesca de investigación de prospección de conformidad con los Términos Técnicos de Referencia del proyecto denominado "Obtención de datos biológicos-pesqueros de jaiba limón" en la Región de O'Higgins.

**Resolución n° 179, del Ministerio del Medio Ambiente
Servicio de Evaluación Ambiental, Región del Biobío
de 12 de mayo de 2015.
Informa realización del proceso de consulta indígena según lo establecido en
el Convenio 169 de la OIT en el marco de la Evaluación Ambiental del
proyecto "Central Hidroeléctrica Rucalhue"
Diario Oficial: 8 de junio de 2015.**

Se ha dispuesto la realización de un Proceso de Consulta Indígena, el cual se llevará a cabo con los grupos humanos pertenecientes a los pueblos indígenas que se encuentren dentro del área de influencia del proyecto y que sean afectados directamente por aquel, especialmente, las comunidades indígenas Ayin Mapu, Kudawe Che y Newen Mapu. Los plazos y metodologías serán consensuados con aquellas comunidades.

[Volver al Índice](#)

Colectas Públicas

La autorización para efectuar colectas públicas depende de las intendencias regionales respectivas. Cuando se realizan en más de una región, ésta proviene de la Subsecretaría del Interior.

NORMA	ENTIDAD	LUGAR Y FECHA COLECTA	PUBLICACIÓN
Decreto exento n° 1.894	Fundación Vida Compartida ¹	Regiones de Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Biobío, Los Lagos y Metropolitana; 19 y 20 de junio de 2015	8 de junio de 2015
Decreto exento n° 1.893	Fundación Bíblica Chilena ²	Regiones de Antofagasta, Valparaíso, Biobío, Araucanía, Los Lagos y Metropolitana; 24 de julio de 2015	8 de junio de 2015

[Volver al Índice](#)

¹ Es el nombre legal, y también usa el nombre de "Fundación Don Bosco", entidad de beneficencia, creada en 2004, que presta ayuda psiquiátrica, de rehabilitación y asilo. Puede consultarse el sitio web www.fundaciondonbosco.cl

² Entidad sin fines de lucro que otorga ayuda social y espiritual a personas necesitadas. Más información en el sitio web www.sbch.cl

Derechos de Aprovechamiento de Aguas

La constitución de derechos de aprovechamiento de aguas depende de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas.

SOLICITUD	SOLICITANTE	PUBLICACIÓN
Modificación de cauce. Autorización para la construcción de la descarga del colector de aguas lluvias provenientes de soleras y cunetas del Camino de Acceso a Templo Baha'i, comuna de Peñalolén, Provincia de Santiago, Región Metropolitana.	Asamblea Espiritual Nacional de Los Bahai's de Chile ³	1º de junio de 2015

[Volver al Índice](#)

³ En el sitio web www.bahai.cl se informa lo siguiente: "La Fe Bahá'í, la más reciente de las religiones independientes del mundo, nació en 1844 en el Medio Oriente y hoy en día cuenta con más de cinco millones de seguidores en 232 países y territorios. Entre sus principios fundamentales establecidos en la revelación de Bahá'u'lláh, su fundador, están el logro de la unidad de la humanidad y el establecimiento de la paz mundial. Para ello, promueve principios espirituales y sociales". En la década de los '40 comenzaron a afianzarse las primeras comunidades Baha'i en Chile, estableciendo dos escuelas, una en la IX Región de la Araucanía y otra en la Región Metropolitana, además de contar con una radio Baha'i.

Concesiones de Radiodifusión Sonora

Todas las normas emanan del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría de Telecomunicaciones.

NORMA	MATERIA	CONCESIONARIO	PUBLICACIÓN
Decreto Supremo n° 404	Otorga y modifica Concesión de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana para la comuna de Coronel	Congregación Cristiana Restauración de Fe Elohim ⁴ (RUT 65.274.640-3)	26 de junio de 2015
Decreto Supremo n° 322	Otorga y modifica Concesión de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana para la comuna de Los Andes	Parroquia Nuestra Señora de Fátima ⁵ (RUT 70.313.002-k)	25 de junio de 2015
Decreto Supremo n° 364	Otorga y modifica Concesión de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana para la comuna de Linares	Parroquia San Antonio de Padua ⁶ (RUT 65.002.510-5)	24 de junio de 2015

⁴ Información del proyecto puede consultarse el sitio web <http://turadioelohim.blogspot.com/search/label/Elohim>

⁵ Es obra de la Congregación de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús-Dehonianos (www.parroquiadefatima.cl)

⁶ Parroquia perteneciente a la Diócesis de Linares de la Iglesia Católica.

NORMA	MATERIA	CONCESIONARIO	PUBLICACIÓN
Decreto Supremo n° 385	Otorga y modifica Concesión de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana para la comuna de Cañete	Unión de Iglesias Evangélicas de Cañete ⁷ (RUT 74.783.300-1)	23 de junio de 2015
Decreto Supremo n° 368	Otorga y modifica Concesión de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana para la comuna de Talagante	Iglesia Evangélica Cristiana Visión Apostólica (RUT 65.394.370-9)	18 de junio de 2015
Decreto Supremo n° 327	Otorga y Modifica Concesión de Radiodifusión Comunitaria para la comuna de Valparaíso	Iglesia Evangélica Cruzada del Poder (RUT 73.414.500-9) ⁸	11 de junio de 2015

[Volver al Índice](#)

⁷ "La visión general de la Unión de Iglesias Evangélicas de Cañete, es alcanzar la unidad del Pueblo evangélico de la comuna", para conocer más acerca de esta institución, puede consultarse el sitio web www.uniondeiglesiasevangelicascanete.cl

⁸ Existe información sobre "El Ministerio Evangelístico "Cruzada de Poder" ", que declara ser "un Ministerio Cristiano, Evangélico, Fundamentalista y Pentecostal" (<http://www.cruzadadepoder.cl/home.html>).

II Proyectos de Ley en Trámite

Síntesis Descriptiva Proyectos de Ley (Esquema temático y cronológico)

Los proyectos se refieren a los derechos y deberes constitucionales y a las normas complementarias a éstos. Los títulos son los propuestos por sus autores.

Tabla explicativa de urgencias en la tramitación de la ley, cuya discusión y votación se realiza en la Cámara requerida

URGENCIA	PLAZO DE TERMINACIÓN
Sin urgencia	No está sujeto a plazo alguno
Simple urgencia	Treinta días
Suma urgencia	Quince días
Discusión inmediata	Seis días

DERECHO Y RELIGIÓN

A. Religiones y Creencias en el Espacio Público

Otros

Reforma constitucional sobre ejercicio del derecho a reunión

Nº de Boletín: 10087-07

Fecha de ingreso: 2 de junio de 2015.

Iniciativa: Moción

Cámara de origen: Cámara de Diputados.

Autores: Sergio Aguiló Melo, Rodrigo González Torres, Hugo Gutiérrez Gálvez, Carlos Jarpa Wevar, Tucapel Jiménez Fuentes, Daniel Melo Contreras, José Miguel Ortiz Novoa, Leonardo Soto Ferrada, Camila Vallejo Dowling.

Descripción: Dos artículos, y dos artículos transitorios. Incorpora un nuevo inciso segundo al artículo 19 nº 13⁹ de la Constitución Política de la República,

⁹ El texto vigente del artículo 19 nº13 de la Carta Fundamental establece: La Constitución asegura a todas las personas: Nº13 "El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas. Las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público, se regirán por las disposiciones generales de policía".

según el cual toda persona tendrá derecho a manifestarse libremente en los espacios públicos. Establece que el ejercicio de los derechos garantizados por el referido numeral del artículo 19 se regirá por la ley, a la cual se encomiendan los principios que regirán los procedimientos de la fuerza pública en las manifestaciones ciudadanas, estableciendo los órganos jurisdiccionales que conocerán de las causas que involucren a ciudadanos civiles y organizaciones de la comunidad en el ejercicio de tales derechos.

Estado de Tramitación: Primer trámite constitucional. Cámara de Diputados, pendiente primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

Urgencia: Sin urgencia.

B. Educación

Establecimientos Educativos

Modifica disposiciones legales que indica para establecer un sistema de selección con inclusión en los establecimientos educacionales reconocidos como tradicionales o de alta exigencia

Nº de Boletín: 10113-04.

Fecha de ingreso: 9 de junio de 2015.

Iniciativa: Moción.

Cámara de origen: Cámara de Diputados.

Autores: Pepe Auth Stewart, Jaime Bellolio Avaria, Pedro Browne Urrejola, Felipe Kast Sommerhoff, Paulina Núñez Urrutia, Jaime Pilowsky Green, Alberto Robles Pantoja, Karla Rubilar Barahona, Jorge Tarud Daccarrett, Mario Venegas Cárdenas.

Descripción: Artículo único. Sin perjuicio del fin de la selección dispuesto en otras disposiciones legales, se establece la posibilidad que aquellos establecimientos educacionales reconocidos por su alta exigencia o rendimiento puedan seleccionar a los estudiantes a través de procedimientos especiales de admisión. Sin embargo, al menos el 40% de su matrícula debe ser integrada por estudiantes provenientes de familias pertenecientes al 40% más vulnerable del total nacional, quienes podrán ser contabilizados para efectos de la subvención escolar preferencial.

Estado de Tramitación: Primer trámite constitucional. Cámara de Diputados, pendiente primer informe de la Comisión de Educación, Deportes y Recreación.

Urgencia: Sin urgencia.

C. Derecho de Propiedad

Patrimonio Cultural

Reforma constitucional sobre patrimonio histórico cultural de la nación¹⁰

Nº de Boletín: 10093-07.

Fecha de ingreso: 9 de junio de 2015.

Iniciativa: Moción.

Cámara de origen: Cámara de Diputados.

Autores: Daniella Cicardini Milla, Marcos Espinosa Monardes, Iván Flores García, Marcela Hernando Pérez, Carlos Abel Jarpa Wevar, Daniel Núñez Arancibia, José Pérez Arriagada, Alberto Robles Pantoja.

Descripción: Artículo único. Incorpora a la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 n°24, inciso 2°¹¹, de la Constitución política de la República, la frase "histórico cultural de nuestro país". Asimismo, en el artículo 22, inciso 2°¹², incorpora el "patrimonio histórico cultural de nuestro país" a la enumeración de caracteres patrios que los chilenos tienen el deber de honrar.

Estado de Tramitación: Primer trámite constitucional. Cámara de Diputados, pendiente primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

Urgencia: Sin urgencia.

¹⁰ El texto íntegro del proyecto puede consultarse en nuestro sitio web www.celir.cl/v2/Otros/Patrimoniohistoricocultural.pdf

¹¹ El actual inciso establece: "Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental".

¹² La actual normativa preceptúa: "Artículo 22.- Todo habitante de la República debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales.

Los chilenos tienen el deber fundamental de honrar a la patria, de defender su soberanía y de contribuir a preservar la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición chilena.

El servicio militar y demás cargas personales que imponga la ley son obligatorios en los términos y formas que ésta determine.

Los chilenos en estado de cargar armas deberán hallarse inscritos en los Registros Militares, si no están legalmente exceptuados".

MATRIMONIO Y DERECHO DE FAMILIA

Familia

Maltrato hacia la Tercera Edad

Impone el deber de los Establecimientos de Larga Estadía (ELEAM) de prestar asistencia social y representación administrativa y judicial de los derechos de los adultos mayores, cuyo cuidado se les haya encomendado

Nº de Boletín: 10136-18.

Fecha de ingreso: 15 de junio de 2015.

Iniciativa: Moción.

Cámara de origen: Cámara de Diputados.

Autores: Juan Antonio Coloma Álamos, Gustavo Hasbún Selume, Issa Farid Kort Garriga, Joaquín Lavín León, Javier Macaya Danús, Andrea Molina Oliva, Claudia Nogueira Fernández, Iván Norambuena Farías, David Sandoval Plaza, Ignacio Urrutia Bonilla.

Descripción: Artículo único. Establece que los Establecimientos de Larga Estadía, que hoy se encuentran regulados sólo por normativa reglamentaria, deben asistir socialmente, y en casos calificados incluso judicialmente o ante autoridades administrativas, los derechos de aquellos adultos mayores que sean víctimas de abandono y que se encuentren en tales establecimientos.

Estado de Tramitación: Primer trámite constitucional. Cámara de Diputados, pendiente primer informe de la Comisión de Familia.

Urgencia: Sin urgencia.

VARIOS

Bingos con fines de beneficencia y esparcimiento

Establece marco de autorización para la realización de bingos con fines de beneficencia y esparcimiento

Nº de Boletín: 10081-06

Fecha de ingreso: 2 de junio de 2015.

Iniciativa: Moción.

Cámara de origen: Cámara de Diputados.

Autores: Jenny Álvarez Vera, Osvaldo Andrade Lara, Juan Luis Castro González, Daniella Cicardini Milla, Fidel Espinoza Sandoval, Maya Fernández Allende, Luis Lemus Aracena, Daniel Melo Contreras, Denise Pascal Allende, Marcelo Schilling Rodríguez.

Descripción: Artículo único. Permite realizar bingos organizados por personas naturales o jurídicas sin fines de lucro que tengan por exclusiva finalidad la realización de obras pías o de beneficencia privada, cuyo objeto sea la educación, caridad o la asistencia social.

Estado de Tramitación: Tramitación terminada. Publicada la norma en el Diario Oficial el día 27 de junio de 2015¹³.

Urgencia: Sin urgencia.

Lobby

Modifica la ley n° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, para considerar las actuaciones diplomáticas entre aquellas no reguladas por dicha ley

N° de Boletín: 10132-06

Fecha de ingreso: 17 de junio de 2015.

Iniciativa: Moción.

Cámara de origen: Senado.

Autores: Francisco Chahuán, Alejandro García-Huidobro Sanfuentes, Ricardo Lagos Weber, Juan Pablo Letelier Morel, Jorge Pizarro Soto.

Descripción: Artículo único. Modifica el artículo 6°¹⁴ de la ley n° 20.730, que regula el lobby, agregando como materia no regulada por la misma "las

¹³ El texto íntegro de la ley puede consultarse en la sección Anexos, página 42.

¹⁴ El actual texto del artículo 6° de la ley n° 20.730 establece lo siguiente: "No obstante lo señalado en el artículo precedente, no están regulados por esta ley:

1) Los planteamientos o las peticiones realizados con ocasión de una reunión, actividad o asamblea de carácter público y aquellos que tengan estricta relación con el trabajo en terreno propio de las tareas de representación realizadas por un sujeto pasivo en el ejercicio de sus funciones.

2) Toda declaración, actuación o comunicación hecha por los sujetos pasivos en el ejercicio de sus funciones.

3) Toda petición, verbal o escrita, realizada para conocer el estado de tramitación de un determinado procedimiento administrativo.

4) La información entregada a una autoridad pública, que la haya solicitado expresamente para efectos de realizar una actividad o adoptar una decisión, dentro del ámbito de su competencia.

5) Las presentaciones hechas formalmente en un procedimiento administrativo, por una persona, su cónyuge o pariente hasta el tercer grado por consanguinidad y segundo de afinidad en la línea recta y hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad en la colateral, siempre que no se solicite la adopción, modificación o derogación de normas legales o reglamentarias, ni el cambio de resultados de procesos administrativos o de selección.

6) Las asesorías contratadas por órganos públicos y parlamentarios realizadas por profesionales e investigadores de asociaciones sin fines de lucro, corporaciones, fundaciones, universidades, centros de estudios y de cualquier otra entidad análoga, así como las invitaciones que dichas instituciones extiendan a cualquier funcionario de un órgano del Estado.

7) Las declaraciones efectuadas o las informaciones entregadas ante una comisión del Congreso Nacional, así como la presencia y participación verbal o escrita en alguna de ellas de profesionales de las entidades señaladas en el número precedente, lo que, sin embargo, deberá ser registrado por dichas comisiones.

8) Las invitaciones por parte de funcionarios del Estado y de parlamentarios para participar en reuniones de carácter técnico a profesionales de las entidades señaladas en el número 6).

9) La defensa en juicio, el patrocinio de causas judiciales o administrativas o la participación en calidad de amicus curiae, cuando ello se permita, pero sólo respecto de aquellas actuaciones propias del procedimiento judicial o administrativo.

10) Las declaraciones o comunicaciones realizadas por el directamente afectado o por sus representantes en el marco de un procedimiento o investigación administrativos.

actuaciones diplomáticas realizadas en cumplimiento de la política exterior de Chile, en el marco de los tratados internacionales de los que Chile es parte y de la práctica diplomática”.

Estado de Tramitación: Primer trámite constitucional. Senado, pendiente primer informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

Urgencia: Sin urgencia.

Personas jurídicas receptoras de fondos públicos

Modifica la ley N° 19.862 que Establece registros de las personas jurídicas receptoras de fondos públicos, estableciendo la prohibición de que estas contraten con personas relacionadas

N° de Boletín: 10088-05

Fecha de ingreso: 3 de junio de 2015

Iniciativa: Moción.

Cámara de origen: Cámara de Diputados.

Autores: Fuad Chahín Valenzuela, Marcelo Chávez Velásquez, Aldo Cornejo González, Jaime Pilowsky Greene, Jorge Sabag Villalobos.

Descripción: Artículo único. Agrega un nuevo artículo 11 a la ley n° 19.862¹⁵, que establece registros de las personas jurídicas receptoras de fondos públicos, según el cual, las personas jurídicas públicas o privadas, sin fines de lucro, que reciban aportes o subvenciones de los órganos de la Administración del Estado, a cualquier título, no podrán celebrar actos o contratos de provisión de bienes o servicios con quienes se desempeñen como gerentes, administradores, representantes o directores de éstas, ni tampoco con aquellas personas unidas por parentesco a ellos, ni sociedades en las que tengan alguna participación. Se establece como sanción a la entidad receptora, ante el incumplimiento, la eliminación automática del correspondiente registro, sin poder recibir nuevos fondos por un plazo de 2 años.

Estado de Tramitación: Primer trámite constitucional. Cámara de Diputados, pendiente primer informe de la Comisión de Hacienda.

Urgencia: Sin urgencia.

[Volver al Índice](#)

11) Las presentaciones escritas agregadas a un expediente o intervenciones orales registradas en audiencia pública en un procedimiento administrativo que admita la participación de los interesados o de terceros”.

¹⁵ El actual articulado de la ley no posee artículo 11.

**Proyectos de ley que han experimentado modificaciones
en su tramitación legislativa desde el último
Boletín Jurídico**

DERECHO Y RELIGIÓN

A. Educación

Reforma Educacional

NOMBRE DEL PROYECTO	N° BOLETÍN	CÁMARA DE ORIGEN	ESTADO DE TRAMITACIÓN	BOLETÍN JURÍDICO
Regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado.	9366-04	Cámara de Diputados	Tramitación terminada. Ley n° 20.845, publicada en el Diario Oficial con fecha 8 de junio de 2015 ¹⁶ .	
Elimina prohibición de participación de estudiantes y funcionarios en el gobierno de las instituciones de educación superior, y autoriza dictar nuevos estatutos para la Universidad de Santiago y la Universidad de Valparaíso	9481-04	Cámara de Diputados	Tramitación terminada. Ley n° 20.843, publicada en el Diario Oficial con fecha 18 de junio de 2015 ¹⁷ .	Año IX n° 10 Agosto 2014

B. Religión y creencias en el espacio público

Concesiones de Nacionalidad

NOMBRE DEL PROYECTO	N° BOLETÍN	CÁMARA DE ORIGEN	ESTADO DE TRAMITACIÓN	BOLETÍN JURÍDICO
Concede la nacionalidad por gracia a la religiosa Augusta Pedrielli Cleanti	9848-06	Cámara de Diputados	Tramitación terminada. Ley n° 20.836, publicada en el Diario Oficial de fecha 6 de junio de 2015 ¹⁸ .	Año X n°4 Enero 2015

¹⁶ El texto completo de la ley puede consultarse en nuestro sitio web <http://www.celir.cl/v2/legislacion/Ley20845.pdf>

¹⁷ El texto completo de la ley puede consultarse en la sección Anexos, página 30.

¹⁸ El texto completo de la ley puede consultarse en nuestro sitio web <http://www.celir.cl/v2/legislacion/Ley20836.pdf>



C. Igualdad y no discriminación

Sexo, Raza y Religión

NOMBRE DEL PROYECTO	Nº BOLETÍN	CÁMARA DE ORIGEN	ESTADO DE TRAMITACIÓN	BOLETÍN JURÍDICO
Modifica la ley nº 20.609 para incorporar en el concepto de discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que afecte a la maternidad o al nacimiento	9938-17	Senado	Etapa: 1er trámite constitucional. Senado, derivado a Comisión de Salud. Pendiente primer informe. Sin urgencia.	Año X nº5 Marzo 2015
Reconoce y da protección al derecho a la identidad de género	8924-07	Senado	Etapa: 1er trámite constitucional. Senado, pendiente segundo informe de Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía ¹⁹ . Sin urgencia.	Año VIII nº7 Mayo 2013

D. Salud

Otros

NOMBRE DEL PROYECTO	Nº BOLETÍN	CÁMARA DE ORIGEN	ESTADO DE TRAMITACIÓN	BOLETÍN JURÍDICO
Modifica ley Nº 20.000, sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, con el objeto de legalizar el autocultivo de cannabis para el consumo privado	9471-11 (Refundido con 9496-11)	Cámara de Diputados	Etapa: 1er trámite constitucional. Cámara de Diputados, queda pendiente Discusión General. Sin urgencia	Año IX nº9 Octubre 2014

¹⁹ El boletín de indicaciones presentado con fecha 1º de junio de 2015 puede consultarse en nuestro sitio web <http://www.celir.cl/v2/Otros/BoletinIndicacionesproyectogenero.pdf>

E. Trabajo

Trabajo y Familia

NOMBRE DEL PROYECTO	Nº BOLETÍN	CÁMARA DE ORIGEN	ESTADO DE TRAMITACIÓN	BOLETÍN JURÍDICO
Modifica Código del Trabajo, en materia de jornada laboral en días domingos y festivos	9386-13	Cámara de Diputados	Tramitación terminada. Ley nº 20.823, publicada en el Diario Oficial de fecha 6 de junio de 2015 ²⁰ .	Año IX nº8 Junio 2014
Modifica el Código del Trabajo en lo relativo a la participación de los menores en espectáculos públicos	5117-13	Cámara de Diputados	Tramitación terminada. Ley nº 20.821, publicada en el Diario Oficial de fecha 6 de junio de 2015 ²¹ .	Año II nº7 Junio 2007

F. Derecho de Información y Opinión

Otros

NOMBRE DEL PROYECTO	Nº BOLETÍN	CÁMARA DE ORIGEN	ESTADO DE TRAMITACIÓN	BOLETÍN JURÍDICO
Modifica ley Nº 19.733, sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, para exigir a los diarios electrónicos, el cumplimiento de las exigencias establecidas, para los medios de comunicación social	9461-19	Cámara de Diputados	Etapa: 1er trámite constitucional. Cámara de Diputados, discusión general. Pendiente informe de Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones. Sin urgencia	Año IX nº9 Julio 2014

²⁰ El texto completo de la ley puede consultarse en nuestro sitio web <http://www.celir.cl/v2/legislacion/Ley20823.pdf>

²¹ El texto completo de la ley puede consultarse en nuestro sitio web <http://www.celir.cl/v2/legislacion/Ley20821.pdf>

MATRIMONIO Y DERECHO DE FAMILIA

Familia

Filiación y Adopción de Menores

NOMBRE DEL PROYECTO	N° BOLETÍN	CÁMARA DE ORIGEN	ESTADO DE TRAMITACIÓN	BOLETÍN JURÍDICO
Modifica la ley n° 19.620, que Dicta Normas sobre Adopción de Menores, en protección de la infancia que es declarada susceptible de adopción por inhabilidad parental en razón de pobreza, marginalidad y riesgos implicados en ella	9959-18	Cámara de Diputados	Etapa: 1er trámite constitucional. Cámara de Diputados, pendiente primer informe de Comisión de Familia ²² . Sin urgencia	Año X n°6 Abril 2015

Delitos vinculados a Menores de Edad y Adultos Vulnerables

NOMBRE DEL PROYECTO	N° BOLETÍN	CÁMARA DE ORIGEN	ESTADO DE TRAMITACIÓN	BOLETÍN JURÍDICO
Modifica la ley N° 19.223, que Tipifica Figuras Penales Relativas a la Informática, sancionando la distribución, exhibición o reproducción de material pornográfico infantil	9998-17	Cámara de Diputados	Etapa: 1er trámite constitucional. Cámara de Diputados, pendiente primer informe de Comisión Constitución, Legislación y Justicia ²³ . Sin urgencia	Año X n°6 Abril 2015

[Volver al Índice](#)

²² Con fecha 2 de junio se dio cuenta del Oficio n° 66-2015 de la Corte Suprema, el cual puede consultarse en nuestro sitio web <http://www.celir.cl/v2/Otros/informeCSadopcion.pdf>

²³ Con fecha 2 de junio se dio cuenta del Oficio n° 67-2015 de la Corte Suprema, el cual puede consultarse en nuestro sitio web <http://www.celir.cl/v2/Otros/informeCSpornografia.pdf>

III

Anexos

Chile

A. Acápites relativos a libertad religiosa en Informe Anual de Situación de Derechos Humanos en Chile 2014, elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos²⁴

DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA

ANTECEDENTES

El derecho de toda persona a adherir o no a una fe determinada, como su derecho a manifestar pública o privadamente esa fe, es un derecho humano que debe ser respetado, garantizado y protegido por el Estado. No obstante, en democracias como la de Chile donde el Estado es no confesional (desde 1925) y donde la mayoría de la población adhiere a la religión católica, ha habido políticas, normas o prácticas que, a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos, han debido ser modificadas con el objeto de permitir el ejercicio igualitario de este derecho.

Ejemplo de esto es que en 1999 se publicó la Ley 19.638 que establece normas sobre la constitución jurídica de las Iglesias y Organizaciones Religiosas, la que asegura en su artículo 2 que "ninguna persona podrá ser discriminada en virtud de sus creencias religiosas, ni tampoco podrán éstas invocarse como motivo para suprimir, restringir o afectar la igualdad consagrada en la Constitución y la ley".

Según la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos realizada por el INDH en 2013, el 58% de las personas encuestadas dijo que expresar una fe o creencia es un derecho humano, mientras que el 13% vinculó el concepto de derechos humanos a la libertad religiosa. Asimismo, un 51% respondió que el derecho a expresar su fe o creencia está totalmente protegido en el país, y, en sentido contrario, un 7% fue de la opinión que este derecho no estaba para nada protegido.

Mientras un 89% dijo que nunca se ha sentido discriminado por su religión, un 16% cree que a personas de una religión distinta a la suya no se les respetan sus derechos humanos.

En efecto, un 4,9% de las personas católicas encuestadas dijo haberse sentido alguna vez discriminada por su religión, mientras que el porcentaje en el caso de las personas evangélicas alcanza el 20,9%. Asimismo, mientras el 9,9% de las personas encuestadas que dicen no pertenecer a una etnia indígena mencionaron haberse sentido discriminadas por su religión, el porcentaje en el caso de las que sí dicen pertenecer a una etnia indígena sube al 14,2% (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2013).

²⁴ El informe completo puede consultarse en la dirección web: <http://www.indh.cl/informe-anual-situacion-de-los-derechos-humanos-en-chile-2014>

Este derecho adquiere relevancia en una sociedad diversa, con un mayor número de adherentes a religiones distintas de la católica, y con el aumento de personas que han declarado no adherir a ninguna religión o culto específico, cuestión también protegida por este derecho. Y es que la libertad religiosa tiene un componente de autodeterminación de la persona: cada quien es libre para adherir o no a una religión o culto en particular, lo que obliga al Estado a no establecer obstáculos ilegítimos en el ejercicio de este derecho, los que se deben eliminar principalmente en el caso de grupos vulnerados, como personas pertenecientes a pueblos indígenas que están privados de libertad²⁵

Así entonces, el presente capítulo se centra en el contenido del derecho a la libertad religiosa, las esferas a proteger, las obligaciones del Estado en la materia acorde a los instrumentos internacionales y la legislación nacional, para luego revisar algunos casos judiciales del último tiempo conocidos por las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema donde se ha analizado el ejercicio de este derecho. Finalmente, el capítulo se refiere a la objeción de conciencia en Chile y qué han manifestado al respecto distintos órganos internacionales de los derechos humanos.

ACLARACIONES CONCEPTUALES

Es necesario distinguir el derecho de libertad religiosa de otros derechos con características similares. Por ejemplo, la libertad de pensamiento, la que abarca la libre facultad de la persona para formarse sus propias ideas en todo tipo de ámbitos, protegiendo de ese modo cualquier representación intelectual de una persona. La libertad de conciencia, en cambio, refiere a aquellas representaciones de tipo valórico, que se traducen en determinadas pautas éticas o morales que fijan la noción de lo correcto e incorrecto (Nogueira, 2008, p. 11). Esta última debe ser considerada como el sustento necesario para que exista libertad religiosa.

La libertad religiosa surge a partir de la libertad de conciencia, pero excede ese ámbito, ya que se caracteriza por proteger tanto la esfera de pensamiento como el ámbito de acción vinculado a la relación de la persona humana con (o sin) una religión o creencia espiritual. La libertad religiosa posee una dimensión objetiva en virtud de la cual se definen los límites que tiene el Estado respecto de sus diversas expresiones, imponiendo el deber de respetar las múltiples religiones que se expresan en la sociedad y de remover los obstáculos para explicitar y manifestar libremente las creencias. Esta dimensión incide en la configuración moderna del Estado no confesional, en donde este se abstiene de intervenir en asuntos propios de los credos y donde

²⁵ En el último año, aspectos como la posibilidad de celebrar festividades específicas –como el año nuevo mapuche en establecimientos penitenciarios– fueron objeto de debate público. Justamente, respecto del caso de Celestino Córdova, condenado por el incendio con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger MacKay, el Consejo del INDH manifestó mediante declaración pública que “las personas privadas de libertad, independientemente del delito por el que estén procesadas o condenadas, tienen derecho a manifestar y practicar su religión o credo. El Estado tiene la obligación de generar las condiciones que, resguardando la seguridad inherente a la vida penitenciaria, permitan dicho ejercicio en las unidades penales velando porque estas sean igualitarias para todas las religiones y credos” (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2013b).

a su vez las leyes, normativas y políticas públicas no se adoptan a base de criterios o principios puramente religiosos. En su dimensión subjetiva implica el derecho de cada persona de tener o no una creencia religiosa o espiritual, practicándola individual o colectivamente, en espacios públicos y privados.

ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS

A nivel internacional, el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) establece en su párrafo primero que “toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado”. Así, este párrafo establece dos derechos distintos: por una parte, la libertad para conservar la religión o las creencias (o de cambiar de religión o de creencias), y por otra, la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. Esta distinción es relevante, ya que el párrafo segundo del artículo 12 establece que nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que menoscaben el primer conjunto de derechos (conservar o cambiar la religión o las creencias); mientras que, por su parte, el párrafo tercero del artículo admite que “la libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por ley y necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás”. Esta distinción entre los párrafos segundo y tercero del artículo 12 es vital para que cada Estado la respete al momento de regular la libertad religiosa. Finalmente, el párrafo cuarto del artículo reconoce el derecho de los padres, madres o tutores a que sus hijos, hijas y/o pupilos o pupilas reciban una educación religiosa y moral “[q]ue esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) es similar a la CADH en su reconocimiento de este derecho²⁶. El artículo 18 establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza”. Los párrafos siguientes establecen la misma regulación en cuanto a las restricciones permitidas a este derecho y el derecho de padres, madres y tutores a que sus hijos e hijas reciban una educación religiosa o moral acorde a sus convicciones. Asimismo, el artículo 27 establece que “en los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida

²⁶ La única diferencia es que mientras en la CADH la libertad de religión (artículo 12) está regulada de manera separada de la libertad de pensamiento (artículo 13), en el PIDCP ambos derechos están regulados en el mismo artículo 18.

cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma”²⁷.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, órgano creado por el PIDCP, en su Observación General Nº 22, estableció que este derecho es profundo y de largo alcance, en tanto cubre “creencias teístas, no teístas y ateas”²⁸, así como el derecho a no profesar ninguna religión o creencia”, añadiendo que “los términos ‘creencias’ y ‘religión’ deben entenderse en sentido amplio. El artículo 18 no se limita en su aplicación a las religiones tradicionales o a las religiones y creencias con características o prácticas institucionales análogas a las de las religiones tradicionales”²⁹. En cuanto a las formas de manifestar las creencias y que quedan protegidas por este derecho, se menciona “la construcción de lugares de culto, el empleo de fórmulas y objetos rituales, la exhibición de símbolos y la observancia de las fiestas religiosas y los días de asueto”, añadiendo también costumbres como “la observancia de normas dietéticas, el uso de prendas de vestir o tocados distintivos, la participación en ritos asociados con determinadas etapas de la vida, y el empleo de un lenguaje especial que habitualmente solo hablan los miembros del grupo”³⁰.

Dentro de la Observación General Nº 22, el párrafo sexto resulta de gran relevancia. En él el Comité señala que el párrafo cuarto del artículo 18 protege la práctica y la enseñanza de la religión o de las creencias, en el sentido de que “permite que en la escuela pública se imparta enseñanza de materias tales como la historia general de las religiones y la ética siempre que ello se haga de manera neutral y objetiva”, señalando además que la libertad de los padres o de los tutores legales contemplada en ese párrafo 4 “está relacionada con la garantía de la libertad de enseñar una religión o creencias que se recoge en el párrafo 1 del mismo artículo 18”. De todos modos, el párrafo sexto de la Observación General precisa que la “educación obligatoria que incluya el adoctrinamiento en una religión o unas creencias particulares es incompatible con el párrafo 4 del artículo 18, a menos que se hayan previsto exenciones y posibilidades que estén de acuerdo con los deseos de los padres o tutores”³¹.

Finalmente, el párrafo noveno de la Observación General, en relación con el principio de no discriminación por motivos religiosos, señala que “el hecho de que una religión se reconozca como religión de Estado o de que se establezca como religión oficial o tradicional, o de que sus adeptos representen la mayoría de la población no tendrá como consecuencia ningún menoscabo del

²⁷ Si bien la CADH y el PIDCP establecen el marco general internacional de regulación de la libertad religiosa y de culto, este derecho también está regulado en tratados específicos como por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 13), la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 2) y la Convención del Estatuto de los Refugiados (artículo 4).

²⁸ N. del E.: Las creencias ateas no creen en la existencia de un dios, mientras que las no teístas, si bien tampoco creen en la existencia de un dios, sí conciben ideas como la vida después de la muerte o la reencarnación.

²⁹ ONU, Comité de Derechos Humanos, Observación General Nº 22. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, adoptada en su 48º período de sesiones, 1993, párrafo 2.

³⁰ ONU, Comité de Derechos Humanos, Observación General Nº 22. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, adoptada en su 48º período de sesiones, 1993, párrafo 4.

³¹ *Ibidem*, párrafo 6.

disfrute de cualquiera de los derechos consignados en el Pacto, comprendidos los artículos 18 y 27, ni ninguna discriminación contra los adeptos de otras religiones o los no creyentes”.

Posteriormente, y en relación con el artículo 27 del PIDCP, el Comité concluyó en su Observación General Nº 23 que “se relaciona con los derechos cuya protección impone obligaciones específicas a los Estados Partes. La protección de esos derechos tiene por objeto garantizar la preservación y el desarrollo continuo de la identidad cultural, religiosa y social de las minorías interesadas, enriqueciendo así el tejido social en su conjunto. [P]or tanto, los Estados Partes tienen la obligación de asegurar la debida protección del ejercicio de esos derechos y deben indicar en sus informes las medidas que hayan adoptado con ese fin”³².

Un tercer tratado internacional donde se hace referencia a este derecho es el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el que en su artículo 5, literal a, establece que “deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente”.

Por su parte, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones³³. El artículo 6 de este instrumento internacional enumera algunas manifestaciones de la libertad religiosa y de culto. Entre ellas están la de practicar el culto o de celebrar reuniones en relación con la religión o las convicciones; escribir, publicar y difundir publicaciones pertinentes en esas esferas; enseñar la religión o las convicciones en lugares aptos para esos fines; observar días de descanso y de celebrar festividades y ceremonias de conformidad con los preceptos de una religión o convicción; y establecer y mantener comunicaciones con individuos y comunidades acerca de cuestiones de religión o convicciones en el ámbito nacional e internacional. La misma Asamblea General, en diciembre de 1992, aprobó la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas³⁴ la que, en su artículo 1, establece que “los Estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural o religiosa y lingüística de las minorías dentro de sus territorios respectivos y fomentarán las condiciones para la promoción de esa identidad”. Asimismo, el artículo 2 añade que “las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas [...] tendrán derecho a disfrutar su propia cultura, a profesar y practicar su propia religión, y a utilizar su propio idioma, en privado y en público, libremente y sin injerencia ni discriminación de ningún tipo”.

³² ONU, *Comité de Derechos Humanos, Observación General Nº 23. Derecho de las minorías, adoptada en su 50º período de sesiones, 1994, párrafo 9.*

³³ ONU, *Asamblea General, Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, proclamada el 25 de noviembre de 1981, Resolución 36/55.*

³⁴ ONU, *Asamblea General, Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, aprobada el 18 de diciembre de 1992, Resolución 47/135.*

NORMATIVA NACIONAL

La Constitución Política de la República (CPR) asegura a todas las personas en su artículo 19 N° 6 “la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público”³⁵. La redacción es distinta a la revisada en los tratados internacionales, ya que no reconoce expresamente una libertad religiosa, aunque el origen de la redacción está en el numeral segundo del artículo 10 de la Constitución de 1925 y, en ese sentido, es parte de la tradición constitucional, a partir de ese momento en que, en definitiva, se consagró el Estado no confesional en nuestra República. Por lo mismo, entendiendo que esta libertad constitucional vigente comprende tanto la libertad de conciencia como la libertad de manifestar las creencias y la libertad de culto, es posible concluir que la Constitución resguarda la libertad religiosa al mencionar en este artículo sus diferentes dimensiones. En cuanto al régimen de restricciones a este derecho, la CPR no distingue entre libertad de conciencia y libertad de culto, lo que podría resultar relevante, pues de acuerdo con el PIDCP y la CADH la libertad de conciencia –como facultad que se ejerce en el ámbito interno– no es susceptible de ser regulada. De todas formas, una interpretación armónica con el ordenamiento jurídico internacional conduce a distinguir una esfera interna de libertad de conciencia que debe permanecer libre de coacción y restricciones por parte del Estado; y una esfera externa en donde rigen las limitaciones fundadas en la moral, las buenas costumbres y el orden público.

Por su parte, el Tribunal Constitucional, interpretando el artículo 19 N° 6 de la CPR, ha planteado que “la libertad de conciencia, o ideológica, constituye uno de los pilares del Estado de derecho”³⁶, y que como toda libertad pública, esta tiene “una doble dimensión: son ‘negativas’ pues exigen que las personas estén libres de todo impedimento o constricción, y son ‘positivas’, pues el Estado reconoce la facultad de las personas para realizar un propósito. Ambas dimensiones deben ser garantidas en una democracia no solo a nivel de la ley, sino también en la vida real”³⁷. A nivel legal, si bien este derecho está presente en distintas normativas, la regulación principal está en la Ley 19.638 que establece normas sobre la constitución jurídica de las Iglesias y Organizaciones Religiosas. En ella se establece que ninguna persona puede ser discriminada en virtud de sus creencias religiosas (artículo 2) y consagra en su artículo 20 que “el Estado reconoce el ordenamiento, la personalidad jurídica, sea esta de derecho público o de derecho privado, y la plena capacidad de goce y ejercicio de las iglesias, confesiones e instituciones religiosas que los tengan a la fecha de publicación de esta ley, entidades que mantendrán el régimen jurídico que les es propio, sin que ello sea causa de trato desigual entre dichas entidades y las que se constituyan en conformidad a esta ley”. En virtud de estos artículos es que se ha planteado que “la nueva ley [19.638]

³⁵ El mismo artículo contiene dos incisos más referidos al derecho patrimonial de las confesiones religiosas como el derecho a erigir y conservar templos, y que estos junto a sus dependencias estarán exentos de toda clase de contribuciones.

³⁶ Tribunal Constitucional, Rol 567-2006, sentencia de 2 de junio de 2010, considerando 28.

³⁷ *Ibidem*, considerando 29.

consagró la igualdad de todas las Iglesias” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2014, p. 139). Por su parte, el artículo 6 establece que la libertad religiosa y de culto implica, entre otras, las facultades de profesar la creencia religiosa que libremente elija o no profesar ninguna, manifestarla libremente o abstenerse de hacerlo; cambiar o abandonar la que profesaba; practicar en público o en privado, individual o colectivamente, actos de oración o culto; conmemorar sus festividades; celebrar sus ritos; observar su día de descanso semanal; no ser obligada a practicar actos de culto o a recibir asistencia religiosa contraria a sus convicciones personales y no ser perturbada en el ejercicio de estos derechos.

Asimismo, el artículo agrega el derecho a recibir asistencia religiosa donde quiera se encuentre la persona, reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos, asociarse para desarrollar comunitariamente sus actividades religiosas, recibir e impartir enseñanza o información religiosa por cualquier medio y elegir para sí la educación religiosa acorde a sus convicciones. Es destacable que esta regulación abarca no solamente los actos que se pueden ejercer en virtud de la adherencia a una religión o a un culto determinado, sino que además reconoce que la omisión (no profesar creencia alguna) también está amparada por este derecho. Parte de estos derechos son detallados en leyes especiales, como la Ley 20.584, que regula los derechos y deberes de las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, particularmente el derecho a recibir asistencia religiosa o espiritual (artículos 6, 7 y 18).

Del mismo modo, el artículo 138 y siguientes del Código Penal regula los crímenes y simples delitos relativos al ejercicio de los cultos y penaliza el impedir el ejercicio de un culto, retardar o interrumpir su ejercicio, ultrajar los objetos de un culto y ultrajar a un ministro de un culto en el ejercicio de su ministerio. La Ley 20.370 que establece la Ley General de Educación dispone como uno de los principios que rige el sistema educativo chileno es el de diversidad, el cual se traduce en el deber de “promover y respetar la diversidad de procesos y proyectos educativos institucionales, así como la diversidad cultural, religiosa y social” (artículo 3, literal e).

Aclara además, en su artículo 4 inciso quinto que “es deber del Estado que el sistema integrado por los establecimientos educacionales de su propiedad provea una educación gratuita y de calidad, fundada en un proyecto educativo público, laico, esto es, respetuoso de toda expresión religiosa, y pluralista, que permita el acceso a él a toda la población y que promueva la inclusión social y la equidad”. La tolerancia y no discriminación son valores que aparecen a lo largo de esta normativa, con el objeto de fortalecer un sistema educativo respetuoso de la diversidad religiosa.

También a nivel legal existe la prohibición de discriminación por motivos religiosos. La Ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación reconoce expresamente la religión o creencia como una de las categorías sospechosas que a priori no deberían justificar una distinción, exclusión o restricción en el ejercicio de derechos, aclarando en cualquier caso que podrán considerarse razonables las distinciones, exclusiones o restricciones que, no obstante fundarse en motivos como la religión, “se encuentren justificadas en

el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental, en especial los referidos en los números 4º, 6º, 11º, 12º, 15º, 16º y 21º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, o en otra causa constitucionalmente legítima” (artículo 2, inciso 3º)³⁸. A nivel legal, se debe mencionar también la reciente modificación que introdujo la Ley 20.750 a la Ley 18.838 que crea el Consejo Nacional de Televisión, y que considera la diversidad religiosa como parte del pluralismo que cautela este organismo³⁹.

A la regulación constitucional y legal se deben agregar otras regulaciones de menor jerarquía jurídica contenidas en decretos⁴⁰. Cabe destacar el Decreto Supremo (DS) N° 924 del Ministerio de Educación que reglamenta las clases de religión en establecimientos educacionales, estableciendo que las clases de religión deberán ser ofrecidas con carácter de optativas y que podrán ofrecerse clases de diversos credos religiosos (artículo 3). El artículo 5, por su parte, establece que “los establecimientos particulares confesionales ofrecerán a sus alumnos la enseñanza de la religión a cuyo credo pertenece y por cuya razón han sido elegidos por los padres de la familia al matricular a sus hijos”, agregando en el inciso segundo que “dichos establecimientos educacionales [particulares confesionales], sin embargo, deberán respetar la voluntad de los padres de familia que por tener otra fe religiosa, aunque hayan elegido libremente el colegio confesional, manifiesten por escrito que no desean la enseñanza de la religión oficial del establecimiento para sus hijos”.

EL DERECHO EN TENSIÓN: CASOS JUDICIALIZADOS TENSIONES CON OTROS DERECHOS

En la aplicación práctica de las garantías fundamentales, estas pueden entrar en tensión con otros derechos, lo que plantea la necesidad de ponderar los principios en pugna para el caso concreto. La libertad religiosa no escapa de esta lógica y existen casos en que la judicatura se ha visto enfrentada a resolver los conflictos entre alguna de las manifestaciones de la libertad de ejercer la propia religión con otros derechos. Uno de los principales mecanismos judiciales llamado a resolver estos conflictos es el recurso de protección, el cual expresamente incluye en su competencia al artículo 19 N° 6 de la CPR⁴¹. Por lo mismo, a continuación se consideran casos específicos que durante el período de análisis del presente Informe Anual han sido resueltos por los tribunales mediante esta acción constitucional⁴². Un primer caso fue el

³⁸ Para un análisis en detalle sobre la Ley 20.609, ver INDH, Informe Anual 2012, página 109 y siguientes.

³⁹ El nuevo inciso quinto del artículo 1 de la Ley 18.838 establece que “para efectos de esta ley, se entenderá por pluralismo el respeto a la diversidad social, cultural, étnica, política, religiosa, de género, de orientación sexual e identidad de género, siendo deber de los concesionarios y permisionarios de servicios de televisión, regulados por esta ley, la observancia de estos principios”.

⁴⁰ Entre ellos, el Decreto Supremo N° 155 del Ministerio de Defensa Nacional que reglamenta la asistencia religiosa en establecimientos de las fuerzas armadas y de las de orden y seguridad pública; el Decreto Supremo N° 94 del Ministerio de Salud que aprueba el reglamento sobre asistencia religiosa en recintos hospitalarios; y el Decreto Supremo N° 703 del Ministerio de Justicia que aprueba el reglamento de asistencia religiosa en establecimientos penitenciarios y similares.

⁴¹ Aun cuando el recurso de protección es una de las acciones judiciales principales en esta materia, son pocos los casos en que se alega la vulneración de la libertad de religión y culto. Ver INDH, Informe Anual 2011, página 89 y siguientes.

⁴² Esto no obsta que existan más casos que hayan sido conocidos mediante otras acciones judiciales, como por ejemplo, por medio del mecanismo de tutela de derechos fundamentales en materia laboral.

de dos estudiantes universitarios –un hombre y una mujer– de tercer año de Odontología en la Universidad San Sebastián, quienes solicitaron la reprogramación de dos exámenes solemnes en virtud de que estaban calendarizados para un sábado, el que según su religión adventista constituye su día de descanso semanal. Ante la negativa de la casa de estudios, los estudiantes presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la que si bien acogió el recurso obligando a la Universidad a reprogramar las solemnes, no fundamentó su decisión en una vulneración a la libertad religiosa “porque no existen antecedentes que permitan inferir que la situación denunciada por los recurrentes tuviera por origen la fe que ellos profesan o que por esta vía se pretendiere limitar su derecho a consagrarse a su culto”⁴³. El análisis de la Corte se basa en que no vio una intención de vulnerar la libertad religiosa de los estudiantes, pero omite que la vulneración a derechos humanos no solo puede producirse donde existe una intención, sino que también cuando el resultado –independiente de la intención– vulnera derechos fundamentales.

No obstante, la Corte consideró que la no modificación de la fecha fue arbitraria y afectó la igualdad ante la ley, ya que “al no darse razón alguna, aparece que es solo el exceso de rigor reglamentario el que provoca una situación que perjudica a los recurrentes”⁴⁴. En segunda instancia, la Corte Suprema revocó el fallo, con un voto disidente, al considerar que si bien “la Constitución y la ley efectivamente garantizan el derecho que reclaman los recurrentes; [...] ese derecho debe compatibilizarse con las situaciones académicas y contractuales que estos decidieron libremente asumir”⁴⁵. De este modo, la casa de estudios adoptó la no modificación de la solemne “en estricta aplicación de los reglamentos y programas académicos que rigen para la generalidad de sus alumnos y de este modo no ha incurrido en ilegalidad o arbitrariedad alguna”⁴⁶. Siguiendo el test de convencionalidad, la Corte en el presente caso no presentó un análisis de proporcionalidad en orden a verificar si la calendarización del examen para un sábado era la medida menos lesiva para el ejercicio del derecho⁴⁷.

Un segundo caso es el de un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) quien en enero de 2014 fue sancionado con una medida disciplinaria por ausentarse de sus labores un sábado. El funcionario defendió su ausencia en razón de que su jornada fue modificada incluyendo los sábados, lo cual para él no era posible al profesar el credo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La

⁴³ Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 132.162-2013, sentencia de 2 de enero de 2014, considerando cuarto.

⁴⁴ Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 132.162-2013, sentencia de 2 de enero de 2014, considerando quinto.

⁴⁵ Corte Suprema, Rol N° 1720-2014, sentencia de 11 de marzo de 2014, considerando cuarto.

⁴⁶ *Ibidem*, considerando quinto.

⁴⁷ Este régimen constitucional de limitaciones debe ser analizado complementariamente con el “test de convencionalidad” realizado por la Corte IDH para verificar si la restricción al derecho ha sido legítima, es decir, si ha sido establecida por ley, si responde a un interés legítimo y si es necesaria en una sociedad democrática (proporcionalidad de la medida e interferir en la menor medida posible el ejercicio del derecho). Este test otorga certeza en cuanto a que la medida restrictiva ha sido debidamente debatida por los poderes del Estado competentes, que resulta razonable su aplicación y que su aplicación está libre de toda arbitrariedad por parte del Estado. Ver Corte IDH, caso *Claude Reyes vs. Chile*, 19 de septiembre de 2006, párrafos 89 a 91.

Corte de Apelaciones de Valparaíso concluyó que “no se ha vulnerado el derecho que le asiste al recurrente de practicar y manifestar el culto religioso que profesa, y por ende no se ha infringido la Garantía Constitucional establecida en el N° 6 del artículo 19 de nuestra Constitución Política de la República, ni La Ley 19.638[.] En efecto, la situación que se ha originado respecto al recurrente quien ha sido sancionado por su superior jerárquico, no dice relación con un impedimento para desarrollar y practicar su religión, sino con haber actuado al margen de los procedimientos establecidos en la Institución a la cual pertenece desde hace varios años, para justamente haber logrado eliminar las trabas, que estimó le afectaban para asistir al culto el día sábado”⁴⁸. La Corte añadió además que no se realizó conducta alguna con el objeto de privar al recurrente de su derecho a ejercer su culto. En este sentido, al igual que en el caso anterior, la Corte mantuvo el criterio de estimar que no basta con el mero conflicto entre el día de descanso semanal por motivos religiosos y la existencia de otras obligaciones ese día, en tanto las segundas no persigan la privación o perturbación del libre ejercicio del credo. En cuanto a la armonización entre ambas obligaciones, aparentemente para la Corte es suficiente la existencia de un procedimiento formal para manifestar estos obstáculos.

Un tercer caso se vincula con el derecho de recibir educación religiosa, y en particular, de no recibirla si no se desea.

Una estudiante de tercero medio del colegio San Conrado de Futrono, establecimiento particular subvencionado dependiente del Obispado de Valdivia, dejó de asistir a las clases de religión basándose en que no era creyente, cuestión confirmada por sus padres. Ante esto, el establecimiento le comunicó que dado el carácter confesional del establecimiento, no se le renovarían para el próximo año el contrato de prestación de servicios educacionales, lo que motivó el recurso de protección presentado por la estudiante. La Corte de Apelaciones de Valdivia acogió el recurso planteando que producto de la libertad de culto no es posible condicionar la matrícula de un alumno a la asistencia de clases de religión⁴⁹. Agregó además que la libre suscripción de un contrato de prestación de servicios educacionales no puede alterar esta regla, considerando lo que al respecto regula el Decreto Supremo N° 924 del Ministerio de Educación que expresamente establece que las clases de religión serán optativas, y que tratándose de establecimientos confesionales, estos “deberán respetar la voluntad de los padres de familia que por tener otra fe religiosa, aunque hayan elegido libremente el colegio confesional, manifiesten por escrito que no desean la enseñanza de la religión oficial del establecimiento para sus hijos”⁵⁰.

Como se destacara anteriormente respecto de la Ley 19.638, la Corte aquí también hace un reconocimiento expreso al aspecto negativo de la libertad religiosa, en virtud de la cual esta comprende no solo la facultad de recibir y

⁴⁸ Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rol N° 460-2014, sentencia de 4 de abril de 2014, considerando décimo.

⁴⁹ Corte de Apelaciones de Valdivia, Rol N° 2095-2013, sentencia de 21 de enero de 2014, considerando segundo.

⁵⁰ Artículo 5°, DS N° 924 del Ministerio de Educación, 1983.

entregar determinada enseñanza religiosa, sino también la libertad de no ser coaccionado a recibir una determinada instrucción religiosa, protegiendo de esta manera un ámbito secular dentro de la concepción de libertad de conciencia.

Además, la Corte es clara en cuanto a la imposibilidad de condicionar este derecho en virtud de un contrato de prestación de servicios educacionales, aun cuando este haya sido libremente firmado por los padres. A diferencia de los casos anteriores donde las Cortes de Santiago y Valparaíso consideraron que las facultades que emanan de la libertad religiosa podrían ceder ante obligaciones contractuales libremente asumidas, aquí la Corte de Apelaciones de Valdivia, tratándose de la libertad para elegir una determinada instrucción religiosa, determinó que es la propia regulación la que excluye que un contrato libremente asumido por las partes implique renunciar a la facultad de recibir – o no recibir– educación religiosa⁵¹.

LIBERTAD RELIGIOSA Y PUEBLOS INDÍGENAS

Un cuarto caso involucra la libertad de culto del pueblo aimara en el norte del país. El recurso de protección⁵² fue presentado a raíz de la Resolución Exenta Nº 50 que contiene la calificación ambiental favorable de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Arica y Parinacota al proyecto de Manganese Los Pumas de la minera Hemisferio Sur C.S.M.⁵³. En primera instancia, la Corte de Apelaciones de Arica acogió el recurso señalando la afectación de la libertad de culto del pueblo aimara. En su razonamiento, la Corte señaló que “la cultura de los pueblos indígenas corresponde a una forma de vida particular de ser, ver y actuar en el mundo, constituido a partir de su estrecha relación con sus tierras tradicionales y recursos naturales, no solo por ser estos su principal medio de subsistencia, sino además, porque constituyen un elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y por ende su identidad cultural, de todo lo cual se desprende que la probable afectación de la vertiente de la quebrada de Tarapacá, lo cual al erigirse como un lugar conectado con la divinidad andina, dada la cosmovisión aymara, en que el agua se estrecha con la vida, considerada una entidad sagrada “Uma”, cualquier afectación, por mínima que sea, se ve amenazada la garantía constitucional del artículo 19 Nº 6 de la Constitución Política de la República,

⁵¹ De todos modos, cabe agregar que el Decreto Supremo 924 del Ministerio de Educación (1984) presenta problemas de reserva legal, en razón de que establece restricciones a derechos, cuestión que debe ser materia de una ley general.

⁵² Si bien en este capítulo solo se analiza lo referente a la libertad religiosa y de culto (19 Nº 6 CPR), en el recurso de protección se alega la vulneración de un conjunto de derechos, entre ellos la igualdad ante la ley (19 Nº 2 CPR); a un medio ambiente libre de contaminación (19 Nº 8 CPR) y a la falta de una consulta previa acorde al Convenio 169 de la OIT.

⁵³ Como consta en los considerandos 16 y 17 de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica (Rol 182-2013), Los Pumas es una mina a tajo abierto ubicada a 37 kilómetros al norte de Putre de donde se quiere extraer el mineral, para luego ser sometido a un proceso de separación que requiere agua que se obtendrá mediante un ducto desde la quebrada de Tarapacá, ubicada a 19 kilómetros de la mina. Todo este proceso requiere la intervención del ecosistema existente en la zona, en donde habitan pueblos aimara. Para más información sobre este proyecto, se puede visitar el mapa de conflictos ambientales realizado por el INDH. Ver <http://www.indh.cl/mapa-de-conflictos-socioambientales-en-Chile>.

esto es, el ejercicio libre de todo culto⁵⁴. Asimismo, la Corte fundamenta esta decisión en los artículos 26 y 27 del PIDCP, el cual a juicio del tribunal “establecen que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a similar protección, debiendo los Estados respetar las minorías étnicas para tener su propia cultura, profesar y practicar su propia religión y emplear su propio idioma⁵⁵. Por su parte, en segunda instancia la Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica por falta de competencia, en virtud de que “si los reclamantes han pedido que esta Corte invalide una resolución de calificación ambiental dictada por la autoridad técnica competente aduciendo que adolece de vicios de legalidad en su otorgamiento, tal pretensión, por sus características, debe ser resuelta en sede de la nueva institucionalidad [tribunales ambientales], tanto más si no se vislumbra en el presente caso quebrantamiento de un derecho que haya de restablecerse mediante la acción de protección⁵⁶.”

Este caso se vincula a otros resueltos por la Corte Suprema, en los que ha trazado una conexión entre el deber de no discriminación y la libertad religiosa de los pueblos indígenas. En este sentido, el fallo de la Corte Suprema de 16 de septiembre de 2013, referido a la construcción de un proyecto inmobiliario en las cercanías del Cementerio Topater en Calama, afirmó que “la intromisión desordenada, desautorizada e inconsulta de inversionistas que pretenden ejecutar un proyecto inmobiliario que, en lo físico, se ubicaría a no más de 35 metros de distancia del punto crítico donde se resguarda tal patrimonio, sumado al tráfago propio del hábitat en el que se desenvolvería la población que allí reside, perturba el derecho legítimo que tienen las recurrentes, tanto al libre ejercicio y desarrollo de sus creencias religiosas y ritos sagrados, garantizado para ellas y sus congéneres por el apartado 6º del artículo 19 de la carta fundamental, de modo que, de tolerar que se los pase a llevar, se los diferenciara, arbitrariamente, del resto de las personas que, no perteneciendo a las etnias de las actoras, no ven inconvenientes para el libre ejercicio de iguales prerrogativas, contrariándose de esa forma, además, la garantía de igualdad y no discriminación que sienta el numeral 2º del propio artículo 19⁵⁷.”

EL RESPETO POR LOS TEMPLOS Y LUGARES DE CULTO

La libertad religiosa se compone, en parte, por el respeto a los lugares religiosos donde las personas que adhieren una determinada religión o culto pueden profesar sus creencias en paz. Al respecto, y a propósito de hechos de violencia que ocurrieron en julio de 2013 en la Catedral de Santiago, el Consejo del INDH –mediante declaración pública– expresó que “la libertad de culto así como la garantía de su ejercicio también se encuentran amparadas por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.

La intolerancia frente a cualquier tipo de expresión religiosa es incompatible con una cultura democrática y respetuosa de dichas libertades. Llamamos a la

⁵⁴ Corte de Apelaciones de Arica, Rol Nº 182-2013, sentencia de 25 de noviembre de 2013, considerando trigésimo noveno.

⁵⁵ Corte de Apelaciones de Arica, Rol Nº 182-2013, sentencia de 25 de noviembre de 2013, considerando trigésimo tercero.

⁵⁶ Corte Suprema, Rol 17120-2013, sentencia de 12 de agosto de 2014, considerando quinto.

⁵⁷ Corte Suprema, Rol 3010-2013, 26 de septiembre de 2013, considerando 11.

ciudadanía a rechazar todo acto de intolerancia y a respetar las diversas expresiones culturales y religiosas de nuestra sociedad” (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2013). Sobre esta materia, en junio de 2013, la Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado en contra de la presidenta de la Sociedad Protectora de Animales Carlos Puelma Besa y de sus dirigentes por haber interrumpido en enero del mismo año la celebración de una misa en la Catedral de Valparaíso ingresando con pancartas y gritos en protesta al llamado que realizara el obispo de Punta Arenas para exterminar a los perros abandonados. Para la Corte Suprema, “es posible constatar que la sociedad protectora de animales recurrida en estos autos perturbó e interrumpió el acto ceremonial católico, desde que con prescindencia de la legitimidad de su reclamo se hizo presente en un templo católico alterando el desarrollo del oficio religioso que se celebraba en la Catedral de Valparaíso lesionando el ejercicio libre del culto de los feligreses que allí oraban”⁵⁸. Por lo mismo, la Corte dispuso que “en lo sucesivo la Sociedad Protectora de Animales Carlos Puelma Besa y sus dirigentes deberán abstenerse de perturbar los oficios religiosos que se celebren en la Catedral de Valparaíso o en cualquier recinto de una iglesia, confesión o entidad religiosa”⁵⁹.

Asimismo, en septiembre de 2013, la Corte Suprema falló un recurso de protección presentado por el párroco de la iglesia San Francisco de Asís de Santiago, en contra de la Municipalidad de esa comuna, con el objeto de que, entre otras cosas, prestara a través de Carabineros de servicio de vigilancia a dicha iglesia para evitar ataques. Señaló la Corte Suprema que “es dable concluir que la municipalidad recurrida –como órgano del Estado– participa del deber de cooperación y conservación del patrimonio nacional por lo que le asiste la obligación legal de realizar todos los esfuerzos necesarios para el debido cuidado de la Iglesia cuya protección se solicita por este arbitrio, debiendo en consecuencia aportar los medios materiales y humanos para su resguardo, proporcionar pintura de recuperación para pintar la fachada, muros y en especial cuidar las puertas del templo histórico.

Asimismo Carabineros de Chile deberá incrementar las rondas periódicas para controlar y vigilar la posible acción de terceros que provoquen daños al templo”⁶⁰.

OBJECCIÓN DE CONCIENCIA

La objeción de conciencia puede ser definida como la negativa de una persona natural a cumplir un mandato jurídico determinado por considerarlo contrario a sus convicciones. Este concepto surgió históricamente a raíz de la negativa a cumplir el denominado “servicio militar obligatorio”, en tanto resultaría contrario al mandato de no violencia de algunas religiones. A partir de casos en este ámbito se desarrolló una doctrina que derivó de la libertad de conciencia al legítimo derecho a ser objetor de conciencia, y que ha sido recogida por algunos organismos internacionales, así como por legislaciones

⁵⁸ Corte Suprema, Rol 2139-2013, 4 de junio de 2013, considerando 6.

⁵⁹ *Ibidem*, parte resolutive.

⁶⁰ Corte Suprema, Rol 6086-2013, 24 de septiembre de 2013, considerando 7.

internas de múltiples países, que prevén ciertos requisitos para hacer uso de esta facultad y disponen obligaciones alternativas para estos casos.

La objeción de conciencia no está reconocida como derecho en ningún instrumento internacional. Al respecto, el Comité de Derechos Humanos, en el párrafo final de su Observación General 22, indica que “en el Pacto no se menciona explícitamente el derecho a la objeción de conciencia, pero el Comité cree que ese derecho puede derivarse del artículo 18”. En este sentido, el Comité hace un llamado a informar sobre las condiciones en que se puede ejercer la objeción, cuál sería la duración y naturaleza de la obligación alternativa que surgiría; y a no discriminar a los objetores de conciencia.

Desde el derecho de los derechos humanos ha habido pronunciamientos sobre el silencio de la ley chilena en cuanto a consagrar la objeción de conciencia en el caso del servicio militar. Por una parte, la Comisión IDH consideró que “la jurisprudencia internacional de derechos humanos reconoce la condición de objetor de conciencia en los países que prevén dicha condición en sus leyes nacionales. En los países que no prevén la condición de objetor de conciencia, los órganos internacionales de derechos humanos concluyen que no existe violación del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia o religión”⁶¹. En dicho caso, concluye frente a la legislación chilena –que no regula expresamente la objeción de conciencia– que no es posible estimar que exista una vulneración de la libertad de conciencia por exigirse el servicio militar obligatorio. Por otra parte, en julio del presente año, el Comité de Derechos Humanos señaló en sus observaciones finales al Estado de Chile que “pese a la información suministrada por el Estado parte de que la normativa vigente establece la voluntariedad como criterio prevalente para llenar las vacantes de reclutamiento y que la realización obligatoria perdura solo como criterio subsidiario, el Comité sigue preocupado que la ley vigente no reconozca la objeción de conciencia al servicio militar, como lo indicó anteriormente (CCPR/C/CHL/CO/5, párr. 13) (art. 18)”⁶², recomendando al Estado de Chile “agilizar la adopción de una legislación que reconozca la objeción de conciencia al servicio militar”⁶³.

El derecho a la libertad religiosa posee una composición que plantea desafíos para un Estado no confesional y democrático.

Dicha complejidad está dada porque tanto la doctrina como los tratados internacionales y la normativa interna distinguen una dimensión que no puede ser regulada por el Estado (adherir o no a una fe, o cambiarla) y, una segunda manifestación, la libertad de culto (la divulgación o manifestación de la religión o creencia a la que se adhiere), que sí puede ser regulada de manera excepcional y conforme a ciertas reglas. En este sentido, si bien la norma constitucional del artículo 19 N° 6 establece un régimen único de limitaciones para ambas dimensiones, esta debe ser interpretada armónicamente acorde al derecho internacional de los derechos humanos permitiendo la regulación de

⁶¹ CIDH, Informe N° 43/05, Caso 12.219, *Cristián Daniel Sahli Vera y Otros vs. Chile*, 10 de marzo de 2005, párrafo 38.

⁶² *Comité de Derechos Humanos, Observaciones Finales: Chile, adoptada en el 111° período de sesiones, 7 al 25 de julio de 2014, párr. 24.*

⁶³ *Ibidem.*



este derecho solo en cuanto a su fase externa, es decir, la manifestación o divulgación de la religión o creencia.

Asimismo, la Ley 19.638 avanza en el desarrollo de esta libertad al reconocer como manifestación de esta la no adhesión a una religión o creencia determinada. Finalmente, llama la atención en los casos judicializados analizados aquí, la no aplicación de criterios que permitan determinar la legitimidad de las restricciones impuestas a la libertad religiosa, atendiendo a su legalidad, proporcionalidad y necesidad⁶⁴.

INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

<http://www.indh.cl/wp-content/uploads/2014/12/Ejercicio-de-derechos-sin-discriminaci%C3%B3n-INDH-2014.pdf>
(5 de junio de 2015)

[Volver al Índice](#)

⁶⁴ Sobre el "test de convencionalidad" de la Corte IDH, ver nota 23 en pie de página.

B. Observaciones finales del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas sobre el cuarto informe periódico enviado por Chile (selección)⁶⁵



Naciones Unidas

E/C.12/CHL/CO/4

Consejo Económico y Social

Distr. Generale (sic)

19 de junio de 2015

Original: español

Versión no editada

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

*Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de Chile**

1. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinó el cuarto informe periódico de Chile sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E/C.12/CHL/4) en sus sesiones 34ª y 35ª, celebradas los días 9 y 10 de junio de 2015 (E/C.12/2015/SR.34 y 35), y aprobó en su 50ª sesión, celebrada el 19 de junio de 2015, las siguientes observaciones finales.

(...)

Derechos de pueblos indígenas

8. El Comité sigue preocupado por la falta de reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas y por la falta de un mecanismo legal que garantice la obtención del consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas en relación a la toma de decisiones que pudieran afectar al ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales. Pese a los esfuerzos realizados por el Estado parte en cuanto a la demarcación de tierras indígenas, preocupa al Comité la limitada protección al derecho que tienen los pueblos indígenas a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, así como de sus tierras ancestrales (Art. 1).

El Comité insta al Estado parte a que:

- a) Cumpla con el compromiso mencionado durante el diálogo interactivo, de garantizar el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la nueva Constitución;
- b) Tome las medidas legislativas y administrativas necesarias para garantizar la obtención del consentimiento previo, libre e informado de los pueblos

⁶⁵ El texto íntegro puede consultarse en nuestro sitio web www.celir.cl/v2/Otros/InformeDESCNUChile.pdf

indígenas en lo que respecta a la toma de decisiones susceptible de afectar directamente el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales; y
c) Aumente sus esfuerzos para garantizar el derecho que tienen los pueblos indígenas a disponer libremente de sus tierras, territorios y recursos naturales, incluso mediante el reconocimiento legal y protección jurídica necesaria.

(...)

Salud sexual y reproductiva

29. Aun cuando el Comité toma nota de la discusión del proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo, le preocupa la vigencia de una estricta prohibición del aborto. Asimismo, le preocupan las altas tasas de embarazo en la adolescencia, debido en parte a la falta de servicios de salud sexual y reproductiva e información adecuados (Art. 12).

El Comité recomienda al Estado parte que:

- a) Agilice la adopción del proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo y garantice su compatibilidad con derechos fundamentales como el de la salud y la vida de la mujer, considerando la ampliación de las circunstancias permitidas;
- b) Redoble sus esfuerzos para asegurar la accesibilidad, disponibilidad y asequibilidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la entrega de contraceptivos de emergencia; y
- c) Amplíe y refuerce la educación, integral y apropiada a cada edad, sobre salud sexual y reproductiva en los programas escolares de la enseñanza primaria y secundaria para ambos sexos.

(...)

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
NACIONES UNIDAS
19 de junio de 2015

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=EC.12%20CHL%20CO%204&Lang=en
(26 de junio de 2015)

[Volver al Índice](#)

C. Ley n° 20.843, Elimina la prohibición de participación de estudiantes y funcionarios en el gobierno de las instituciones de educación superior, publicada en el Diario Oficial de fecha 18 de junio de 2015

LEY NÚM. 20.843

ELIMINA LA PROHIBICIÓN DE PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS EN EL GOBIERNO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo 1º.- Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°20.370, con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N°1, de 2005, de la siguiente forma:

1) En el artículo 56:

a) Reemplázase, en el literal e), el punto seguido por un punto y coma, y suprímese la oración que señala: "La forma de gobierno de la nueva entidad deberá excluir la participación con derecho a voto de los alumnos y de los funcionarios administrativos, tanto en los órganos encargados de la gestión y dirección de ella, como en la elección de las autoridades unipersonales o colegiadas;"

b) Incorpórase la siguiente letra f), nueva, pasando los actuales literales f) y g) a ser letras g) y h), respectivamente:

"f) Que ninguna normativa interna ni ningún acto ni contrato entre la universidad y sus estudiantes o personal académico y no académico contenga disposiciones que prohíban, limiten u obstaculicen la libre organización de éstos;"

2.- En el artículo 67:

a) Sustitúyese, en el literal e), el punto seguido por un punto y coma, y elimínase la siguiente oración: "La forma de gobierno de la nueva entidad deberá excluir la participación con derecho a voto de los alumnos y de los funcionarios administrativos tanto en los órganos encargados de la gestión y dirección de ella, como en la elección de las autoridades unipersonales o colegiadas, y".

b) Agrégase la siguiente letra f), nueva, pasando el actual literal f) a ser letra g):

"f) Que ninguna normativa interna ni ningún acto ni contrato entre el instituto profesional y sus estudiantes o personal académico y no académico contenga disposiciones que prohíban, limiten u obstaculicen la libre organización de éstos, y".

3.- En el artículo 75:

a) Reemplázase, en el literal e), el punto seguido por un punto y coma, y suprímese la oración "La forma de gobierno de la nueva entidad deberá excluir la participación con derecho a voto de los alumnos y de los funcionarios administrativos tanto en los órganos encargados de la gestión y dirección de ella, como en la elección de las autoridades unipersonales o colegiadas, y".

b) Intercálase la siguiente letra f), nueva, pasando el actual literal f) a ser letra g):

"f) Que ninguna normativa interna ni ningún acto ni contrato entre el centro de formación profesional y sus estudiantes o personal académico y no académico contenga disposiciones que prohíban, limiten u obstaculicen la libre organización de éstos, y".

Artículo 2º.- Reemplázase el artículo 22 del decreto con fuerza de ley N°1, de 1980, del Ministerio de Educación, que fija normas sobre universidades, por el siguiente:

"Artículo 22.- Los estatutos, normativa interna o cualquier acto o contrato entre las universidades y sus estudiantes o personal académico o no académico no podrán contener disposiciones que prohíban, limiten u obstaculicen la libre organización de éstos."

Artículo 3º.- Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo sexto del decreto con fuerza de ley N° 5, de 1981, del Ministerio de Educación, que fija normas sobre institutos profesionales:

1) Suprímese, en el inciso segundo, la frase ", excluyéndose necesariamente la participación con derecho a voto de los alumnos y funcionarios administrativos, no directivos, en los órganos encargados de su dirección, como asimismo en la elección de sus autoridades".

2) Agrégase el siguiente inciso tercero:

"En caso alguno los estatutos, normativa interna o cualquier acto o contrato entre los institutos profesionales y sus estudiantes o personal docente y no docente podrán contener disposiciones que prohíban, limiten u obstaculicen la libre organización de éstos."

Artículo 4º.- Introdúcense las siguientes enmiendas en el decreto con fuerza de ley N° 24, de 1981, del Ministerio de Educación, que fija normas sobre centros de formación técnica:

1) Agrégase, en el artículo 5º, el siguiente inciso tercero:

"Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, los estatutos, normativa interna o cualquier acto o contrato entre los centros de formación técnica y sus estudiantes o personal docente o no docente no podrán contener disposiciones que prohíban, limiten u obstaculicen la libre organización de éstos."

2) Reemplázase la letra d) del artículo 6º, por la siguiente:

"d) Los reglamentos de la institución, los que deberán dictarse con sujeción a lo dispuesto en el artículo anterior."

Artículo transitorio.- Las instituciones de educación superior deberán ajustar sus estatutos y normativa interna a las disposiciones de la presente ley en el plazo de un año, desde la publicación de esta ley, si correspondiere."

Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1º del Artículo 93 de la Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévase a efecto como Ley de la República.

Santiago, 8 de junio de 2015.- JORGE BURGOS VARELA, Vicepresidente de la República.- Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro de Educación.- Rodrigo Valdés Pulido, Ministro de Hacienda.- Patricia Silva Meléndez, Ministra Secretaría General de la Presidencia (S).

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento.- Atentamente, Valentina Karina Quiroga Canahuate, Subsecretaria de Educación.

Tribunal Constitucional

Proyecto de ley que elimina la prohibición de participación de estudiantes y funcionarios en el gobierno de las instituciones de educación superior, asegurando el derecho de asociación, correspondiente al boletín Nº 9481-04.

La Secretaria del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que la Honorable Cámara de Diputados envió el proyecto enunciado en el rubro, aprobado por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el control preventivo de constitucionalidad respecto del artículo 1º, del proyecto de ley y por sentencia de 20 de mayo de 2015, en el proceso Rol Nº 2.824-15-CPR.

Se resuelve:

Que el artículo 1º del proyecto de ley sometido a control es propio de ley orgánica constitucional y constitucional.

Santiago, 20 de mayo de 2015.- Marta de la Fuente Olguín, Secretaria.

<http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1078579>
(20 de junio de 2015)

[Volver al Índice](#)

D. Ley n° 20.851, Regula la realización de bingos, loterías u otros sorteos similares, con fines de beneficios o solidaridad

LEY NÚM. 20.851

REGULA LA REALIZACIÓN DE BINGOS, LOTERÍAS U OTROS SORTEOS SIMILARES, CON FINES DE BENEFICIOS O SOLIDARIDAD

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al proyecto de ley originado en mociones refundidas de las diputadas señoras Jenny Álvarez Milla, Daniella Cicardini Milla, Maya Fernández Allende, María José Hoffmann, Andrea Molina Oliva, Claudia Nogueira Fernández, Paulina Núñez Urrutia, Denise Pascal Allende, Marcela Sabat Fernández y los diputados señores Osvaldo Andrade Lara, Pepe Auth Stewart, Germán Becker Alvear, Cristián Campos Jara, Juan Luis Castro González, Marcelo Chávez Velásquez, Fuad Chahin Valenzuela, Juan Antonio Coloma Álamos, Fidel Espinoza Sandoval, Daniel Farcas Guendelman, Gonzalo Fuenzalida Figueroa, Sergio Gahona Salazar, Gustavo Hasbún Selume, Javier Hernández Hernández, Enrique Jaramillo Becker, Tucapel Jiménez Fuentes, Carlos Abel Jarpa Wevar, José Antonio Kast Rist, Luis Lemus Aracena, Daniel Melo Contreras, Nicolás Monckeberg Díaz, Cristián Monckeberg Bruner, Juan Morano Cornejo, Patricio Melero Abaroa, Sergio Ojeda Uribe, Leopoldo Pérez Lahsen, Jaime Pilowsky Greene, Ricardo Rincón González, Jorge Sabag Villalobos, Gabriel Silber Romo, Marcelo Schilling Rodríguez, Víctor Torres Jeldes, Ignacio Urrutia Bonilla, Germán Verdugo Soto, Patricio Vallespín López, Matías Walker Prieto y Felipe Ward Edwards

Proyecto de ley:

"Artículo único.- Las personas jurídicas sin fines de lucro, como las reguladas en la ley N°19.418, independientemente de su denominación, aquellas constituidas de acuerdo al Título XXXIII del Libro I del Código Civil, además de los centros de alumnos, centros generales de padres y apoderados de todo el sistema educacional y en todos sus niveles, sindicatos, asociaciones gremiales y organizaciones deportivas, podrán realizar, en el ámbito local, actividades de carácter no habitual tales como bingos, rifas, loterías u otros sorteos similares de bienes muebles.

Las actividades descritas en el inciso anterior sólo podrán realizarse con propósitos solidarios o de beneficencia a favor de terceros, o para el financiamiento de los fines propios de cada institución, debiendo rendir cuenta de sus resultados a los organismos con los cuales estuvieren vinculados. Para estos efectos, las actividades realizadas en los términos antes señalados no serán consideradas juegos de azar de conformidad a la ley N°19.995, que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego.

La realización de las referidas actividades deberá informarse, por escrito, con a lo menos veinticuatro horas de anticipación, al municipio de la comuna respectiva, a través de su oficina de partes.

Los que organicen, participen o concurren a las actividades señaladas en los incisos precedentes no incurrirán en responsabilidad penal para los efectos de los artículos 277, 278 y 279 del Código Penal."

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.

Santiago, 24 de junio de 2015.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Jorge Burgos Varela, Ministro del Interior y Seguridad Pública.

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento.- Atentamente, Mahmud Aleuy Peña y Lillo, Subsecretario del Interior.

<http://www.leychile.cl/Navegar?idLey=20851&tipoVersion=0>
(30 de junio de 2015)

[Volver al Índice](#)

Santa Sede

A. Carta encíclica *LAUDATO SI'* del santo padre francisco sobre el cuidado de la casa común (selección)⁶⁶

*CARTA ENCÍCLICA
LAUDATO SI'
DEL SANTO PADRE
FRANCISCO
SOBRE EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN*

1. «Laudato sí', mi' Signore» - «Alabado seas, mi Señor», cantaba san Francisco de Asís. En ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos: «Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta, y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba»⁶⁷.

2. Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que «gime y sufre dolores de parto» (Rm 8,22). Olvidamos que nosotros mismos somos tierra (cf. Gn 2,7). Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta, su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura.

Nada de este mundo nos resulta indiferente

3. Hace más de cincuenta años, cuando el mundo estaba vacilando al filo de una crisis nuclear, el santo Papa Juan XXIII escribió una encíclica en la cual no se conformaba con rechazar una guerra, sino que quiso transmitir una propuesta de paz. Dirigió su mensaje *Pacem in terris* a todo el «mundo católico», pero agregaba «y a todos los hombres de buena voluntad». Ahora, frente al deterioro ambiental global, quiero dirigirme a cada persona que habita este planeta. En mi exhortación *Evangelii gaudium*, escribí a los miembros de la Iglesia en orden a movilizar un proceso de reforma misionera todavía pendiente. En esta encíclica, intento especialmente entrar en diálogo con todos acerca de nuestra casa común.

⁶⁶ El texto íntegro puede consultarse en nuestro sitio web www.celir.cl/v2/Otros/LaudatoSi.pdf

⁶⁷ Cántico de las criaturas: *Fonti Francescane (FF)* 263.

4. Ocho años después de *Pacem in terris*, en 1971, el beato Papa Pablo VI se refirió a la problemática ecológica, presentándola como una crisis, que es «una consecuencia dramática» de la actividad descontrolada del ser humano: «Debido a una explotación inconsiderada de la naturaleza, [el ser humano] corre el riesgo de destruirla y de ser a su vez víctima de esta degradación»⁶⁸. También habló a la FAO sobre la posibilidad de una «catástrofe ecológica bajo el efecto de la explosión de la civilización industrial», subrayando la «urgencia y la necesidad de un cambio radical en el comportamiento de la humanidad», porque «los progresos científicos más extraordinarios, las proezas técnicas más sorprendentes, el crecimiento económico más prodigioso, si no van acompañados por un auténtico progreso social y moral, se vuelven en definitiva contra el hombre»⁶⁹.

5. San Juan Pablo II se ocupó de este tema con un interés cada vez mayor. En su primera encíclica, advirtió que el ser humano parece «no percibir otros significados de su ambiente natural, sino solamente aquellos que sirven a los fines de un uso inmediato y consumo»⁷⁰. Sucesivamente llamó a una conversión ecológica global⁷¹. Pero al mismo tiempo hizo notar que se pone poco empeño para «salvaguardar las condiciones morales de una auténtica ecología humana»⁷². La destrucción del ambiente humano es algo muy serio, porque Dios no sólo le encomendó el mundo al ser humano, sino que su propia vida es un don que debe ser protegido de diversas formas de degradación. Toda pretensión de cuidar y mejorar el mundo supone cambios profundos en «los estilos de vida, los modelos de producción y de consumo, las estructuras consolidadas de poder que rigen hoy la sociedad»⁷³. El auténtico desarrollo humano posee un carácter moral y supone el pleno respeto a la persona humana, pero también debe prestar atención al mundo natural y «tener en cuenta la naturaleza de cada ser y su mutua conexión en un sistema ordenado»⁷⁴. Por lo tanto, la capacidad de transformar la realidad que tiene el ser humano debe desarrollarse sobre la base de la donación originaria de las cosas por parte de Dios⁷⁵.

6. Mi predecesor Benedicto XVI renovó la invitación a «eliminar las causas estructurales de las disfunciones de la economía mundial y corregir los modelos de crecimiento que parecen incapaces de garantizar el respeto del medio ambiente»⁷⁶. Recordó que el mundo no puede ser analizado sólo aislando uno de sus aspectos, porque «el libro de la naturaleza es uno e indivisible», e incluye el ambiente, la vida, la sexualidad, la familia, las relaciones sociales, etc. Por consiguiente, «la degradación de la naturaleza

⁶⁸ *Carta ap. Octogesima adveniens* (14 mayo 1971), 21: AAS 63 (1971), 416-417.

⁶⁹ *Discurso a la FAO en su 25 aniversario* (16 noviembre 1970): AAS 62 (1970), 833.

⁷⁰ *Carta enc. Redemptor hominis* (4 marzo 1979), 15: AAS 71 (1979), 287.

⁷¹ Cf. *Catequesis* (17 enero 2001), 4: *L'Osservatore Romano*, ed. *semanal en lengua española* (19 enero 2001), p. 12.

⁷² *Carta enc. Centesimus annus* (1 mayo 1991), 38: AAS 83 (1991), 841.

⁷³ *Ibid.*, 58, p. 863.

⁷⁴ *Juan Pablo II, Carta enc. Sollicitudo rei socialis* (30 diciembre 1987), 34: AAS 80 (1988), 559.

⁷⁵ Cf. *Id.*, *Carta enc. Centesimus annus* (1 mayo 1991), 37: AAS 83 (1991), 840.

⁷⁶ *Discurso al Cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede* (8 enero 2007): AAS 99 (2007), 73.

está estrechamente unida a la cultura que modela la convivencia humana »⁷⁷. El Papa Benedicto nos propuso reconocer que el ambiente natural está lleno de heridas producidas por nuestro comportamiento irresponsable. También el ambiente social tiene sus heridas. Pero todas ellas se deben en el fondo al mismo mal, es decir, a la idea de que no existen verdades indiscutibles que guíen nuestras vidas, por lo cual la libertad humana no tiene límites. Se olvida que «el hombre no es solamente una libertad que él se crea por sí solo. El hombre no se crea a sí mismo. Es espíritu y voluntad, pero también naturaleza»⁷⁸. Con paternal preocupación, nos invitó a tomar conciencia de que la creación se ve perjudicada «donde nosotros mismos somos las últimas instancias, donde el conjunto es simplemente una propiedad nuestra y el consumo es sólo para nosotros mismos. El derroche de la creación comienza donde no reconocemos ya ninguna instancia por encima de nosotros, sino que sólo nos vemos a nosotros mismos»⁷⁹.

(...)

Mi llamado

13. El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. Deseo reconocer, alentar y dar las gracias a todos los que, en los más variados sectores de la actividad humana, están trabajando para garantizar la protección de la casa que compartimos. Merecen una gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres del mundo. Los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos.

14. Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos. El movimiento ecológico mundial ya ha recorrido un largo y rico camino, y ha generado numerosas agrupaciones ciudadanas que ayudaron a la concientización. Lamentablemente, muchos esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental suelen ser frustrados no sólo por el rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés de los demás. Las actitudes que obstruyen los caminos de solución, aun entre los creyentes, van de la negación del problema a la indiferencia, la resignación cómoda o la confianza ciega en las

⁷⁷ *Carta enc. Caritas in veritate* (29 junio 2009), 51: AAS 101 (2009), 687.

⁷⁸ *Discurso al Deutscher Bundestag, Berlín* (22 septiembre 2011): AAS 103 (2011), 664.

⁷⁹ *Discurso al clero de la Diócesis de Bolzano-Bressanone* (6 agosto 2008): AAS 100 (2008), 634.

soluciones técnicas. Necesitamos una solidaridad universal nueva. Como dijeron los Obispos de Sudáfrica, «se necesitan los talentos y la implicación de todos para reparar el daño causado por el abuso humano a la creación de Dios»⁸⁰. Todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación, cada uno desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus capacidades.

(...)

El clima como bien común

23. El clima es un bien común, de todos y para todos. A nivel global, es un sistema complejo relacionado con muchas condiciones esenciales para la vida humana. Hay un consenso científico muy consistente que indica que nos encontramos ante un preocupante calentamiento del sistema climático. En las últimas décadas, este calentamiento ha estado acompañado del constante crecimiento del nivel del mar, y además es difícil no relacionarlo con el aumento de eventos meteorológicos extremos, más allá de que no pueda atribuirse una causa científicamente determinable a cada fenómeno particular. La humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilos de vida, de producción y de consumo, para combatir este calentamiento o, al menos, las causas humanas que lo producen o acentúan. Es verdad que hay otros factores (como el vulcanismo, las variaciones de la órbita y del eje de la Tierra o el ciclo solar), pero numerosos estudios científicos señalan que la mayor parte del calentamiento global de las últimas décadas se debe a la gran concentración de gases de efecto invernadero (anhídrido carbónico, metano, óxidos de nitrógeno y otros) emitidos sobre todo a causa de la actividad humana. Al concentrarse en la atmósfera, impiden que el calor de los rayos solares reflejados por la tierra se disperse en el espacio. Esto se ve potenciado especialmente por el patrón de desarrollo basado en el uso intensivo de combustibles fósiles, que hace al corazón del sistema energético mundial. También ha incidido el aumento en la práctica del cambio de usos del suelo, principalmente la deforestación para agricultura.

24. A su vez, el calentamiento tiene efectos sobre el ciclo del carbono. Crea un círculo vicioso que agrava aún más la situación, y que afectará la disponibilidad de recursos imprescindibles como el agua potable, la energía y la producción agrícola de las zonas más cálidas, y provocará la extinción de parte de la biodiversidad del planeta. El derretimiento de los hielos polares y de planicies de altura amenaza con una liberación de alto riesgo de gas metano, y la descomposición de la materia orgánica congelada podría acentuar todavía más la emanación de anhídrido carbónico. A su vez, la pérdida de selvas tropicales empeora las cosas, ya que ayudan a mitigar el cambio climático. La contaminación que produce el anhídrido carbónico aumenta la acidez de los océanos y compromete la cadena alimentaria marina. Si la actual

⁸⁰ Conferencia de los Obispos Católicos del Sur de África, *Pastoral Statement on the Environmental Crisis* (5 septiembre 1999).

tendencia continúa, este siglo podría ser testigo de cambios climáticos inauditos y de una destrucción sin precedentes de los ecosistemas, con graves consecuencias para todos nosotros. El crecimiento del nivel del mar, por ejemplo, puede crear situaciones de extrema gravedad si se tiene en cuenta que la cuarta parte de la población mundial vive junto al mar o muy cerca de él, y la mayor parte de las megaciudades están situadas en zonas costeras.

(...)

26. Muchos de aquellos que tienen más recursos y poder económico o político parecen concentrarse sobre todo en enmascarar los problemas o en ocultar los síntomas, tratando sólo de reducir algunos impactos negativos del cambio climático. Pero muchos síntomas indican que esos efectos podrán ser cada vez peores si continuamos con los actuales modelos de producción y de consumo. Por eso se ha vuelto urgente e imperioso el desarrollo de políticas para que en los próximos años la emisión de anhídrido carbónico y de otros gases altamente contaminantes sea reducida drásticamente, por ejemplo, reemplazando la utilización de combustibles fósiles y desarrollando fuentes de energía renovable. En el mundo hay un nivel exiguo de acceso a energías limpias y renovables. Todavía es necesario desarrollar tecnologías adecuadas de acumulación. Sin embargo, en algunos países se han dado avances que comienzan a ser significativos, aunque estén lejos de lograr una proporción importante. También ha habido algunas inversiones en formas de producción y de transporte que consumen menos energía y requieren menos cantidad de materia prima, así como en formas de construcción o de saneamiento de edificios para mejorar su eficiencia energética. Pero estas buenas prácticas están lejos de generalizarse.

II. La cuestión del agua

(...)

28. El agua potable y limpia representa una cuestión de primera importancia, porque es indispensable para la vida humana y para sustentar los ecosistemas terrestres y acuáticos. Las fuentes de agua dulce abastecen a sectores sanitarios, agropecuarios e industriales. La provisión de agua permaneció relativamente constante durante mucho tiempo, pero ahora en muchos lugares la demanda supera a la oferta sostenible, con graves consecuencias a corto y largo término. Grandes ciudades que dependen de un importante nivel de almacenamiento de agua, sufren períodos de disminución del recurso, que en los momentos críticos no se administra siempre con una adecuada gobernanza y con imparcialidad. La pobreza del agua social se da especialmente en África, donde grandes sectores de la población no acceden al agua potable segura, o padecen sequías que dificultan la producción de alimentos. En algunos países hay regiones con abundante agua y al mismo tiempo otras que padecen grave escasez.

29. Un problema particularmente serio es el de la calidad del agua disponible para los pobres, que provoca muchas muertes todos los días. Entre los pobres son frecuentes enfermedades relacionadas con el agua, incluidas las causadas por microorganismos y por sustancias químicas. La diarrea y el cólera, que se relacionan con servicios higiénicos y provisión de agua inadecuados, son un factor significativo de sufrimiento y de mortalidad infantil. Las aguas subterráneas en muchos lugares están amenazadas por la contaminación que producen algunas actividades extractivas, agrícolas e industriales, sobre todo en países donde no hay una reglamentación y controles suficientes. No pensemos solamente en los vertidos de las fábricas. Los detergentes y productos químicos que utiliza la población en muchos lugares del mundo siguen derramándose en ríos, lagos y mares.

30. Mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, en algunos lugares avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso, convertido en mercancía que se regula por las leyes del mercado. En realidad, el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Este mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable, porque eso es negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable. Esa deuda se salda en parte con más aportes económicos para proveer de agua limpia y saneamiento a los pueblos más pobres. Pero se advierte un derroche de agua no sólo en países desarrollados, sino también en aquellos menos desarrollados que poseen grandes reservas. Esto muestra que el problema del agua es en parte una cuestión educativa y cultural, porque no hay conciencia de la gravedad de estas conductas en un contexto de gran inequidad.

(...)

IV. Deterioro de la calidad de la vida humana y degradación social

43. Si tenemos en cuenta que el ser humano también es una criatura de este mundo, que tiene derecho a vivir y a ser feliz, y que además tiene una dignidad especialísima, no podemos dejar de considerar los efectos de la degradación ambiental, del actual modelo de desarrollo y de la cultura del descarte en la vida de las personas.

44. Hoy advertimos, por ejemplo, el crecimiento desmedido y desordenado de muchas ciudades que se han hecho insalubres para vivir, debido no solamente a la contaminación originada por las emisiones tóxicas, sino también al caos urbano, a los problemas del transporte y a la contaminación visual y acústica. Muchas ciudades son grandes estructuras ineficientes que gastan energía y agua en exceso. Hay barrios que, aunque hayan sido construidos recientemente, están congestionados y desordenados, sin espacios verdes suficientes. No es propio de habitantes de este planeta vivir cada vez más



inundados de cemento, asfalto, vidrio y metales, privados del contacto físico con la naturaleza.

(...)

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 24 de mayo, Solemnidad de Pentecostés, del año 2015, tercero de mi Pontificado.

Franciscus

© Copyright - Libreria Editrice Vaticana
18 de junio de 2015

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
(20 de junio de 2015)

[Volver al Índice](#)

B. Discurso del Papa Francisco a los participantes en el encuentro organizado por la Asociación Ciencia y Vida

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO A LOS PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN CIENCIA Y VIDA

Queridos hermanos y hermanas:

Os recibo con ocasión del décimo aniversario de fundación de vuestra Asociación, y os doy las gracias por este encuentro y por vuestro compromiso. Agradezco en especial a la señora presidenta las amables palabras que me dirigió en nombre de todos vosotros.

Vuestro servicio en favor de la persona humana es importante y alentador. En efecto, **la tutela y la promoción de la vida constituyen una tarea fundamental**, aún más en una sociedad marcada por la lógica negativa del descarte. Por ello, veo a vuestra Asociación como las manos que se tienden hacia otras manos y sostienen la vida.

Es un desafío comprometedor, en el cual os guían actitudes de apertura, atención y cercanía al hombre en su situación concreta. Esto es muy bueno. Las manos que se estrechan no garantizan sólo solidez y equilibrio, sino que transmiten también calor humano.

Para tutelar a la persona vosotros ponéis en el centro dos acciones esenciales: salir para encontrar y encontrar para sostener. El dinamismo común de este movimiento va desde el centro hacia las periferias. En el centro está Cristo. Y desde esta centralidad os orientáis hacia las diversas condiciones de la vida humana.

El amor de Cristo nos impulsa (cf. 2 Cor 5, 14) a convertirnos en servidores de los pequeños y los ancianos, de cada hombre y cada mujer, para quienes se debe reconocer y tutelar el derecho primordial a la vida. La existencia de la persona humana, a quien vosotros dedicáis vuestra solicitud, es también vuestro principio constitutivo; es la vida en su insondable profundidad que origina y acompaña todo el camino científico; es el milagro de la vida que siempre pone en crisis cualquier forma de presunción científica, restituyendo el primado a la maravilla y la belleza. Así Cristo, que es la luz del hombre y del mundo, ilumina el camino para que la ciencia sea siempre un saber al servicio de la vida. Cuando disminuye esta luz, cuando el saber olvida el contacto con la vida, se hace estéril. Por eso, os invito a mantener alta la mirada sobre la sacralidad de cada persona humana, para que la ciencia esté verdaderamente al servicio del hombre, y no el hombre al servicio de la ciencia.

La reflexión científica utiliza la lente de aumento para detenerse a analizar determinados detalles. Y gracias también a esta capacidad de análisis



afirmamos que **una sociedad justa reconoce como primario el derecho a la vida desde la concepción hasta su término natural**. Quisiera, sin embargo, que podamos ir más allá, y que pensásemos con atención en el momento que une el inicio con el fin. Por lo tanto, reconociendo el valor inestimable de la vida humana, debemos reflexionar también sobre el uso que hacemos de la misma. La vida es ante todo un don. Pero esta realidad genera esperanza y futuro si se vivifica con vínculos fecundos, con relaciones familiares y sociales que abran nuevas perspectivas.

El nivel de progreso de una civilización se mide precisamente por la capacidad de custodiar la vida, sobre todo en sus fases más frágiles, más que por la difusión de instrumentos tecnológicos. Cuando hablamos del hombre, nunca olvidemos todos los atentados a la sacralidad de la vida humana. La plaga del aborto es un atentado a la vida. Es atentado a la vida dejar morir a nuestros hermanos en las pateras en el canal de Sicilia. Es atentado a la vida la muerte en el trabajo por no respetar las mínimas condiciones de seguridad. Es atentado a la vida la muerte por desnutrición. Es atentado a la vida el terrorismo, la guerra, la violencia; pero también la eutanasia. Amar la vida es ocuparse siempre del otro, querer su bien, cultivar y respetar su dignidad trascendente.

Queridos amigos, os aliento a relanzar una renovada cultura de la vida, que sepa instaurar redes de confianza y reciprocidad y sepa ofrecer horizontes de paz, misericordia y comunión. No tengáis miedo de emprender un diálogo fecundo con todo el mundo de la ciencia, también con aquellos que, sin confesarse creyentes, permanecen abiertos al misterio de la vida humana.

Que el Señor os bendiga y la Virgen os proteja. Y, por favor, no os olvidéis de rezar por mí. ¡Gracias!

© Copyright - Libreria Editrice Vaticana
30 de mayo de 2015

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/may/documents/papa-francesco_20150530_associazione-scienza-vita.html
(5 de junio de 2015)

[Volver al Índice](#)

C. Intervención del Cardenal Parolin en la UNESCO, en el marco del foro "Educar hoy y mañana"

FORUM DE L'UNESCO « ÉDUQUER AUJOURD'HUI ET DEMAIN »

INTERVENTION DU CARDINAL PIETRO PAROLIN, SECRÉTAIRE D'ÉTAT

L'Église catholique et l'éducation

Eminences,
Monsieur le Président de la Conférence générale,
Madame la Directrice générale,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,

Je suis heureux et honoré de m'adresser à vous tous réunis en ce prestigieux siège de l'UNESCO. Tout d'abord, j'exprime ma plus sincère gratitude à Madame Irina Bokova, Directrice générale, à Monsieur Hao Ping, Président de la 37ème Session de la Conférence générale et à Monsieur Tang Qian, Directeur général adjoint pour l'Éducation. Je remercie également le Cardinal Zenon Grocholewski, Préfet de la Congrégation pour l'Éducation catholique et Monseigneur Francesco Follo, Observateur Permanent du Saint-Siège auprès de l'UNESCO.

Je vous salue tous chaleureusement au nom de Sa Sainteté le Pape François. Avec le Pape, je souhaite ardemment que l'heureuse commémoration du 70ème anniversaire de la fondation de l'UNESCO soit une occasion propice pour consolider davantage son engagement en faveur de la protection du patrimoine culturel de l'humanité et de la promotion de l'éducation et des sciences.

Il s'agit d'une action de sensibilisation et d'appui, particulièrement nécessaire de nos jours, aussi bien pour transmettre aux nouvelles générations la mémoire inaltérée des civilisations qui les ont précédées, que pour diffuser les instruments indispensables de connaissance utiles pour éviter les erreurs du passé. Votre mission est alors un travail d'une grande noblesse culturelle, au service des droits humains et de la paix, qui tirent de la culture et de l'expansion de la connaissance les moyens essentiels pour vaincre la violence et la barbarie.

Mon intervention se situe dans le contexte du 50ème anniversaire de la Déclaration conciliaire Gravissimum educationis, ainsi que du 25ème anniversaire de la Constitution apostolique Ex corde Ecclesiae. J'entends offrir une vision concise sur l'histoire du service éducatif de l'Église catholique afin de mettre en exergues quelques défis et perspectives qui se présentent à nous, dans le but de raviver notre commune passion pour l'éducation.

Introduction

La culture et l'éducation n'ont jamais été considérées par l'Église catholique comme de simples instruments pour l'évangélisation mais comme des dimensions humaines dotées d'une haute valeur intrinsèque. L'investissement dans l'instruction des jeunes générations est une condition pour « le développement des peuples, tout particulièrement de ceux qui s'efforcent d'échapper à la faim, à la misère, aux maladies endémiques, à l'ignorance [et] qui cherchent une participation plus large aux fruits de la civilisation, une mise en valeur plus active de leurs qualités humaines »[1] – comme déclarait Paul VI dans l'encyclique *Populorum progressio*. L'Église partage les efforts pour un plus grand accès à l'alphabétisation, à l'éducation pour tous et à la formation permanente. Ces piliers sont rendus encore plus solides par l'engagement fondamental en faveur des minorités ethniques et religieuses et en soutien au génie féminin, si important pour une croissance harmonieuse de la société.

L'Église catholique, « experte en humanité »[2], a placé l'éducation au centre de sa mission et continue même de nos jours à la considérer comme sa priorité, spécialement dans un contexte « d'urgence globale pour l'éducation » provoquée aussi bien par des processus de changement que par une approche réductionniste qui tend à limiter la portée universelle de l'éducation à l'aspect purement économique. En effet, en y regardant de près, la récente crise financière globale est de genre entropique: elle a donné naissance à une perte de sens et en conséquence à une apathie sociale. Dans ce refus, on perd toute orientation vers le bien commun et on s'éloigne de la valeur propulsive de la relationnalité au nom de l'anthropologie minimaliste de l'homo oeconomicus, qui étouffe les relations interpersonnelles et prend les potentialités rationnelles au piège.

1. Une longue histoire au service de l'éducation

1.1 Les racines

À la base de la pédagogie et de la tradition éducative de l'Église, il y a l'anthropologie biblique en laquelle apparaît, déjà dans le Livre de la Genèse (1, 31), la relation d'amour et de réciprocité entre l'homme et Dieu.

On ne peut nier que l'Église ait une grande histoire éducative. Pensons à ce que furent les monastères qui, après l'effondrement de l'empire romain d'Occident et de la civilisation classique, à partir de Benoît de Nursie et puis avec saint Bernard et beaucoup d'autres réformateurs autour de l'An mille, donnèrent vie à des centaines d'authentiques « laboratoires de civilisation ». En ces lieux de prières et d'étude, furent copiés et sauvegardés les manuscrits de Sénèque, Platon, Cicéron, Augustin, qui, sans le soin et l'amour de ces moines, nous seraient parvenus appauvris et partiels. À l'âge moderne émerge surtout l'œuvre de nombreux instituts et congrégations religieuses détenteurs

d'un remarquable charisme éducatif qui ont consacré jusqu'à nos jours leur mission à l'instruction et à la formation académique.

1.2 Du Concile Vatican II à aujourd'hui

Le Concile Vatican II, comprenant les changements géopolitiques, technologiques et sociaux, sut analyser objectivement – à la lumière de l'Évangile – les demandes des communautés, en écoutant aussi les voix les plus faibles et les plus tourmentées. Une réflexion précise sur l'éducation porta à proposer une éducation intégrale et complète, en mesure de construire les fondements préliminaires d'une société inclusive, dialogique et pacifique. La formation des nouvelles générations, en effet, doit assurer un processus qui tienne sur le même plan le développement cognitif, psychologique, pragmatique et manuel, affectif et spirituel. En mettant au centre les principes de solidarité et de subsidiarité, la Déclaration Gravissimum educationis fait percevoir clairement que « la véritable éducation est de former la personne humaine dans la perspective de sa fin la plus haute, et du bien des groupes dont l'homme est membre et au service desquels s'exercera son activité d'adulte ».[3]

Les écoles, les universités et les centres de recherche ont pour vocation d'être un « laboratoire d'humanité »[4] ouvert à tous et accueillant pour tous. Comme laboratoire, les institutions éducatives nécessitent une approche collégiale et polyvalente à laquelle chacun est appelé à contribuer en partageant la responsabilité des actes et le poids des décisions soit comme famille soit comme éducateurs. « C'est une belle mais lourde vocation – affirme Gravissimum educationis – celle de tous ceux qui, pour aider les parents dans l'accomplissement de leur devoir et représenter la communauté humaine, assument la charge de l'éducation ».[5]

Cette aptitude vaut non seulement pour les écoles de tout ordre et degré, mais aussi pour les institutions universitaires qui doivent « se distinguer par leur engagement culturel »[6] soutenant, d'abord, ces réalités périphériques qui souffrent de conditions d'indigence et en portant une attention particulière « aux étudiants qui donnent davantage d'espérances, même s'ils sont de condition modeste ».[7] Dans son engagement pour l'édification d'une société juste et pacifique, l'université catholique – comme l'affirme clairement la Constitution apostolique Ex corde Ecclesiae promulguée par Jean-Paul II en 1990 – ne néglige en rien « l'acquisition de connaissances utiles, [mais elle] se distingue par sa libre recherche de toute la vérité relative au monde, à l'homme et à Dieu. Notre époque, en effet, a un urgent besoin de cette forme de service désintéressé qui consiste à proclamer le sens de la vérité, valeur fondamentale sans laquelle la liberté, la justice et la dignité de l'homme sont étouffées ».[8]

2. Quelques défis et perspectives de l'éducation

Ce bref regard historique sur le service éducatif de l'Église catholique permet maintenant d'entrevoir les profils de quelques défis et perspectives éducatifs de notre temps, manifestement fragmenté et multi-identitaire.

On ne peut pas faire moins que de noter, en effet, une extrême fragmentation du savoir avec une incommunicabilité préoccupante entre les divers secteurs disciplinaires. D'autre part, les sociétés de notre temps ont un profil multi-identitaire. Cela engage à parcourir les sentiers ardues et ascendants de la confrontation et du dialogue. Par un dialogue formateur et une confrontation pacifique, on évite le risque d'incommunicabilité, favorisant ainsi la rencontre constructive et la compréhension réciproque.[9] Cette proximité de l'autre est d'importance fondamentale face aux processus intenses de globalisation et aux migrations de notre époque dans lesquelles les diversités culturelles et religieuses « doivent être comprises comme expressions de l'unité fondamentale du genre humain ».[10] Sur cette base unitaire, on doit être des constructeurs de ponts et des animateurs de paix, en partant de la thèse – comme le soutenait Jean XXIII dans sa célèbre encyclique *Pacem in terris* – que « tout être humain est une personne, c'est-à-dire une nature douée d'intelligence et de volonté libre. Par là même il est sujet de droits et de devoirs, découlant les uns et les autres, ensemble et immédiatement, de sa nature : aussi sont-ils universels, inviolables, inaliénables ».[11]

L'éducation se réalise, en effet, dans une relation asymétrique et génératrice : c'est un mouvement vers l'autre pour lui tendre la main. Ce n'est pas une simple assimilation de notions, une répétition servile de normes, une utilisation mécanique de moyens mais, en amont, c'est aussi une élaboration vivante de valeurs partagées et de fins. D'une certaine manière, éduquer c'est se mettre à côté, dans l'adhésion au bien, et c'est accompagner dans la recherche de la vérité, en aidant à libérer la force créative de la raison qui ne méprise pas la beauté et la bonté.

2.1 Du paradigme de la terminologie technique à la centralité de l'humain

Dans le contexte actuel fragmenté et multi-identitaire, l'urgence pour l'éducation s'aggrave au moment où prévaut la conception artificielle et positiviste de l'homme-machine sur l'homme-personne. Ce déséquilibre est rendu encore plus prégnant par l'application ou l'intrusion des théories de la robotique et de la cybernétique dans ces domaines qui ne sont pas du tout les leurs.

Le premier défi perspectif de l'éducation est, donc, la récupération de la centralité de l'humain face à une tendance surtout technicienne qui prive l'instruction de son caractère universel. Les nouveaux mots d'ordre sont efficacité, concurrence, compétence avec le risque de devenir une véritable idéologie globale, présentée cependant comme une « technè » et donc absolument libre des valeurs et de tout jugement moral.

L'intelligence émotive et affective, la capacité d'empathie, la sympathie participative, le travail en équipe sont des mérites essentiels et fondamentaux dans les institutions éducatives. Aujourd'hui ils risquent d'être marginalisés au nom d'une connaissance technique standardisée, codifiée et quantitative qui souffre d'une grande marge d'homologation relationnelle et émotionnelle ainsi que du danger de partialité, mortifiant à la base les différences de caractère et la créativité individuelle. Cela vaut aussi bien pour les apprenants que pour les enseignants réduits à être des facilitateurs ou des médiateurs de l'auto-apprentissage et de l'auto-formation, alors qu'est exclue artificiellement toute autre expérience éducative telle que la famille ou l'Église elle-même.

L'application systématique au monde de la formation et du travail d'une méthodologie économique fondée sur l'exaltation de la rapidité productive et de la rapidité de la consommation, génère une spirale défavorable dans laquelle les personnes peuvent être mises à part et confinées à l'oubli sans aucun égard à leur dignité. Si on ne se laisse pas « interroger par un sens plus large de la vie », [12] il se formerait dans la mentalité collective une « culture du déchet » [13] qui, dans un incessant effet domino finirait par mettre tout le monde en déroute, de façon mécanique, sans aucun sentiment de pitié ni de compassion. Si une saine compétition peut être bénéfique, son absolutisation la paupérise en la transformant en idole qui – comme l'argent – « commande les choix de l'homme » [14] indifférent aux cris de douleur et ignorant des appels de la conscience. Cette vague irrésistible ne s'arrête même pas face au sens profond de la famille, de l'affectivité et du choix religieux.

La proposition de l'Église catholique veut aller au-delà des bas-fonds de l'individualisme et dépasser le gué d'une construction épistémologique trop fermée sur elle-même. Elle a à cœur une plus grande prise de conscience des implications éthiques et morales, en favorisant une rencontre positive entre les diverses disciplines « de manière à leur éviter de s'enfermer dans une conception particulariste » [15], en promouvant une vision synthétique, sans pour autant mettre en question l'intégrité et les méthodologies propres des disciplines elles-mêmes [16]. Le primat de l'unité et la nécessité de la synthèse ne sont pas un pur exercice rhétorique, ils sont plutôt à l'origine même de l'université qui se consacre intégralement à l'enseignement et à la formation en étant « un stimulant permanent pour la recherche désintéressée de la vérité et de la sagesse » [17]

2.2 Une éducation élargie et de valeur

Un autre défi qui me semble dominer l'horizon d'aujourd'hui est l'ampleur même de l'éducation en général et de l'éducation aux valeurs. En premier lieu, on doit reconnaître que chaque personne – enfant, jeune, adulte – engagée dans un processus éducatif possède singulièrement des aptitudes, des connaissances, des compétences qui doivent être activées par celui qui s'en approche de l'extérieur. L'éducation est un processus in itinere avec la conscience que cette semence, potentiellement déjà présente dans la

personne, attend d'être réveillée, soignée, réchauffée, nourrie de manière à germer selon sa nature propre et ses formes propres.

En outre, il est temps de placer au centre une saine autocritique, en réponse aux plaintes qui viennent des écoles et universités au sujet d'une excessive présence d'instruments et de techniques, face à une désertification progressive des disciplines humanistes dans la formation des jeunes. Les sciences humaines ne peuvent pas être éliminées ou considérées superflues. Grâce à elles se structurent une capacité logique, une faculté de jugement et une complexité de la pensée qui offrent des possibilités extraordinaires de connaître rationnellement et d'approfondir scientifiquement des concepts, des données et des formulations. Parmi ces disciplines, l'éducation à la beauté, à l'art, à la musique, à la poésie occupe une place irremplaçable. La beauté est non seulement partie intégrante de tout processus éducatif mais aussi une occasion d'expériences émotives et intuitives relatives au Transcendant et au méta-empirique. L'homme moderne semble symboliquement desséché tellement qu'il ne donne pas l'importance convenable à la promotion du beau et, en conséquence, à la défense de la nature.[18] Cette dimension de la beauté est, en même temps, éducative et thérapeutique.

Une éducation sensible à la beauté se consolide et gagne en maturité dans le soin de l'environnement ambiant, dans l'attention au prochain, dans la participation aux idéaux. L'éducation se fait charismatique. Charisme, en effet, vient du grec charis qui est aussi la racine de grâce, gentillesse et gratitude : cette beauté a un besoin vital de gratuité et de partage.

2.3 Une communauté éducative unanime

Un troisième défi, étroitement lié aux précédents, est la récupération de la responsabilité communautaire de l'éducation. Dans la société – de même que dans les écoles et dans les universités – on doit créer les conditions pour une coopération fructueuse qui mette les enseignants et tous les acteurs de l'univers éducatif dans les conditions pour pouvoir travailler bien et ensemble, en prenant intégralement soin des relations entre les familles et ceux qui apprennent, par un « jeu coopératif » qui stimule mutuellement les uns et les autres. À cet égard, le principe de subsidiarité, pilier de la doctrine sociale de l'Église, assume une valeur fondamentale aussi et surtout dans les rapports éducatifs. Elle est le fondement de tout choix éducatif raisonnable et autonome, garantie pour les démocraties du monde entier et principe de base aussi de l'UNESCO.

La subsidiarité est aussi au fondement de tout processus éducatif vertueux parce qu'elle nous rappelle que la première compétence d'où il faut partir est celle que possède déjà la personne qui apprend. Toutes les autres interventions doivent être subordonnées à cette compétence fondamentale et essentielle. Si les interventions de l'éducateur se substituent de façon radicale à ce « génie personnel », souvent latent mais réel, de l'individu qui apprend,

le processus pédagogique se grippe et se dégrade. Pour cette raison, jamais comme en ce moment de l'histoire, l'école et l'université doivent redevenir un point de référence positif « visant à construire une relation éducative avec chaque étudiant, qui doit se sentir accueilli et aimé pour ce qu'il est, avec toutes ses limites et ses potentialités ».[19]

À l'école et à l'université est confiée la tâche de porter à son achèvement un processus organique qui se fonde sur la personne, pour qu'elle devienne la protagoniste principale de sa propre croissance et de sa maturation dans une perspective d'apprentissage permanent. « Le modèle dont elle doit s'inspirer [...] est celui de la communauté éducative, espace de convivialité entre les différences »[20]. En effet, elle est un lieu de rencontre où l'on « encourage la participation, dialogue avec la famille , [...] elle en respecte la culture et se met profondément à l'écoute des besoins qu'elle perçoit et des attentes qui sont mises en elle ». [21]

Face à un monde digital alternatif et virtuel, il serait opportun de revenir aussi à un certain caractère concret aussi bien dans les écoles que dans les universités, où – souvent – le travail reste encore une expérience très marginale et sur l'arrière-plan d'un système académique, dans certains cas, obsolète. Dans un contexte de hauts niveaux d'obsolescence technologique, il est plus que jamais nécessaire d'imaginer d'études plus flexibles qui adjoignent le travail – sans se substituer à lui – mais en l'intégrant et en l'accompagnant jour après jour. Il serait opportun d'étendre cette expérience à toute l'existence avec des périodes régulières et réglées de formation permanente parce que l'objectif ne doit pas être le 'titre' mais la connaissance, l'apprentissage et l'approfondissement, surtout dans une société toujours plus complexe et stratifiée.

2.4 L'éducation au dialogue et la construction de la fraternité

Enfin, le service éducatif d'aujourd'hui ne peut se soustraire aux défis d'une culture de l'opposition et à ses instrumentalisation destructrices et irrationnelles. « La cause ontologique »[22] du contexte actuel de haine et de mépris à l'intérieur de la famille humaine est constituée d'un radical « refus de l'humanité dans l'autre ».[23] L'acceptation de la diversité est donc fondamentale dans le respect réciproque et dans la liberté d'exprimer ses propres idées et ses propres convictions religieuses. Cette attitude constructive trouve son humus naturel dans le dialogue désintéressé[24], qui dans la recherche commune de la paix et de la justice devient « au-delà de l'aspect purement pragmatique, un engagement éthique qui crée de nouvelles conditions sociales ».[25]

Pour cette raison, l'école et l'université sont appelées à proposer de nouveau les conditions nécessaires pour un nouvel humanisme qui sache reconstruire un esprit de fraternité entre les personnes et entre les nations. [26] Le véritable objectif de la recherche est, en effet, la résolution des problèmes et

la proposition de solutions qui sachent intégrer la dimension individuelle avec la dimension relationnelle et communautaire. Accepter les différences propre à chaque culture ne signifie pas nier l'existence de valeurs objectives et de principes communs à la nature humaine elle-même, sans lesquels on est transporté dans le relativisme culturel, qui oublie délibérément tout questionnement ultime sur la vérité et ouvre les portes à l'oubli de la mémoire, au nihilisme et au radicalisme.[27]

Avec courage et force d'âme, on doit dépasser la catégorie du rejet parce que – comme l'a déclaré le Pape François au Corps diplomatique – « une culture qui rejette l'autre, brise les liens les plus intimes et les plus vrais, finissant par défaire et désagréger toute la société, et par engendrer la violence et la mort ».[28] Pour éviter ces conséquences néfastes, le Pape lui-même indique l'horizon de la fraternité qui « renvoie à la croissance en plénitude de tout homme et de toute femme [où] les justes ambitions d'une personne, surtout si elle est jeune, ne doivent pas être frustrées ni blessées, l'espérance de pouvoir les réaliser ne doit pas être volée ».[29]

Conclusion

En concluant mon intervention je ne peux qu'encourager et louer les initiatives de l'UNESCO qui célèbre son soixante-dixième anniversaire en un temps où beaucoup entrevoient les signes d'une transition d'époque. Comme cela est déjà arrivé dans l'histoire de l'humanité, de telles périodes sont denses d'instabilité et cause de désorientation. Face à l'intensification de sentiments d'opposition et de haine, il paraît nécessaire de repartir du « partage du beau » et de la « louange du créé », en valorisant l'apport que chacun peut offrir et en proposant un rapprochement humble et patient entre les individus, les communautés et les peuples.

Au fondement de cette responsabilité commune il y a – comme l'a affirmé Jean-Paul II en ce Siège prestigieux – « une dimension fondamentale, qui est capable de bouleverser jusque dans leurs fondements les systèmes qui structurent l'ensemble de l'humanité et de libérer l'existence humaine, individuelle et collective, des menaces qui pèsent sur elle. Cette dimension fondamentale, c'est l'homme, l'homme dans son intégralité, l'homme qui vit en même temps dans la sphère des valeurs matérielles et dans celle des valeurs spirituelles. Le respect des droits inaliénables de la personne humaine est à la base de tout ».[30]

Dans le renforcement de la confiance réciproque et la reconnaissance mutuelle, l'éducation devient la plateforme idéale pour abattre les murs de l'incompréhension et de l'orgueil. Une éducation intégrale est capable d'écoute patiente et de dialogue constructif. Comme l'a dit récemment le Pape François, elle nous offre l'opportunité de nous approcher des autres « sur la pointe des pieds sans soulever la poussière qui voile la vue ».[31] En célébrant ensemble ces anniversaires, l'Église comme l'UNESCO se trouvent ensemble dans cette mission éducative qui – comme l'a écrit Paul VI au Directeur général Amadou

Mahtar M'Bow –, « par-delà tant de douloureuses divisions, manifeste le souci commun de l'humanité d'assurer un plus authentique épanouissement de l'homme ».[32]

Je vous remercie !

[1] Paul VI, Lettre encyclique *Populorum progressio* (26 mars 1967), n. 1.

[2] Ibid, n. 13

[3] Concile Vatican II, Déclaration *Gravissimum educationis* (28 octobre 1965), n. 1.

[4] Benoît XVI, Discours aux participants au IIIe Congrès mondial pour les étudiants internationaux (2 décembre 2011).

[5] Déclaration *Gravissimum educationis*, n. 5.

[6] Id. n. 10

[7] Ibid.

[8] Jean-Paul II, Constitution apostolique *Ex corde Ecclesiae* (15 août 1990), n. 4.

[9] Cf. Pape François, Discours aux étudiants et aux professeurs du Collège Seibu Gakuen Junior High School de Satama - Tokyo (Japon), 21 août 2013.

[10] Congrégation pour l'Éducation catholique, *Éduquer au dialogue interculturel dans l'école catholique. Vivre ensemble pour une civilisation de l'amour*, (28 octobre 2013), n. 1.

[11] Jean XXIII, Lettre encyclique *Pacem in terris* (11 avril 1963), n. 5.

[12] Pape François, Exhortation apostolique *Evangelii gaudium* (24 novembre 2013), n. 203.

[13] Cf. Pape François, Discours aux délégués de l'Institut *Dignitatis Humanae*, 7 décembre 2013.

[14] Pape François, Discours aux représentants de la Confédération des Coopératives italiennes, 28 février 2015.

[15] Congrégation pour l'éducation catholique, *Éduquer aujourd'hui et demain. Une passion qui se renouvelle*, (7 avril 2014), I, 2.

[16] Cf. Ibid.

- [17] Jean-Paul II, Constitution apostolique *Ex corde Ecclesiae*, n. 2.
- [18] Cf. Pape François, Discours au Conseil de l'Europe, 25 novembre 2014.
- [19] Pape François, Audience aux Membres de l'Union catholique italienne des enseignants, dirigeants, éducateurs et formateurs (UCIIM), 14 mars 2015.
- [20] Congrégation pour l'éducation catholique, *Éduquer au dialogue interculturel à l'école catholique. Vivre ensemble pour une civilisation de l'amour*, n. 58.
- [21] Idem.
- [22] Pape François, Message pour la journée mondiale de la paix 2015, n. 4.
- [23] Ibid.
- [24] Cf. Pape François, Exhortation apostolique *Evangelii gaudium*, n. 142.
- [25] Pape François, Exhortation apostolique *Evangelii gaudium*, n. 250.
- [26] Pape François, Message pour la journée mondiale de la Paix 2014, nn. 3-4.
- [27] Cf. Pape François, Lettre encyclique *Lumen fidei* (29 juin 2013), n. 25.
- [28] Pape François, Discours au Corps diplomatique, 12 janvier 2015.
- [29] Pape François, Message pour la journée mondiale de la Paix 2014, n. 8.
- [30] Jean-Paul II, Discours à l'UNESCO, 2 juin 1980.
- [31] Pape François, Discours aux participants à la rencontre organisée par le PISAI, 24 janvier 2015.
- [32] Paul VI, Message au Directeur général de l'UNESCO, 25 juin 1975.

París, miércoles 3 de junio de 2015
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana

http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/parolin/2015/documents/rc_seq-st_20150603_parolin-unesco_fr.html
(10 de junio de 2015)

[Volver al Índice](#)

D. Intervención del Monseñor Paul Gallagher en el Consejo de Europa sobre la dimensión religiosa del diálogo intercultural

*STATEMENT OF HIS EXCELLENCY MSGR. PAUL GALLAGHER,
SECRETARY FOR RELATIONS WITH STATES,
AT THE HIGH-LEVEL SEMINAR ORGANIZED BY THE PERMANENT MISSION
OF THE HOLY SEE TO THE COUNCIL OF EUROPE*

Madam Deputy
Secretary General, Dear Ambassadors,
Ladies and Gentlemen,

It is an honour for me to join you as you reflect together on ways to contribute to the meeting on the religious dimension of intercultural dialogue promoted by the Committee of Ministers and due to take place in Sarajevo on 8 and 9 September next, having as its theme "Building Inclusive Societies Together". I wish especially to thank Mrs Gabriella Battaini-Dragoni, Deputy Secretary-General, for having accepted to chair this Seminar, and ask you to extend my gratitude to the Secretary General, Mr Thorbjørn Jagland, who is supporting this initiative.

My presence today comes within the context of the visit made by His Holiness Pope Francis on 25 November last. On that occasion, emphasis was placed on the Holy See's recognition of the Council of Europe's work and the diligence with which it is carried out. I myself can witness to this fact, having lived here in Strasbourg as Permanent Observer of the Holy See from 2000 to 2004.

I have structured my talk around four theses concerning the religious dimension of intercultural dialogue, which I shall seek to present concisely. I offer these thoughts both as a contribution to the discussions with Professor Bielefeldt, UN Special Rapporteur on freedom of religion or belief, and to the debate which will follow our interventions. I would like here to extend a particular vote of thanks to Professor Bielefeldt for having accepted to address this Seminar and enrich it with his experience and expertise.

First Thesis: In the context of growing multipolarity, religions are an essential subject/actor in the area of intercultural dialogue.

In his address to the Council of Europe, Pope Francis called for a debate on the challenge of multipolarity, saying: "Today we can legitimately speak of a "multipolar" Europe. Its tensions – whether constructive or divisive – are situated between multiple cultural, religious and political poles. Europe today confronts the challenge of 'globalizing' this multipolarity, but in a creative way [...] Creatively globalizing multipolarity... calls for striving to create a constructive harmony, one free of those pretensions to power which, while appearing from a pragmatic standpoint to make things easier, end up destroying the cultural and religious distinctiveness of peoples."

Multipolarity is a reality. It entails the concomitant presence and interrelationship of various actors: states; international organizations; national societies distinctly structured according to their respective countries; national and supranational religious communities; non-governmental organizations and informal social networks. Each of these actors is, in turn, influenced by distinct cultures and world views, which at times can be complementary, but also decidedly conflicting. The same religious communities, on careful examination, are perceived, not as monolithic objects, but as living bodies that enshrine, to a greater or lesser extent, a plurality of expressions. In these circumstances, dialogue among cultures is a *sine qua non* for enabling coexistence, favouring the inclusion of all, and for formulating a shared social project. For such a dialogue among cultures to take place, religions are indispensable actors.

This relatively new context in the history of humanity means that all actors – and to a much greater degree than in the past – must place themselves in relation with others in what can be described as a cross-sectional approach. For some time now states have not only engaged in dialogue with other states, but also with international institutions, with organizations in civil society, and with religious confessions. In turn, these religious organizations form part of an ongoing exchange with the society in which they live, with other religions, and with civil authorities. Here we have the second challenge indicated by Pope Francis in his address to the Council of Europe, namely, that of transversality: “In Europe’s present political situation, merely internal dialogue between the organizations (whether political, religious or cultural) to which one belongs, ends up being unproductive. Our times demand the ability to break out of the structures which “contain” our identity and to encounter others, for the sake of making that identity more solid and fruitful in the fraternal exchange of transversality. A Europe which can only dialogue with limited groups stops halfway; it needs that youthful spirit which can rise to the challenge of transversality.”

After a long and at times difficult period of reflection, the Catholic Church at the Second Vatican Council developed a new framework of norms with regard to “external” relations, that is, with other religions, states and, more profoundly, with present day society and culture. This did not simply involve a change in policy, but rather an authentic renewal, made possible – as always happens with reform processes in the Church – by a deeper theological reflection on her own identity. The result has been a fresh understanding of the Church’s relationship with the world, a healthy tension that we still experience today, between the recognition of positive contributions made by our so-called modern society and the ability to identify those things in it that are not coherent with the gospel and right reason.

Against this backdrop, the right to religious freedom is recognised as a civil right which is rooted in the dignity of the human person, as was explicitly expressed fifty years ago in the declaration of the Second Vatican Council

Dignitatis Humanae. With regard to relations with other religions, it is sufficient to quote the Council's Declaration *Nostra Aetate*, also published in 1965: The Church "regards with sincere reverence those ways of conduct and of life, those precepts and teachings which, though differing in many aspects from the ones she holds and sets forth, nonetheless often reflect a ray of that Truth which enlightens all men" (No. 2). A rich post-conciliar theological reflection has resulted, offering guidance through papal and episcopal magisteria.

How far have we come with this intercultural dialogue in terms of multipolarity? Even if, on the one hand, many positive steps have been taken, on the other there is no shortage of difficulties. On the part of religious confessions, initiatives for interreligious dialogue have multiplied over the last few years. These are important, indeed essential, not only for prominent leaders but also at a local level. Such initiatives are necessary to ensure greater mutual understanding and trust in relationships, and to facilitate a shared commitment to projects which benefit society. I am thinking, for example, of the promotion of peace and the rejection of every form of violence in the name of God or of religion. The road ahead is long and requires determination on the part of all men and women of different religions to face the troubling signs of an opposite path in which identities are forged that are exclusive and lead to violent extremism.

Contradictory signs are also seen in connections to the dialogue that exists between religious confessions and public institutions. From one perspective, especially that of states, there is the awareness of a pressing need to manage the reality of religion as it appears in multicultural political systems. On the other hand, civil authorities often experience difficulties, within a deeply secularized environment, in understanding the specific characteristics of the religious dimension.

Open and respectful encounters between religious traditions and between these and the social and political world are fundamental for social cohesion. The religious dimension continues to be a living reference point for millions of people in Europe, affecting their choices and, to a greater or lesser degree, their identity. It is a dimension which is in continuous transformation, due to new religious forms of life and profound changes experienced within religious communities that have long been present in Europe. Within religious communities there are elements of decline but also signs of unexpected vitality. For intercultural dialogue to bear fruit, it must face not only the religious dimension in general, but also interact with particular religious confessions with all their historic characteristics.

Second Thesis: Religions are called to offer a specific contribution to the advancement of a culture of human rights

The codification of human rights was conceived in Europe as the affirmation of the dignity of each individual human person, regardless of their ideas, religious convictions or traditions. From its inception, this affirmation of the rights of man was based on principles regarded as evident and common to all human beings. It should suffice to recall Article 1 of the "Declaration of the Rights of Man and of the Citizen" of 1789, which states that "Men are born and remain free and equal in rights" and consequently affirms the freedom of thought and religion and the equality of each person before the law. Such principles retain their meaning to date and are still the foundation of a culture of human rights.

We should not, however, underestimate the challenges presented by the contemporary context of multipolarity. If the fundamental internationally recognized principles remain a fortunate common point of reference, their application to the many circumstances of personal and social life is increasingly exposed to conflicting interpretations which reflect the different philosophical and religious perspectives and humanistic interpretations that coexist in our society. I am thinking certainly of the different concepts of marriage and the family, but also of the defence of human life in situations of extreme fragility, the understanding of social responsibility and the challenges posed by immigration.

The organisms called upon in specific situations to judge in respect of human rights – the European Court of Human Rights, in the first place – find themselves daily facing an arduous task, such as when problems arise over the common understanding of values, or indeed concerning the shared understanding of rights. From this point of view, if the task proper to judges is essential, no less important is the care which should be given to building and maintaining a robust common culture of human rights, from which no one should feel excluded. Such a common culture is today difficult yet necessary. A religious understanding of the human person can and must make a specific contribution to this common culture, in dialogue with philosophies of man that tend to exclude any reference to transcendence.

I am speaking of the particular contribution given by religious perspectives on the human person, in the sense that without these the entire culture of human rights, even those of non-believers, would be greatly impoverished. I cannot claim to speak in the name of other religious cultures; but I believe that the specific contribution of the Catholic Church to a common culture of human rights may be seen in concrete ways and I will limit myself to offering a few examples, which are by no means exhaustive. First of all, there is the awareness of a radical equality and fraternity between every human person created in the image and likeness of God. Secondly, the recognition of the worth of the least among us, of the poor and the marginalized, of the dignity of every human life no matter how weak or precarious, from conception through natural death. Thirdly, the capacity to transmit a religious identity which is both firm and respectful of others, open to dialogue with other

religions and world views. As can easily be seen, these are universal values, and while they are not exclusive to the Catholic Faith, the latter has offered and continues to offer a unique contribution.

Every religious tradition can and must make its own particular contribution, even when it becomes important to find a way to relate honestly to one another, embracing the good that exists in all traditions and also inviting sincere discussion on the perceived limitations of every tradition of thought, be it religious or not. But how is it possible truly to meet at the crossroads of culture, how is it possible to face the challenge of “globalizing multipolarity in a creative way”, of achieving a “constructive harmony free of pretensions to power”, which Pope Francis spoke of in his address to the Council of Europe?

The Catholic Church has always indicated that the instrument which enables this common search, this dialogue among cultures, is human reason, with which we are all endowed. Reason, however, must also open itself to the entirety of human experience. Pope Benedict XVI, reflecting on dialogue between cultures, said: “In the Western world it is widely held that only positivistic reason and the forms of philosophy based on it are universally valid. Yet the world's profoundly religious cultures see this exclusion of the divine from the universality of reason as an attack on their deepest convictions. A reason which is deaf to the divine and which relegates religion into the realm of subcultures is incapable of entering into the dialogue of cultures [...] It is to this great Logos, to the breadth of reason, that we invite our partners in the dialogue of cultures” (Meeting with the Representatives of Science, University of Regensburg, 12 September 2006).

The dialogue generated within this “great Logos” is healthy for religions and for reason itself. In the case of religions, this is so because being committed to dialogue within democratic societies and open to argumentative reason is an antidote to all forms of fundamentalism. In the case of reason, it is healthy because openness to the transcendent, which remains a constitutive reality for many cultures and for the life of a great proportion of humanity, helps reason to avoid simplistic forms of reductionism. In reality no one has a monopoly on the culture of human rights. To deny or to conceal differences serves nobody. What is important, however, is to make concerted efforts to rediscover that which we hold in common, without forgetting that the ability to recognize each other's distinctness in a shared nucleus of fundamental human values is the condition for the survival and genuine advancement of each society.

Concluding this thesis, “building inclusive societies”, and building them “together”, as stipulated in the title of the Sarajevo meeting, is an arduous task, but one from which we cannot escape. For this very reason, in dialogue focused on matters of human rights we must avoid the temptation to exclude arbitrarily cultures or worldviews that are religious, or to accuse them of not respecting determined standards, or to reduce the understanding of the human person to the lowest common denominator. To give into this

temptation would be a failure to incorporate the religious dimension into the important themes being discussed. A pluralism that does not include the challenges offered by world religions to secularist perspectives will never be authentic pluralism, and will instead risk falling into a uniform single-mindedness, the enemy of freedom.

Third Thesis: Religious Freedom is a key element in the development of a democratic society

Religious freedom is not only a fundamental right for every person, but the juridical context which allows religious communities to contribute actively to democratic debate and to the promotion of a shared culture of human rights.

If one of the pivotal points of democracy is the presence of a civil society characterized by the active participation of all, individuals and communities, then we cannot forget the role that religions play. They offer a direct contribution when educating consciences and shedding light on human situations, or indirectly, when they inspire the creation of many organizations and associations that work for society as a whole. Even if religions are not generally considered as protagonists of "civil society", they are nonetheless the foundation of numerous organizations which work within society, and they also create a network of informal associations and support groups which are not secondary to the fabric of society.

To value civil society means, even here, to accept its multipolarity: for each religion it means agreeing to share one's freedom with other religions, and with those men and women who do not recognize the transcendent; for society it implies recognizing religious communities as subjects participating, with every right, in the building of that same society.

The Holy See attaches great importance to religious freedom and hopes that states and international organizations may embrace its political value as a developer of freedom. During the negotiations at the "Conference on Security and Cooperation in Europe" which led in 1975 to the adopting of the Helsinki Final Act, it was the Holy See which called upon the participating states to recognize explicitly the right to religious freedom, seeing in this fundamental right the protection of freedom and democracy as well as a way of accepting one's own responsibilities in the face of oppressive socialist regimes.

Religious freedom is like a barometer which indicates accurately the true level of freedom within a society. Despotism in every age has always aimed to gain strict control over Churches and, as there are no authoritarian regimes which espouse authentic religious freedom, so too all restrictions of religious freedom lead to a weakening of the democratic fibre of society.

In today's context of multicultural societies, respect for religious freedom is one of the fundamental factors by which the health of a given democracy can

be evaluated as being truly a home for everyone. Promoting religious freedom appears particularly important in averting and countering the phenomena of extremist violence and radicalization, against which governments and international organizations are currently engaged, among them the Council of Europe. Religious freedom, however, is a demanding principle, both for religions and for civil authorities.

For religions, the recognition of religious freedom as a fundamental right entails fully acknowledging the other as he or she is. It means, on the basis of our shared human dignity, opening a space not only for tolerance, but for a common belonging, for sharing our most deeply held convictions with those who are different from us, without compromising our respective beliefs. It means not only respecting the personal ideas of the other, but also recognizing the right of communities and confessions different from our own to be present in the same territory and to cooperate in building up our society. It means, finally, admitting that there can never be an absolute identification between ethnicity or a people on the one hand, and religious affiliation on the other.

For civil authorities, and in particular for the state, the principle of religious freedom represents an inherent limit to the exercising of the state's power, a power which is necessary but which is often, by and large, invasive. It is to the historical credit of Christianity that in separating that which belongs to Caesar from that which belongs to God, it created the possibility for the existence of the secular state. The term "secular state" is not to be understood as a state which is indifferent to religion, or, worse still, as an agnostic state. Rather, it implies a state which, being aware of the value of religious belief for many of its citizens and of the important role of religious communities in society, allows each one to live according to their own religious conscience, both individually and communally, while equally respecting those who do not profess any belief system.

As already noted, international instruments enshrine not only the inviolability of the individual conscience, but also the religious dimension in its specificity as a socially organized phenomenon. Consequently, the rights of religious confessions to exist as autonomous organizations is already recognized in international instruments, something rightly highlighted in numerous decisions of the European Court of Human Rights.

In recent years, respect for the right to religious freedom has come into question on the international stage for a variety of reasons. In the first instance, due to the spread of fundamentalism and the continued existence of authoritarian and non-democratic states, there has been a disconcerting diminishing of respect for religious freedom in many countries, a deterioration which in more than one place has unfortunately reached proportions of outright persecution, where Christians are frequently among the first victims. In the second instance, in many countries of ancient democratic tradition,

religion tends to be viewed with a certain suspicion: because of the challenges posed in a multicultural context, but also because of a deeply secularist view of the world according to which religion represents a vision of human beings and of society in direct competition with the full affirmation of the rights of men and women, religion is seen as a residue of the past which must be overcome.

In the context of a highly secularized society, public displays of faith are quickly seen as problematic: there is the temptation to restrict the right of religious freedom in the workplace, in institutions of learning or in health facilities. With increasingly frequency, those who wish legitimately to work according to the principles deriving from their religious beliefs run the risk of being accused of discrimination. This is attracting increased international attention: Special Rapporteur Heiner Bielefeldt dedicated his interim report of August 2014 to the theme of religious freedom in the workplace, maintaining, among other things, the usefulness of applying the principle of "reasonable accommodation". Many other interesting ideas also emerged from research compiled by the United Kingdom's Equality and Human Rights Commission, published in March 2015 under the title "Religion or belief in the workplace and service delivery".

In a multicultural context, the coexistence of different religious affiliations requires a substantial effort on the part of civil authorities and actors in society. The principle of "reasonable accommodation" can be applied in many areas of public life. This process requires much reflection and patience, but it can bear fruit by more effectively promoting greater inclusiveness.

Fourth Thesis: The promotion and protection of the right to religious freedom is a basic task of states and international organizations.

Religious freedom is not to be understood as something extrinsic: just as with every basic right, there is a strict and vital connection between it and other basic rights, which form a coherent whole reflecting the intrinsic dignity of the human person, who is in turn the subject of these rights. In his 2013 interim report, "Freedom of Religion or belief and equality between men and women", Special Rapporteur Bielefeldt emphasized the value of a holistic understanding of human rights, such as those recalled in the Vienna Declaration adopted in 1993 during the World Conference on Human Rights. The Vienna Declaration affirmed that "All human rights are universal, indivisible and interdependent and interrelated. The international community must treat human rights globally in a fair and equal manner, on the same footing, and with the same emphasis".

It is true that at times there can be tensions in the exercise of one as opposed to another of these rights, for example, in the tension between the right to freedom of expression and the right to respect for one's own religious convictions, as has recently returned to the fore. In some cases, it is

unavoidable that the state has to identify solutions trying to strike a fair balance. However, the perception that fundamental rights could be in direct conflict with each other would be erroneous. If individual human rights are the expression of the dignity of the human person, then human rights cannot be opposed to each other. Rather, it is persons, the subjects of these rights, who need each day to learn to understand the rights that they hold in common with others. Borrowing words from the motto of the French Republic, freedom and equality – *liberté et égalité* – cannot be effectively promoted without accepting the challenge of fraternity – *fraternité*.

International institutions are thus called not only to combat all discrimination against religious beliefs, but also, from a positive perspective, to promote religious freedom. In a particular way, the protecting and promoting of religious freedom, at the same level as all other basic rights, is a task proper to an institution such as the Council of Europe, which in safeguarding and promoting human rights establishes its very *raison d'être*.

Religious freedom is, in fact, closely linked to very many other aspects of the safeguarding of human rights: I am thinking of themes such as non-discrimination; areas of education at school and in the family; bioethics; democratic citizenship. I am thinking of fields such as the prevention of radicalization and terrorism; the treatment of prisoners; the delicate relationship between freedom of expression and respect for religious sensibility; and many others besides.

In effect, protecting the right to religious freedom has been the object of attention on several occasions in a variety of institutions of the Council of Europe. Suffice to recall here the rich body of law of the European Court of Human Rights in this regard, along with numerous acts of the Parliamentary Assembly. There are also important efforts currently being promoted by the Steering Committee for Human Rights (CDDH), such as the "Guidelines of the Committee of Ministers to Member States on the Promotion and Protection of Human Rights in Culturally Diverse Societies", and the "Compilation of Council of Europe Standards Relating to the Principles of Freedom of Thought, Conscience and Religion".

We might ask if this is sufficient, confronted with the growing challenges arising from multipolar societies. The Holy See, on the basis of the principle of the indivisibility and interdependence of basic rights as indicated above, and being aware of the importance of the role of the Council of Europe, is convinced that the right to religious freedom ought always to be an object of particular attention; at the same time, it should be mainstreamed and integrated into all the most important activities and reflections concerning human rights. It would be useful to begin a reflection on this theme.

At the same time, the Holy See has always supported occasions for dialogue – both directly and at the institutional level – between civil authorities and

religious leaders. This applies at state level, but also at the level of local authorities and indeed international organizations. Such a dialogue can contribute to the pursuit of a constructive harmony free of all constrain, of which Pope Francis has spoken. Recognizing the proper role that religions play in intercultural dialogue, and maintaining with religions an open and transparent dialogue, is important even from a merely political point of view. In the context of multipolar societies, if religions are not part of the solution, they can easily become part of the problem.

From this perspective, intercultural encounters organized in recent years on the religious dimension of dialogue offer a useful contribution, even if these ought not be the only occasions in which dialogue among religions and cultures, and discussion of human rights, takes place. In the Recommendation 1962 of 2011 on the religious dimension of intercultural dialogue, and promoted as Rapporteur by Mme Brasseur, there was, among other things, the suggestion to the Council of Ministers for the creation of a space for dialogue. This envisaged a working group composed of members of the Council of Europe and representatives of various religions and non-confessional organizations, with the goal of placing existing relations on a more stable and formally recognized platform. Her hope has not yet become reality, although it still has much to recommend it.

Conclusion: An invitation to rediscover the political value of religious freedom as a factor contributing to reconciliation between peoples and as an initiative for constructing an inclusive society.

In September 1994 John Paul II wished to make a visit to Sarajevo. The trip had to be cancelled, owing to the conflict then underway, and it was only possible to make the visit three years later. But on 8 September 1994 the Holy Father celebrated a Mass in Castel Gandolfo which was broadcast live in Sarajevo, during which he affirmed: "The history of men, people and nations is replete with reciprocal rancour and injustices. How important the historical expression of the Polish Bishops to their German counterparts is: "We forgive and we ask your forgiveness!" If in that region of Europe peace was possible, it seems that it may also come thanks to the effective attitude expressed in the words I have just cited".

It is not insignificant that John Paul II, addressing a Sarajevo scarred by war, recalled the words of a memorable 1965 letter sent at the conclusion of the Second Vatican Council from the Polish bishops to their German brothers. Karol Wojtyła himself contributed to that letter which exposed the Polish episcopate to criticism from their own government and from some of their own faithful. While it is true that the history of Europe has at times been marked by religious conflicts, more recently religious confessions have contributed significantly to reconciliation between peoples. From this point of view, it is of great importance that the next meeting on the religious dimension of intercultural dialogue will take place in Sarajevo.

Last Sunday, another Pope, this time Francis, travelled to Sarajevo with a message as clear as that of his holy Predecessor. Pope Francis at an Ecumenical and Interreligious Meeting said: "Interreligious dialogue here (in Sarajevo), as in every part of the world, is an indispensable condition for peace, and for this reason is a duty for all believers." And a little later in the same speech the Holy Father added: "Dialogue is a school of humanity a builder of unity, which helps build a society founded on tolerance and mutual respect."

"We forgive and ask your forgiveness": these are courageous words, ones which the Catholic Church still speaks today and helps her faithful to say. It is not an appeal made lightly. We well know how many Christians throughout the world are paying a very high price for fidelity to their beliefs. But we also know that even today dialogue between religions can make a great contribution to reconciliation. That which seems hopeless can yet be realized with the help of God. This is how it was in recent history - we have only to think of the founding of the Council of Europe - so too it can be today in healing the wounds of this continent and those still festering around the world.

Finally, religions also have a role to play in the construction of a democratic societies that are genuinely inclusive. Understanding the meaning of this role is a sign of political wisdom on the part of states and international organizations. A common culture of human rights cannot serve as the mere sum of protecting the lives of individuals: this culture owes its existence to a vision of human person's dignity which must be open to the contribution of all parts of a multipolar society, united by a shared yearning and search for truth.

8 de junio de 2015

© Copyright - Libreria Editrice Vaticana

http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/2015/documents/rc-seg-st-20150608_gallagher-strasbourg_en.html
(15 de junio de 2015)

[Volver al Índice](#)

E. Discurso del Papa Francisco a los estudiantes que acaban de terminar el curso en la Academia Pontificia Eclesiástica

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO A LA COMUNIDAD DE LA ACADEMIA ECLESIASTICA PONTIFICIA

Queridos hermanos:

Os acojo al final de un año de estudios y de vida comunitaria. Demos gracias al Señor por este tiempo que os ha concedido para formaros y crecer juntos en el servicio a la Iglesia. Expreso mi profundo agradecimiento al presidente, monseñor Giampiero Gloder, así como a todos los que, en diversas funciones y de varias formas, colaboran en vuestra formación cultural y espiritual, y al desarrollo ordenado y sereno de vuestra vida en la Academia. De buen grado aprovecho esta ocasión para agradecerlos por haber puesto vuestra vida a disposición de la Iglesia y de la Santa Sede, y os animo a proseguir con alegría y serenidad el camino emprendido, que no es fácil. Quiero destacar algunos puntos de este camino vuestro.

Ante todo, vuestra misión. Os preparáis para representar a la Santa Sede ante la comunidad de las naciones y en las Iglesias locales a las que seréis destinados. La Santa Sede es la sede del obispo de Roma, la Iglesia que preside en la caridad, que no se sienta en el vano orgullo de sí, sino en la valentía diaria de la condescendencia, o sea del despojamiento, de su Maestro. **La verdadera autoridad de la Iglesia de Roma es la caridad de Cristo, no hay otra.**⁸¹ Esta es la única fuerza que la hace universal y creíble para los hombres y el mundo; esta es el corazón de su verdad, que no erige muros de división y exclusión, sino que se transforma en puente que construye la comunión y llama a la unidad del género humano; esta es su potencia secreta, que alimenta su esperanza tenaz, invencible, a pesar de las derrotas momentáneas.

No se puede representar a alguien sin reflejar sus rasgos, sin evocar su rostro. Jesús dice: «Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre» (Jn 14, 9). **No estáis llamados a ser altos funcionarios de un Estado, una casta superior que se preserva a sí misma y es apreciada en las reuniones mundanas, sino a ser custodios de una verdad que sostiene desde lo profundo a quienes la proponen, y no lo contrario.** Es importante que no os dejéis aridecer por los continuos traslados, más bien, hay que cultivar raíces profundas, conservar la memoria viva de por qué se ha emprendido el propio camino, no dejarse vaciar por el cinismo, ni consentir que se desvanezca el rostro de Aquel que está en la raíz del propio itinerario, o que se confunda la voz que ha dado origen al propio camino.

⁸¹ *El destacado es nuestro.*

«Acuérdate de Jesucristo» (2 Tm 2, 8), decía Pablo a su discípulo. No perder la memoria de Jesucristo, que está precisamente al inicio de vuestro camino. La preparación específica que os ofrece la Academia está orientada a hacer crecer las realidades que encontraréis, amándolas incluso en la poquedad que quizá muestren. En efecto, os prepararéis para convertirlos en «puentes», pacificando e integrando en la oración y en el combate espiritual las tendencias a imponerse a los demás, la supuesta superioridad de la mirada que impide el acceso a la esencia de la realidad, la pretensión de saber ya bastante. Para hacer esto es necesario no trasladar al ámbito en el que se actúa los propios esquemas de comprensión, los propios parámetros culturales, el propio bagaje eclesial.

El servicio al que seréis llamados requiere garantizar la libertad de la Sede Apostólica, que, para no traicionar su misión ante Dios y por el verdadero bien de los hombres, no puede dejarse aprisionar por las lógicas de los grupos de presión, ser rehén de la repartición contable de las camarillas, contentarse con la repartición entre cónsules, someterse a los poderes políticos y dejarse colonizar por los pensamientos fuertes de turno o por la hegemonía ilusoria de la corriente dominante. Estáis llamados a buscar, en las Iglesias y en los pueblos en medio de los cuales ellas viven y sirven, el bien que hay que promover. Para realizar del mejor modo posible esta misión es indispensable deponer la actitud de juez y ponerse el traje del pedagogo, de aquel que es capaz de hacer salir de las Iglesias y de sus ministros las potencialidades de bien que Dios no deja de sembrar.

Os exhorto a no esperar el terreno preparado, sino a tener la valentía de ararlo con vuestras manos —sin tractores u otros medios más eficaces de los que jamás podremos disponer—, a fin de disponerlo para la siembra, esperando, con la paciencia de Dios, la cosecha, de la que quizá no os beneficiéis vosotros; a no pescar en las peceras o en los criaderos, sino a tener el valor de alejaros de los márgenes de seguridad de cuanto ya se conoce y echar las redes y las cañas de pesca en zonas menos obvias, sin adaptarse jamás a comer pescados preconfeccionados por otros.

La misión del representante pontificio requiere la búsqueda de pastores auténticos, con la inquietud de Dios y con la perseverancia mendicante de la Iglesia que, sin cansarse, sabe que existen, porque Dios no permite que falten. Buscad, guiados no por prescripciones externas, sino por la brújula interior con la que se orienta la propia vocación de pastor, con la medida exigente que se debe aplicar a sí mismo para no extraviarse en la decadencia. Buscad a hombres de Dios, paternos con aquellos que les han sido encomendados; hombres insatisfechos del mundo, conscientes de su «penúltimidad» y de la certeza íntima de que, siempre y comoquiera que sea, seguirá necesitando cuanto parece despreciar.



Queridos hermanos: La misión que un día estaréis llamados a desempeñar os llevará a todas las partes del mundo. A Europa, que necesita despertarse; a África, sedienta de reconciliación; a América Latina, hambrienta de alimento e interioridad; a América del Norte, determinada a redescubrir las raíces de una identidad que no se define a partir de la exclusión; a Asia y Oceanía, desafiadas por la capacidad de fermentar en la diáspora y dialogar con la vastedad de culturas ancestrales.

Al dejaros estas reflexiones, os agradezco vuestra visita, tan agradable, y os exhorto a no dejaros desanimar por las dificultades que encontraréis inevitablemente. Estad seguros de la ayuda y del apoyo del Señor, que siempre es fiel. Os prometo acompañaros con mi oración, pero también os pido, por favor, que recéis por mí. Que la Virgen os siga en vuestro camino y en vuestra preparación, os enseñe el profundo amor a la Iglesia que será tan necesario y proficuo en la misión que os espera. Toda vuestra vida está al servicio del Evangelio y de la Iglesia. ¡No lo olvidéis nunca!

Con estos deseos y estas exhortaciones, invoco sobre vosotros, sobre vuestros formadores y profesores, sobre las religiosas —gracias por estar aquí— y sobre todo el personal, la abundancia de los dones del Espíritu Santo, mientras os bendigo de todo corazón.

Podemos rezar juntos el Ángelus...

25 de junio de 2015

© Copyright - Libreria Editrice Vaticana

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/june/documents/papa-francesco_20150625_pontificia-accademia-ecclesiastica.html

(30 de junio de 2015)

[Volver al Índice](#)

F. Comunicado del Vaticano en relación al envío a juicio del ex nuncio Józef Wesolowski, a petición de la Oficina del Promotor de Justicia

Envío a juicio del ex nuncio Józef Wesolowski

Ciudad del Vaticano, 15 de junio de 2015 (Vis).-El Presidente del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano, Prof. Giuseppe Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, con decreto del 6 de junio de los corrientes, ha dispuesto acogiendo la petición de la Oficina del Promotor de Justicia, el envío a juicio del ex nuncio apostólico en la República Dominicana, Józef Wesolowski. La primera audiencia del proceso ha sido fijada el día 11 de julio de 2015. El ex prelado está acusado de varios delitos cometidos sea durante su estancia en Roma desde agosto de 2013 hasta el momento de su arresto (el 22 de septiembre de 2014), sea en el período transcurrido en la República Dominicana, durante los cinco años en que desempeñó el cargo de nuncio apostólico (el 24 de enero de 2008 fue nombrado nuncio en la República Dominicana y delegado apostólico en Puerto Rico, cargos de los que dimitió el 2 de agosto de 2013).

Por cuanto respecta al período transcurrido en Roma, el procedimiento le imputa el delito de posesión de material pornográfico- pederasta, introducido en la ley n.VIII del 2013 del Papa Francisco. Para el período precedente, las acusaciones se basan en el material probatorio transmitido por la Autoridad Judicial de Santo Domingo sobre los abusos sexuales de menores.

El conjunto de las graves acusaciones tendrá que ser examinado por el Órgano judicial competente, que podrá disponer, para la definitiva evaluación de los hechos, sea de pericias técnicas sobre los aparatos informáticos utilizados por el acusado, sea eventualmente de formas de cooperación judicial internacional para la evaluación de las pruebas testimoniales procedentes de las autoridades competentes de Santo Domingo. Un procedimiento delicado y articulado, sobre el que es intención de todas las partes interesadas en el juicio efectuar las pruebas y análisis más escrupulosos.

Copyright © VIS - Vatican Information Service
15 de junio de 2015

<http://www.vis.va/vissolr/index.php?vi=all&dl=b41b9724-b6a4-3c91-2610-557ebe3c801a&dl t=text/xml&dl a=y&ul=1&ev=1>
(20 de junio de 2015)

[Volver al Índice](#)

G. Firma del acuerdo entre la Santa Sede y Estados Unidos de Norteamérica para combatir la evasión fiscal

*FIRMA DELL'ACCORDO FRA LA SANTA SEDE,
ANCHE A NOME E PER CONTO DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO,
E GLI STATI UNITI D'AMERICA,
PER FAVORIRE L'OSSERVANZA A LIVELLO INTERNAZIONALE DEGLI OBBLIGHI
FISCALI
E ATTUARE LA FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA)*

Il giorno 10 giugno 2015, alle ore 10, presso la Segreteria di Stato, è stato sottoscritto l'Accordo fra la Santa Sede, anche a nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano, e gli Stati Uniti d'America, per favorire l'osservanza a livello internazionale degli obblighi fiscali e attuare la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

Hanno firmato: per la Santa Sede, Sua Eccellenza Rev.ma Mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati, e, per gli Stati Uniti d'America, S.E. il Signor Kenneth F. Hackett, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario degli Stati Uniti presso la Santa Sede.

Hanno assistito al solenne atto:

per parte della Santa Sede: Mons. Peter Wells, Assessore per gli Affari Generali, e Mons. Antoine Camilleri, Sotto-Segretario per i Rapporti con gli Stati. Erano altresì presenti Mons. Michael Francis Crotty, il Rev.do Don Piero Gallo e il Rev.do Don Carlos Fernando Díaz Paniagua, della Sezione per i Rapporti con gli Stati;

per parte degli Stati Uniti d'America: la Sig.ra Victoria Alvarado e il Sig. Peter Martin, rispettivamente Consigliere e Primo segretario presso l'Ambasciata. Erano altresì presenti la Sig.ra Antoinette Hurtado, la Sig.ra Marjorie E. Christian e il Sig. Thomas Montgomery, dell'Ambasciata degli Stati Uniti presso la Santa Sede.

L'Accordo intergovernativo fra la Santa Sede e gli Stati Uniti d'America disciplina lo scambio automatico di informazioni fiscali tra le autorità competenti delle Alte Parti Contraenti, al fine di prevenire e contrastare l'evasione fiscale. Questo Accordo si inserisce nel percorso di adozione da parte della Santa Sede dei più aggiornati standard in materia di trasparenza finanziaria, iniziato già nel 2010.

L'accordo, che consiste di un preambolo, 12 articoli e 2 allegati, entra in vigore lo stesso giorno della firma.

*INDIRIZZO DI SALUTO DI SUA ECCELLENZA REVERENDISSIMA MONSIGNOR
PAUL RICHARD GALLAGHER,
SEGRETARIO PER I RAPPORTI CON GLI STATI DELLA SANTA SEDE,
ALLA CERIMONIA DELLA FIRMA DELL'ACCORDO INTERGOVERNATIVO CON GLI
STATI UNITI D'AMERICA*

Signor Ambasciatore,

Per cominciare, mi permetta di dare il benvenuto in Segreteria di Stato a Lei e alla Sua Delegazione in occasione della firma dell'Accordo tra la Santa Sede, che agisce anche in nome e per conto dello Stato Città del Vaticano, e gli Stati Uniti d'America per migliorare gli adempimenti fiscali internazionali e attuare il "Foreign Account Tax Compliance Act" statunitense ("FATCA").

La firma di questo accordo è indubbiamente un evento storico. Di fatto, è la prima volta che la Santa Sede e gli Stati Uniti d'America hanno concluso un accordo intergovernativo formale, portando a un livello più alto l'estesa cooperazione e l'amicizia già esistenti tra la Sede Apostolica e il Governo degli Stati Uniti. Inoltre, l'oggetto di questo accordo – volto a contrastare l'evasione fiscale attraverso lo scambio di informazioni pertinenti – è di fondamentale importanza sia per la Santa Sede sia per gli Stati Uniti. Come Papa Francesco ci ricorda di frequente, evadere tasse giuste significa rubare sia allo Stato sia ai poveri (cfr. Omelia nella Domus Sanctae Marthae, 11 novembre 2013). Ogni persona ha, infatti, il dovere di contribuire, in carità e giustizia, al bene comune, secondo le proprie capacità e i bisogni degli altri, promovendo e assistendo le istituzioni pubbliche dedicate al miglioramento delle condizioni della vita umana (cfr. Gaudium et spes, n. 30). Non dobbiamo poi dimenticare il monito dell'Apostolo: "Rendete a ciascuno ciò che gli è dovuto: a chi si devono le tasse, date le tasse; a chi l'imposta, l'imposta; a chi il timore, il timore; a chi il rispetto, il rispetto" (Rm 13, 7).

Come sapete, negli ultimi cinque anni la Santa Sede e lo Stato Città del Vaticano hanno adottato gli standard internazionali più elevati per assicurare trasparenza e legalità nel settore finanziario, ricordando sempre che "[l]'uomo infatti è l'autore, il centro e il fine di tutta la vita economico-sociale" (Gaudium et spes, n. 63). La firma del presente accordo è, dunque, un ulteriore passo nella strategia a lungo termine della Santa Sede per assicurare e promuovere la legalità, la trasparenza e un comportamento etico nel campo economico e finanziario.

Infine, desidero ringraziare Lei personalmente, come anche tutti coloro che hanno partecipato ai negoziati, per lo spirito costruttivo e l'intenso impegno, che ci hanno permesso di raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe le Parti.

Grazie.

*INDIRIZZO DI SALUTO DELL'AMBASCIATORE HACKETT
ALLA CERIMONIA PER LA FIRMA DEL FATCA IGA*

Sono lieto di essere qui per la storica firma dell'accordo della Santa Sede per l'attuazione del Foreign Account Tax Compliance Act, detto FATCA. Apprezziamo l'impegno della Santa Sede per intensificare la cooperazione nel promuovere la trasparenza finanziaria globale attraverso il miglioramento degli adempimenti fiscali internazionali.

La firma odierna segna un passo importante negli sforzi compiuti dagli Stati Uniti come anche dalla Santa Sede, di collaborare per uno standard globale per combattere l'evasione fiscale offshore. Si allinea anche al nostro mutuo impegno a lavorare insieme per individuare, impedire e scoraggiare abusi fiscali offshore attraverso una maggiore trasparenza e un aumento delle denunce. In collaborazione con la Santa Sede, stiamo operando per costruire un sistema finanziario globale più forte, più stabile e più responsabile.

L'evasione fiscale offshore è una preoccupazione urgente. Di tutte le misure che si potrebbero prendere per eliminare la povertà nel mondo, porre fine all'evasione fiscale sarebbe forse tra le opzioni più efficaci. Ogni anno, l'evasione fiscale priva governi di ogni grandezza di risorse necessarie per finanziare servizi pubblici e investimenti. Come ha detto il presidente Obama, "l'idea che un bambino possa non riuscire mai a sfuggire alla povertà poiché privo di una educazione e di un'assistenza sanitaria dignitosa, o di una comunità che consideri il suo futuro come proprio, dovrebbe offenderci tutti e spingerci all'azione".

Poiché l'accesso alle informazioni da altri Paesi e altre giurisdizioni è di fondamentale importanza per la piena ed equa attuazione delle leggi fiscali interne statunitensi, lo scambio d'informazioni è una grande priorità per gli Stati Uniti. Pertanto, siamo leader nello sviluppo di nuovi standard internazionali per una maggiore trasparenza attraverso lo scambio completo di informazioni fiscali.

Questo accordo FATCA è un ulteriore esempio del rapporto stretto e collaborativo che esiste tra la Santa Sede e gli Stati Uniti riguardo alle questioni globali.

© Copyright - Libreria Editrice Vaticana

http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/2015/documents/rc-seg-st-20150610_accordo-scv-usa-hackett_it.html

http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/2015/documents/rc-seg-st-20150610_accordo-scv-usa-gallagher_it.html

http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/2015/documents/rc-seg-st-20150610_accordo-scv-usa-fatca_it.html

(25 de junio de 2015)

[Volver al Índice](#)

H. Intervención de la Santa Sede en la 39ª Conferencia de la FAO

*INTERVENCIÓN DEL JEFE DELEGACIÓN DE LA SANTA SEDE,
MONS. FERNANDO CHICA ARELLANO,
EN LA 39 SESIÓN DE LA CONFERENCIA DE LA FAO*

Señor Presidente:

1. Le doy las gracias por haberme concedido la palabra y me alegro de que haya sido elegido para dirigir los trabajos de esta Conferencia, llamada a considerar los resultados de la acción llevada a cabo por la FAO en el último bienio, así como a valorar las propuestas orientadas a la actividad futura de la misma. Procurar que la Organización sea siempre más ágil para afrontar la realidad del desarrollo agrícola y de los retos que la alimentación presenta a las personas, países y gobiernos es una tarea relevante y necesaria. De hecho, no se trata únicamente de considerar los resultados hasta ahora alcanzados, sino, sobre todo, de definir los criterios para acometer las nuevas necesidades que no dejan de crecer.

En efecto, la responsabilidad principal de la FAO y de sus Estados miembros sigue siendo la de valorar anticipadamente los datos de la producción y la disponibilidad nutricional en las diversas aéreas. Es un trabajo orientado a proponer una asistencia técnica y especializada que sea capaz de favorecer el desarrollo del sector agrícola y la cooperación. Esto contribuirá a que los Gobiernos, las instituciones y todas las partes interesadas no claudiquen en su lucha contra la malnutrición y el hambre, que en nuestros días siguen causando estragos ante los que no podemos callar, resignarnos o habituarnos, pues son verdaderas tragedias.

2. Al abordar esta cuestión, la Delegación de la Santa Sede, evidentemente, no pretende ofrecer soluciones técnicas, sino más bien **orientaciones que promuevan iniciativas concordes con las exigencias actuales de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, en particular las de aquellos que pasan por situaciones intrincadas y angustiosas, indignas del ser humano y sus derechos fundamentales.**⁸²

Si tradicionalmente las exigencias de los Estados que solicitaban la intervención de la FAO estaban relacionadas con el funcionamiento de sus sistemas de producción agrícola, hoy es evidente que las nuevas exigencias que definen las situaciones ligadas al sector de la agricultura requieren caminos nuevos. Es preciso considerar las exigencias provocadas por un cuadro económico precario y desfavorable, por condicionamientos cada vez más arduos y complejos, por desastres naturales, con frecuencia resultado de la perniciosa intervención del hombre. Estos últimos son a menudo motivados exclusivamente por intereses sesgados, que muestran una terrible indiferencia

⁸² *El destacado es nuestro.*

a la hora de afrontar debida y adecuadamente las causas de la malnutrición. Una situación preocupante en cualquier región del planeta, sin excluir las que ostentan un alto nivel de desarrollo.

Es urgente otorgar un papel central a la agricultura dentro del ámbito de la actividad económica y esto no puede orientarse a la mera elaboración de estrategias y proyectos. En este contexto, también **la interpretación de la nueva Agenda de desarrollo Post-2015 debe mirar más allá, hacia un concepto de "desarrollo ampliado", que no sea simplemente sostenible sino que además responda a una efectiva justicia distributiva y no únicamente legal.** Un ejemplo concreto afecta a los 72 países que han alcanzado, si bien en diversos grados, el objetivo de reducir drásticamente el número de hambrientos y el porcentaje de malnutridos: a los mencionados países habrá que ofrecer una cooperación distinta de la otorgada a países menos desarrollados y con un déficit alimentario persistente. Asimismo, habrá que actuar análogamente por lo que se refiere a la lucha contra el hambre y la malnutrición también existente en países desarrollados. En este caso, la superación de esta problemática dependerá de adecuadas iniciativas políticas nacionales, que salvaguarden la financiación de la actividad multilateral y contengan medidas generosas y solidarias para continuar ayudando de forma eficaz a quienes vienen de fuera en condiciones lamentables o inhumanas.

Esta idea de una justicia distributiva pone en evidencia tanto la función originaria de la FAO como el requerimiento de una estructura ágil y armónica de la misma, subsidiaria respecto a la acción que individualmente ejerce cada uno de los Estados en favor de los hambrientos. Hoy, dar protagonismo a este tipo de acción entraña afianzar la convicción de que la lucha contra el hambre, con los múltiples factores y objetivos que la animan y sobre los cuales se elaboran estrategias, no se puede llevar a cabo favoreciendo solamente sectores individuales o intereses parciales, sino más bien de modo integral, desde una visión de conjunto. Y esto puede hacerse únicamente poniendo en el centro las exigencias de la persona, de todas las personas y de toda la persona. Cuando esto no se ha tenido en cuenta, las repercusiones negativas han resultado evidentes, especialmente en aquellas áreas más afectadas por la pobreza, el subdesarrollo, la falta de trabajo, la desnutrición y la degradación ambiental.

La Delegación de la Santa Sede considera que el desarrollo agrícola y alimentario no puede reducirse a la mera gestión profesional de los programas. Ha de introducir asimismo criterios de gestión atinados, favorecer la transparencia y potenciar intervenciones realmente adecuadas a las necesidades y a las condiciones de los beneficiarios. En la ejecución de los programas y en el desarrollo ordenado de las actividades no basta la convicción y la generosidad de las personas que prestan su trabajo y ponen a disposición su profesionalidad. Es fundamental también el respeto de reglas y normas a todos los niveles. Un respeto que ha de fortalecerse con el espíritu

de servicio, con el entusiasmo, con la sincera colaboración, teniendo siempre presente que cada acción está orientada hacia quienes sufren concretamente el hambre. Los hambrientos no son frías cifras a merced de estadísticas. No son entidades teóricas. Son personas reales que padecen, que a menudo gritan y lloran sin que nadie las escuche. Son vidas truncadas, que ven desvaída su esperanza y pisoteados sus derechos.

3. Todos sabemos que para garantizar el derecho a la alimentación no es suficiente afirmarlo. Es necesario que los alimentos básicos estén realmente al alcance de las personas, tanto en calidad como en cantidad. La producción adecuada, no obstante, es el resultado de una voluntad explícita en términos de instrumentos, inversiones y financiación. Para lograr estos objetivos, que de diferentes maneras, todos los Estados consideran prioritarios, el rol que la FAO puede desarrollar queda subordinado a la confianza en su quehacer y dirección, y a los recursos que tendrá a su disposición, no solamente en su programa de trabajo ordinario, sino también en una constante y cada vez mayor financiación "extra presupuestaria".

El empeño de solidaridad de los diversos miembros de la Comunidad internacional debe orientarse de manera clara hacia el mundo rural, sobre el cual pesan crisis cíclicas determinadas por los cambios climáticos y la desertificación creciente, que dañan gravemente áreas y poblaciones hasta ahora consideradas inmunes a estos fenómenos. Si queremos de verdad eliminar el hambre del mundo, no podemos movernos por fines espurios o el cálculo ligado al uso político de la cooperación. Ante el rol creciente que han asumido las nuevas técnicas de trabajo agrícola, no basta únicamente la transferencia de tecnología. Es urgente apoyar concreta y decididamente los conocimientos y sabidurías tradicionales, tan importantes para los pequeños agricultores, ganaderos, pescadores y trabajadores forestales, con frecuencia olvidados, pero de los cuales depende gran parte de la producción agrícola. En este contexto, quisiera referirme especialmente a aquellas poblaciones indígenas, que tienen una relación ancestral con la tierra. Estas poblaciones se caracterizan por su respeto al medio ambiente y por unas modalidades de producción y consumo que no lo menoscaban y que deberíamos tomar en cuenta.

Los datos más recientes evidencian que la FAO conoce y prevé las soluciones a las diversas problemáticas, pero la carrera por alcanzar los objetivos más inmediatos de la producción a gran escala y la desigual distribución de los recursos inducen a posponer la actuación. En este sentido, las indicaciones con vistas al próximo XIV Congreso Forestal Mundial tendrían que enfatizarse con la convicción de que las decisiones de esta importante cita serán eficaces si se las considera como respuestas a expectativas concretas. No se trata de contraponer a los resultados de la investigación científica y tecnológica una actitud negativa hacia los sistemas de conservación y producción innovadores y quizás cuantitativamente mejores, sino más bien de proponer un equilibrio

ordenado entre tales sistemas y la adecuada prevención de los riesgos que amenazan el ecosistema forestal y a las personas que de él dependen. De este modo es posible garantizar la tan ansiada sostenibilidad ambiental y humana.

A este respecto, incluso la investigación orientada a reforzar la producción agrícola, la ganadería, la pesca o los recursos forestales, tiene ciertamente que ocuparse de la demanda creciente de alimentos, pero sin olvidar las razones de la seguridad ambiental, la salvaguardia de los terrenos y la conservación de los recursos hídricos. La sostenibilidad de la producción, pues, ha de partir de una conciencia ecológica formada, sin la cual cualquier tipo de iniciativas y programas de desarrollo seguirá siendo un sueño para muchos y una realidad para pocos.

4. Señor Presidente, los Estados miembros y las diversas Instituciones intergubernamentales que trabajan en el sector del desarrollo y la cooperación tienen sus ojos puestos en la FAO y sus actividades. También la sociedad civil y sus diferentes y valiosas formas de organización. A esta realidad debe mirar el empeño que esta Organización está llamada a asumir, tanto en el presente como en el futuro inmediato, en las diversas regiones del mundo. Esto requiere necesariamente un esfuerzo suplementario: al afrontar los problemas del mundo rural y las exigencias de cuantos padecen el hambre y la malnutrición se tendrá que considerar también la condición del trabajador agrícola y sus ingresos totales, pero sin olvidar que el agricultor no es únicamente un sujeto económico. Es una persona capaz de participar en los procesos de decisión y en las opciones vinculadas a la producción, a la conservación y a la distribución de los frutos de la tierra. **Por ello, más que de desarrollo sostenible, sería mucho más incisivo y coherente hablar de desarrollo humano sostenible, es decir de un desarrollo que ponga en su centro a la persona, sus capacidades reales, sus limitaciones, peculiaridades y necesidades, tanto individual como familiarmente.** Si los parámetros económicos no tienen en la debida cuenta todo esto, el daño resulta evidente e irreparable, pues mayor progreso jamás puede ser equivalente a menor humanidad. Una visión ética y humanamente fundada del desarrollo nos llama en cambio a compartir recursos, estrategias y financiación, pero sobre todo nos recuerda la importancia y la urgencia que tiene el primado de la solidaridad así como la decidida voluntad de poner fin de una vez por todas al subdesarrollo del mundo rural. La Organización podrá continuar entonces siendo ese competente "centro" de recogida, estudio y divulgación de datos sobre la agricultura, técnicas de producción y reglamentación, tal y como exige su Constitución y como justamente se espera de ella a todos los niveles.

La Delegación de la Santa Sede quiere aquí reafirmar la disponibilidad de la Iglesia Católica, de sus estructuras y formas de organización para contribuir a dicho esfuerzo.



Para concluir, me permito recordar a las numerosas Delegaciones presentes el encuentro que mañana, 11 de junio, la Conferencia tendrá con Su Santidad el Papa Francisco, continuando de esta manera una larga tradición iniciada desde cuando la FAO comenzó a estar presente en Roma.

Muchas gracias.

Roma, 10 de junio de 2015
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana

http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/2015/documents/rc-seg-st-20150610_intervento-fao_sp.html
(15 de junio de 2015)

[Volver al Índice](#)

Discurso del Santo Padre en la 39ª Conferencia de la FAO

*DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
AI PARTECIPANTI ALLA 39ª SESSIONE
DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E
L'AGRICOLTURA
[F.A.O.]*

Signor Presidente,
Signori Ministri,
Signor Direttore Generale,
Distinti Rappresentanti Permanenti,
Signore e Signori,
Buongiorno!

1. Sono lieto di accogliervi mentre partecipate alla 39a Conferenza della FAO, continuando così una lunga tradizione. Rivolgo il mio cordiale saluto a Lei, Signor Presidente La Mamea Ropati, ai Rappresentanti delle diverse Nazioni e Organizzazioni presenti, e al Direttore Generale, Professor José Graziano da Silva.

Ho ancora vivo il ricordo della partecipazione alla Seconda Conferenza Internazionale sulla Nutrizione (il 20 novembre 2014) che ha impegnato gli Stati a trovare soluzioni e risorse. Auspico che quella decisione non resti solo sulla carta o nelle intenzioni che hanno guidato il negoziato, ma prevalga decisamente la responsabilità di rispondere in concreto agli affamati e a tutti coloro che attendono dallo sviluppo agricolo una risposta alla loro condizione.

Di fronte alla miseria di tanti nostri fratelli e sorelle, penso a volte che l'argomento della fame e dello sviluppo agricolo sia oggi diventato uno dei tanti problemi in questo tempo di crisi. Eppure vediamo ovunque crescere il numero di chi con fatica accede a pasti regolari e sani. Ma invece di agire preferiamo delegare, e delegare a tutti i livelli. E pensiamo: ci sarà qualcuno che se ne occuperà, magari un altro Paese, o quel Governo, quella Organizzazione internazionale. La nostra tendenza a "disertare" di fronte a temi difficili è umana, Anzi, è un atteggiamento che spesso amiamo prediligere anche se poi non manchiamo ad una riunione, ad una conferenza, o alla redazione di un documento. Dobbiamo invece rispondere all'imperativo che l'accesso al cibo necessario è un diritto di tutti. I diritti non consentono esclusioni!

Non basta fare il punto sulla nutrizione nel mondo, anche se aggiornare i dati è necessario, perché ci mostra la dura realtà. Può certo consolarci sapere che quel miliardo e 200 milioni di affamati del 1992 si è ridotto, anche con una popolazione mondiale in crescita. Serve a poco, però, prendere atto dei numeri o anche progettare una serie di impegni concreti e di raccomandazioni da applicare alle politiche e agli investimenti, se tralasciamo l'obbligo di

«debellare la fame e prevenire qualsiasi forma di malnutrizione, in tutto il mondo» (FAO-OMS, Dichiarazione di Roma sulla Nutrizione, 15.a).

2. Preoccupano molto le statistiche sugli sprechi: sotto questa voce finisce un terzo degli alimenti prodotti. Come pure inquieta sapere che una buona quantità di prodotti agricoli viene usata per altre finalità, magari buone finalità, ma che non sono le necessità immediate degli affamati. Chiediamoci, allora, che cosa possiamo fare. Anzi, che cosa io sto già facendo.

Ridurre gli sprechi è essenziale, come pure riflettere sull'uso non alimentare dei prodotti agricoli, impiegati in grandi quantità per l'alimentazione degli animali o per produrre biocarburanti. Certo, bisogna garantire condizioni ambientali sempre più sane, ma possiamo continuare a farlo escludendo qualcuno? Serve sensibilizzare tutti i Paesi sul tipo di nutrizione adottata, e questo varia a seconda delle latitudini. Nel Sud del mondo l'attenzione va posta sulla quantità sufficiente di alimenti da garantire ad una popolazione in crescita, nel Nord il punto centrale è la qualità della nutrizione e degli alimenti. Ma sia sulla qualità che sulla quantità pesa la situazione di insicurezza determinata dal clima, dall'aumento della domanda e dall'incertezza dei prezzi.

Proviamo allora ad assumere con più decisione l'impegno di modificare gli stili di vita, e forse avremo bisogno di meno risorse. La sobrietà non si oppone allo sviluppo, anzi, è ormai evidente che è diventata una sua condizione. Per la FAO questo significa anche proseguire nella decentralizzazione, per stare in mezzo al mondo rurale e capire i bisogni della gente che l'Organizzazione è chiamata a servire.

Inoltre domandiamoci: quanto incide il mercato con le sue regole sulla fame nel mondo? Dai vostri studi emerge che a partire dal 2008 il prezzo dei prodotti alimentari ha modificato il suo andamento: raddoppiato, poi stabilizzato, ma sempre con valori alti rispetto al periodo precedente. Prezzi così volatili impediscono ai più poveri di fare programmi o di contare su una nutrizione anche minima. E le cause sono tante. Ci preoccupano giustamente i cambiamenti climatici, ma non possiamo dimenticare la speculazione finanziaria: un esempio sono i prezzi di grano, riso, mais, soia che oscillano in borsa, magari vengono legati a fondi di rendimento e, quindi, più alto è il loro prezzo maggiormente ricava il fondo. Anche qui, proviamo a percorrere un'altra strada convincendoci che i prodotti della terra hanno un valore che possiamo dire "sacro", perché sono frutto del lavoro quotidiano di persone, famiglie, comunità di contadini. Un lavoro spesso dominato da incertezze, preoccupazioni per le condizioni climatiche, ansie per le possibili distruzioni del raccolto.

Nella finalità della FAO lo sviluppo agricolo riguarda il lavoro della terra, la pesca, l'allevamento, le foreste. Bisogna che questo sviluppo sia al centro dell'attività economica, distinguendo bene le diverse esigenze che hanno gli agricoltori, gli allevatori, i pescatori o quanti lavorano nelle foreste. Primato

dello sviluppo agricolo: ecco il secondo obiettivo. Rispetto agli obiettivi della FAO questo significa sostenere un'efficace resilience, rafforzando in modo specifico le capacità delle popolazioni di fronteggiare le crisi – naturali o causate dall'azione umana – ponendo attenzione alle diverse esigenze. Così sarà possibile puntare a standard di vita dignitosi.

3. In questo impegno restano altri punti critici. Anzitutto sembra difficile accettare una generica rassegnazione, il disinteresse o finanche l'assenza di tanti, persino di Stati. A volte la sensazione è che la fame sia un argomento impopolare, un problema irrisolvibile, che non trova soluzioni nell'arco di un mandato legislativo o presidenziale e quindi non assicura consensi. Le ragioni che portano a limitare apporti di idee, tecnologia, expertise e finanziamenti risiedono nella mancata volontà di assumere impegni vincolanti, perché ci si trincerava dietro la questione della crisi economica mondiale e nell'idea che la fame c'è in tutti i Paesi: "Se ho persone affamate sul mio territorio, come posso pensare a destinare fondi alla cooperazione internazionale?". Ma così si dimentica che se in un Paese la povertà è un problema sociale a cui è possibile dare soluzioni, in altri contesti è una questione strutturale e non bastano solo politiche sociali per fronteggiarla. Questo atteggiamento può cambiare se ricollochiamo nel cuore delle relazioni internazionali la solidarietà, trasportandola dal vocabolario alle scelte della politica: la politica dell'altro. Se tutti gli Stati Membri operano per l'altro, i consensi all'azione della FAO non tarderanno ad arrivare e anzi se ne riscoprirà la funzione originaria, quel "Fiat panis" che è inserito nel suo emblema.

Penso, poi, all'educazione delle persone ad una corretta alimentazione. Nei miei quotidiani incontri con i Vescovi di tante parti del mondo, con esponenti politici, responsabili economici, accademici, colgo sempre di più che oggi anche l'educazione alimentare ha diverse declinazioni. Sappiamo che in occidente il problema sono gli alti consumi e gli sprechi. Nel Sud, invece, per garantire alimenti è necessario incentivare la produzione locale che in tanti Paesi con "fame cronica" è sostituita da derrate provenienti dall'esterno e magari inizialmente mediante gli aiuti. Gli aiuti di emergenza, però, non bastano e non sempre finiscono nelle mani giuste. Così si crea dipendenza verso i grandi produttori, e se il Paese manca della necessaria disponibilità economica, ecco che la popolazione finisce per non alimentarsi e la fame cresce.

I cambiamenti climatici, poi, ci riportano ai forzati spostamenti di popolazione e ai tanti drammi umanitari per mancanza di risorse, ad iniziare dall'acqua già oggetto di conflitti che in prospettiva aumenteranno. Non basta affermare che esiste un diritto all'acqua senza agire per rendere sostenibile il consumo di questo bene-risorsa e per eliminare ogni spreco. L'acqua resta un simbolo che i riti di molte religioni e culture usano per indicare appartenenza, purificazione e conversione interiori. Partendo da questo valore simbolico la FAO può contribuire a rivedere modelli di comportamento per garantire, oggi e in futuro, che tutti possano accedere all'acqua indispensabile alle loro necessità e

alle attività agricole. Viene in mente quel passaggio della Scrittura che invita a non abbandonare la "sorgente di acqua viva per scavarsi cisterne, cisterne piene di crepe, che non trattengono l'acqua" (Ger 2,13): un monito per dire che le soluzioni tecniche non sono utili se dimenticano la centralità della persona umana che è la misura di ogni diritto.

Oltre all'acqua anche l'utilizzo dei terreni rimane un serio problema. Preoccupa sempre più l'accaparramento delle terre coltivabili da parte di imprese transnazionali e di Stati che non solo priva gli agricoltori di un bene essenziale, ma intacca direttamente la sovranità dei Paesi. Sono molte ormai le Regioni in cui gli alimenti prodotti vanno verso l'estero e la popolazione locale si impoverisce doppiamente perché non ha né alimenti, né terra. E che dire poi delle donne che in molte zone non possono possedere i terreni che lavorano, con una disparità di diritti che impedisce la serenità della vita familiare perché si rischia da un momento all'altro di perdere il campo? Eppure sappiamo che nel mondo la produzione mondiale di alimenti è in massima parte opera di aziende familiari. È perciò importante che la FAO rafforzi il partenariato e i progetti a favore delle aziende familiari, e stimoli gli Stati a regolare equamente l'uso e la proprietà della terra. Questo potrà concorrere a eliminare le disuguaglianze, oggi al centro dell'attenzione internazionale.

4. La sicurezza alimentare va raggiunta anche se i popoli sono diversi per collocazione geografica, situazioni economiche o culture alimentari. Lavoriamo per armonizzare le differenze e uniamo gli sforzi, così non leggeremo più che la sicurezza alimentare per il Nord significa eliminare grassi e favorire il movimento e per il Sud procurarsi almeno un pasto al giorno.

Dobbiamo cominciare dalla nostra quotidianità se vogliamo cambiare gli stili di vita, coscienti che i nostri piccoli gesti possono garantire la sostenibilità e il futuro della famiglia umana. E poi continuiamo la lotta alla fame senza secondi fini! Le proiezioni della FAO dicono che entro il 2050, con 9 miliardi di abitanti sul pianeta, la produzione deve aumentare e addirittura raddoppiare. Invece di impressionarci di fronte ai dati, modifichiamo il nostro rapporto con le risorse naturali, l'uso dei terreni; modifichiamo i consumi, senza cadere nella schiavitù del consumismo; eliminiamo lo sperpero e così sconfiggeremo la fame.

La Chiesa con le sue istituzioni e le sue iniziative cammina con voi, consapevole che le risorse della terra sono limitate e un loro uso sostenibile è assolutamente urgente per lo sviluppo agricolo e alimentare. Per questo si impegna a favorire quel cambio di atteggiamento necessario al bene delle generazioni future. Che l'Onnipotente benedica il vostro lavoro!

11 de junio de 2015

© Copyright - Libreria Editrice Vaticana

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/june/documents/papa-francesco_20150611_fao.html

(15 de junio de 2015)

[Volver al Índice](#)

I. Informe de la Oficina de Prensa de la Santa Sede sobre la conclusión de la décima reunión del Consejo de Cardenales

Finaliza la décima reunión del Consejo de Cardenales

Ciudad del Vaticano, 10 de junio 2015 (VIS).-El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Padre Federico Lombardi S.I., ha informado esta mañana sobre la décima reunión del Consejo de Cardenales, que comenzó el pasado lunes y ha terminado esta mañana en la Casa de Santa Marta. El Santo Padre estuvo en las reuniones del lunes y el martes, mañana y tarde. Esta mañana, en cambio no ha participado, como de costumbre, debido a la audiencia general.

El cardenal Laurent Monsengwo Pasinya no ha podido estar presente en esta ocasión. El primer día se dedicó, en gran parte, al examen de un borrador del preámbulo de la nueva Constitución; borrador que será elaborado ulteriormente.

Por cuanto se refiere a las reformas en el ámbito financiero, el Padre Lombardi, explicó que el cardenal George Pell, Prefecto de la Secretaría de Economía, ha presentado una relación sobre la actualización de las reformas financieras. También habló el cardenal del nombramiento del nuevo Revisor General, la aprobación del nuevo Estatuto de la Caja de Pensiones y el completamiento de la lista de entidades que tendrán que ser sometidas a la autoridad y la supervisión del Consejo de Economía como prevén sus estatutos.

El purpurado informó, además, de las nuevas iniciativas del Consejo de Economía: la constitución de tres grupos de trabajo: uno para el análisis de los ingresos y la inversión; otro para la gestión de los recursos humanos; un tercero para el estudio de los sistemas informáticos existentes y de su compatibilidad y eficiencia. Por último, actualizó la información sobre las diversas actividades en curso en la Secretaría de Economía.

En materia de la defensa de los menores, el Consejo de Cardenales, escuchó el 8 de junio por la tarde el informe del cardenal Seán Patrick O'Malley, OFM Cap., sobre las propuestas que presentar al Santo Padre en materia de denuncias de abuso de oficio episcopal; una propuesta preparada por la Pontificia Comisión para la Protección de Menores. El informe del cardenal O'Malley también incluye una propuesta sobre el tema de las acusaciones de abuso sexual de niños y adultos vulnerables por parte del clero.⁸³

Para cada una de las dos propuestas, el informe indica los términos generales que la definen, las cuestiones relacionadas con el procedimiento y el Tribunal de juicio, así como las ventajas de la propuesta en sí, con respecto a otras hipótesis. El texto concluye con una lista de cinco propuestas específicas al Santo Padre, que se enumeran a continuación:

⁸³ *El destacado es nuestro.*

1. Que la competencia para recibir y examinar las denuncias de abuso de oficio pertenezca a las Congregaciones para los Obispos, para la Evangelización de los Pueblos o para las Iglesias Orientales y que todas las denuncias se presenten a la Congregación apropiada.

2. Que el Santo Padre dé mandato a la Congregación para la Doctrina de la Fe para juzgar a los obispos en relación con los delitos de abuso de oficio.

3. Que el Santo Padre autorice la institución de una nueva Sección Judicial dentro de la Congregación para la Doctrina de la Fe y el nombramiento de personal permanente que prestará servicio en el Tribunal Apostólico. Para realizar todo ello se consultará con el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.

4. Que el Santo Padre nombre un Secretario para asistir al Prefecto por cuanto respecta al Tribunal. El Secretario será responsable de la nueva Sección Judicial y el personal de la Sección se empleará también en los procesos penales por abuso de menores y adultos vulnerables por parte del clero. También esta decisión se consultará con el Prefecto de la Congregación.

5. Que el Santo Padre establezca un período de cinco años para desarrollar ulteriormente estas propuestas y para completar una evaluación formal de su eficacia.

El Consejo de Cardenales concordó por unanimidad con dichas propuestas y estableció someterlas al Santo Padre que las ha aprobado y ha dado la autorización para que se faciliten los recursos adecuados para lograr sus fines.

Otro argumento ha sido el de los medios de comunicación de la Santa Sede. El Consejo de Cardenales en la mañana del 9 de junio, escuchó un informe presentado por monseñor Darío Viganò, director del Centro Televisivo Vaticano y Presidente de la Comisión para los Medios de comunicación del Vaticano - instituida por el Papa el 23 de abril de 2015 y hecha pública el 30 de abril- y expresó su reconocimiento unánime por el estudio de la viabilidad realizado por la misma.

En particular, a partir del análisis y de los informe de McKinsey y de las comisiones anteriores (la COSEA y la Vatican Media Commission presidida por Lord Chris Patten), la actual Comisión ha presentado un proyecto de reforma realizable en cuatro años, que prevé la salvaguardia del personal y una integración gradual de las instituciones.

Las instituciones interesadas son el Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales, la Oficina de Prensa del Vaticano, Radio Vaticano, el Centro Televisivo Vaticano, el Osservatore Romano, el Servicio Fotográfico, la Libreria Editorial Vaticana, la Tipografía Vaticana y la Oficina Internet.

El Consejo de Cardenales ha expresado al Santo Padre un parecer positivo al respecto, también en cuanto a los tiempos de realización de la propuesta, que prevé en los próximos meses la constitución del dicasterio y los nombramientos necesarios para el inicio del proceso.

La Comisión continúa su trabajo, que aún no se ha completado.

El Consejo de Cardenales abordó también otros argumentos. Esta mañana, el Padre Michael Czerny, del Consejo Pontificio Justicia y Paz informó de la nueva

encíclica del Santo Padre y de la preparación para su publicación. En particular, el P.Czerny explicó que, por deseo del Papa, se enviarán a los ordinarios en todo el mundo una serie de correos electrónicos, acompañados por una carta del cardenal Turkson, para informar de la próxima publicación de la encíclica y , en especial, de la enseñanza y las declaraciones anteriores del Pontífice en materia ambiental, de modo que los obispos y los obispados se encuentren preparados para la publicación del nuevo documento, y puedan acompañarlo con explicaciones y comentarios adecuados, y de que la publicación de la Encíclica sea vista como un acontecimiento importante en la vida de la Iglesia universal, en comunión con el Santo Padre.

La próxima reunión del Consejo de Cardenales está programada del 14 al 16 septiembre.

10 de junio de 2015

© Copyright News.va & all Vatican media sources

<http://www.news.va/es/news/finaliza-la-decima-reunion-del-consejo-de-cardenal>
(15 de junio de 2015)

[Volver al Índice](#)

J. Intervención de la Santa Sede en la 29ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos

*INTERVENTION BY THE HOLY SEE
AT THE 29th SESSION OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL*

*STATEMENT BY H.E. ARCHBISHOP SILVANO M. TOMASI
PERMANENT OBSERVER OF THE HOLY SEE TO THE UNITED NATIONS
AND OTHER INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN GENEVA**

Mr. President,

The Holy See is grateful to the Human Rights Council for devoting a special panel of this 29th Session to discuss the effects of terrorism on the enjoyment of human rights and fundamental freedoms. In particular, we acknowledge the thorough and enlightening report of the Special Rapporteur. Terrorism is a terrible reality that is affecting all parts of the globe, destroying countless lives, threatening societies and annihilating cultures and their histories. Sadly, one must admit that the international community has not always been effective in preventing and curbing terrorism, especially in the Middle East and different parts of Africa. Since 2000, the world has witnessed a staggering 500% increase in the number of victims of terrorists attacks. In particular, the past two years have seen a startling increase in the body count of innocent victims at the hands of ISIS and Boko Haram groups, among many others. In 2013, for example, 82% of those victims were killed in just five countries: Iraq, Afghanistan, Pakistan, Nigeria and Syria. While considering the negative effects of terrorism on the enjoyment of human rights and fundamental freedoms, we should also be clear in our reasoning that these effects will continue, and indeed will become worse, if the causes of terrorism are not clearly and swiftly addressed by the national States concerned and the international community. [1]

Mr. President,

The Holy See Delegation would like to denounce most especially terrorist acts carried out in the name of religion. As Pope Francis states, "Religious fundamentalism, even before it eliminates human beings by perpetrating horrendous killings, eliminates God himself, turning him into a mere ideological pretext." [2] Terrorism is a political means to influence behavior and to reach objectives through fear. Acts of terrorism cause the destruction of human rights, political freedoms and the rule of law. Terrorism is the antithesis of the shared values and commitments which serve as the basis for peaceful coexistence domestically and internationally. Indeed, with the proliferation of terrorism and the impunity which its proponents enjoy, we can say that there is also a "globalization of terrorism". Developing from "a subversive strategy typical of certain extremist organizations, aimed at the destruction of material goods or the killing of people, terrorism has now

become a shadowy network of political collusion,"[3] in which antagonistic political powers are tempted to play a role by supplying resources of modern technology, advanced weaponry and financing to these terrorist organizations. A situation is thus created where the positive political will of the major players is required in order to address and resolve the problem of global terrorism and its disastrous effects.

Mr. President,

The tragic humanitarian and social effects of terrorism are already well known. In the first place, the gravest violation is complete contempt for innocent human life, the basic right upon which all other human rights are founded. "As such, there is an obligation on the part of the State to protect the right to life of every person within its territory and no derogation from this right is permitted, even in times of public emergency."[4] Since terrorism does not recognize the dignity of its victims, there remains no other basis or logic by which the other fundamental rights and freedoms of the human person will be respected. As such, we see a sort of "domino effect", namely, once you deny a person his/her right to life, you abuse other fundamental rights, including the right to freedom of belief and worship, the right to expression and freedom of conscience, the right to education and the right to be treated with equal dignity as any other citizen of a nation, despite difference in religion, social and economic status, language or ethnicity.

Due to the violence of new forms of terrorism and the breach of international humanitarian law, the international community faces the challenge of responding to the influx of refugees fleeing these troubled areas to find a safe haven. Those receiving countries must not only be lauded for their willingness to provide protection, but they too need the assistance of the international community to deal with the humanitarian crisis so as to avoid the eruption of further problems on their own soil. Terrorism also facilitates trafficking of persons and weapons, thus creating a black market for human commerce. Where terrorism has effectively taken hold, irreparable social and cultural damage has been done that will resonate through future generations. By destroying the infrastructure of cities and regions, especially by attacking government buildings, schools and religious institutions, terrorism literally brings a society to its knees. In addition the demolition of cultural and ancient sites by terrorists threatens to annihilate the history of cultures and populations. Such destruction creates the breeding grounds for more violent extremism, thus continuing the vicious circle of violence propagating further violence.

Mr. President,

Apart from the devastating social and humanitarian effects which, in reality, are much more immediate and concrete, the ongoing negative political effects of terrorism will continue to resonate, in many ways in an unforeseeable

manner for generations yet to come. The political impact of terrorism is multifaceted and the parties occultly facilitating or supporting, financially or otherwise, terrorist activity for ulterior political agendas are not always so clearly identified. Nevertheless, it can hardly be doubted that terrorism has political effects and influences the political process, at least in democratic and partially democratic states. In addition to creating an environment of political instability for the countries and regions which suffer the most from terrorism, the political effect on a global level continues to grow. Governments throughout the world, in some cases using terrorism as an excuse, are preoccupied with national security and counterterrorism efforts, some of which also infringe upon the enjoyment of human rights and fundamental freedoms. This shows that the political instability and fragmentation caused by terrorism creates an equal and opposite reaction with serious political consequences. In this sense, collaborative effort on the part of the international community is all the more necessary. Efforts to reach a mutual approach to fighting terrorism must always give priority to the victims of terrorism; financial, political or ideological motives should never take precedence over coming to a unified vision as to how the plague of terrorism should be combatted.

The most obvious way in which terrorism can influence the political process is by bringing about changes in public opinion, which Governments then tend to take into account when formulating their policies. It can be very hard for Governments to resist the pressure from public opinion for a strong reaction in the wake of a terrorist attack. The impact of terrorism on public opinion, however, is not as straightforward or predictable as one might imagine. There is no uniform public response to a terrorist attack. Nor do terrorist attacks necessarily change people's political opinions. The greater people's confidence in their own values, the less likely they are to change as a result of a major event, like a terrorist attack. Finally, the role and the power of media in forming and informing public opinion when addressing terroristic events are of the utmost importance.

Mr. President,

The Holy See is deeply convinced that terrorism, especially those forms that derive from religious extremism, must be confronted with concerted political efforts by all players, especially by all the local and regional parties involved, as well as by the major international players, whose role is indispensable in negotiating and finding a viable solution, diplomatic or otherwise, to protect life and the future stability of the regions touched by terrorism. The response to terrorism cannot be merely by way of military action. Political participation, fair and just legal systems, and cutting all forms of public and private support for terrorism are means not only to respond, but also to prevent, terrorism. It is also important to remember the positive obligation that States have to undertake in order to protect their citizens and, where that is not possible, to collaborate with other regional authorities in order to address the threats posed by terrorist groups.

Thank you, Mr. President.

[1] Cfr., Global Report on Terrorism for 2013.

[2] Pope Francis, Address to the Members of the Diplomatic Corps Accredited to the Holy See, 12 Jan. 2015.

[3] Compendium of Catholic Social Teaching, n. 513.

[4] OHCHR, "Human Rights, Terrorism and Counter-Terrorism", Fact Sheet No. 32, p. 8.

30 de junio de 2015

© Copyright - Libreria Editrice Vaticana

http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/2015/documents/rc-seg-st-20150630_tomasi-human-rights-council_en.html

(5 de julio de 2015)

[Volver al Índice](#)

K. Discurso del Santo Padre Francisco a los Obispos de la Conferencia Episcopal de Puerto Rico en Visita "Ad Limina"

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO A LOS OBISPOS DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE PUERTO RICO EN VISITA "AD LIMINA"

Queridos hermanos en el Episcopado:

Me alegro de poder saludarlos con ocasión de la visita ad limina Apostolorum, peregrinación que deseo constituya una experiencia fecunda de comunión para cada uno de ustedes y para la Iglesia que peregrina en Puerto Rico. Agradezco a Monseñor Roberto Octavio González Nieves, Arzobispo de San Juan y Presidente de la Conferencia Episcopal, las palabras que me ha dirigido en nombre de todos.

En ese bello archipiélago caribeño se fundó una de las tres primeras diócesis que se establecieron en el continente americano. Desde entonces, su historia eclesial está entrelazada por la fidelidad y la tenacidad de tantos pastores, religiosos, misioneros y laicos que, respondiendo a los tiempos y lugares, han sabido comunicar la alegría del anuncio de Cristo Salvador, en cuyo nombre se han creado tantas iniciativas en favor del bien común, en el campo litúrgico, social y educativo, que han marcado profundamente la vida pública y privada del pueblo puertorriqueño.

Ustedes, como pregoneros del Evangelio y custodios de la esperanza de su pueblo, están llamados a continuar escribiendo esa obra de Dios en sus Iglesias locales, animados por un espíritu de comunión eclesial, procurando que la fe crezca y la luz de la verdad brille también en nuestros días. La confianza mutua y la comunicación sincera entre ustedes permitirán al clero y a los fieles ver la auténtica unidad querida por Cristo. Además, ante la magnitud y la desproporción de los problemas, el Obispo necesita recurrir no sólo a la oración, sino también a la amistad y a la ayuda fraterna de sus hermanos en el episcopado. No gasten energías en divisiones y enfrentamientos, sino en construir y colaborar. Ya saben que, «cuanto más intensa es la comunión, tanto más se favorece la misión» (Pastores gregis, 22). **Sepan tomar distancia de toda ideologización o tendencia política que les puede hacer perder tiempo y el verdadero ardor por el Reino de Dios. La Iglesia, por razón de su misión, no está ligada a sistema político alguno, para poder ser siempre «signo y salvaguardia del carácter trascendente de la persona humana» (Gaudium et spes, 76).**⁸⁴

El Obispo es modelo para sus sacerdotes y los anima a buscar siempre la renovación espiritual y a redescubrir la alegría de apacentar su grey dentro de

⁸⁴ El destacado es nuestro.

la gran familia de la Iglesia. Les pido una actitud acogedora con ellos; que se sientan escuchados y guiados para que puedan crecer en comunión, santidad y sabiduría, y lleven a todos los misterios de la salvación. Ante el próximo Jubileo de la Misericordia, recuerden primero ustedes y luego los sacerdotes el servicio de ser fieles servidores del perdón de Dios, sobre todo en el sacramento de la Reconciliación, que permite experimentar en carne propia el amor de Dios y ofrecer a cada penitente la fuente de la verdadera paz interior (cf. Misericordiae vultus, 17).

Para tener buenos pastores, es necesario cuidar la pastoral vocacional, de manera que haya un número adecuado de vocaciones, y especialmente los seminarios, que ofrezcan la debida formación a los candidatos. El seminario es la parcela que más solicitud pide al Obispo Pastor.

Facilitar a los fieles la vida sacramental y ofrecerles una adecuada formación permanente hace posible que también éstos puedan cumplir su propia misión. Los fieles boricuas, y en particular las asociaciones, los movimientos y las instituciones de educación, están llamados a colaborar generosamente para que se anuncie la Buena Nueva en todos los ambientes, incluso en los más hostiles y alejados de la Iglesia. Deseo de corazón que, animados por el ejemplo de insignes laicos como el beato Carlos Manuel Rodríguez Santiago, modelo de entrega y servicio apostólico, o el venerable maestro Rafael Cordero y Molina, sigan avanzando por el camino de una gozosa adhesión al Evangelio, profundizando en la Doctrina Social de la Iglesia y participando lúcida y serenamente en los debates públicos que atañen a la sociedad en la que viven.

Entre las iniciativas que es necesario consolidar cada vez más está la pastoral familiar, ante los graves problemas sociales que la aquejan: la difícil situación económica, la emigración, la violencia doméstica, la desocupación, el narcotráfico, la corrupción. Son realidades que generan preocupación. Permítanme llamar su atención sobre el valor y la belleza del matrimonio. **La complementariedad del hombre y la mujer, vértice de la creación divina, está siendo cuestionada por la llamada ideología de género, en nombre de una sociedad más libre y más justa. Las diferencias entre hombre y mujer no son para la contraposición o subordinación, sino para la comunión y la generación, siempre a «imagen y semejanza» de Dios.** Sin la mutua entrega, ninguno de los dos puede siquiera comprenderse en profundidad (cf. Audiencia general, 15 abril 2015). El sacramento del matrimonio es signo del amor de Dios por la humanidad y de la entrega de Cristo por su Esposa, la Iglesia. Cuiden este tesoro, uno de los «más importantes de los pueblos latinoamericanos y caribeños» (Aparecida, 433).

Finalmente, entre los mayores retos actuales para el trabajo apostólico se encuentra la implementación del Plan Pastoral de Conjunto en las diócesis, mediante programas elaborados para anunciar a Cristo y responder a las

inquietudes de la sociedad y del Pueblo de Dios hoy, en los que debe estar siempre presente la dimensión misionera hasta las últimas periferias existenciales.

Les aseguro mi oración, también por los sacerdotes, consagrados y por todos los fieles laicos de esa amada tierra borinqueña. Lleven a todos, por favor, el saludo del Papa. Velen con celo y paciencia por la porción de la viña del Señor que les ha sido encomendada, y vayan adelante todos juntos. Encomiendo la obra de la evangelización en Puerto Rico a la Santísima Virgen María y, pidiéndoles que no se olviden de rezar por mí, les imparto con afecto la Bendición Apostólica.

Vaticano, 8 de junio de 2015
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/june/documents/papa-francesco_20150608_adlimina-porto-rico.html
(10 de junio de 2015)

[Volver al Índice](#)

L. Firma del Acuerdo General entre la Santa Sede y el Estado de Palestina

La Santa Sede y el Estado de Palestina firman un Acuerdo general

Ciudad del Vaticano, 26 de junio de 2015 (Vis).-Hoy, viernes, 26 de junio, en el Palacio Apostólico Vaticano, se ha firmado un Acuerdo General entre la Santa Sede y el Estado de Palestina. El documento sigue al Acuerdo Base firmado entre la Santa Sede y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), el 15 de febrero de 2000 y es el resultado de las negociaciones llevadas a cabo por una comisión bilateral en los últimos años.

El arzobispo Paul Richard Gallagher, Secretario para las Relaciones con los Estados, ha firmado por la Santa Sede, mientras Riad Al-Malki, Ministro de Asuntos Exteriores, lo hizo por el Estado de Palestina.

Han asistido al solemne acto por parte de la Santa Sede: el arzobispo Giuseppe Lazzarotto, delegado apostólico en Jerusalén y Palestina.; el arzobispo Antonio Franco, nuncio apostólico; S.B. Fouad Twal, Patriarca de Jerusalén de los Latinos; Mons. Antoine Camilleri, subsecretario para las Relaciones con los Estados; padre Lorenzo Lorusso. OP, subsecretario de la Congregación para las Iglesias Orientales; Mons. Alberto Ortega, oficial de la Sección para las Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado; Mons. Paul Borgia, funcionario de la Sección de Asuntos Generales; padre Oscar Marzo, OFM, miembro de la Custodia de Tierra Santa y oficial de la Congregación para las Iglesias Orientales.

Por parte del Estado de Palestina: Ramzi Houry, Asesor del Presidente, Jefe Adjunto del Alto Comité Presidencial para los Asuntos de la Iglesia en Palestina; el embajador Kassissieh Issa, Representante del Estado de Palestina ante la Santa Sede; el embajador Rawan Sulaimán, Ministro Agregado de Relaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales; Vera Baboun, Alcaldesa de Belén; Mousa Abu Hadeed, Alcalde de Ramallah; Ammar Hijazi, Viceministro adjunto de Relaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales; Azem Bishara, Consejero Jurídico de la OLP; Ammar Nisnas, Consejero de la Representación Diplomática de Palestina ante la Santa Sede.

El Acuerdo consta de un preámbulo y 32 artículos distribuidos en 8 capítulos. Aborda los aspectos esenciales de la vida y la actividad de la Iglesia en el Estado de Palestina, reafirmando al mismo tiempo el apoyo a una solución negociada y pacífica de la situación en la región. Entrará en vigor una vez que ambas Partes se hayan notificado por escrito que se han cumplido los requisitos constitucionales o internos para ese fin.

© Copyright News.va & all Vatican media sources
26 de junio de 2015

<http://www.news.va/es/news/la-santa-sede-y-el-estado-de-palestina-firman-un-a>
(30 de junio de 2015)

[Volver al Índice](#)

Argentina

A. Extracto del “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, promulgado por el Ministerio de Salud de la Nación ⁸⁵

2. Marco jurídico del derecho a interrumpir un embarazo

En su fallo “F., A. L. s/medida autosatisfactiva”, de marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en su carácter de último interprete de todo el sistema normativo del país, estableció que quien se encuentre en las condiciones descriptas en el art. 86 inc. 2 del Código Penal “[...] no puede ni debe ser obligada a solicitar una autorización judicial para interrumpir su embarazo, toda vez que la ley no lo manda, como tampoco puede ni debe ser privada del derecho que le asiste a la interrupción del mismo ya que ello, lejos de estar prohibido, está permitido y no resulta punible” (CSJN, 2012: considerando 21).

De esta forma, en la Argentina toda mujer, niña, adolescente y, en general, toda persona con capacidad de gestar, tiene derecho a solicitar una interrupción legal del embarazo que cursa según los mismos estándares de calidad que el resto de los servicios de salud, cuando:

- el embarazo representa un peligro para la vida de la mujer y este peligro no pueda ser evitado por otros medios;
- el embarazo representa un peligro para la salud de la mujer y este peligro no pueda ser evitado por otros medios;
- el embarazo proviene de una violación;
- el embarazo proviene de una violación sobre una mujer con discapacidad intelectual o mental.

El ejercicio de la opción a la ILE en dichas circunstancias se encuadra en los derechos a la autonomía personal, la privacidad, la salud, la vida, la educación y la información; asimismo, a los principios de no discriminación e igualdad.

Este marco general del derecho a la interrupción del embarazo fue aclarado en la sentencia de la CSJN. En ella se definió que en las circunstancias arriba enumeradas es siempre el Estado, como garante de la administración de la salud de la población argentina, el que tiene la obligación “de poner a disposición de quien solicite la práctica, las condiciones médicas e higiénicas necesarias para llevarlo a cabo de manera rápida, accesible y segura.

Rápida, por cuanto debe tenerse en cuenta que en este tipo de intervenciones médicas cualquier demora puede epilogar en serios riesgos para la vida o la salud de la embarazada.

Accesible y segura pues, aun cuando legal en tanto despenalizado, no deben existir obstáculos médico-burocráticos o judiciales para acceder a la

⁸⁵ El documento completo puede revisarse en nuestro sitio web www.celir.cl/v2/Otros/ProtocoloabortoArgentina.pdf

mencionada prestación que pongan en riesgo la salud o la propia vida de quien la reclama” (CSJN, 2012: considerando 25).

2.1. Principios rectores

La realización de ILEs debe guiarse fundamentalmente por el principio de autonomía.

Todas las actitudes y prácticas de las/los profesionales de la salud deben estar destinadas a que, en base a la información veraz, adecuada y completa que se le brinde, la mujer pueda tomar la mejor decisión posible para ella. Por esto, es deber de las/los profesionales de la salud proveer la información necesaria para que pueda entender el proceso que está viviendo y formular todas las preguntas que crea necesarias.

Debe respetarse el derecho de la persona de decidir sobre las cuestiones relacionadas con su cuerpo, su salud y su vida. Las/los médicas/ os tienen la función pública y el rol ético de cuidar la salud de las personas sin decidir por ellas sobre sus conductas íntimas y personales. Este principio es la base del secreto médico. Otros principios que guían la atención de ILEs son los de accesibilidad, no judicialización, confidencialidad, privacidad, celeridad/rapidez y transparencia activa.

Accesibilidad. No deben interponerse obstáculos médico-burocráticos o judiciales para acceder a la prestación de una ILE, ya que ponen en riesgo la salud de quien requiere la práctica.

No judicialización. La interrupción debe ser practicada por el equipo de salud sin intervenciones adicionales innecesarias, sean médicas, administrativas o judiciales. Judicializar significa dar intervención de cualquier forma a organismos judiciales o policiales, dando estado público a una situación privada y confidencial de quien acude al servicio de salud.

El mandato de no judicialización implica que con la intervención de un médico es suficiente para decidir si el caso se encuadra en las circunstancias que legalizan la interrupción.

En este sentido, en su fallo la CSJN afirma: “[...] hacer lo contrario, significaría que un poder del Estado, como lo es el judicial, cuya primordial función de velar por la plena vigencia de las garantías constitucionales y convencionales, intervenga interponiendo un vallado extra y entorpeciendo una concreta situación de emergencia sanitaria, pues cualquier magistrado llamado a comprobar la concurrencia de una causal de no punibilidad supeditaría el ejercicio de un derecho expresamente reconocido por el legislador en el artículo 86, inciso 2º, del Código Penal, a un trámite burocrático, innecesario y carente de sentido” (CSJN, 2012: considerando 19).

La Corte afirmó, en relación con este principio, que “[...] media en la materia un importante grado de desinformación que ha llevado a los profesionales de la salud a condicionar la realización de esta práctica al dictado de una autorización judicial y es este proceder el que ha obstaculizado la

implementación de los casos de abortos no punibles legislados en nuestro país desde la década de 1920” (CSJN, 2012: considerando 18).

{La decisión de la mujer es incuestionable y no debe ser sometida por parte de las/ los profesionales de la salud a juicios de valor derivados de sus consideraciones personales o religiosas}.

Confidencialidad. Es derecho de la mujer que toda persona que participe en la elaboración o manipulación de la documentación clínica guarde la debida reserva. Al igual que en cualquier práctica médica, nada de lo ocurrido en la consulta debe ser comunicado a otras personas (como integrantes del equipo de salud, familia o funcionarios judiciales o policiales).

La Historia Clínica (HC) y toda la información contenida en ella son de titularidad exclusiva de la mujer y su divulgación configura una violación a su derecho a la intimidad y al secreto profesional.

Si se considerara necesario compartir la información con terceros –incluidos esposo, compañero/a, padre, madre– debe hacerse con la autorización expresa de la mujer, otorgada de manera libre y de forma clara.

Privacidad. Los servicios donde se lleven a cabo procedimientos de ILE deben respetar la privacidad de las mujeres durante todo el proceso.

Esto incluye, por lo menos, la adecuación de los espacios donde se practiquen. Asimismo, se debe garantizar la privacidad de la información solicitada a la mujer y toda aquella que se consigne en la HC, la capacitación a todos los empleados de la institución para que conozcan sus obligaciones de respeto de la privacidad de las mujeres y de la información en relación con la interrupción del embarazo, la participación exclusiva de los integrantes del equipo de salud necesarios para la práctica.

Celeridad/rapidez. A las mujeres que soliciten o requieran que se les realice una ILE se les debe garantizar una atención ágil e inmediata.

Las instituciones en las cuales se practique deberán prestar toda la colaboración necesaria para que el proceso de atención integral sea brindado lo más pronto posible. Asimismo, se prohíbe la imposición de requisitos adicionales por parte de las instituciones o de sus empleados.

Transparencia activa. Los profesionales de la salud y las autoridades públicas tienen la obligación de suministrar toda la información disponible de forma dinámica y a lo largo de todo el proceso de atención, incluso si no hay una solicitud explícita. Dicha información debe ser actualizada, completa, comprensible y brindada en lenguaje accesible.

3. Circunstancias que habilitan la interrupción legal del embarazo Como se adelantó, las causales que habilitan a solicitar una ILE son que el embarazo constituya un peligro para la salud o la vida de la mujer, o que haya sido producto de una violación.

3.1. Causal salud

La causal salud incluye el peligro para la salud y el peligro para la vida, ya que este último debe ser entendido como la situación extrema de la afectación de la salud. Según la OMS, la salud implica el "completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones" (OMS, 2006). Una atención adecuada y completa de situaciones que habilitan la ILE implica necesariamente una visión integral de la salud.

Las pautas para identificarlas son:

- El peligro para la salud debe ser entendido como la posibilidad de afectación de la salud. No requiere la constatación de una enfermedad y, en este sentido, no debe exigirse tampoco que el peligro sea de una intensidad determinada. Bastará con la potencialidad de afectación de la salud de la mujer para determinar el encuadre como causal de no punibilidad para el aborto.
- La salud es un concepto integral que tiene tres dimensiones: física, mental-emocional y social, de acuerdo a lo establecido por la OMS.
- La afectación de la salud mental puede resultar en un trastorno mental grave o una discapacidad absoluta, pero incluye también el dolor psicológico y el sufrimiento mental asociado con la pérdida de la integridad personal y la autoestima.
- El concepto de peligro no exige la configuración de un daño, sino su posible ocurrencia.
- La decisión de la mujer sobre qué tipo de peligro está dispuesta a correr debe ser el factor determinante en la decisión de requerir la realización de una ILE.
- Si se trata de una mujer en buenas condiciones de salud pero con factores predisponentes, la continuación del embarazo puede constituir un factor de precipitación de una afectación; asimismo, en los casos con enfermedades crónicas o agudas, la continuación del embarazo puede actuar como un factor de consolidación de la enfermedad, como por ejemplo su cronificación, aparición de secuelas o incluso la muerte.

3.2. Causal violación

Como se dijo, de acuerdo al inc. 2 del art. 86 del Código Penal, toda mujer víctima de violación, con independencia de que tenga o no una discapacidad intelectual o mental, tiene derecho a la interrupción legal del embarazo producto de dicha violencia sexual. En estas situaciones es importante considerar que:

- La violación es una expresión de la violencia sexual y esta es una manifestación de la violencia de género. Puede ser perpetrada por alguien del entorno íntimo de la mujer (incluido el novio, marido o pareja), por personas de su conocimiento de otros ámbitos o por extraños.
- Los embarazos producto de una violación cometida por un novio, marido o pareja violenta deben considerarse como casos con derecho a solicitar su interrupción legal.

En los casos de violación, el único requisito para acceder a una ILE es que la mujer, o cuando fuera necesario su representante legal, realice una

declaración jurada donde afirme que el embarazo que cursa es producto de una violación.

Si existe una denuncia judicial o policial previa a la solicitud de la ILE, esta valdrá como la declaración jurada. En ningún caso la recolección de material genético como evidencia forense puede convertirse en una barrera o generar dilaciones en el acceso a la práctica.

La declaración jurada debe ser simple, sin formalidades legales, y no se podrá exigir a la persona que profundice en las circunstancias del hecho o que brinde prueba alguna.

El fallo de la CSJN también aclara que aun ante una duda sobre la veracidad de la violación es prioridad no negar bajo ninguna circunstancia el acceso al servicio de ILE: “[...] si bien este Tribunal advierte la posibilidad de configuración de ‘casos fabricados’, considera que el riesgo derivado del irregular obrar de determinados individuos no puede ser nunca razón suficiente para imponer a las víctimas de delitos sexuales obstáculos que vulneren el goce efectivo de sus legítimos derechos o que se constituyen en riesgos para su salud” (CSJN, 2012).

Las mujeres con un embarazo consecuencia de una violación necesitan un tratamiento particularmente sensible, y es importante que todos los niveles del sistema de salud sean capaces de ofrecerles el cuidado y apoyo apropiados, además de considerar la derivación oportuna, de ser necesario.

Para más información, ver el “Protocolo para la atención integral de víctimas de violaciones sexuales. Instructivo para equipos de salud” (PNSSyPR, 2015).

4. Personas con derecho a solicitar una interrupción legal del embarazo

Este Protocolo está destinado a garantizar la dignidad y derechos de toda persona con capacidad biológica de gestar y, por lo tanto, potencial sujeto del derecho a abortar cuando su vida o salud estén en peligro, o esté cursando un embarazo producto de una violación sexual, independientemente de tener o no una discapacidad intelectual o mental.

Asimismo, como se mencionó anteriormente, este Protocolo se guía por el principio de autonomía de las personas y, en consonancia con el mismo, la atención de las situaciones de ILEs implica necesariamente el consentimiento informado por parte de la usuaria. Este es un proceso que recorre toda la atención y está enmarcado en la Ley 26.529, de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud.

En los casos de ILEs, el resultado del proceso de consentimiento informado es el documento por el cual, luego de recibir la información pertinente, la persona manifiesta haber decidido en forma autónoma, libre de influencias y presiones de cualquier tipo, y conociendo cabalmente posibilidades y riesgos, interrumpir el embarazo que cursa (ver modelo en el Anexo, pág. 68).

Antes de solicitar su firma, para que la persona que consulta pueda acceder a la toma de decisiones, el equipo de profesionales debe brindarle la información necesaria. La/el profesional debe contemplar la posibilidad de que la mujer le realice preguntas y repreguntas sobre las cuestiones que le generen dudas o miedos, para poder tomar una decisión autónoma, consciente e informada.

Para la realización de una ILE nunca es exigible la denuncia policial o judicial de violación.

Respecto del consentimiento informado, hay dos grupos de personas que representan situaciones especiales: las niñas y adolescentes, y las personas con discapacidad intelectual o mental.

4.1. Niñas y adolescentes

La infancia y la adolescencia constituyen un grupo vulnerable dada la tradición existente de un sistema paternalista y tutelar que tiende a suplir la voluntad y el deseo de estas personas por considerarlas no capacitadas para decidir sobre sí mismas con autonomía y responsabilidad.

Asimismo, es un grupo particularmente vulnerable a situaciones de abuso y violaciones sexuales. Por esto es muy importante, durante los procesos de atención, generar un ambiente de empatía en el cual las niñas y adolescentes puedan expresar sus necesidades, temores y vergüenzas sin ser juzgadas ni acalladas.

La atención de niñas/os y adolescentes implica tener en cuenta dos aspectos: por un lado, la edad a partir de la cual son consideradas por la ley como personas plenamente autónomas, capaces de otorgar un consentimiento completo y suficiente por sí mismas; por otro lado, su derecho a ser escuchadas e informadas cualquiera sea su edad, de acuerdo a su especial necesidad de atención.

La regla en materia de capacidad para el ejercicio del derecho a la ILE surge del art. 4 de la Ley 25.673, de creación del PNSSyPR, y su Decreto Reglamentario 1.282/2003, en conjunto con el art. 921 del Código Civil, que reconoce discernimiento a las personas desde los 14 años; todo esto en concordancia con la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En función de esto:

- Todas las personas de 14 años o más son consideradas por la legislación argentina como plenamente capaces de discernimiento.

Por ello, pueden otorgar por sí mismas su consentimiento informado y realizar personalmente la declaración jurada requerida para la interrupción de un embarazo producto de una violación, sin que se requiera la autorización de sus padres o representantes legales. Sin perjuicio de lo anterior, se recomienda fomentar que las adolescentes cuenten con la compañía y el apoyo de una persona de su confianza durante el proceso.

Igualmente que con las mujeres adultas, es esencial que los equipos de salud garanticen claramente la confidencialidad, asegurándoles a las adolescentes que no compartirán la información de la consulta con nadie. Este criterio debe aplicarse teniendo en cuenta el principio del respeto del interés superior del niño, establecido en la Convención de los Derechos del Niño.

- En el caso de las niñas y adolescentes menores de catorce años, se deberá respetar su derecho a ser escuchadas y a que su opinión sea tenida en cuenta. Esto se basa en el principio de la "autonomía progresiva" y el grado de desarrollo de cada niña o adolescente en situación de requerir la realización de una ILE. Sus representantes legales, o los que sean nombrados especialmente

para el caso, deberán participar en conjunto con la niña o adolescente en la toma de decisiones, y deberán firmar el consentimiento informado y la declaración jurada de la violación cuando corresponda.

Si existiera una negativa injustificada de sus padres, tutores o encargados de acompañar la decisión de la niña o adolescente se procederá de acuerdo a lo establecido en el art. 61 del Código Civil, que establece que “cuando los intereses de los incapaces, en cualquier acto judicial o extrajudicial, estuvieren en oposición con la de sus representantes, dejarán estos de intervenir en tales actos, haciéndolo en lugar de ellos, curadores especiales para el caso de que se tratare”.

Los equipos de salud deben procurar desarrollar capacidades para el abordaje integral de la sexualidad de las niñas y adolescentes y el respeto de sus derechos. Esto incluye una disposición especial para recabar los datos necesarios para completar la HC: garantizar un trato amable, formular preguntas simples en un lenguaje entendible y, si fuera necesario, repetir las preguntas y sondear con cuidado y consideración.

4.2. Personas con discapacidad

Según la Convención Universal por los Derechos de las Personas con Discapacidad (aprobada por Ley 26.378), se consideran personas con discapacidad a quienes tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. La normativa vigente (Código Penal y sentencia “F., A. L.” de la CSJN) alude como causal de ILE un “atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”; esta referencia debe comprenderse como la situación de violación a una persona con discapacidad mental o intelectual.

Como fue reconocido por la Convención y la Ley 26.378, las personas con discapacidad tienen la misma dignidad, autonomía y capacidad jurídica para decidir sobre su cuerpo que el resto. El servicio sanitario no debe actuar sin tener en cuenta o suprimiendo la voluntad de las mujeres discapacitadas sino que, por el contrario y en primer lugar, debe proporcionarles las herramientas que aseguren su participación en todo acto.

En las situaciones en las que la mujer con derecho a acceder a una ILE (ya sea por peligro para la salud, la vida o por violación) tenga discapacidad psicosocial o mental, es fundamental que el equipo de salud la acompañe durante todo el proceso de atención fortaleciendo su autonomía. Para esto, debe proveerle toda la información necesaria, de forma accesible y adecuada a sus particularidades, de manera que la persona pueda decidir con plena comprensión de las circunstancias.

Esto implica el uso de medios y tecnologías adecuadas y flexibles. Una alternativa posible es que se solicite a la mujer que elija una o más personas de su confianza para que le presten el apoyo necesario.

En caso de no contar con ellas, lo más adecuado y conveniente es designar, con acuerdo de la mujer, a una persona idónea para esto. De esta forma, el procedimiento del consentimiento informado cumplirá con el criterio de

respetar la voluntad de la persona con discapacidad. Todo lo actuado debe ser documentado en la HC.

En el caso de las personas declaradas incapaces judicialmente deberá asistir las en el proceso de la consulta y la toma de decisiones su representante legal, quien debe firmar también el consentimiento informado.

Por otro lado, bajo ninguna circunstancia el servicio sanitario debe exigir la acreditación de la discapacidad intelectual-mental; en este sentido, la CSJN dice que la solicitud de cualquier tipo de acreditación o dictamen que exceda la declaración jurada en caso de violación, es considerado como una práctica burocrática dilatoria de la ILE que encubriría la denegación ilegal del aborto (CSJN, 2012: considerando 24).

Ministerio de Salud de la Nación
Abril 2015

<http://www.msal.gov.ar/images/stories/bes/graficos/0000000690cnt-Protocolo%20ILE%20Web.pdf>
(20 de junio de 2015)

[Volver al Índice](#)

B. Comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina en relación al Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo

La vida, primer derecho humano
(Comisión Ejecutiva, 23 de junio)

Hace unos días el Ministerio de Salud de la Nación ha promulgado un "Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo", actualización de la "Guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles" editada en el año 2010 por el mismo Ministerio.

1- Con sorpresa constatamos que, en lugar de procurar caminos de encuentro para salvar la vida de la madre y su hijo, y de buscar opciones verdaderamente terapéuticas y alternativas, las autoridades obligan a impulsar el aborto. **El nuevo texto incluye un cambio sustancial respecto al documento anterior al eliminar el concepto de "abortos no punibles", sustituyéndolo por "derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE)". Esta terminología evade la realidad jurídica de que no existe en nuestro país un "aborto legal" ni un "derecho al aborto".**⁸⁶

2- Entre otros cambios en el actual Protocolo se encuentra la **ampliación, de hecho, de la causal derivada del peligro para la vida y la salud de la madre. No hace referencia a que ese peligro varía en gravedad si puede o no ser evitado por otros medios y amplía, además, las posibilidades de afectación a la salud incluyendo "el dolor psicológico y el sufrimiento mental asociado con la pérdida de la integridad personal y la autoestima".**

3- Es muy llamativo que se limite un derecho humano fundamental: la objeción de conciencia. Se excluye la objeción de conciencia institucional, siendo que la Ley 25673, creadora del Programa de salud sexual y procreación responsable (ámbito desde el cual se emite este Protocolo), la admite expresamente en su artículo 10. **En cuanto a la objeción de conciencia individual, el Protocolo la niega en la práctica cuando obliga a los médicos objetores a practicar un aborto cuando no esté disponible ningún otro profesional dispuesto a eliminar dicha vida. Asimismo, al presentarse como obligatorio para todo el país, el Protocolo se superpone y conculca las autonomías provinciales en materia de salud. El Protocolo va más allá de la legislación vigente y con vicios de inconstitucionalidad.**

4- **Al no favorecer la denuncia cuando el aborto es producto de una violación, la mira del Protocolo parece estar puesta en la eliminación de la persona por nacer, ignorando la responsabilidad del violador y favoreciendo el encubrimiento de un delito gravísimo.**

⁸⁶ *El destacado es nuestro.*

Recordamos la sabia advertencia ética de San Juan Pablo II cuando expresó que "en el caso de una ley intrínsecamente injusta, como es la que admite el aborto o la eutanasia, nunca es lícito someterse a ella". (Evangelium Vitae, 73).

El Papa Francisco acaba de hablarnos en su Encíclica Laudato Si, sobre la ecología integral y humana: "dado que todo está relacionado, tampoco es compatible la defensa de la naturaleza con la justificación del aborto. No parece factible un camino educativo para acoger a los seres débiles que nos rodean, que a veces son molestos o inoportunos, si no se protege a un embrión humano aunque su llegada sea causa de molestias y dificultades". Y, citando a Benedicto XVI, Francisco nos recuerda que: "Si se pierde la sensibilidad personal y social para acoger una nueva vida, también se marchitan otras formas de acogida provechosas para la vida social" (Laudato Si, 120).

En una época que se trata de respetar y cuidar la naturaleza y la vida en todas sus dimensiones, llama la atención que desde el mismo Gobierno se desproteja de este modo la vida humana más vulnerable y que se conculquen deliberadamente derechos humanos básicos.

Pidamos a María de Luján que nos enseñe como Nación a cuidar y respetar siempre toda vida humana.

Comisión Ejecutiva
Conferencia Episcopal Argentina
23 de junio de 2015

<http://www.episcopado.org/portal/actualidad-cea/oficina-de-prensa/item/980-la-vida,-primer-derecho-humano-comisi%C3%B3n-ejecutiva,-23-de-junio.html>
(30 de junio de 2015)

[Volver al Índice](#)

España

A. Nota de prensa del Arzobispado de Granada en la cual informa que, finalmente, se entrega al Juzgado de Instrucción nº4 la documentación requerida sobre el "Caso de los Romanones"

El miércoles y el jueves de la semana pasada (27 y 28 de mayo), el arzobispo de Granada, D. Javier Martínez, estaba en Córdoba y en Madrid gestionando diversos asuntos relacionados con su ministerio en la diócesis. El viernes 29 acudió a la hora convenida con los notificadores judiciales, y le fue notificado personalmente el auto dictado por el Juzgado de Instrucción nº 4, en el que se le requería para aportar determinada documentación relacionada con los presuntos delitos de abusos sexuales imputados a unos sacerdotes y laicos de la diócesis.

El arzobispo ha venido cooperando con la autoridad judicial desde que se tuvo noticia de la denuncia de estos hechos, habiendo instado incluso al denunciante, por ser mayor de edad, a que presentara la correspondiente denuncia a las autoridades civiles. Sin embargo, al estar el procedimiento canónico en manos de la Santa Sede, y al estar protegidos también los documentos por un Acuerdo de rango internacional, le hacía imposible al arzobispo disponer a su arbitrio de la documentación solicitada sin violar tanto el ordenamiento legal vigente como la disciplina de la Iglesia. Así se le hizo saber al juzgado tras su primera petición de esos documentos. Esa petición fue comunicada el 14 de mayo, y ha sido reiterada ahora en el requerimiento entregado el viernes 29.

Tan pronto el arzobispo tuvo conocimiento de estos requerimientos, trasladó las notificaciones del juez a la Congregación para la Doctrina de la Fe, única instancia eclesiástica competente en el tema, que en carta del 28 de mayo autoriza al arzobispo a entregar al juez la documentación solicitada, "con el propósito de que la autoridad judicial civil pueda aclarar los presuntos hechos delictivos".

En consecuencia, el arzobispo ha hecho llegar esta misma mañana al juzgado la documentación solicitada, presentándola ante el juzgado de guardia. En la comunicación al juzgado, de acuerdo con la legislación aplicable y con las indicaciones de la autoridad competente de la Iglesia, se le han transmitido las cautelas y reservas que protegen esa documentación, al tratarse de documentación obtenida en el ámbito eclesial y que responde a la normativa canónica propia de ese ámbito.⁸⁷

Arquidiócesis de Granada
31 de mayo del 2015

<http://www.archidiocesisgranada.es/index.php/noticias/item/6133-nota-de-prensa-del-arzobispado-de-granada>

(5 de junio de 2015)

[Volver al Índice](#)

⁸⁷ El destacado es nuestro.

Notas de prensa que niegan la calidad secreta de la investigación judicial del “Caso de los Romanones”

El juez desmiente al arzobispo de Granada: el caso Romanones no está bajo secreto pontificio

El juez instructor del caso "Romanones", Antonio Moreno, considera relevante la información enviada por el arzobispo de Granada después de ser forzado a ello por la Santa Sede, y ha ordenado la apertura de una pieza separada para investigar toda la documentación. En un auto al que ha tenido acceso eldiario.es, el magistrado agradece la colaboración del Papa y la Congregación para la Doctrina de la Fe, y desmiente, como aseguraba Javier Martínez, que la documentación entregada sea de carácter privado o pueda acogerse al secreto pontificio. Además, en el auto afea el hecho de que el prelado entregara la documentación ante el juzgado de Guardia, y no ante el juez instructor.

A la vez, aclara que, hasta que la Audiencia Provincial de Granada no se pronuncie respecto a los recursos, los doce investigados -diez curas y dos laicos- siguen estando imputados por delitos de abusos y contra la identidad sexual.

El auto se ha remitido esta tarde de miércoles, víspera del Corpus (fiesta grande en Granada), a las partes, que a partir del lunes podrán analizar la información en sede judicial, pues el magistrado ha declarado la pieza como "reservada" (los datos no son secretos y pueden ser utilizados, pero la documentación no será entregada físicamente a las partes). Una documentación que, en un principio, debería contener los informes con los interrogatorios íntegros a los diez sacerdotes y dos laicos encausados, aunque algunas fuentes consultadas apuntan a que, previsiblemente, el arzobispo únicamente rindiera informe sobre los tres curas sancionados a divinis (temporalmente), en cuyo caso estaría cometiendo un delito canónico.

Todos los Romanones siguen imputados

Respecto a los Romanones, el juez vuelve a aclarar en su auto que, hasta que la Audiencia Provincial de Granada no resuelva -previsiblemente en septiembre- acerca de la prescripción o no de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales que se investigan, se mantiene la imputación de los diez sacerdotes y dos laicos denunciados por Daniel. No es cierto, pues, que la investigación se circunscriba única y exclusivamente al padre Román, como algunos pretenden difundir.

Para el juez, una primera lectura del contenido ratifica la necesidad de las pruebas solicitadas al arzobispo de Granada en una decena de ocasiones -con

tres apercibimientos- y subraya cómo la documentación no afecta a actos privados fuera de los investigados.

No hay secreto pontificio

Además, el magistrado deja claro que, en contra de lo que afirmó en repetidas ocasiones el arzobispo de Granada como pretexto para evitar entregar la documentación, la Congregación para la Doctrina de la Fe no hace constar en ningún momento que la información requerida sea secreta, como tampoco lo es la instrucción, una vez que en enero pasado se levantó el secreto de las investigaciones. Es más: achaca al prelado que, si consideraba secretas las mismas, no debía haberlas entregado en otro juzgado que no fuera el de Instrucción número 4.

En cuanto al tan manido "secreto pontificio", el magistrado subraya que no existe tal, y se apoya en las declaraciones del Papa Francisco reclamando la investigación hasta el último detalle, y en los propios Acuerdos Iglesia-Estado. No obstante, dada la especial situación de algunos imputados -sacerdotes que podrían estar afectados, en caso de juicio penal, por la legislación internacional-, el juez Moreno declara reservada la citada documentación, que pasará a constituir pieza separada (aunque unida a la instrucción del proceso penal), de forma que las actuaciones canónicas no sean divulgadas a personas ajenas a la causa.

En consecuencia, las partes -acusaciones particulares, Fiscalía y abogados defensores- podrán acceder a dicha documentación personándose en la Secretaría del Juzgado para su examen, pero éstas no podrán ser entregadas en copia, imágenes o datos. En dicho momento, las partes podrán saber si el arzobispo de Granada interrogó, o no, a todos los Romanones, qué novedades plantean dichos interrogatorios -que supuestamente se llevaron a cabo semanas antes de que se destapara el caso y de que fueran interrogados o detenidos por la Policía- y, también, si la máxima autoridad eclesiástica en la diócesis tiene algún tipo de responsabilidad en el caso.

eldiario.es
3 de junio de 2015

http://www.eldiario.es/sociedad/investigar-interrogatorios-arzobispo-Granada-Romanones_0_394761280.html
(5 de junio de 2015)

[Volver al Índice](#)

La investigación canónica del 'caso romanones' no será secreta, como pretendía el arzobispo

Las diligencias judiciales que integran la investigación del 'caso de los romanones' "ya no se encuentran declaradas secretas". El juez Antonio Moreno, que investiga los supuestos abusos sexuales a menores por parte de diez sacerdotes y dos laicos, responde así al arzobispo de Granada, Javier Martínez, que pretendía que las actuaciones canónicas fueran de "uso y conocimiento exclusivo del instructor".

En su último auto, fechado este miércoles y al que ha tenido acceso andalucesdiario.es, el juez rechaza la petición del prelado granadino de declarar secretas las actuaciones eclesíásticas, pero resuelve abrir una "pieza separada de documentación reservada", de manera que solo puedan tener acceso a la investigación canónica las partes personadas en el proceso penal. El juez advierte en su resolución que las partes tendrán que acudir a la Secretaria del Juzgado para examinar la documentación, de la que no podrán obtener copias, ni imágenes ni datos grabados en cualquier soporte.

En la nueva resolución, el magistrado ratifica la necesidad de las pruebas que el arzobispo se negaba a entregar, pese a los múltiples requerimientos judiciales en los que el instructor conminaba a enviar la copia completa de las declaraciones, interrogatorios e informes que hubo de suscribir sobre los implicadas en el caso de abusos sexuales.

Aún no ha trascendido si la documentación que entregó el domingo el prelado granadino en el juzgado de guardia incluye todos los documentos que exigía el juez. Las fuentes consultadas temen que esas actuaciones se limiten a los tres sacerdotes que el arzobispo suspendió 'a divinis' puesto que Martínez no ha actuado contra los siete diocesanos imputados como supuestos encubridores de los abusos que, además, siguen ejerciendo sus funciones pastorales.

"No consta que la Congregación para la doctrina de la Fe haya acordado la entrega de la documentación con carácter secreto, lo que además, por su continuidad temporal hasta la finalización del proceso, no encontraría amparo en el principio de publicidad del proceso para las partes mientras no se declare expresamente secreto", indica el juez Moreno al rechazar la petición del arzobispo.

El magistrado señala también que si las partes no pudieran tener acceso a la documentación hasta el juicio oral, o en los términos solicitados por el arzobispo, afectaría al derecho constitucional y fundamental de defensa y tutela judicial efectiva y le recuerda a Martínez que él mismo entregó la documentación en otro juzgado.

Es más. El instructor precisa que la documentación entregada afecta a la investigación penal y alude a la colaboración Iglesia-Estado, "que siempre ha

dejado clara” el Papa para subrayar que “el secreto (no confesional)” no puede “salvaguardar documentos relativos a delitos muy graves , que en este caso el propio Santo Padre ordenó su persecución”.

El magistrado recuerda que todas las imputaciones –los diez sacerdotes y dos laicos- siguen en vigor. Y lo estarán hasta que se resuelva el recurso de apelación interpuesto por la acusación particular del caso de ‘los romanones’, que se opuso a la prescripción declarada por instructor de los delitos de abusos sexuales sin penetración, exhibicionismo y encubrimiento atribuidos a once de los doce imputados al entender que los hechos pueden constituir un delito de corrupción de menores.

Amina Nasser
andaluces.es
4 de junio de 2015

<http://www.andalucesdiario.es/ciudadanxs/el-juez-declara-reservada-la-investigacion-canonica-del-caso-de-los-romanones/>
(5 de junio de 2015)

[Volver al Índice](#)

B. Notas informativas del Arzobispado de Oviedo relativas a la expulsión del estado clerical del sacerdote Jesús María Menéndez Suarez por delitos de grave conducta inmoral contra el sexto mandamiento y el abuso de menores según las normas canónicas vigentes.

*El Papa Francisco expulsa del estado clerical al sacerdote
Jesús María Menéndez Suárez*

El Arzobispado de Oviedo hace pública a través de la Delegación episcopal de Medios de Comunicación social la siguiente nota informativa:

El Papa Francisco ha impuesto la pena de la expulsión del estado clerical al sacerdote Jesús María Menéndez Suárez, conocido popularmente como el "Padre Chus", de manera irrevocable e inapelable por los delitos de los que se le acusaba, entre los que se encontraban la grave conducta inmoral contra el sexto mandamiento del Decálogo y el abuso de menores según las normas canónicas vigentes (menos de 18 años). Quedan suspendidas todas sus funciones sacerdotales y se le dispensa del celibato.

El Arzobispado de Oviedo, desde el primer momento en el que tuvo conocimiento de las acusaciones que pesaban sobre el citado sacerdote, procedió a realizar una investigación previa hablando con él; luego, entrevistando a las víctimas, a los testigos y recogiendo las pruebas correspondientes. Las conclusiones fueron enviadas a la Congregación para la Doctrina de la fe, la cual el 24 de junio de 2014, en vista de la gravedad de los hechos denunciados autorizó la imposición de las oportunas medidas cautelares según el c. 1722 del Código Derecho Canónico para asegurar la buena marcha de la investigación y del proceso administrativo penal a tenor de los cánones 1717 y 1720.

Tanto la Archidiócesis de Oviedo como la Congregación para la Doctrina de la fe han creado todas las condiciones jurídicas materiales y procesales para que, con absoluta imparcialidad y equidad, se pudiera comprobar la veracidad de los hechos alegados, se salvaguardaran en todo momento el derecho de protección de las víctimas, el derecho de defensa del sacerdote acusado y su presunción de inocencia hasta el dictamen final de la Santa Sede. Por este motivo, en la Archidiócesis se ha llevado con absoluta discreción todo el proceso, sin emitir antes ninguna nota ni hacer ningún tipo de declaración en los medios de comunicación.

Evaluada las actas del proceso por el Congreso particular de la Congregación para la Doctrina de la fe el 20 de febrero de 2015, ésta emitió un decreto por el que se solicitaba al Santo Padre la aplicación del art. 21§2, 2 del Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis tutela. En consecuencia, el 6 de marzo de 2015, el Papa ha decretado la expulsión del estado clerical de Jesús María Menéndez Suárez, lo cual ya le ha sido ya notificado.

La comunidad diocesana manifiesta su profundo dolor por unos delitos que han supuesto un daño enormemente lesivo tanto en personas adultas, como especialmente en menores de edad según la legislación eclesial, por parte de quien ha manchado la santidad de su sacerdocio y ha roto la comunión.

Mientras pide perdón por la conducta reprobable de este sacerdote, expresa su voluntad de seguir velando por el bien de todos los fieles, especialmente los menores y más desprotegidos.

Oviedo, 29 de mayo de 2015

<http://www.iglesiadeasturias.org/images/pdf/prensa/2015/Expulsion%20sacerdote.pdf>

Ante las declaraciones efectuadas por Jesús María Menéndez Suárez, el Arzobispado de Oviedo precisa lo siguiente:

- 1) Su expulsión del estado clerical ha sido una decisión tomada directamente por el Papa Francisco y es inapelable.
- 2) Los hechos que se le imputan, además de acciones pecaminosas según la ley de Dios, constituyen también delitos según el Derecho y la normativa actual de la Iglesia.
- 3) La normativa eclesiástica establece la minoría de edad para los delitos graves que se le imputan hasta los 18 años; mientras que la ley civil española, lo hace hasta los 16. (Las víctimas tenían 17 años en el momento de los abusos).
- 4) Por mandato de la Santa Sede, se puso en marcha en la Archidiócesis de Oviedo un proceso Administrativo Penal en el que intervinieron un Delegado, nombrado por el Arzobispo de Oviedo, y un Notario actuario, quienes tomaron declaración a las víctimas, a los testigos y al imputado, en presencia de su abogado defensor. Asimismo, se recogieron las pruebas documentales que existen sobre el caso, y se mostraron al imputado y a su abogado para que ejercieran su derecho de defensa.
- 5) Una vez recibido el Decreto de expulsión, desde el Arzobispado se le convocó para notificárselo personalmente. Jesús María Menéndez Suárez acudió, pero se marchó inexplicablemente acto seguido desde la sala de espera. Por esta razón, se le envió el Decreto por carta certificada, como prevé el mismo documento. Hay acuse de recibo de haberle entregado el Decreto.

Oviedo, 30 de mayo de 2015

<http://www.iglesiadeasturias.org/images/pdf/prensa/2015/Nota%20aclaratoria.pdf>
(5 de junio de 2015)

[Volver al Índice](#)

C. Ley 12/2015 que concede la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España (selección)⁸⁸

Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España.

FELIPE VI
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley:

PREÁMBULO I

Se denomina sefardíes a los judíos que vivieron en la Península Ibérica y, en particular, a sus descendientes, aquéllos que tras los Edictos de 1492 que compelián a la **conversión forzosa o a la expulsión**⁸⁹ tomaron esta drástica vía. Tal denominación procede de la voz «Sefarad», palabra con la que se conoce a España en lengua hebrea, tanto clásica como contemporánea. En verdad, la presencia judía en tierras ibéricas era firme y milenaria, palpable aún hoy en vestigios de verbo y de piedra. Sin embargo, y por imperativo de la historia, los judíos volvieron a emprender los caminos de la diáspora, agregándose o fundando comunidades nuevas sobre todo en el norte de África, en los Balcanes y en el Imperio Otomano.

Los hijos de Sefarad mantuvieron un caudal de nostalgia inmune al devenir de las lenguas y de las generaciones. Como soporte conservaron el ladino o la haketía, español primigenio enriquecido con los préstamos de los idiomas de acogida. En el lenguaje de sus ancestros remedaban los rezos y las recetas, los juegos y los romances. Mantuvieron los usos, respetaron los nombres que tantas veces invocaban la horma de su origen, y aceptaron sin rencor el silencio de la España mecida en el olvido.

La memoria y la fidelidad han permanecido a lo largo de los tiempos en una numerosa comunidad que mereció el honor de recibir su reconocimiento con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1990. Fue una decisión animada por el deseo de contribuir, después de casi cinco siglos de alejamiento, a un proceso de concordia que convoca a las comunidades sefardíes al reencuentro con sus orígenes, abriéndoles para siempre las puertas de su antigua patria. El otorgamiento de este premio había sido precedido, poco antes por un **acontecimiento histórico: la primera visita de un Rey de España a una sinagoga. Fue el 1 de octubre de 1987 en el templo sefardí Tifereth Israel de Los Ángeles, California.**

En los albores del siglo XXI, las comunidades sefardíes del mundo se enfrentan a nuevos desafíos: algunas quedaron maltrechas bajo la furia de los

⁸⁸ El texto íntegro de la ley puede consultarse en nuestro sitio web <http://www.celir.cl/v2/legislacion/SefardiesEspana.pdf>

⁸⁹ El destacado es nuestro.

totalitarismos, otras optaron por los caminos de retorno a su añorada Jerusalén; todas ellas vislumbran una identidad pragmática y global en las generaciones emergentes. Palpita en todo caso el amor hacia una España consciente al fin del bagaje histórico y sentimental de los sefardíes.

Se antoja justo que semejante reconocimiento se nutra de los oportunos recursos jurídicos para facilitar la condición de españoles a quienes se resistieron, celosa y prodigiosamente, a dejar de serlo a pesar de las persecuciones y padecimientos que inicuamente sufrieron sus antepasados hasta su expulsión en 1492 de Castilla y Aragón y, poco tiempo después, en 1498, del reino de Navarra. La España de hoy, con la presente Ley, quiere dar un paso firme para lograr el reencuentro de la definitiva reconciliación con las comunidades sefardíes.

(...)

III

En la actualidad existen dos cauces para que los sefardíes puedan obtener la nacionalidad española. Primero, probando su residencia legal en España durante al menos dos años, asimilándose ya en estos casos a los nacionales de otros países con una especial vinculación con España, como las naciones iberoamericanas. Y, en segundo lugar, por carta de naturaleza, otorgada discrecionalmente, cuando en el interesado concurren circunstancias excepcionales.

Como corolario, la Ley concreta ahora que concurren aquellas circunstancias excepcionales a que se refiere el artículo 21 del Código Civil, en los sefardíes originarios de España, que prueben dicha condición y su especial vinculación con España. **Asimismo determina los requisitos y condiciones a tener en cuenta para la justificación de aquella condición. Con ello se satisface sefardí cuyos antepasados se vieron forzados al exilio. Entre la documentación solicitada adquiere singular relevancia el certificado expedido por la Federación de Comunidades Judías de España, en coherencia con el contenido del Acuerdo de Cooperación con el Estado aprobado por la Ley 25/1992, de 10 de noviembre.**

Asimismo, es necesario proceder también, como complemento de lo anterior, a la reforma del artículo 23 del Código Civil para evitar que al adquirir la nacionalidad española deban renunciar a la previamente ostentada. Hasta el momento, los sefardíes son los únicos a quienes, concediéndoseles la nacionalidad con dos años de residencia se les obliga a esta renuncia.

En definitiva, la presente Ley pretende ser el punto de encuentro entre los españoles de hoy y los descendientes de quienes fueron injustamente expulsados a partir de 1492, y se justifica en la común determinación de construir juntos, frente a la intolerancia de tiempos pasados, un nuevo espacio de convivencia y concordia, que reabra para siempre a las comunidades expulsadas de España las puertas de su antiguo país.

IV

La norma se estructura en dos artículos, cuatro disposiciones adicionales, una disposición transitoria y seis disposiciones finales.

Artículo 1. Concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza a los sefardíes originarios de España.

1. A los efectos previstos en el apartado 1 del artículo 21 del Código Civil, en cuanto a las circunstancias excepcionales que se exigen para adquirir la nacionalidad española por carta de naturaleza, se entiende que tales circunstancias concurren en los sefardíes originarios de España que prueben dicha condición y una especial vinculación con España, aun cuando no tengan residencia legal en nuestro país.

2. La condición de sefardí originario de España se acreditará por los siguientes medios probatorios, valorados en su conjunto:

a) Certificado expedido por el Presidente de la Comisión Permanente de la Federación de Comunidades Judías de España.

b) Certificado expedido por el presidente o cargo análogo de la comunidad judía de la zona de residencia o ciudad natal del interesado.

c) Certificado de la autoridad rabínica competente, reconocida legalmente en el país de la residencia habitual del solicitante.

El interesado podrá acompañar un certificado expedido por el Presidente de la Comisión Permanente de la Federación de Comunidades Judías de España que avale la condición de autoridad de quien lo expide. Alternativamente, para acreditar la idoneidad de los documentos mencionados en las letras b) y c) el solicitante deberá aportar:

1.º Copia de los Estatutos originales de la entidad religiosa extranjera.

2.º Certificado de la entidad extranjera que contenga los nombres de quienes hayan sido designados representantes legales.

3.º Certificado o documento que acredite que la entidad extranjera está legalmente reconocida en su país de origen.

4.º Certificado emitido por el representante legal de la entidad que acredite que el Rabino firmante ostenta, efectiva y actualmente, tal condición conforme a los requisitos establecidos en sus normas estatutarias.

Además, los documentos a que hacen referencia los párrafos anteriores, excepción hecha del certificado expedido por el Presidente de la Comisión Permanente de la Federación de Comunidades Judías de España, se encontrarán, en su caso, debidamente autorizados, traducidos al castellano por traductor jurado y en los mismos deberá figurar la Apostilla de La Haya o el sello de la legalización correspondiente.

d) Acreditación del uso como idioma familiar del ladino o «haketía», o por otros indicios que demuestren la tradición de pertenencia a tal comunidad.

e) Partida de nacimiento o la «ketubah» o certificado matrimonial en el que conste su celebración según las tradiciones de Castilla.

f) Informe motivado, emitido por entidad de competencia suficiente, que acredite la pertenencia de los apellidos del solicitante al linaje sefardí de origen español.

g) Cualquier otra circunstancia que demuestre fehacientemente su condición de sefardí originario de España.

3. La especial vinculación con España se acreditará por los siguientes medios probatorios, valorados en su conjunto:

a) Certificados de estudios de historia y cultura españolas expedidos por instituciones oficiales o privadas con reconocimiento oficial.

b) Acreditación del conocimiento del idioma ladino o «haketía».

c) Inclusión del peticionario o de su ascendencia directa en las listas de familias sefardíes protegidas por España, a que, en relación con Egipto y Grecia, hace referencia el Decreto-ley de 29 de diciembre de 1948, o de aquellos otros que obtuvieron su naturalización por la vía especial del Real Decreto de 20 de diciembre de 1924.

d) Parentesco de consanguinidad del solicitante con una persona de las mencionadas en la letra c) anterior.

e) Realización de actividades benéficas, culturales o económicas a favor de personas o instituciones españolas o en territorio español, así como aquellas que se desarrollen en apoyo de instituciones orientadas al estudio, conservación y difusión de la cultura sefardí.

f) Cualquier otra circunstancia que demuestre fehacientemente su especial vinculación con España.

4. En todo caso, se deberá aportar un certificado de nacimiento debidamente legalizado o apostillado y, en su caso, traducido.

5. Asimismo, la acreditación de la especial vinculación con España exigirá la superación de dos pruebas.

La primera prueba acreditará un conocimiento básico de la lengua española, nivel A2, o superior, del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas del Consejo de Europa, mediante la superación de un examen para la obtención de un diploma español como lengua extranjera DELE de nivel A2 o superior.

En la segunda prueba se evaluará el conocimiento de la Constitución Española y de la realidad social y cultural españolas.

Estas pruebas serán diseñadas y administradas por el Instituto Cervantes en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

Los solicitantes nacionales de países o territorios en los que el español sea idioma oficial estarán exentos de la prueba de dominio del español pero no de la de conocimientos constitucionales y socioculturales.

Solo deberán realizar el examen DELE y la prueba de conocimiento de la Constitución Española y la realidad social y cultural españolas, los mayores de dieciocho años y personas que no tuvieran capacidad modificada judicialmente. Los menores y personas con capacidad modificada judicialmente quedan exentos y deberán aportar certificados de sus centros de formación, residencia, acogida, atención o educación especial en los que, en su caso, hubieran estado inscritos.

(...)

Disposición final primera. Modificación del Código Civil.

El artículo 23 del Código Civil queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 23.

Son requisitos comunes para la validez de la adquisición de la nacionalidad española por opción, carta de naturaleza o residencia:

- a) Que el mayor de catorce años y capaz para prestar una declaración por sí jure o prometa fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes.
- b) Que la misma persona declare que renuncia a su anterior nacionalidad. Quedan a salvo de este requisito los naturales de países mencionados en el apartado 1 del artículo 24 y los sefardíes originarios de España.
- c) Que la adquisición se inscriba en el Registro Civil español.»

Disposición final segunda. Modificación del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

Se añade una nueva disposición adicional duodécima al Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional duodécima. Acceso a la nacionalidad española en condiciones de igualdad.

Las personas con discapacidad accederán en condiciones de igualdad a la nacionalidad española. Será nula cualquier norma que provoque la discriminación, directa o indirecta, en el acceso de las personas a la nacionalidad por residencia por razón de su discapacidad. En los procedimientos de adquisición de la nacionalidad española, las personas con discapacidad que lo precisen dispondrán de los apoyos y de los ajustes razonables que permitan el ejercicio efectivo de esta garantía de igualdad.»

(...)

Disposición final sexta. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el 1 de octubre de 2015.

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 24 de junio de 2015.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY

<http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/25/pdfs/BOE-A-2015-7045.pdf>
(30 de junio de 2015)

[Volver al Índice](#)

D. Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Galicia que confirma que la Cruz de los Caídos del Monte do Castro de Vigo habría perdido el significado original de exaltación de la guerra civil, de modo que desapareciendo su carga política, puede ser contemplada como un elemento religioso, siendo innecesaria su remoción tal como lo pedía inicialmente la asociación demandante, Asociación Viguesa Pola Memoria Histórica Do 36.

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Causa: Recurso de apelación 4441/2014

Fecha: 5 de febrero de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sentencia 54/2015, de 05 de febrero de 2015

RECURSO Núm: 4441/2014

Ponente Excmo. Sr. MARIA AZUCENA RECIO GONZALEZ

En la ciudad de A Coruña, a 5 de febrero de 2015.

En el recurso de apelación que con el n.º 4441/2014 pende de resolución en esta Sala, interpuesto por el Procurador Sr. Pardo Fabeiro, en nombre y representación del Concello de Vigo, asistido por la Letrada de sus servicios jurídicos, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 2 de Vigo en autos de procedimiento ordinario n.º 282/2013, de fecha 4 de septiembre de 2014. Es parte apelada la Asociación Viguesa por la memoria histórica do 36, representada por la Procuradora D.ª María Ángeles Fernández Rodríguez y asistida por el Letrado D. Guillermo Presa Suárez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 2 de Vigo se dictó con fecha 4 de septiembre de 2014 sentencia en autos de procedimiento ordinario n.º 282/2013, con la siguiente parte dispositiva: "Fallo: Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Viguesa Pola Memoria Histórica Do 36, contra la resolución de la Junta de Gobierno Local del Concello de Vigo de 1 de marzo de 2013 por la que no se accede a la petición formulada por la asociación demandante, y acuerdo anular el acto recurrido y condenar al Concello de Vigo a que proceda de forma inmediata a adoptar las medidas oportunas para la retirada del

elemento arquitectónico denominado "Cruz de los Caídos" sito en el Monte do Castro de Vigo.

No procede imponer las costas procesales".

SEGUNDO.- Por la representación del Concello de Vigo se interpuso recurso de apelación contra dicha resolución judicial, en el que se solicitó que se estime el recurso y en consecuencia se revoque la sentencia dictada en primera instancia.

TERCERO.- El recurso fue admitido a trámite y se dio traslado a las demás partes, formulando oposición la representación de la Asociación Viguesa Pola Memoria Histórica Do 36, que interesa se desestime el recurso y se confirme íntegramente la resolución judicial recurrida, por ser conforme a Derecho.

CUARTO.- Recibidos los autos en esta Sala, ante la que se personaron el Concello de Vigo (Procurador Sr. Pardo Fabeiro) y la Asociación Viguesa Pola Memoria Histórica Do 36 (Procuradora D.^a María Ángeles Fernández Rodríguez); por providencia de fecha 1 de diciembre de 2014 se declararon conclusas las actuaciones; y mediante providencia de fecha 12 de enero de 2015 se señaló para votación y fallo el 22 de enero de 2015.

QUINTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

Es Ponente la Magistrada D.^a MARÍA AZUCENA RECIO GONZÁLEZ.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Se aceptan los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada en todo aquello en lo que no discrepen de los de la presente.

SEGUNDO.- El objeto del recurso contencioso-administrativo viene constituido por la resolución de la Junta de Gobierno Local del Concello de Vigo de 1 de marzo de 2013 por la que no se accede a la petición de la asociación demandante, formulada en el ejercicio del derecho de petición, de adopción de medidas para la retirada de la Cruz de los Caídos sita en el Monte do Castro de Vigo, propiedad de dicho concello.

Reconoce el concello apelante que es obvio que la cruz y el conjunto fueron, originariamente, un símbolo del fascismo con la finalidad de exaltación de la guerra civil, de la sublevación civil y de la dictadura, aunque hoy ya no, frente a lo sostenido en la sentencia apelada, en que se considera que no se ha modificado el sentido de la cruz y no es suficiente con la retirada de parte de los elementos de la simbología falangista.

Se refiere además en el recurso que por el contrario al argumento de la sentencia, no es necesario que surja un nuevo valor simbólico de reemplazo sino que basta con que desaparezca el componente de exaltación de la dictadura originario y la carga fascista originaria ha desaparecido a través del acuerdo plenario de 30 de junio de 1981, adoptado por todas las fuerzas políticas, por unanimidad, tratándose de los representantes de los ciudadanos, con relevancia institucional y democrática, aunque no se colocara una placa que lo diga. Y que ha sido retirada la simbología fascista, el sarcófago, las dos coronas de laurel en bronce, la inscripción de "Caídos por Dios y por España ¡Presentes 1936-1939", los escudos preconstitucionales, los emblemas de la falange y los requetés. No se opone a que se retiren las figuras originales de un marino y un soldado y los emblemas de bronce de los tres ejércitos y la cruz, aunque según refiere están a una distancia que los desconecta de la cruz. Hace referencia a la adopción de otras medidas en relación con otros lugares y a un acto público institucional anual. Además, que en 2010 se colocó en el monte un monolito. Que la estética y diseño de la cruz no tiene adornos, ni emblemas, está construida con material autóctono y que no enaltece nada, no es simbólica ni atributo de una dictadura militar sino que es religiosa -aunque no fue erigida por la iglesia, como manifiesta el perito de la demandante-. Además considera que la solución de la sentencia es desproporcionada e incluso contraria a los criterios de la Comisión técnica de expertos de la Ley de la memoria histórica.

Y se remite a la página web del Ministerio de Cultura, por entender que apoya la tesis de mantenimiento de lo que no muestra exaltación de la guerra civil o de la dictadura, cuando en este caso no se cumple con lo dispuesto en el artículo 15, e incluso el propio perito autor del informe aportado por la demandante manifiesta que no se conserva ningún signo, insignia, placa u otro objeto de exaltación de la sublevación militar, de la guerra civil o de la represión de la dictadura. Que conecta con dos monumentos representativos de la ciudad y la llaman la Cruz del Castro, no de los Caídos -aunque no discute ni niega que su significación original está clara-. Además manifiesta que no ha probado la demandante que actualmente sea objeto de exaltación de la sublevación militar, de la guerra civil o de la represión de la dictadura, por lo que resultaría inaplicable el artículo 15.1. Finalmente, que se trata de una cruz latina sin elementos fascistas, un símbolo religioso que trasciende de ideas políticas.

TERCERO.- A tenor de lo dispuesto en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, en su artículo 15, referido a los símbolos y monumentos públicos, "1. Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la

Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas.

2. Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurren razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley.

3. El Gobierno colaborará con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura a los efectos previstos en el apartado anterior.

4. Las Administraciones públicas podrán retirar subvenciones o ayudas a los propietarios privados que no actúen del modo previsto en el apartado 1 de este artículo".

Comienza la parte apelada haciendo referencia a la indebida aportación de pruebas en segunda instancia. Lo cierto es que no se acordó el recibimiento a prueba, mediante providencia de 1 de diciembre de 2014, porque no lo pidió ninguna de las partes. Las fotos que aporta la apelante van unidas a las alegaciones, incorporadas al cuerpo del recurso de apelación. Pero en cualquier caso lo que reflejan son hechos notorios que ponen de manifiesto el estado de la cruz. Y con respecto a las sentencias de otros juzgados, no son un medio de prueba sino que se tienen por aportadas a meros efectos ilustrativos.

Además refiere que se introducen alegaciones nuevas, prohibidas por el artículo 65.1 de la LRJCA. Realmente este precepto no se refiere al recurso de apelación, sino que expresamente dice que "1. En el acto de la vista o en el escrito de conclusiones no podrán plantearse cuestiones que no hayan sido suscitadas en los escritos de demanda y contestación", con referencia al procedimiento ordinario en primera instancia. En cualquier caso, sí que es cierto que el recurso de apelación ha de consistir en una crítica de la sentencia, de forma que aunque no cabrían argumentos sobre los que no haya podido existir un pronunciamiento en primera instancia, han de diferenciarse tales argumentos de lo que son argumentos en estrecha relación con lo resuelto en la sentencia, de forma que en lo que respecta a las imágenes del marino y soldado y emblemas a más de 30 metros de la cruz y que están desconectadas de esta, es algo que se aprecia simplemente en las fotografías; carece de relevancia la adopción de medidas en otras zonas de la ciudad, porque no constituye el objeto del recurso y no se trata de evaluar el grado de cumplimiento de la Ley de la memoria histórica por el concello demandado; careciendo de toda relevancia el informe sobre una cruz en Córdoba, que no es la aquí analizada.

Con respecto a la alegación referente a la Orden CUL/3190/2008, de 6 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 31 de

octubre de 2008, por el que se dictan instrucciones para la retirada de símbolos franquistas en los bienes de la Administración General del Estado y sus organismos públicos dependientes; ha de partirse de que se trata de una norma publicada en el BOE de 31 de 7 de noviembre de 2008, y que por consecuencia, y aunque el aquí analizado no sea un supuesto que entre dentro de su ámbito de aplicación, sí que puede ofrecer criterios o indicios en cuanto a la actuación seguida por el Estado en este tipo de supuestos. En este sentido, es importante que arranca de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, que es la que resulta de aplicación en este caso, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, y hace referencia a su artículo 15, conforme al cual las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomaran medidas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Como excepción para su aplicación se refiere a los símbolos que se encuentren en un bien calificado como Bien de Interés Cultural siempre que se den los supuestos que enumera -con significado histórico, disponiendo que solo se conservaran aquellos símbolos con significado histórico y arquitectónico y que estuvieran previstos en el proyecto original de construcción del inmueble, siempre y cuando estén incluidos en la propia declaración de Bien de Interés Cultural; con valor artístico o artístico-religioso, se conservaran aquellos símbolos con alto valor artístico o artístico-religioso y que formen parte del Bien de Interés Cultural y así haya sido reconocido en su declaración; y por criterios técnicos, especificando que se trata de supuestos en que el símbolo constituya un elemento fundamental de la estructura del inmueble cuya retirada pudiera poner en peligro la estabilidad del mismo o cualquier otro aspecto relativo a su adecuada conservación. Criterios o excepciones para cuya valoración remite a la Comisión Técnica de expertos constituida al efecto por el Ministerio de Cultura.

Realmente ha de partirse de que el recurso de apelación ha de constituir una crítica de la sentencia. Que carecen de relevancia, por no constituir el supuesto enjuiciado, las demás actuaciones que haya podido realizar el concello en la ciudad de retirada de monumentos. Tampoco tienen relevancia las medidas e informes referentes a otras ciudades. Con respecto al acuerdo del Pleno de 30 de junio de 1981 que acordó colocar una placa, no se acredita su existencia, es más, la parte apelada niega que se colocase. No se discute que nunca se realizó por el concello acto alguno en el monumento de desagravio o celebración de la democracia. Y en el informe pericial de la parte demandante se considera que el origen de la cruz no es de carácter religioso, que no es su significado ni se encuentra en terreno de la iglesia, ni intervino esta última en su colocación, por lo que no admite este valor como justificación de su mantenimiento; y que por su ubicación, estética y diseño arquitectónico se corresponde con la transmisión de valores propios del modelo falangista; los materiales, estructura y proporciones monumentales exaltan los valores de jerarquía, obediencia y virilidad, tradicionales de la

propaganda falangista contrapuestos a los valores democráticos; y que está en un lugar privilegiado de la ciudad, testimonio del triunfo de los vencedores en la guerra civil, considerando además que es memoria de la humillación para los vencidos; y que su historia y la memoria que atesora y ceremonias realizadas en el mismo impide que se pueda convertir en testimonio de reconciliación y de exaltación de los valores democráticos. Por consecuencia, avala la tesis de que supone la consolidación de la idea de que es testimonio del triunfo de los vencedores en la guerra civil y memoria de humillación para los vencidos y sus familias.

Pero partiendo de que carece de relevancia que se hayan sucedido diferentes partidos políticos en el gobierno municipal sin que retirasen la cruz porque no es hasta la Ley de la memoria histórica cuando se contiene la previsión legal objeto de discusión; y de que aun admitiendo que originariamente tuviera un significado de exaltación de la guerra civil y de la dictadura, no puede compartirse que hoy, una vez desaparecida toda la simbología fascista a que más arriba se hizo referencia -puesto que no se puede considerar que la tengan las figuras y símbolos representativas de los ejércitos-, siga teniendo ese componente de exaltación inicial, habiendo desaparecido su carga política, y puede ser contemplada como un elemento religioso, aunque no fuera su significado originario, puesto que es evidente que se trata de una cruz latina. Al margen de las manifestaciones del perito de la parte demandante, no se puede obviar que la cruz también refleja la persecución por razones políticas en un contexto histórico que no ha de ser olvidado para que no se repita, de forma que ha de conservarse esa memoria, pero no en el sentido de exaltación de los valores franquistas sino en el de que permita reflexionar sobre el pasado, una vez desaparecido el componente político inicial y dado el contexto político actual. Como ese aspecto de exaltación ha desaparecido, no se da la exigencia del artículo 15 antes transcrito. Y contemplada a día de hoy, al margen de las creencias superadas que motivaron su construcción, como muchos otros monumentos a lo largo de la historia de la humanidad, ha de llevar al conocimiento y reflexión por las generaciones presentes y futuras sobre un pasado ya superado pero que no ha de olvidarse, habiendo de considerarse representativo de los caídos de ambos bandos.

Por consecuencia, y con revocación de la sentencia apelada, procede la estimación del recurso de apelación.

CUARTO.- Sin imposición del pago de las costas procesales (artículo 139 de la LRJCA).

VISTOS los artículos citados y demás preceptos de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

que ESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Sr. Pardo Fabeiro, en nombre y representación del Concello de Vigo, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 2 de Vigo en autos de procedimiento ordinario n.º 282/2013, de fecha 4 de septiembre de 2014; y REVOCAMOS la sentencia apelada, con la consiguiente DESESTIMACIÓN del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Viguesa Pola Memoria Histórica Do 36.

Sin condena en costas.

Contra esta sentencia no cabe recurso ordinario alguno.

Devuélvase los autos al Juzgado de procedencia, junto con certificación y comunicación.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

VOTO PARTICULAR que formula la Ilma. Sra. Doña CRISTINA MARÍA PAZ EIROA.

Entiendo que el fallo debió ser confirmatorio de la sentencia apelada, fundada en Derecho. Disiento de la mayoría:

1.º. Es jurisprudencia reiterada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo a propósito del recurso de apelación que " el recurso de apelación no tiene por objeto reabrir un debate sobre la adecuación a Derecho del acto administrativo impugnado en primera instancia, sino el de revisar la sentencia que se pronunció sobre el mismo, obteniendo de esta forma la depuración de un resultado procesal obtenido con anterioridad (...)" - sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Sección 5.ª, de 29 de marzo de 2012, dictada en el recurso 3301/2009 -.

2.º. La sentencia pronunciada es clara, precisa, congruente y, en especial, motivada expresando los razonamientos (muchos) fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas así como a la aplicación e interpretación del derecho e incidiendo en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, ajustándose a las reglas de la lógica y de la razón. La sentencia da buen ejemplo de lo que el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ordena.

3.º. No hay Jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo interpretando lo dispuesto en la norma.

La sentencia apelada no se aparta de las de esta Sala de 21 de octubre de 2010 dictada en el procedimiento ordinario 4343/2010, de 15 de noviembre de 2012 dictada en el recurso de apelación 4229/2012, de 3 de mayo de 2012

dictada en el recurso de apelación 4347/2011 y de 5 de diciembre de 2012 dictada en el recurso de apelación 4104/2012.

4.º. La apelante argumenta que la cruz "por si mesma" no es hoy un monumento conmemorativo de exaltación de la guerra civil y la dictadura sino "un símbolo de orixe relixiosa que, mais de dous mil anos despois da súa implantación cultural, trascendeu, incluso, ás propias relixións cristiás (...) A Cruz do Castro só é unha cruz, elemento iconográfico plenamente arraigado na tradición da historia das culturas occidentais"; que "contrariamente ao que se sinala no fundamento xurídico sétimo da sentenza a lei da memoria histórica non recolle a protección dunha percepción subxectiva da memorial (sic) persoal":

4.º.1.º. Se critica la sentencia en su conjunto; no se critican los distintos elementos fácticos y jurídicos en que incide su motivación (insisto, abundante) de la sentencia; bastaría para la desestimación.

4.º.2.º. La sentencia no "sinala" que "a lei da memoria histórica recolle a protección dunha percepción subxectiva da memorial (sic) persoal"; me remito a lo que dice en el fundamento jurídico séptimo, y (la interpretación exige integración) a lo que dicen los fundamentos tercero al sexto y octavo, en particular, destaco las declaraciones relativas al mandato del artículo 15 y a su finalidad.

4.º.3. La Ley dice que las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura; "conmemorativas" -art. 15-, sin distinción.

La cruz -figura formada de dos líneas que se atraviesan o cortan perpendicularmente (significado RAE)- forma el conjunto monumental -agregado de varias cosas (significado RAE)-; aún antes, es la palabra con que es designado el conjunto -"un conjunto monumental promovido, proyectado y utilizado (...) con la finalidad de exaltación de la sublevación militar (...) y de la dictadura (...) en el que perdura el elemento principal que define su naturaleza y significado (la Cruz)", en términos de la sentencia, indiscutidos. En tal sentido, "A pesar de la retirada (...) de la simbología accesoria (...) no puede considerarse desvirtuada su naturaleza original, en cuanto permanece el elemento principal que definía y define la naturaleza del conjunto arquitectónico, esto es, la Cruz erigida con un significado (...)", también en términos de la sentencia.

Entiendo, como entendió el Juez, que la Cruz ha de ser retirada.

5.º. Porque, y así lo dice también la sentencia, así lo dispone la Ley -una ley del año 2007, destaco ahora-.

6.º. No corresponde a los Tribunales hacer más juicio.

EL FALLO DEBERÍA SER desestimatorio del recurso de apelación y confirmatorio de la sentencia recurrida en apelación.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente Dña. MARÍA AZUCENA RECIO GONZÁLEZ, al estar celebrando audiencia pública la Sección 002 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal Superior de Justicia, en el día de su fecha, que yo, Secretaria, certifico.

[http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1141359&utm_source=DD&utm_medium=email&nl=1&utm_campaign=3/6/2015&](http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1141359&utm_source=DD&utm_medium=email&nl=1&utm_campaign=3/6/2015)
(3 de junio de 2015)

[Volver al Índice](#)

Estados Unidos de Norteamérica

A. Sentencia de la Corte Marcial de la Marina de Estados Unidos, que considera como indisciplina el mantener una cita bíblica en el escritorio de una infante de marina, condenándola a una rebaja de rango (selección)⁹⁰.

Tribunal: United States Navy-Marine Corps Court of Criminal Appeals

Causa: NMCCA 201400150

Fecha: 26 de febrero de 2015

*United States v. Sterling
United States Navy-Marine Corps Court of Criminal Appeals
February 26, 2015, Decided
NMCCA 201400150*

UNITED STATES OF AMERICA v. MONIFA J. STERLING
LANCE CORPORAL (E-3), U.S. MARINE CORPS

Notice: THIS OPINION DOES NOT SERVE AS BINDING PRECEDENT, BUT MAY BE CITED AS PERSUASIVE AUTHORITY UNDER NMCCA RULE OF PRACTICE AND PROCEDURE 18.2.

Prior History: [*1] SPECIAL COURT-MARTIAL. Sentence Adjudged: 1 February 2014. Military Judge: Maj N.A. Martz, USMC. Convening Authority: Commanding Officer, Headquarters Group, II Marine Expeditionary Force, Camp Lejeune, NC. Staff Judge Advocate's Recommendation: LtCol G.W. Riggs, USMC.

Core Terms

signs, military, religious, sentence, wear, orders, discipline, misconduct, mistake of fact, chit, religion, specifications, workspace, exercise of religion, good order, limitations, medication, quotation, charges, exempt, desk, appointed, charlies, recommendations, disobeyed, biblical, factors, military purpose, assigned error, service member

Case Summary

Overview

HOLDINGS: [1]-Other than appellant's personal desire, there was no reason why she could not have taken the medication as prescribed, thus enabling her to report as ordered, and no member would have found any mistaken belief reasonable; [2]-The record supported the conclusion that appellant, by taping a biblical quote around her workstation, was placing what she believed to be personal reminders that those she considered adversaries could not harm her, and this did not trigger the Religious Freedom Restoration Act, 42 U.S.C.S. §

⁹⁰ El texto íntegro puede consultarse en nuestro sitio web <http://www.celir.cl/v2/Jurisprudencia/CorteMarcialEEUU.pdf>

2000bb; [3]-The orders to remove the signs were lawful because the signs could be interpreted as combative and could be seen as contrary to good order and discipline; [4]-The charges were not unreasonably multiplied given the evidence; [5]-Any erroneously admitted evidence did not substantially influence the adjudged sentence, and the misconduct was not minor.

Outcome

Judgment affirmed.

HN1 Whether a jury was properly instructed is a question of law the appellate court reviews de novo. "Mistake of fact" is a special defense and provides: If the ignorance or mistake goes to an element requiring premeditation, specific intent, willfulness, or knowledge of a particular fact, the ignorance or mistake need only have existed in the mind of the accused. If the ignorance or mistake goes to any other element requiring only general intent or knowledge, the ignorance or mistake must have existed in the mind of the accused and must have been reasonable under all the circumstances, R.C.M. 916(j)(1), Manual Courts-Martial (2012).

HN2 A military judge has a sua sponte duty to give a mistake of fact instruction when the defense is reasonably raised by the evidence, R.C.M. 920(e)(3), Manual Courts-Martial (2012). The defense is reasonably raised by the evidence when some evidence, without regard to its source or credibility, has been admitted upon which members might rely if they choose.

HN3 The failure to provide a required special instruction is constitutional error. The test for determining whether constitutional error was harmless is whether it appears beyond a reasonable doubt that the error complained of did not contribute to the verdict obtained. Stated differently, the test is: Is it clear beyond a reasonable doubt that a rational jury would have found the defendant guilty absent the error?

HN4 Failing to go to an appointed place of duty is a general intent crime. Therefore, any mistake of fact must be both honest and reasonable.

HN5 Mistake of fact involving willful disobedience to a noncommissioned officer need only have existed in the mind of the accused even if the mistake was unreasonable, R.C.M. 916(j)(1), Manual Courts-Martial (2012).

HN6 The appellate court reviews de novo the question of whether the military judge correctly determined that an order was lawful.

HN7 The Free Exercise Clause of the First Amendment to the Constitution indicates the Government cannot prohibit the free exercise of religion. This prohibition is codified, in part, in the Religious Freedom Restoration Act (RFRA), 42 U.S.C.S. § 2000bb, which prohibits the Government from placing a substantial burden on religious exercise without a compelling justification.

"Religious exercise" is defined to include any exercise of religion, whether or not compelled by, or central to, a system of religious belief, 42 U.S.C.S. §2000cc-5(7)(a).

HN8 Only beliefs rooted in religion are protected by the Free Exercise Clause, which, by its terms, gives special protection to the exercise of religion. Additionally, although broad, the definition of a "religious exercise" requires the practice be part of a system of religious belief, 42 U.S.C.S. §2000cc-5(7)(A). Personal beliefs, grounded solely upon subjective ideas about religious practices, will not suffice because courts need some reference point to assess whether the practice is indeed religious.

HN9 Military orders are presumed to be lawful and are disobeyed at the subordinate's peril, Manual Courts-Martial pt. IV, para. 14c(1)(d)(2)(a)(i) (2012). To sustain the presumption of lawfulness, the order must relate to military duty, which includes all activities reasonably necessary to accomplish a military mission, or safeguard or promote the morale, discipline, and usefulness of members of a command and directly connected with the maintenance of good order in the service. To be lawful, an order must (1) have a valid military purpose, and (2) be clear, specific, and narrowly drawn. The lawfulness of an order is a legal question for the military judge to decide at trial, and the appellate court reviews the trial judge's decision de novo.

HN10 Maintaining discipline and morale in the military work center could very well require that the work center remain relatively free of divisive or contentious issues such as personal beliefs, religion, politics, etc., and a command may act preemptively to prevent this detrimental effect.

HN11 What is substantially one transaction should not be made the basis for an unreasonable multiplication of charges against one person, R.C.M. 307(c) (4), Manual Courts-Martial (2012). The appellate court reviews five non-exclusive factors to determine whether there is an unreasonable multiplication of charges. These factors are weighed together, and one or more factors may be sufficiently compelling.

HN12 In the absence of a defense objection, the appellate court reviews a claim of erroneous admission of presentencing evidence for plain error. Plain error is established when: (1) an error was committed; (2) the error was plain, or clear, or obvious; and (3) the error resulted in material prejudice to substantial rights. The appellant has the burden of persuading the court that the three prongs of the plain error test are satisfied.

HN13 Pursuant to R.C.M. 1001(b)(4), Manual Courts-Martial (2012), trial counsel may present sentencing evidence, as to any aggravating circumstances directly relating to or resulting from the offenses of which the accused has been found guilty. Evidence in aggravation includes, but is not limited to, evidence of significant adverse impact on the mission, discipline, or

efficiency of the command directly and immediately resulting from the accused's offense. The phrase "directly relating to or resulting from the offenses" imposes a higher standard than mere relevance. The appellant is not responsible for a never-ending chain of causes and effects. Instead, such evidence is admissible on sentence only when it shows the specific harm caused by the defendant.

HN14 The time it takes to process a court martial, at least through referral, is solely within the Government's control. Any adverse perceptions that result from that process are not appropriately attributed to the appellant. To conclude otherwise would permit the trial counsel to argue to the sentencing authority at trial that the accused may be punished more harshly for the inconvenience of the trial. This would be akin to allowing comment upon the right to plead not guilty or remain silent, and the court cannot countenance such an unjust outcome.

HN15 Erroneous admission of evidence during the sentencing portion of a court-martial causes material prejudice to an appellant's substantial rights only if the admission of the evidence substantially influenced the adjudged sentence. To make this determination, the appellate court weighs the actors on both sides. Members are permitted to consider any evidence properly introduced on the merits before findings, R.C.M. 1001(f)(2), Manual Courts-Martial (2012).

HN16 It is well-settled that when defense counsel advocates for a punitive discharge, counsel must make a record that such advocacy is pursuant to the accused's wishes.

HN17 Failure to adequately make a record of the appellant's wishes does not per se, require an appellate court to set aside a court-martial sentence. Instead, the appellate court must assess the impact of the error on the approved sentence to determine whether sufficient prejudice existed, for where the facts of a given case compel a conclusion that a bad-conduct discharge was reasonably likely, the appellate court does not normally order a new sentence hearing.

HN18 To accomplish its mission the military must foster instinctive obedience, unity, commitment, and esprit de corps.

Counsel: For Appellant: CAPT Tierney Carlos, JAGC, USN.

For Appellee: LCDR Keith Lofland, JAGC, USN; LT Amy Freyermuth, JAGC, USN.

Judges: Before J.A. FISCHER, K.M. MCDONALD, D.C. KING
Appellate Military Judges. Senior Judge FISCHER and Judge MCDONALD concur.

(...)

Background

In May of 2013, the appellant's duties included sitting at a desk and utilizing a computer to assist Marines experiencing issues with their Common Access Cards. The appellant printed three copies of the biblical quote "no weapon formed against me shall prosper" on paper in 28 point font or smaller. The appellant then cut the quotes to size and taped one along the top of the computer tower, one above the computer monitor on the desk, and one above the in-box. The appellant testified that she is a Christian and that she posted the quotation in three places to represent the Christian trinity. At trial, the parties referred to these pieces of paper as "signs." The signs were large enough for those walking by her desk to read them.

On or about 20 May 2013, Staff Sergeant (SSgt) Alexander ordered the appellant to remove the signs. The appellant refused and the SSgt removed them herself. The next day, the SSgt saw the signs had been replaced and again ordered the appellant to remove them. When the signs had not been removed by the end of the day, SSgt Alexander again removed them herself.

In August of 2013, the appellant was on limited duty [*4] for a hip injury and wore a back brace and TENS unit during working hours.⁹¹ The medical documentation (chit) included a handwritten note stating that "[w]earing charlies & TENS unit⁹² will be difficult, consider allowing her to not wear charlies."⁹³ The uniform of the day on Fridays for the appellant's command was the service "C" uniform and when the appellant arrived at work on a Friday in her camouflage utility uniform, SSgt Morris ordered her to change into service "C" uniform. The appellant refused, claiming her medical chit exempted her from the uniform requirement. After speaking with medical, SSgt Morris again ordered the appellant to change into the service "C" uniform. The appellant again refused. SSgt Morris then brought the appellant to First Sergeant (1stSgt) Robinson who repeated the order. Again, the appellant refused.

On 12 September 2013, 1stSgt Robinson ordered the appellant to report to the Pass and Identification building at the front gate on Sunday, 15 September 2013, from 1600 until approximately 1930 to [*5] help distribute vehicle passes to family members of returning deployed service members. This was a duty the appellant had performed before. The appellant refused, showing 1stSgt Robinson a separate medical chit that she had been provided to treat a "stress reaction." This chit recommended that the appellant be exempted from

⁹¹ TENS refers to a small machine that transmits pulses to the surface of the skin and along nerve strands.

⁹² "Charlies" refers to the Marine service "C" uniform.

⁹³ Defense Exhibit B.

standing watch and performing guard duty.⁹⁴ Additionally, on 03 September 2013, the appellant was prescribed a medication to help prevent the onset of migraine headaches.⁹⁵

On 13 Sept 2013, the appellant was ordered to report to Major (Maj) Flatley. When she did so, Maj Flatley ordered the appellant to report to Pass and Identification on 15 September 2103 to issue vehicle passes and ordered her to take the passes with her. The appellant told Maj Flatley that she would not comply with the order to report and refused to accept the passes. On 15 September 2013, the appellant did not report as ordered.

Additional facts necessary for the resolution of each assignment of error are developed below.

(...)

Legality of Order to Remove Signs

Next, the appellant attacks her convictions for failing to obey the lawful orders to remove the signs. First, the appellant argues that the order violated the appellant's right to exercise her religion as guaranteed under the First Amendment to the Constitution. Second, the appellant asserts that the order lacked a valid military purpose.

At trial, the appellant personally raised a challenge to the legality of the order to remove the signs on grounds that it was "unlawful under the grounds of my religion."⁹⁶ She testified that the three signs represented the trinity and were a "personal . . . mental reminder to me when I come to work, okay. You don't know why these people are picking on you."⁹⁷ After hearing evidence and argument, the military judge ruled that the orders were lawful in that they were "related to a specific military duty."⁹⁸ Specifically, the military judge ruled: "the orders were given because the [*12] workspace in which the accused placed the signs was shared by at least one other person[,] [t]hat other service members come to [the] accused's workspace for assistance at which time they could have seen the signs."⁹⁹ The military judge determined that the signs' quotations, "although . . . biblical in nature . . . could easily be seen as contrary to good order and discipline."¹⁰⁰ Finally, without supporting findings of fact or conclusions of law, the military judge ruled that the order to remove the signs "did not interfere with the accused's private rights or personal affairs in anyway [sic]" and denied the appellant's motion to dismiss.¹⁰¹

⁹⁴ *DE A.*

⁹⁵ *Appellate Exhibit XXXIX.*

⁹⁶ *Id. at 280.*

⁹⁷ *Id. at 310.*

⁹⁸ *Id. at 362.*

⁹⁹ *Id.*

¹⁰⁰ *Id.*

¹⁰¹ *Id.*

HN6 This court reviews de novo the question of whether the military judge correctly determined that an order was lawful.
United States v. New, 55 M.J. 95, 106 (C.A.A.F. 2001).

Religious Freedom Restoration Act

HN7 The Free Exercise Clause of the First Amendment to the Constitution indicates the Government cannot "prohibit[] the free exercise" of religion. This prohibition is codified, in part, in the Religious Freedom Restoration Act (RFRA), 42 U.S.C. § 2000bb, which prohibits the Government from placing a substantial burden on religious exercise without a compelling justification. 42 U.S.C. § 2000bb(a)(3). "Religious exercise" is defined to include "any exercise of religion, whether or not compelled by, or central [*13] to, a system of religious belief." 42 U.S.C. §2000cc-5(7)(A).

Accordingly, in order to invoke the protection of the RFRA, the appellant must first demonstrate that the act of placing the signs on her workstation is tantamount to a "religious exercise." We begin our analysis of this assignment of error by recognizing the deference courts pay to questions regarding the importance of religious exercises to belief systems. See *Employment Div. v. Smith*, 494 U.S. 872, 887, 110 S. Ct. 1595, 108 L. Ed. 2d 876 (1990) ("Judging the centrality of different religious practices is akin to the unacceptable business of evaluating the relative merits of differing religious claims." (citation and internal quotation marks omitted)); *Hernandez v. Comm'r*, 490 U.S. 680, 699, 109 S. Ct. 2136, 104 L. Ed. 2d 766 (1989) ("It is not within the judicial ken to question the centrality of particular beliefs or practices to a faith, or the validity of particular litigants' interpretations of those creeds."); *Frazee v. Ill. Dep't of Employment Sec.*, 489 U.S. 829, 834, 109 S. Ct. 1514, 103 L. Ed. 2d 914 (1989) (explaining that the fact some Christian denominations do not "compel[]" their adherents to refuse Sunday work does not diminish the constitutional protection the belief enjoys); *Thomas v. Review Bd. of Ind. Employment Sec. Div.*, 450 U.S. 707, 716, 101 S. Ct. 1425, 67 L. Ed. 2d 624 (1981) ("Courts are not arbiters of scriptural interpretation"); *Fowler v. Rhode Island*, 345 U.S. 67, 70, 73 S. Ct. 526, 97 L. Ed. 828 (1953) ("[I]t is no business of courts to say that what is a religious practice or activity for one group is not religion under the protection of the First Amendment.").

However, that is [*14] not to say that there are no limitations, *for***HN8** "[o]nly beliefs rooted in religion are protected by the Free Exercise Clause, which, by its terms, gives special protection to the exercise of religion." *Thomas*, 450 U.S. at 713.

Additionally, although broad, we believe the definition of a "religious exercise" requires the practice be "part of a system of religious belief." 42 U.S.C. §2000cc-5(7)(A). Personal beliefs, grounded solely upon subjective ideas about religious practices, "will not suffice" because courts need some reference point to assess whether the practice is indeed religious. See *Wisconsin v. Yoder*, 406 U.S. 205, 215-16, 92 S. Ct. 1526, 32 L. Ed. 2d 15 (1972) (recognizing for purposes of a First Amendment inquiry that individuals

are not free to define religious beliefs solely based upon individual preference). For these reasons, we reject the appellant's invitation to define "religious exercise" as any action subjectively believed by the appellant to be "religious in nature."¹⁰²

Here, the appellant taped a biblical quotation in three places around her workstation, organized in a fashion to "represent the trinity." While her explanation at trial may invoke religion, there is no evidence that posting signs at her workstation was an "exercise" of that religion in the sense that such action was "part of a [*15] system of religious belief."

Indeed, the appellant never told her SSgt that the signs had a religious connotation and never requested any religious accommodation to enable her to display the signs.¹⁰³ Instead, the record supports the conclusion that the appellant was simply placing what she believed to be personal reminders that those she considered adversaries could not harm her. Such action does not trigger the RFRA.

Valid Military Purpose

The appellant also argues that the military judge erred by finding the orders to remove the signs had a valid military purpose.

HN9 Military orders are presumed to be lawful and are disobeyed at the subordinate's peril. Manual for Courts-Martial, United States (2012 ed.), Part IV, P 14c(1)(d)(2)(a)(i). To sustain the presumption of lawfulness, "the order must relate [*16] to military duty, which includes all activities reasonably necessary to accomplish a military mission, or safeguard or promote the morale, discipline, and usefulness of members of a command and directly connected with the maintenance of good order in the service." United States v. Moore, 58 M.J. 466, 467-68 (C.A.A.F. 2003) (quoting MCM, Part IV, P 14c(2)(a)(iii)). To be lawful, an order must (1) have a valid military purpose, and (2) be clear, specific, and narrowly drawn. *Id.* at 468; United States v. Womack, 29 M.J. 88, 90 (C.M.A. 1989). The lawfulness of an order is a legal question for the military judge to decide at trial, *New*, 55 M.J. at 105, and this court reviews the trial judge's decision *de novo*, *Moore*, 58 M.J. at 467.

After receiving evidence and hearing argument, the military judge found that the "orders were given because the workspace in which the accused placed the signs was shared by at least one other person[,] [t]hat other service members came to the accused's workspace for assistance at which time they could have seen the signs. The court also finds that the signs, although the verbiage . . . [was] biblical in nature, read something to the effect of no weapon found [sic] against me shall prosper ... which could easily be seen as contrary to good order and discipline."¹⁰⁴ Although these meager findings of

¹⁰² *Appellant's Brief of 8 Aug 2014 at 26.*

¹⁰³ *Secretary of the Navy Instruction 1730.8B (Ch. 1, 28 Mar 2012) regulates the accommodation of religious practices in the Department of the Navy and requires requests for religious accommodations be submitted in writing to the command. We leave for another day what impact, if any, the failure to first request an accommodation will have on the lawfulness of an order to refrain from engaging in one.*

¹⁰⁴ *Record at 362.*

fact fail to illuminate why [*17] the military judge believed the signs verbiage "could easily be seen as contrary to good order and discipline[,]" we are able to glean from the record sufficient information to affirm his ruling.

First, the military judge found that the signs verbiage was biblical in nature, that the desk was shared with another Marine, and the signs were visible to other Marines who came to the appellant's desk for assistance. The implication is clear—the junior Marine sharing the desk and the other Marines coming to the desk for assistance would be exposed to biblical quotations in the military workplace. It is not hard to imagine the divisive impact to good order and discipline that may result when a service member is compelled to work at a government desk festooned with religious quotations, especially if that service member does not share that religion. The risk that such exposure could impact the morale or discipline of the command is not slight. HN10 Maintaining discipline and morale in the military work center could very well require that the work center remain relatively free of divisive or contentious issues such as personal beliefs, religion, politics, etc., and a command may act [*18] preemptively to prevent this detrimental effect. To the extent that is what the military judge determined to be the case, we concur.¹⁰⁵

Second, examination of this record indicates the existence of a contentious relationship between the appellant and her command, even prior to the charged misconduct. In fact, the appellant testified that her purpose for placing the signs was to encourage her during those difficult times and that her SSgt ordered her to remove the signs because the SSgt didn't "like their tone."¹⁰⁶ While locked in an antagonistic relationship with her superiors--a relationship surely visible to other Marines in the unit--placing visual reminders at her shared workspace that "no weapon formed against me shall prosper" could certainly undercut good order and discipline. When considered in context, we find that the verbiage in these signs could be interpreted as combative and agree with the military judge that the signs placement in the shared workspace could therefore "easily be seen as contrary to good order and discipline."¹⁰⁷ For this reason as well, the orders to remove the signs were lawful.

¹⁰⁵ We are sensitive to the possible implication that such orders may have on the service member's Free Exercise and Free Speech rights under the First Amendment to the Constitution and we have carefully considered the appellant's rights thereunder. While not convinced that displaying religious text at a shared government workstation would be protected even in a civilian federal workplace (see e.g. *Berry v. Dep't of Soc. Servs.*, 447 F.3d 642 (9th Cir. 2006) (holding that a state may prohibit an employee from posting religious signs in his workspace when clients routinely entered that workspace for purposes of consulting with an agent of the state), it is well-settled that "review of military regulations challenged on First Amendment grounds is far more deferential than constitutional review of similar laws or regulations designed for civilian society[,]" *Goldman v. Weinberger*, 475 U.S. 503, 507, 106 S. Ct. 1310, 89 L. Ed. 2d 478 (1986). See also, *United States v. Brown*, 45 M.J. 389, 396 (C.A.A.F. 1996) ("the right of free speech in the armed services . . . must be brought into balance with the paramount consideration of providing an effective fighting force for the defense of our Country."). Moreover, in *Parker v. Levy*, 417 U.S. 733, 759, 94 S. Ct. 2547, 41 L. Ed. 2d 439 (1974), the Supreme Court held the military may restrict the service member's right to free speech in peace time because [*19] speech may "undermine the effectiveness of response to command." We apply these principles here and remain satisfied that the orders were lawful.

¹⁰⁶ Record at 312.

¹⁰⁷ *Id.* at 362.

(...)

HN16 It is well-settled that when defense counsel advocates for a punitive discharge, "counsel must make a record that such advocacy is pursuant to the accused's wishes." *United States v. Pineda*, 54 M.J. 298, 301 (C.A.A.F. 2001) (internal quotation marks and citations omitted).

Here, the record is silent in this regard. However, **HN17** failure to adequately make a record of the appellant's wishes "does not per se, require an appellate court to set aside a court-martial sentence." *Id.* Instead, we must assess the impact of the error on the approved sentence to determine whether sufficient prejudice existed, for "where the facts of a given case compel a conclusion that a bad-conduct discharge was reasonably likely, we do not normally order a new sentence hearing." *Id.* (citation omitted).

The appellant's misconduct was not minor. As the Supreme Court has recognized, **HN18** "to accomplish its mission the military must [*30] foster instinctive obedience, unity, commitment, and esprit de corps." *Goldman v. Weinberger*, 475 U.S. 503, 507, 106 S. Ct. 1310, 89 L. Ed. 2d 478 (1986). The members and convening authority were presented with an appellant who brazenly scoffed at this requirement in a manner that adversely impacted the good order and discipline of this unit. Lacking evidence of rehabilitative potential, we find this record amply supports the reasonable likelihood that a bad-conduct discharge would have been awarded and approved notwithstanding this error.

Conclusion

The findings and the sentence as approved by the convening authority are affirmed.

Senior Judge FISCHER and Judge MCDONALD concur.

Reporter
2015 CCA LEXIS 65
Michael Berry
© 2015 Liberty Institute
2 de marzo de 2015

<https://www.libertyinstitute.org/file/United-States-v.-Sterling---Opinion---LEXIS.pdf>
(5 de junio de 2015)

[Volver al Índice](#)

Apelación presentada ante la Corte de Apelaciones para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, patrocinada por Liberty Institute¹⁰⁸ (selección¹⁰⁹)

*Tribunal: United States Court of Appeals for The Armed Forces
Causa: USCA Dkt. No. 15-0510/MC*

IN THE UNITED STATES COURT OF APPEALS
FOR THE ARMED FORCES

UNITED STATES,

Appellee

v.

Monifa J. STERLING
Lance Corporal (E-3)
U. S. Marine Corps,
Appellant

SUPPLEMENT TO PETITION FOR GRANT
OF REVIEW

Crim.App. Dkt. No. 201400150

USCA Dkt. No. 15-0510/MC

TO THE JUDGES OF THE UNITED STATES COURT OF APPEALS
FOR THE ARMED FORCES:

HIRAM S. SASSER, III
(pro hac vice)
MICHAEL D. BERRY
CAAF Bar No. 34828
Liberty Institute
2001 W. Plano Pkwy, Ste 1600
Plano, TX 75075
(972)941-4445
mberry@libertyinstitute.org

PAUL D. CLEMENT
(pro hac vice)
GEORGE W. HICKS, JR.
(pro hac vice)
Bancroft PLLC
1919 M Street NW, Ste 470
Washington, DC 20036
(202) 234-0090
pclement@bancroftpllc.com

TIERNY M. CARLOS
Captain, JAGC, USN
CAAF Bar No. 35977
Appellate Defense Division
Navy-Marine Corps Appellate
Review Activity
1254 Charles Morris St, SE
Bldg 58, Ste 100
Washington Navy Yard, DC
20374
(202) 685-7299

¹⁰⁸ Liberty Institute es una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es defender y restaurar la libertad religiosa en Estados Unidos. Para mayor información, puede consultarse su sitio web www.libertyinstitute.org

¹⁰⁹ El fallo del recurso de apelación se encuentra pendiente.

tierney.carlos@navy.mil

TABLE OF CONTENTS

Table of Cases, Statutes, and Other Authorities

Issues Presented

Statement of Statutory Jurisdiction

Statement of the Case

Statement of Facts

Reasons for Granting Review

I. THE SUPREME COURT HAS HELD THAT THE RELIGIOUS FREEDOM RESTORATION ACT OF 1993 (RFRA) PROVIDES "VERY BROAD PROTECTION" FOR RELIGIOUS LIBERTY. THE NMCCA, HOWEVER, CONSTRUED THE TERM "EXERCISE OF RELIGION" IN RFRA NARROWLY, HOLDING THAT RFRA ONLY APPLIES TO CONDUCT THAT IS "PART OF A SYSTEM OF RELIGIOUS BELIEF" AND CATEGORICALLY DOES NOT APPLY TO CONDUCT A PERSON SUBJECTIVELY BELIEVES TO BE "RELIGIOUS IN NATURE." THE NMCCA ERRED IN NARROWLY CONSTRUING "EXERCISE OF RELIGION" AND THUS FAILING TO APPLY RFRA.

II. APPELLANT'S UNCONTRADICTED TESTIMONY ESTABLISHED THAT SHE POSTED THREE SMALL COPIES OF A BIBLICAL QUOTATION AT HER WORKSPACE TO INVOKE THE PROTECTION OF THE CHRISTIAN CONCEPT OF THE "TRINITY." EVEN UNDER THE NMCCA'S IMPROPERLY NARROW VIEW OF RFRA, APPELLANT'S CONDUCT IS AN "EXERCISE OF RELIGION" SUCH THAT THE NMCCA SHOULD HAVE APPLIED RFRA

III. THE NMCCA HELD THAT ORDERS TO REMOVE THE BIBLICAL QUOTATIONS HAD A VALID MILITARY PURPOSE BECAUSE IT IS "NOT HARD TO IMAGINE" THAT POTENTIAL EXPOSURE TO THE QUOTATIONS "MAY RESULT" IN ADVERSE IMPACT TO ORDER AND DISCIPLINE, AND THE PARTICULAR QUOTATION "COULD BE" INTERPRETED AS COMBATIVE, DESPITE NO EVIDENCE THAT ANY MARINE WAS IN FACT DISTRACTED OR DISMAYED BY THE QUOTATIONS. SUCH SPECULATION DOES NOT SUPPORT A VALID MILITARY PURPOSE FOR THE ORDERS TO REMOVE THE BIBLICAL QUOTATIONS

Conclusion

Certificate of Filing and Service

Certificate of Compliance

(...)

Issues Presented

I.

THE SUPREME COURT HAS HELD THAT THE RELIGIOUS FREEDOM RESTORATION ACT OF 1993 (RFRA) PROVIDES "VERY BROAD PROTECTION" FOR RELIGIOUS LIBERTY. THE NMCCA, HOWEVER, CONSTRUED THE TERM "EXERCISE OF RELIGION" IN RFRA NARROWLY, HOLDING THAT RFRA ONLY APPLIES TO CONDUCT THAT IS "PART OF A SYSTEM OF RELIGIOUS BELIEF" AND CATEGORICALLY DOES NOT APPLY TO CONDUCT A PERSON SUBJECTIVELY BELIEVES TO BE "RELIGIOUS IN NATURE." DID THE NMCCA ERR IN NARROWLY CONSTRUING "EXERCISE OF RELIGION" AND THUS FAILING TO APPLY RFRA?

II.

APPELLANT'S UNCONTRADICTED TESTIMONY ESTABLISHED THAT SHE POSTED THREE SMALL COPIES OF A BIBLICAL QUOTATION AT HER WORKSPACE TO INVOKE THE PROTECTION OF THE CHRISTIAN CONCEPT OF THE "TRINITY." EVEN UNDER THE NMCCA'S IMPROPERLY NARROW VIEW OF RFRA, WAS APPELLANT'S CONDUCT AN "EXERCISE OF RELIGION" SUCH THAT THE NMCCA SHOULD HAVE APPLIED RFRA?

III.

THE NMCCA HELD THAT ORDERS TO REMOVE THE BIBLICAL QUOTATIONS HAD A VALID MILITARY PURPOSE BECAUSE IT IS "NOT HARD TO IMAGINE" THAT POTENTIAL EXPOSURE TO THE QUOTATIONS "MAY RESULT" IN ADVERSE IMPACT TO ORDER AND DISCIPLINE, AND THE PARTICULAR QUOTATION "COULD BE" INTERPRETED AS COMBATIVE, DESPITE NO EVIDENCE THAT ANY MARINE WAS IN FACT DISTRACTED OR DISMAYED BY THE QUOTATIONS. DOES SUCH SPECULATION SUPPORT A VALID MILITARY PURPOSE FOR THE ORDERS TO REMOVE THE BIBLICAL QUOTATIONS?

Statement of Statutory Jurisdiction

Because the convening authority approved a sentence that included a punitive discharge, the U.S. Navy-Marine Corps Court of Criminal Appeals (NMCCA) had jurisdiction under Article 66(b)(1), Uniform Code of Military Justice. 10 U.S.C. §866(b)(1). This Court, therefore, has jurisdiction under Article 67, UCMJ. Id. §867.

Statement of the Case

A Special Court-Martial, consisting of officer and enlisted members, found Lance Corporal (LCpl) Sterling, contrary to her pleas, guilty of failing to go to her appointed place of duty, disrespect towards a superior commissioned officer, and four specifications of disobeying the lawful order of a noncommissioned officer in violation of Articles 86, 89 and 91, UCMJ, respectively. See id. §§866, 886, 889, 891.



On February 1, 2014, the members sentenced LCpl Sterling to a bad-conduct discharge and reduction to pay grade E-1. (R. at 428.) On April 2, 2014, the Convening Authority approved the sentence, and, except for the punitive discharge, ordered it executed. Special Court-Martial Order No. M14-07, 2 Apr 2014.

On February 26, 2015, the NMCCA affirmed the findings and the sentence as approved by the Convening Authority. See *United States v. Sterling*, No. 201400150, 2015 WL 832587 (N-M. Ct. Crim. App. Feb. 26, 2015). LCpl Sterling petitioned this Court for review on April 24, 2015.

Statement of Facts

LCpl Sterling's Posting of the Biblical Quotations, and SSgt Alexander's Orders to Remove Them

In May 2013, the relevant period in question, LCpl Sterling was assigned to the Communications (S-6) section of the 8th Communications Battalion, under the supervision of Staff Sergeant (SSgt) Alexander, her Staff Non-Commissioned Officer in Charge (SNCOIC). (R. at 180.) During that assignment, LCpl Sterling's duties included sitting at a desk and utilizing a computer to assist Marines experiencing issues with their Common Access Cards. Sterling, slip op. at 2.

LCpl Sterling self-identifies as a Christian and as a "religious person." (R. at 270, 307, 310.) While working in S- 6, LCpl Sterling taped three small pieces of paper around her workspace, each containing the same printed quotation drawn from the Bible: "No weapon formed against me shall prosper." (R. at 308.)¹¹⁰ LCpl Sterling regards the Bible "as a religious text" and acknowledged that the quotation was drawn from "scripture." (R. at 270.) In each instance, LCpl Sterling printed the quotation on one line of 8-1/2 x 11-inch paper, with the paper cut away so that only the printed text remained. (R. at 308-09.) Two of the quotations were printed in 28-point font, and the third was printed in a smaller font. (R. at 308-09.)

LCpl Sterling taped the quotation in the smaller font above her computer screen. She taped the other two on the side of her computer tower and along the top shelf of her incoming mailbox. (R. at 308-09.) LCpl Sterling made and posted three copies of the quotation around her workspace to reflect the "trinity," i.e., the Christian belief of three persons in one God. (R. at 307, 310.) She testified that she "did a trinity" to "have [the] protection of three around me" in response to what she considered to be harassment by fellow Marines. (R. at 307, 310.) The quotations were "of a religious nature" and "purely personal" to her; they were "only for [her]" and not intended to "send a message to anyone but" herself. (R. at 270, 310.) As such, LCpl Sterling taped the quotations so that they were primarily visible only to her, and not others. (R. at 310.)

¹¹⁰ *The quotation comes from Isaiah 54:17. See, e.g., King James Bible ("No weapon that is formed against thee shall prosper."); American King James Version ("No weapon that is formed against you shall prosper."). During trial, the parties and court referred to the printed quotations as "signs."*

On or about May 20, 2013, SSgt Alexander observed the quotations and ordered LCpl Sterling to remove them. (R. at 181.) At the end of the day, SSgt Alexander noticed that LCpl Sterling had not removed the quotations, and she removed them herself and threw them in the trash. (R. at 181.) The next day, upon discovering that LCpl Sterling had reposted the quotations, SSgt Alexander again ordered LCpl Sterling to remove them. (R. at 181.) When LCpl Sterling did not, SSgt Alexander again removed the quotations herself. (R. at 181-82.)

According to LCpl Sterling, SSgt Alexander said that she wanted the quotations removed because she did not “like their tone.” (R. at 312, 340.) LCpl Sterling added that SSgt Alexander’s exact order was to “take that S-H-I-T off your desk or remove it or take it down.” (R. at 312.) For her part, the only reason SSgt Alexander gave for why the quotations “needed to be removed” was that LCpl Sterling shared her desk with another junior Marine. (R. at 181.) LCpl Sterling testified, however, that she did not share a desk with anyone else in May 2013; she only started sharing a desk afterward, when she was transferring out of S-6 and another Marine was transferring in. (R. at 306, 311.)¹¹¹ In any event, neither SSgt Alexander nor any other witness testified that any Marine (including the Marine who purportedly shared LCpl Sterling’s desk) was ever distracted, annoyed, or agitated by—or even saw—the quotations.

Indeed, the only witnesses who testified on the subject—all of whom visited LCpl Sterling in her workspace in May 2013—stated that they were never distracted, annoyed, or agitated by anything on or around LCpl Sterling’s desk during that time. (R. at 217, 233, 256.)¹¹²

The Military Judge’s Verbal Ruling

At trial, LCpl Sterling moved to dismiss the specifications alleging that she willfully disobeyed SSgt Alexander’s orders to remove the Bible quotations. (R. at 266.) LCpl Sterling argued that SSgt Alexander’s orders were unlawful because they violated her right to free exercise of religion and lacked a valid military purpose. (R. at 280, 288.) Among other things, LCpl Sterling invoked Department of Defense Instruction (DODI) 1300.17, Accommodation of Religious Practices within the Military Services. (R. at 271; Appellate Exhibit (AE) XXXVI.)¹¹³

The military judge denied the motion to dismiss from the bench, issuing no written decision. (R. at 362.) The judge acknowledged that the quotations “were biblical in nature” and contained “religious language.” (R. at 362.) But he concluded that the order was lawful because, in his view, LCpl Sterling’s workspace “was shared by at least one other person,” and “other service

¹¹¹ SSgt Alexander never identified the Marine who purportedly shared LCpl Sterling’s desk, and the Government did not call that Marine as a witness.

¹¹² The military judge prohibited LCpl Sterling from testifying whether she had received any comments about the quotations from others. (R. at 310.) He also prohibited LCpl Sterling from asking SSgt Alexander whether she had received any comments about them. (R. at 184.)

¹¹³ In January 2014, the DOD revised DODI 1300.17 to expressly incorporate the Religious Freedom Restoration Act of 1993 (RFRA), 42 U.S.C. §§2000bb et seq.

members” who “came to [LCpl Sterling’s] workspace for assistance ... could have seen the signs.” (R. at 362.)

Without reference to any authority, the military judge concluded that the orders “did not interfere with [LCpl Sterling’s] private rights or personal affairs in any way.” (R. at 362.) The military judge instructed the court-martial members that, as a matter of law, SSgt Alexander’s orders to remove the quotations were lawful. (R. at 368.) The members convicted LCpl Sterling of disobeying SSgt Alexander’s orders. (R. at 1- 2.)¹¹⁴

The NMCCA’s Decision

LCpl Sterling appealed to the NMCCA, again arguing that SSgt Alexander’s orders to remove the Biblical quotations were unlawful because they violated her right to free exercise of religion and lacked a valid military purpose. Among other things, she raised RFRA and DODI 1300.17 as potential defenses to the charges of which she was convicted.

The NMCCA affirmed LCpl Sterling’s convictions and sentence, holding, in relevant part, that SSgt Alexander’s orders were lawful. Sterling, slip op. at 7-11. Turning first to whether the orders violated LCpl Sterling’s religious freedom, the court stated that “to invoke the protection of the RFRA,” LCpl Sterling “must first demonstrate that the act of placing the signs on her workstation is tantamount to a ‘religious exercise.’” Id. at 8 (quoting 42 U.S.C. §2000cc- 5(7)(A)). The court acknowledged the “deference courts [must] pay to questions regarding the importance of religious exercises to belief systems.” Id. But it nevertheless concluded that “the definition of a ‘religious exercise’ requires the practice be ‘part of a system of religious belief.’” Id. (quoting 42 U.S.C. §2000cc-5(7)(A)). In the court’s view, “Personal beliefs, grounded solely upon subjective ideas about religious practices, will not suffice because courts need some reference point to assess whether the practice is indeed religious.” Id. (quotation marks omitted). Thus, the court rejected LCpl Sterling’s “invitation to define ‘religious exercise’ as any action subjectively believed by the appellant to be ‘religious in nature.’” Id. at 8-9.

The NMCCA acknowledged that LCpl Sterling had “taped a biblical quotation in three places around her workstation, organized in a fashion to represent the trinity,” and it acknowledged that LCpl Sterling had “invoke[d] religion” to explain the posting. Id. at 9. The court nonetheless held that there was “no evidence that posting [the] signs at her workstation was an ‘exercise’ of that religion in the sense that such action was ‘part of a system of religious belief.’” Id.

In the court’s view, LCpl Sterling had simply posted “what she believed to be personal reminders that those she considered adversaries could not harm her.” Id. Such conduct, the court believed, “does not trigger the RFRA.” Id. Accordingly, the court did not address whether the orders to remove the

¹¹⁴ The members also convicted LCpl of several other charges not at issue in this petition (failing to go to her appointed place of duty, disrespect toward a superior commissioned officer, and two specifications of disobeying the lawful order of a noncommissioned officer) while acquitting her of one charge (making a false official statement). (R. at 1-2.)

quotations advanced a compelling governmental interest or were the least restrictive means of advancing that interest.

The NMCCA next held that the orders had a valid military purpose. The court acknowledged the “meager findings of fact” by the military judge on this question. *Id.* at 10. It nevertheless concluded that the orders were valid because the other Marine purportedly sharing LCpl Sterling’s desk and other Marines coming to the desk “would be exposed to biblical quotations in the military workplace.” *Id.* The court added that the specific Biblical quotation in question—“no weapon formed against me shall prosper”—“could be interpreted as combative” and thus “could certainly undercut good order and discipline.” *Id.* at 11. In a footnote, the court conceded the “possible implication that [the] orders may have on [LCpl Sterling’s] Free Exercise ... rights” but continued to uphold their lawfulness. *Id.* at 10 n.19.

I.

THE SUPREME COURT HAS HELD THAT THE RELIGIOUS FREEDOM RESTORATION ACT OF 1993 (RFRA) PROVIDES “VERY BROAD PROTECTION” FOR RELIGIOUS LIBERTY. THE NMCCA, HOWEVER, CONSTRUED THE TERM “EXERCISE OF RELIGION” IN RFRA NARROWLY, HOLDING THAT RFRA ONLY APPLIES TO CONDUCT THAT IS “PART OF A SYSTEM OF RELIGIOUS BELIEF” AND CATEGORICALLY DOES NOT APPLY TO CONDUCT A PERSON SUBJECTIVELY BELIEVES TO BE “RELIGIOUS IN NATURE.” THE NMCCA ERRED IN NARROWLY CONSTRUING “EXERCISE OF RELIGION” AND THUS FAILING TO APPLY RFRA.

The Religious Freedom Restoration Act of 1993 (RFRA) was enacted in the wake of the Supreme Court’s decision in *Employment Division, Department of Human Resources of Oregon v. Smith*, 494 U.S. 872 (1990). *Smith* rejected the test developed and applied in earlier cases like *Sherbert v. Verner*, 374 U.S. 398 (1963), and *Wisconsin v. Yoder*, 406 U.S. 205 (1972). That test assessed whether the challenged action imposed a substantial burden on the practice of religion, and if it did, whether it was needed to serve a compelling governmental interest. See *Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc.*, 134 S. Ct. 2751, 2760 (2014). By contrast, *Smith* held that “neutral, generally applicable laws may be applied to religious practices even when not supported by a compelling governmental interest.” *Id.* At 2761 (quotation marks omitted).

Congress responded to *Smith* by enacting RFRA, which provides that “Government shall not substantially burden a person’s exercise of religion even if the burden results from a rule of general applicability.” 42 U.S.C. §2000bb-1(a). Under RFRA, government may substantially burden a person’s “exercise of religion” only if it demonstrates that “application of the burden to the person” is (1) “in furtherance of a compelling governmental interest,” and (2) “the least restrictive means of furthering that compelling governmental interest.” *Id.* §2000bb- 1(b).

RFRA originally defined “exercise of religion” as “the exercise of religion under the First Amendment.” See *Hobby Lobby*, 134 S. Ct. at 2761-62. In the Religious Land Use and Institutional Persons Act of 2000 (RLUIPA), however,

Congress amended RFRA's definition of "exercise of religion" to incorporate RLUIPA's definition of that term. RLUIPA, and thus RFRA, defines "exercise of religion" as "any exercise of religion, whether or not compelled by, or central to, a system of religious belief." 42 U.S.C. §2000cc-5(7)(A). Congress specifically mandated that this concept "be construed in favor of a broad protection of religious exercise." *Id.* §2000cc-3(g).

Consistent with Congress' instruction, the Supreme Court recently held in *Hobby Lobby* that RFRA "provide[s] very broad protection for religious liberty." *Hobby Lobby*, 134 S. Ct. at 2760. Indeed, the Court repeatedly emphasized this aspect of RFRA. See, e.g., *id.* at 2761 (RFRA "ensure[s] broad protection for religious liberty"); *id.* at 2762 n.5 (RFRA has "same broad meaning" of "exercise of religion" as RLUIPA); *id.* at 2767 ("RFRA was designed to provide very broad protection for religious liberty."). The Court further held that RFRA provides "even broader protection for religious liberty than was available" under pre-Smith decisions like *Sherbert* and *Yoder*. *Id.* at 2761 n.3. That is so, the Court explained, because RLUIPA's amendment of RFRA's definition of "exercise of religion" "deleted the prior reference to the First Amendment," *id.* at 2772, in "an obvious effort to effect a complete separation from First Amendment case law," *id.* at 2761-62.

Relatedly, the Supreme Court has also held that "the federal courts have no business addressing ... whether the religious belief asserted in a RFRA case is reasonable." *Id.* At 2778. This prohibition, which further underscores the Court's broad construction of "exercise of religion," predates RFRA's enactment. See, e.g., *Smith*, 494 U.S. at 887 ("Repeatedly and in many different contexts, we have warned that courts must not presume to determine ... the plausibility of a religious claim."); *Hernandez v. Comm'r*, 490 U.S. 680, 699 (1989) ("It is not within the judicial ken to question the centrality of particular beliefs or practices to a faith, or the validity of particular litigants' interpretations of those creeds."); *Thomas v. Review Bd. of Indiana Emp't Sec. Div.*, 450 U.S. 707, 714 (1981) ("[R]eligious beliefs need not be acceptable, logical, consistent, or comprehensible to others in order to merit First Amendment protection."); *Presbyterian Church in U.S. v. Mary Elizabeth Blue Hull Mem'l Presbyterian Church*, 393 U.S. 440, 450 (1969); *United States v. Ballard*, 322 U.S. 78, 87 (1944). The courts' "narrow function" is to determine whether the asserted belief reflects "an honest conviction" by the person asserting it. *Hobby Lobby*, 134 S. Ct. at 2779 (quoting *Thomas*, 450 U.S. at 716); see also *id.* at 2774 n.28 ("To qualify for RFRA's protection, an asserted belief must be 'sincere.'").

Congress has made clear that RFRA applies to military actions. The House Judiciary Committee's report on RFRA states that "[p]ursuant to the Religious Freedom Restoration Act, the courts must review the claims of ... military personnel under the compelling governmental interest test." H.R. Rep. No. 103- 88, at 8 (1993). Similarly, the Senate Judiciary Committee's report states "[u]nder the unitary standard set forth in the Act, courts will review the free exercise claims of military personnel under the compelling governmental interest test." S. Rep. No. 103-111, at 12 (1993). Accordingly, RFRA applies to

military free exercise claims. See, e.g., *Rigdon v. Perry*, 962 F. Supp. 150, 161 (D.D.C. 1997).

The NMCCA's cramped interpretation of the term "exercise of religion"—and refusal even to apply RFRA on that basis—cannot be squared with the foregoing principles. Contrary to controlling precedent, the NMCCA gave a narrow construction to "exercise of religion" by holding that it "requires the practice be 'part of a system of religious belief,'" and "[p]ersonal beliefs, grounded solely upon subjective ideas about religious practices, 'will not suffice' because courts need some reference point to assess whether the practice is indeed religious." *Sterling*, slip op. at 8. Thus, the NMCCA concluded, "exercise of religion" categorically does not extend, and RFRA categorically does not apply, to an "action subjectively believed by [a person] to be 'religious in nature.'" *Id.* at 8-9.

In so holding, the NMCCA did not even acknowledge governing authority holding that RFRA "provide[s] very broad protection for religious liberty." *Hobby Lobby*, 134 S. Ct. at 2760. And its constricted view of "exercise of religion" in RFRA cannot be reconciled with the "very broad protection" of religious liberty that RFRA provides. Indeed, the "limitations" placed on the term "exercise of religion" by the NMCCA, *Sterling*, slip op. at 8, are at odds with the plain text of RFRA and RLUIPA, which protect "any exercise of religion, whether or not compelled by, or central to, a system of religious belief." 42 U.S.C. §2000cc-5(7)(A); see *Ali v. Fed. Bureau of Prisons*, 552 U.S. 214, 219 (2008) ("[T]he word 'any' has an expansive meaning, that is, 'one or some indiscriminately of whatever kind.'" (quoting *United States v. Gonzales*, 520 U.S. 1, 5 (1997))). Nothing in the statutory text provides that an "exercise of religion" must be "part of" a system of religious belief, as the NMCCA held.

In announcing its narrow definition of "exercise of religion," the NMCCA relied on a single pre-RFRA, pre-Smith decision, *Yoder*. That reasoning is flawed for several reasons. First, as explained, *Hobby Lobby* made clear that RFRA provides "even broader protection for religious liberty than was available" under pre-Smith decisions like *Yoder*. Thus it is incorrect to rely on *Yoder* to place limits on RFRA's scope, as the NMCCA did.

Second, even on its face, *Yoder* does not support the NMCCA's conclusions. *Yoder* simply noted that conduct rooted in "philosophical and personal" rather than "religious" beliefs is not entitled to First Amendment protection. 406 U.S. at 216.

As the Supreme Court has explained, this means that beliefs must be "'rooted in religion'" to receive the protection of the Free Exercise Clause; "purely secular views do not suffice." *Frazee v. Ill. Dep't of Emp. Sec.*, 489 U.S. 829, 833 (1989) (quoting *Thomas*, 450 U.S. at 713). But the NMCCA's holding goes beyond leaving "purely secular views" unprotected; it categorically excludes from First Amendment (and RFRA) protection any conduct a person sincerely believes is "religious in nature."

Third, *Yoder* does not support the NMCCA's belief that "courts need some reference point to assess whether the practice is indeed religious," which in turn requires determining whether a practice is "part of a system of religious



belief.” Sterling, slip op. at 8. The Supreme Court has firmly rejected these propositions in holding that courts are not to inquire about “the plausibility of a religious claim.” Smith, 494 U.S. at 887; see also Rigdon, 962 F. Supp. at 161 (“[I]t is not for this Court to determine whether encouraging parishioners to contact Congress on the Partial Birth Abortion Ban Act is an ‘important component’ of the Catholic or Jewish faiths.”); see pp. 12-13, supra. The only potentially permissible inquiry is whether the asserted claim is “so bizarre, so clearly nonreligious in motivation, as not to be entitled to protection under the Free Exercise Clause.” United States v. Lee, 455 U.S. 252, 257 n.6 (1982) (quoting Thomas, 450 U.S. at 715) (quotation marks omitted). But even that limited question predates RFRA, and thus may well be impermissible. See Hobby Lobby, 134 S. Ct. at 2778 (courts “have no business addressing ... whether the religious belief asserted in a RFRA case is reasonable”).

There can be little doubt that the NMCCA’s improperly narrow construction of “exercise of religion” was materially prejudicial to LCpl Sterling’s substantial rights, for under a correct interpretation of that term, her conduct plainly constituted an “exercise of religion” subject to RFRA.¹¹⁵ According to uncontradicted testimony, LCpl Sterling is a Christian. She posted three small slips of paper containing the same Bible quotation—“no weapon formed against me shall prosper”—around her workspace. (R. at 307, 310.) LCpl Sterling “did a trinity” of the quotation to, in her words, “have [the] protection of three around me”. (R. at 308, 310.) There is nothing “purely secular” about this conduct. Frazee, 489 U.S. at 833. To the contrary, the reliance that LCpl Sterling—a Christian—placed on an inspirational quotation drawn from the Bible—a Christian text—posted in the form of a Trinity—a Christian belief—is plainly “rooted in religion.” Thomas, 450 U.S. at 713. By any reasonable measure, LCpl Sterling’s posting of the Biblical quotations is as much an “exercise of religion” as, for example, refusing to manufacture tank turrets, see Thomas, 450 U.S. at 714-15, or refusing to provide health insurance covering abortifacients, see Hobby Lobby, 134 S. Ct. at 2779, both of which have been held to be exercises of religion. As such, the NMCCA erred in failing even to apply RFRA to LCpl Sterling’s obvious “exercise of religion.”

II.

APPELLANT’S UNCONTRADICTED TESTIMONY ESTABLISHED THAT SHE POSTED THREE SMALL COPIES OF A BIBLICAL QUOTATION AT HER WORKSPACE TO INVOKE THE PROTECTION OF THE CHRISTIAN CONCEPT OF THE “TRINITY.” EVEN UNDER THE NMCCA’S IMPROPERLY NARROW VIEW OF RFRA, APPELLANT’S CONDUCT IS AN “EXERCISE OF RELIGION” SUCH THAT THE NMCCA SHOULD HAVE APPLIED RFRA.

Even under the NMCCA’s improperly narrow interpretation, LCpl Sterling’s conduct constituted an “exercise of religion” that triggers application of RFRA. The NMCCA held that in order to be an “exercise of religion,” the conduct in

¹¹⁵ LCpl Sterling preserved this issue at trial (R. at 280), and she provided to the military judge a copy of DODI 1300.17, which specifically references RFRA and provides the same definition of “exercise of religion” as RFRA (R. at 271; Appellate Exhibit XXXVI.).

question must be “part of a system of religious belief.” Sterling, slip op. at 8. LCpl Sterling’s conduct amply satisfies this test. As an initial matter, it bears emphasizing that the relevant facts are undisputed. The government has never contested that LCpl Sterling is a practicing Christian.¹¹⁶ The NMCCA acknowledged that what LCpl Sterling sought to tape on her workspace was a “Biblical quotation.” Sterling, slip op. at 9- 10; see also R. at 362 (military judge recognizing the “religious quotes” containing “religious language”). The NMCCA further recognized that LCpl Sterling had placed the quotation around her workspace “in a fashion to represent the trinity.” Sterling, slip op. at 9. And it is undisputed that LCpl

Sterling did so to “have [the] protection of three around me” in response to perceived harassment by others. (R. at 307, 310.) These uncontroverted facts plainly demonstrate that LCpl Sterling’s conduct was “part of a system of religious belief.” One does not need a seminary degree to know that the Bible is the foundational religious text of Christianity, or that the concept of the Trinity—i.e., three persons in one God—is a fundamental Christian belief.¹¹⁷ Persons of all faiths, moreover, routinely seek comfort, inspiration, or assistance from the tenets of their faith. Certainly Christianity is no exception; indeed, the Bible frequently assures believers that they will be protected from harm and exhorts believers to beseech God for the same. See, e.g., 2 Samuel 22:4 (King James) (“I will call on the Lord, who is worthy to be praised: so shall I be saved from mine enemies.”); Psalms 46:1 (King James) (“God is our refuge and strength, a very present help in trouble.”); 2 Thessalonians 3:3 (King James) (“But the Lord is faithful, who shall establish you, and keep you from evil.”). LCpl Sterling posted one such Bible quotation to provide comfort and inspiration to her during a difficult period, and she did so in a way intended to invoke the further protection of the Trinity. If this conduct is not “part of a system of religious belief,” it is hard to imagine what is.

The NMCCA’s contrary determination strains credulity. The NMCCA believed there was “no evidence that posting signs at her workstation was an ‘exercise’ of that religion in the sense that such action was ‘part of a system of religious belief,’” in part because LCpl Sterling “never told [SSgt Alexander] that the signs had a religious connotation.” Sterling, slip op. at 9. Instead, LCpl Sterling “was simply placing what she believed to be personal reminders that those she considered adversaries could not harm her.” Id. As a threshold matter, SSgt Alexander’s knowledge of the reasons for LCpl Sterling’s conduct is immaterial to the question whether that conduct is an “exercise of religion” in the first place. Neither RFRA’s statutory text nor any case law requires a government official to have personal knowledge of a claimant’s religious beliefs in order to trigger RFRA’s application. Furthermore, to the extent the quotations were “personal reminders” to LCpl Sterling, the critical point is that

¹¹⁶ Trial testimony also established that LCpl Sterling is a regular churchgoer. See, e.g., R. at 275.

¹¹⁷ See, e.g., *Catechism of the Catholic Church* §261 (“The mystery of the Most Holy Trinity is the central mystery of the Christian faith and of Christian life. God alone can make it known to us by revealing himself as Father, Son and Holy Spirit.”); BGEA Staff, *Can you explain the Trinity to me?*, Billy Graham Evangelistic Association (June 1, 2004), <http://perma.cc/2nq4-8mg5> (explaining that under the “doctrine of the Trinity,” there are “three personal distinctions in [God’s] complex nature”).

the “reminders” were quotations drawn from the central Christian religious text, placed in a formation reflecting a central Christian belief, designed to remind and reassure LCpl Sterling of the divine protection that her Christian faith not just promises her but encourages her to invoke. Plainly her conduct was “part of a system of religious belief.” Accordingly, even under the NMCCA’s flawed standard, the court should have applied RFRA.

III.

THE NMCCA HELD THAT ORDERS TO REMOVE THE BIBLICAL QUOTATIONS HAD A VALID MILITARY PURPOSE BECAUSE IT IS “NOT HARD TO IMAGINE” THAT POTENTIAL EXPOSURE TO THE QUOTATIONS “MAY RESULT” IN ADVERSE IMPACT TO ORDER AND DISCIPLINE, AND THE PARTICULAR QUOTATION “COULD BE” INTERPRETED AS COMBATIVE, DESPITE NO EVIDENCE THAT ANY MARINE WAS IN FACT DISTRACTED OR DISMAYED BY THE QUOTATIONS. SUCH SPECULATION DOES NOT SUPPORT A VALID MILITARY PURPOSE FOR THE ORDERS TO REMOVE THE BIBLICAL QUOTATIONS.

Even if LCpl Sterling’s conduct was not an “exercise of religion” requiring application of RFRA, SSgt Alexander’s orders to remove the Biblical quotations lacked a valid military purpose and were thus unlawful. An order “may not ... interfere with private rights or personal affairs” without “a valid military purpose.” *United States v. New*, 55 M.J. 95, 106 (C.A.A.F. 2001) (quoting paragraph Manual for Courts–Martial, United States ¶14c(2)(a)(iii) (1995 ed.) (“MCM”)) (quotation marks omitted). An order has a “valid military purpose” if it “relate[s] to military duty, which includes all activities reasonably necessary to accomplish a military mission, or safeguard or promote the morale, discipline, and usefulness of members of a command and directly connected with the maintenance of good order in the service.” *Id.* (quoting MCM); see also *United States v. Washington*, 57 M.J. 394, 398 (C.A.A.F. 2002); *United States v. Hughey*, 46 M.J. 152, 154 (C.A.A.F. 1997).

The NMCCA acknowledged the “meager findings of fact” underlying the military judge’s determination that SSgt Alexander’s orders had a valid military purpose. Indeed, the military judge’s only factual findings were that (1) LCpl Sterling’s workspace “was shared by at least one other person”; (2) “other service members came to [her] workspace” and “could have seen the signs”; and (3) the specific quotation was “biblical in nature.” (R. at 362.) From these sparse findings, the NMCCA leaped to the speculative conclusion that other Marines “would be”—not could be—“exposed to biblical quotations.” Sterling, slip op. at 10 (emphasis added). Even more speculatively, the NMCCA stated that “[i]t is not hard to imagine” the “divisive impact to good order and discipline” that “may result” from such exposure. *Id.* The NMCCA’s speculation continued: “The risk that such exposure could impact the morale or discipline of the command is not slight.” *Id.* And the specific Biblical quotation “could be interpreted as combative.” *Id.* at 11.

The NMCCA’s string of hypotheses—“not hard to imagine,” “may result,” “could impact,” “not slight” risk, “could be interpreted”—does not support a

determination of a valid military purpose. See, e.g., *United States v. Collier*, 67 M.J. 347, 355 (C.A.A.F. 2009) (holding that appellate court may not affirm trial ruling based on speculation); *United States v. Boylan*, 49 M.J. 375, 378 (C.A.A.F. 1998); *Smith v. Vanderbush*, 47 M.J. 56, 63 (C.A.A.F. 1997). That is especially the case when the record does not contain a single piece of evidence suggesting that any Marine (including the Marine who supposedly shared LCpl Sterling's desk, whom the government never identified, much less called as a witness) was ever distracted or dismayed by the quotations—or even saw them, for that matter.

Indeed, every witness who addressed that subject unequivocally testified that they had never seen anything of a distracting or bothersome nature on LCpl Sterling's workspace.¹¹⁸

Furthermore, the NMCCA's speculation is internally inconsistent. In rejecting LCpl Sterling's claim that posting the quotations was an exercise of religion, the NMCCA proceeded on the premise that the quotations were not outwardly "religious"; thus, for example, the NMCCA faulted LCpl Sterling for failing to tell SSgt Alexander "that the signs had a religious connotation." Sterling, slip op. at 9. But in rejecting LCpl Sterling's claim that the orders lacked a valid military purpose, the NMCCA proceeded on the premise that any Marine who saw the quotations would immediately identify them as "religious quotations"—specifically, Christian religious quotations, since the court expressed concerns about service members who do not "share that religion." Id. at 10. Both premises—and the determinations based on them—cannot be correct.

In addition to the lack of record evidence and the internal inconsistency, the NMCCA's speculation cannot stand up to reality. The NMCCA suggested that "exposure" to three small slips of paper with a Biblical quotation "could impact the morale or discipline of the command." Id. But military members are often more directly exposed to far more religious material every day. For example, federal law mandates that every ship in the Navy conduct nightly evening prayers "compelling" every sailor, regardless of religious affiliation and preference, to listen to a prayer. See Beverly J. Lesonik, *Tattoo, Tattoo*.

Stand by for the Evening Prayer, U.S. Navy (July 29, 2014, 8:51 PM), <http://perma.cc/uqq4-wfzb>; 10 U.S.C. §6031(b). Moreover, change of command and military retirement ceremonies routinely begin and end with a prayer from a chaplain. Accordingly, the notion that walking by a desk with a Biblical quotation "could"—much less would—wreak havoc on good order and discipline is not plausible.

In the end, almost every sentence in the NMCCA's opinion supporting the validity of the orders to remove the quotations relies on conjecture. The NMCCA wrongly constructed a rationale for the military judge's ruling that the

¹¹⁸ Equally unsupported by the record is the NMCCA's belief that LCpl Sterling and SSgt Alexander were "locked in an antagonistic relationship" stemming from events predating the charged misconduct. Sterling, slip op. at 11. To the contrary, SSgt Alexander testified that although she served as LCpl Sterling's drill instructor, SSgt Alexander did not remember LCpl Sterling from that time. (R. at 185.) The NMCCA also believed the supposedly "antagonistic relationship" was "surely visible to other Marines," Sterling, slip op. at 11, but that is more sheer speculation. Not one "other Marine[]" testified that they observed an "antagonistic relationship" between LCpl Sterling and SSgt Alexander in S-6.



military judge himself did not articulate. In so doing, NMCCA engaged in improper speculation, unsupported by the record, to find that orders were necessary to support good order and discipline. That is not the stuff of appellate review or military justice. See, e.g., 10 U.S.C. §866(c) (Court of Criminal Appeals “may act only with respect to the findings ... as approved by the convening authority”). Because the orders lacked a valid military purpose, they were unlawful, and LCpl Sterling’s convictions for disobeying those orders cannot stand.

Conclusion

The Court should grant the petition.

Respectfully submitted,

HIRAM S. SASSER, III
(pro hac vice)
MICHAEL D. BERRY
CAAF Bar No. 34828
Liberty Institute
2001 W. Plano Pkwy, Ste 1600
Plano, TX 75075
(972)941-4445
mberry@libertyinstitute.org

PAUL D. CLEMENT
(pro hac vice)
GEORGE W. HICKS, JR.
(pro hac vice)
Bancroft PLLC
1919 M Street NW, Ste 470
Washington, DC 20036
(202) 234-0090
pclement@bancroftpllc.com

TIERNY M. CARLOS
Captain, JAGC, USN
CAAF Bar No. 35977
Appellate Defense Division
Navy-Marine Corps Appellate
Review Activity
1254 Charles Morris St, SE
Bldg 58, Ste 100
Washington Navy Yard, DC
20374
(202) 685-7299

(...)

Liberty Institute

<https://www.libertyinstitute.org/file/Sterling-CAAF-Supplement-to-Petition-FINAL1.pdf>
(5 de junio)

[Volver al Índice](#)

B. Sentencia de la Corte Suprema que decide, conforme a la 14ª Enmienda, que un Estado debe permitir y reconocer el matrimonio entre dos personas del mismo sexo cuando su matrimonio ha sido legalmente celebrado fuera de aquél estado (selección)¹¹⁹.

Tribunal: Corte Suprema de Estados Unidos

Causa: James Obergefell, et al., petitioners 14–556 v. Richard Hodges, Director, Ohio Department of Health, et al.; Valeria Tanco, et al., petitioners 14–562 v. Bill Haslam, Governor of Tennessee, et al.; April Deboer, et al., petitioners 14–571 v. Rick Snyder, Governor of Michigan, et al.; and Gregory Bourke, et al., petitioners 14–574 v. Steve Beshear, Governor of Kentucky

Fecha: 26 de junio de 2015

Opinion of the Court

NOTICE: This opinion is subject to formal revision before publication in the preliminary print of the United States Reports. Readers are requested to notify the Reporter of Decisions, Supreme Court of the United States, Washington, D.C. 20543, of any typographical or other formal errors, in order that corrections may be made before the preliminary print goes to press.

SUPREME COURT OF THE UNITED STATES

Nos. 14–556, 14–562, 14–571 and 14–574

JAMES OBERGEFELL, ET AL., PETITIONERS

14–556 v.

RICHARD HODGES, DIRECTOR, OHIO
DEPARTMENT OF HEALTH, ET AL.;

VALERIA TANCO, ET AL., PETITIONERS

14–562 v.

BILL HASLAM, GOVERNOR OF
TENNESSEE, ET AL.;

APRIL DEBOER, ET AL., PETITIONERS

14–571 v.

RICK SNYDER, GOVERNOR OF MICHIGAN,
ET AL.; AND

GREGORY BOURKE, ET AL., PETITIONERS

14–574 v.

STEVE BESHEAR, GOVERNOR OF
KENTUCKY

ON WRITS OF CERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF
APPEALS FOR THE SIXTH CIRCUIT

[June 26, 2015]

JUSTICE KENNEDY delivered the opinion of the Court.

¹¹⁹ El documento completo puede consultarse en nuestro sitio web <http://celir.cl/v2/Jurisprudencia/CSEEUUMathomosexual.pdf>

The Constitution promises liberty to all within its reach, a liberty that includes certain specific rights that allow persons, within a lawful realm, to define and express their identity. The petitioners in these cases seek to find that liberty by marrying someone of the same sex and having their marriages deemed lawful on the same terms and conditions as marriages between persons of the opposite sex.

I

These cases come from Michigan, Kentucky, Ohio, and Tennessee, States that define marriage as a union between one man and one woman. See, e.g., Mich. Const., Art. I, §25; Ky. Const. §233A; Ohio Rev. Code Ann. §3101.01 (Lexis 2008); Tenn. Const., Art. XI, §18. The petitioners are 14 same-sex couples and two men whose same-sex partners are deceased. The respondents are state officials responsible for enforcing the laws in question. The petitioners claim the respondents violate the Fourteenth Amendment by denying them the right to marry or to have their marriages, lawfully performed in another State, given full recognition.

Petitioners filed these suits in United States District Courts in their home States. Each District Court ruled in their favor. Citations to those cases are in Appendix A, *infra*. The respondents appealed the decisions against them to the United States Court of Appeals for the Sixth Circuit. It consolidated the cases and reversed the judgments of the District Courts. *De Boer v. Snyder*, 772 F. 3d 388 (2014). The Court of Appeals held that a State has no constitutional obligation to license same-sex marriages or to recognize same-sex marriages performed out of State.

The petitioners sought certiorari. This Court granted review, limited to two questions. 574 U. S. ____ (2015). The first, presented by the cases from Michigan and Kentucky, is whether the Fourteenth Amendment requires a State to license a marriage between two people of the same sex. The second, presented by the cases from Ohio, Tennessee, and, again, Kentucky, is whether the Fourteenth Amendment requires a State to recognize a same-sex marriage licensed and performed in a State which does grant that right.

II

Before addressing the principles and precedents that govern these cases, it is appropriate to note the history of the subject now before the Court.

A

From their beginning to their most recent page, the annals of human history reveal the transcendent importance of marriage. The lifelong union of a man and a woman always has promised nobility and dignity to all persons, without regard to their station in life. **Marriage is sacred to those who live by their religions and offers unique fulfillment to those who find meaning in the secular realm.** Its dynamic allows two people to find a life that could not be found alone, for a marriage becomes greater than just the two persons. Rising from the most basic human needs, marriage is essential to our most profound hopes and aspirations.

The centrality of marriage to the human condition makes it unsurprising that the institution has existed for millennia and across civilizations. Since the dawn of history, marriage has transformed strangers into relatives, binding families and societies together. Confucius taught that marriage lies at the foundation of government.

2 Li Chi: Book of Rites 266 (C. Chai & W. Chai eds., J. Legge transl. 1967). This wisdom was echoed centuries later and half a world away by Cicero, who wrote, “The first bond of society is marriage; next, children; and then the family.” See *De Officiis* 57 (W. Miller transl. 1913). There are untold references to the beauty of marriage in religious and philosophical texts spanning time, cultures, and faiths, as well as in art and literature in all their forms. It is fair and necessary to say these references were based on the understanding that marriage is a union between two persons of the opposite sex.

That history is the beginning of these cases. The respondents say it should be the end as well. To them, it would demean a timeless institution if the concept and lawful status of marriage were extended to two persons of the same sex. Marriage, in their view, is by its nature a gender-differentiated union of man and woman. This view long has been held—and continues to be held—in good faith by reasonable and sincere people here and throughout the world.

The petitioners acknowledge this history but contend that these cases cannot end there. Were their intent to demean the revered idea and reality of marriage, the petitioners’ claims would be of a different order. But that is neither their purpose nor their submission. **To the contrary, it is the enduring importance of marriage that underlies the petitioners’ contentions.** This, they say, is their whole point. Far from seeking to devalue marriage, the petitioners seek it for themselves because of their respect—and need—for its privileges and responsibilities. And their immutable nature dictates that same-sex marriage is their only real path to this profound commitment.

Recounting the circumstances of three of these cases illustrates the urgency of the petitioners’ cause from their perspective. Petitioner James Obergefell, a plaintiff in the Ohio case, met John Arthur over two decades ago. They fell in love and started a life together, establishing a lasting, committed relation. In 2011, however, Arthur was diagnosed with amyotrophic lateral sclerosis, or ALS. This debilitating disease is progressive, with no known cure. Two years ago, Obergefell and Arthur decided to commit to one another, resolving to marry before Arthur died. To fulfill their mutual promise, they traveled from Ohio to Maryland, where same-sex marriage was legal. It was difficult for Arthur to move, and so the couple were wed inside a medical transport plane as it remained on the tarmac in Baltimore. Three months later, Arthur died. Ohio law does not permit Obergefell to be listed as the surviving spouse on Arthur’s death certificate. By statute, they must remain strangers even in death, a state-imposed separation Obergefell deems “hurtful for the rest of time.” App. in No. 14–556 etc., p. 38. He brought suit to be shown as the surviving spouse on Arthur’s death certificate.

April De Boer and Jayne Rowse are co-plaintiffs in the case from Michigan. They celebrated a commitment ceremony to honor their permanent relation in 2007. They both work as nurses, De Boer in a neonatal unit and Rowse in an emergency unit. In 2009, De Boer and Rowse fostered and then adopted a baby boy. Later that same year, they welcomed another son into their family. The new baby, born prematurely and abandoned by his biological mother, required around-the-clock care. The next year, a baby girl with special needs joined their family. Michigan, however, permits only opposite-sex married couples or single individuals to adopt, so each child can have only one woman as his or her legal parent. If an emergency were to arise, schools and hospitals may treat the three children as if they had only one parent. And, were tragedy to befall either DeBoer or Rowse, the other would have no legal rights over the children she had not been permitted to adopt. This couple seeks relief from the continuing uncertainty their unmarried status creates in their lives.

Army Reserve Sergeant First Class Ijpe DeKoe and his partner Thomas Kostura, co-plaintiffs in the Tennessee case, fell in love. In 2011, DeKoe received orders to deploy to Afghanistan. Before leaving, he and Kostura married in New York. A week later, DeKoe began his deployment, which lasted for almost a year. When he returned, the two settled in Tennessee, where DeKoe works full-time for the Army Reserve. Their lawful marriage is stripped from them whenever they reside in Tennessee, returning and disappearing as they travel across state lines. DeKoe, who served this Nation to preserve the freedom the Constitution protects, must endure a substantial burden.

The cases now before the Court involve other petitioners as well, each with their own experiences. Their stories reveal that they seek not to denigrate marriage but rather to live their lives, or honor their spouses' memory, joined by its bond.

B

The ancient origins of marriage confirm its centrality, but it has not stood in isolation from developments in law and society. The history of marriage is one of both continuity and change. That institution—even as confined to opposite-sex relations—has evolved over time.

For example, marriage was once viewed as an arrangement by the couple's parents based on political, religious, and financial concerns; but by the time of the Nation's founding it was understood to be a voluntary contract between a man and a woman. See N. Cott, *Public Vows: A History of Marriage and the Nation* 9–17 (2000); S. Coontz, *Marriage, A History* 15–16 (2005). As the role and status of women changed, the institution further evolved. Under the centuries-old doctrine of coverture, a married man and woman were treated by the State as a single, male-dominated legal entity. See 1 W. Blackstone, *Commentaries on the Laws of England* 430 (1765). As women gained legal, political, and property rights, and as society began to understand that women have their own equal dignity, the law of coverture was abandoned. See Brief for Historians of Marriage et al. as Amici Curiae 16–19. These and other developments in the institution of marriage over the past centuries were not mere superficial changes.

Rather, they worked deep transformations in its structure, affecting aspects of marriage long viewed by many as essential. See generally N. Cott, *Public Vows*; S. Coontz, *Marriage*; H. Hartog, *Man & Wife in America: A History* (2000).

(...)

This Court first gave detailed consideration to the legal status of homosexuals in *Bowers v. Hardwick*, 478 U. S. 186 (1986). There it upheld the constitutionality of a Georgia law deemed to criminalize certain homosexual acts. Ten years later, in *Romer v. Evans*, 517 U. S. 620 (1996), the Court invalidated an amendment to Colorado's Constitution that sought to foreclose any branch or political subdivision of the State from protecting persons against discrimination based on sexual orientation. Then, in 2003, the Court overruled *Bowers*, holding that laws making same-sex intimacy a crime "demea[n] the lives of homosexual persons." *Lawrence v. Texas*, 539 U. S. 558, 575.

Against this background, the legal question of same-sex marriage arose. In 1993, the Hawaii Supreme Court held Hawaii's law restricting marriage to opposite-sex couples constituted a classification on the basis of sex and was therefore subject to strict scrutiny under the Hawaii Constitution. *Baehr v. Lewin*, 74 Haw. 530, 852 P. 2d 44. Although this decision did not mandate that same-sex marriage be allowed, some States were concerned by its implications and reaffirmed in their laws that marriage defined as a union between opposite-sex partners. So too in 1996, Congress passed the Defense of Marriage Act (DOMA), 110 Stat. 2419, defining marriage for all federal law purposes as "only a legal union between one man and one woman as husband and wife." 1 U. S. C. §7.

The new and widespread discussion of the subject led other States to a different conclusion. In 2003, the Supreme Judicial Court of Massachusetts held the State's Constitution guaranteed same-sex couples the right to marry. See *Goodridge v. Department of Public Health*, 440 Mass. 309, 798 N. E. 2d 941 (2003). After that ruling, some additional States granted marriage rights to same-sex couples, either through judicial or legislative processes. These decisions and statutes are cited in Appendix B, *infra*. Two Terms ago, in *United States v. Windsor*, 570 U. S. ____ (2013), this Court invalidated DOMA to the extent it barred the Federal Government from treating same-sex marriages as valid even when they were lawful in the State where they were licensed. DOMA, the Court held, impermissibly disparaged those same-sex couples "who wanted to affirm their commitment to one another before their children, their family, their friends, and their community." *Id.*, at ____ (slip op., at 14).

Numerous cases about same-sex marriage have reached the United States Courts of Appeals in recent years. In accordance with the judicial duty to base their decisions on principled reasons and neutral discussions, without scornful or disparaging commentary, courts have written a substantial body of law considering all sides of these issues. That case law helps to explain and formulate the underlying principles this Court now must consider. With the exception of the opinion here under review and one other, see *Citizens for Equal Protection v. Bruning*, 455 F. 3d 859, 864–868 (CA8 2006), the Courts

of Appeals have held that excluding same-sex couples from marriage violates the Constitution. There also have been many thoughtful District Court decisions addressing same-sex marriage—and most of them, too, have concluded same-sex couples must be allowed to marry. In addition the highest courts of many States have contributed to this ongoing dialogue in decisions interpreting their own State Constitutions. These state and federal judicial opinions are cited in Appendix A, *infra*.

After years of litigation, legislation, referenda, and the discussions that attended these public acts, the States are now divided on the issue of same-sex marriage. See Office of the Atty. Gen. of Maryland, *The State of Marriage Equality in America, State-by-State Supp.* (2015).

III

Under the Due Process Clause of the Fourteenth Amendment, no State shall “deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law.” The fundamental liberties protected by this Clause include most of the rights enumerated in the Bill of Rights. See *Duncan v. Louisiana*, 391 U. S. 145, 147–149 (1968). In addition these liberties extend to certain personal choices central to individual dignity and autonomy, including intimate choices that define personal identity and beliefs. See, e.g., *Eisenstadt v. Baird*, 405 U. S. 438, 453 (1972); *Griswold v. Connecticut*, 381 U. S. 479, 484–486 (1965).

(...)

Applying these established tenets, the Court has long held the right to marry is protected by the Constitution. In *Loving v. Virginia*, 388 U. S. 1, 12 (1967), which invalidated bans on interracial unions, a unanimous Court held marriage is “one of the vital personal rights essential to the orderly pursuit of happiness by free men.” The Court reaffirmed that holding in *Zablocki v. Redhail*, 434 U. S. 374, 384 (1978), which held the right to marry was burdened by a law prohibiting fathers who were behind on child support from marrying. The Court again applied this principle in *Turner v. Safley*, 482 U. S. 78, 95 (1987), which held the right to marry was abridged by regulations limiting the privilege of prison inmates to marry. Over time and in other contexts, the Court has reiterated that the right to marry is fundamental under the Due Process Clause. See, e.g., *M. L. B. v. S. L. J.*, 519 U. S. 102, 116 (1996); *Cleveland Bd. of Ed. v. LaFleur*, 414 U. S. 632, 639–640 (1974); *Griswold*, *supra*, at 486; *Skinner v. Oklahoma ex rel. Williamson*, 316 U. S. 535, 541 (1942); *Meyer v. Nebraska*, 262 U. S. 390, 399 (1923).

It cannot be denied that this Court’s cases describing the right to marry presumed a relationship involving opposite-sex partners. The Court, like many institutions, has made assumptions defined by the world and time of which it is a part. This was evident in *Baker v. Nelson*, 409 U. S. 810, a one-line summary decision issued in 1972, holding the exclusion of same-sex couples from marriage did not present a substantial federal question.

Still, there are other, more instructive precedents. This Court’s cases have expressed constitutional principles of broader reach. In defining the right to marry these cases have identified essential attributes of that right based in

history, tradition, and other constitutional liberties inherent in this intimate bond. See, e.g., *Lawrence*, 539 U. S., at 574; *Turner*, *supra*, at 95; *Zablocki*, *supra*, at 384; *Loving*, *supra*, at 12; *Griswold*, *supra*, at 486. And in assessing whether the force and rationale of its cases apply to same-sex couples, the Court must respect the basic reasons why the right to marry has been long protected. See, e.g., *Eisenstadt*, *supra*, at 453–454; *Poe*, *supra*, at 542–553 (Harlan, J., dissenting).

This analysis compels the conclusion that same-sex couples may exercise the right to marry. The four principles and traditions to be discussed demonstrate that the reasons marriage is fundamental under the Constitution apply with equal force to same-sex couples.

A first premise of the Court’s relevant precedents is that the right to personal choice regarding marriage is inherent in the concept of individual autonomy. This abiding connection between marriage and liberty is why *Loving* invalidated interracial marriage bans under the Due Process Clause. See 388 U. S., at 12; see also *Zablocki*, *supra*, at 384 (observing *Loving* held “the right to marry is of fundamental importance for all individuals”). Like choices concerning contraception, family relationships, procreation, and childrearing, all of which are protected by the Constitution, decisions concerning marriage are among the most intimate that an individual can make. See *Lawrence*, *supra*, at 574. Indeed, the Court has noted it would be contradictory “to recognize a right of privacy with respect to other matters of family life and not with respect to the decision to enter the relationship that is the foundation of the family in our society.” *Zablocki*, *supra*, at 386.

Choices about marriage shape an individual’s destiny. As the Supreme Judicial Court of Massachusetts has explained, because “it fulfils yearnings for security, safe haven, and connection that express our common humanity, civil marriage is an esteemed institution, and the decision whether and whom to marry is among life’s momentous acts of self-definition.” *Goodridge*, 440 Mass., at 322, 798 N. E. 2d, at 955.

The nature of marriage is that, through its enduring bond, two persons together can find other freedoms, such as expression, intimacy, and spirituality. This is true for all persons, whatever their sexual orientation. See *Windsor*, 570 U. S., at ___–___ (slip op., at 22–23). There is dignity in the bond between two men or two women who seek to marry and in their autonomy to make such profound choices. Cf. *Loving*, *supra*, at 12 (“[T]he freedom to marry, or not marry, a person of another race resides with the individual and cannot be infringed by the State”).

A second principle in this Court’s jurisprudence is that the right to marry is fundamental because it supports a two-person union unlike any other in its importance to the committed individuals. This point was central to *Griswold v. Connecticut*, which held the Constitution protects the right of married couples to use contraception. 381 U. S., at 485. Suggesting that marriage is a right “older than the Bill of Rights,” *Griswold* described marriage this way:

“Marriage is a coming together for better or for worse, hopefully enduring, and intimate to the degree of being sacred. It is an association that promotes

a way of life, not causes; a harmony in living, not political faiths; a bilateral loyalty, not commercial or social projects. Yet it is an association for as noble a purpose as any involved in our prior decisions. " *Id.*, at 486.

And in *Turner*, the Court again acknowledged the intimate association protected by this right, holding prisoners could not be denied the right to marry because their committed relationships satisfied the basic reasons why marriage is a fundamental right. See 482 U. S., at 95–96. The right to marry thus dignifies couples who "wish to define themselves by their commitment to each other." *Windsor*, *supra*, at ____ (slip op., at 14). Marriage responds to the universal fear that a lonely person might call out only to find no one there. It offers the hope of companionship and understanding and assurance that while both still live there will be someone to care for the other.

As this Court held in *Lawrence*, same-sex couples have the same right as opposite-sex couples to enjoy intimate association. *Lawrence* invalidated laws that made same-sex intimacy a criminal act. And it acknowledged that "[w]hen sexuality finds overt expression in intimate conduct with another person, the conduct can be but one element in a personal bond that is more enduring." 539 U. S., at 567. But while *Lawrence* confirmed a dimension of freedom that allows individuals to engage in intimate association without criminal liability, it does not follow that freedom stops there. Outlaw to outcast may be a step forward, but it does not achieve the full promise of liberty.

A third basis for protecting the right to marry is that it safeguards children and families and thus draws meaning from related rights of childrearing, procreation, and education. See *Pierce v. Society of Sisters*, 268 U. S. 510 (1925); *Meyer*, 262 U. S., at 399. The Court has recognized these connections by describing the varied rights as a unified whole: "[T]he right to 'marry, establish a home and bring up children' is a central part of the liberty protected by the Due Process Clause." *Zablocki*, 434 U. S., at 384 (quoting *Meyer*, *supra*, at 399). Under the laws of the several States, some of marriage's protections for children and families are material. But marriage also confers more profound benefits. By giving recognition and legal structure to their parents' relationship, marriage allows children "to understand the integrity and closeness of their own family and its concord with other families in their community and in their daily lives." *Windsor*, *supra*, at ____ (slip op., at 23). Marriage also affords the permanency and stability important to children's best interests. See Brief for Scholars of the Constitutional Rights of Children as *Amici Curiae* 22–27.

As all parties agree, many same-sex couples provide loving and nurturing homes to their children, whether biological or adopted. And hundreds of thousands of children are presently being raised by such couples. See Brief for Gary J. Gates as *Amicus Curiae* 4. Most States have allowed gays and lesbians to adopt, either as individuals or as couples, and many adopted and foster children have same-sex parents, see *id.*, at 5. This provides powerful confirmation from the law itself that gays and lesbians can create loving, supportive families.

Excluding same-sex couples from marriage thus conflicts with a central premise of the right to marry. Without the recognition, stability, and predictability marriage offers, their children suffer the stigma of knowing their families are somehow lesser. They also suffer the significant material costs of being raised by unmarried parents, relegated through no fault of their own to a more difficult and uncertain family life. The marriage laws at issue here thus harm and humiliate the children of same-sex couples. See Windsor, supra, at ___ (slip op., at 23).

That is not to say the right to marry is less meaningful for those who do not or cannot have children. An ability, desire, or promise to procreate is not and has not been a prerequisite for a valid marriage in any State. In light of precedent protecting the right of a married couple not to procreate, it cannot be said the Court or the States have conditioned the right to marry on the capacity or commitment to procreate. The constitutional marriage right has many aspects, of which childbearing is only one.

Fourth and finally, this Court's cases and the Nation's traditions make clear that marriage is a keystone of our social order. Alexis de Tocqueville recognized this truth on his travels through the United States almost two centuries ago:

"There is certainly no country in the world where the tie of marriage is so much respected as in America . . . [W]hen the American retires from the turmoil of public life to the bosom of his family, he finds in it the image of order and of peace [H]e afterwards carries [that image] with him into public affairs." 1 Democracy in America 309 (H. Reeve transl., rev. ed. 1990).

In *Maynard v. Hill*, 125 U. S. 190, 211 (1888), the Court echoed de Tocqueville, explaining that marriage is "the foundation of the family and of society, without which there would be neither civilization nor progress." Marriage, the *Maynard* Court said, has long been "a great public institution, giving character to our whole civil polity." *Id.*, at 213. This idea has been reiterated even as the institution has evolved in substantial ways over time, superseding rules related to parental consent, gender, and race once thought by many to be essential. See generally N. Cott, *Public Vows*. Marriage remains a building block of our national community.

For that reason, just as a couple vows to support each other, so does society pledge to support the couple, offering symbolic recognition and material benefits to protect and nourish the union. Indeed, while the States are in general free to vary the benefits they confer on all married couples, they have throughout our history made marriage the basis for an expanding list of governmental rights, benefits, and responsibilities. These aspects of marital status include: taxation; inheritance and property rights; rules of intestate succession; spousal privilege in the law of evidence; hospital access; medical decision making authority; adoption rights; the rights and benefits of survivors; birth and death certificates; professional ethics rules; campaign finance restrictions; workers' compensation benefits; health insurance; and child custody, support, and visitation rules. See Brief for United

States as Amicus Curiae 6–9; Brief for American Bar Association as Amicus Curiae 8–29. Valid marriage under state law is also a significant status for over a thousand provisions of federal law. See *Windsor*, 570 U. S., at ___ – ___ (slip op., at 15–16). **The States have contributed to the fundamental character of the marriage right by placing that institution at the center of so many facets of the legal and social order.**

There is no difference between same- and opposite-sex couples with respect to this principle.¹²⁰ Yet by virtue of their exclusion from that institution, same-sex couples are denied the constellation of benefits that the States have linked to marriage. This harm results in more than just material burdens. Same-sex couples are consigned to an instability many opposite-sex couples would deem intolerable in their own lives. As the State itself makes marriage all the more precious by the significance it attaches to it, exclusion from that status has the effect of teaching that gays and lesbians are unequal in important respects. It demeans gays and lesbians for the State to lock them out of a central institution of the Nation’s society. Same-sex couples, too, may aspire to the transcendent purposes of marriage and seek fulfillment in its highest meaning.

The limitation of marriage to opposite-sex couples may long have seemed natural and just, but its inconsistency with the central meaning of the fundamental right to marry is now manifest. With that knowledge must come the recognition that laws excluding same-sex couples from the marriage right impose stigma and injury of the kind prohibited by our basic charter.

Objecting that this does not reflect an appropriate framing of the issue, the respondents refer to *Washington v. Glucksberg*, 521 U. S. 702, 721 (1997), which called for a “careful description” of fundamental rights. They assert the petitioners do not seek to exercise the right to marry but rather a new and nonexistent “right to same-sex marriage.” Brief for Respondent in No. 14–556, p. 8. *Glucksberg* did insist that liberty under the Due Process Clause must be defined in a most circumscribed manner, with central reference to specific historical practices. Yet while that approach may have been appropriate for the asserted right there involved (physician-assisted suicide), it is inconsistent with the approach this Court has used in discussing other fundamental rights, including marriage and intimacy. *Loving* did not ask about a “right to interracial marriage”; *Turner* did not ask about a “right of inmates to marry”; and *Zablocki* did not ask about a “right of fathers with unpaid child support duties to marry.” Rather, each case inquired about the right to marry in its comprehensive sense, asking if there was a sufficient justification for excluding the relevant class from the right. See also *Glucksberg*, 521 U. S., at 752–773 (Souter, J., concurring in judgment); *id.*, at 789–792 (BREYER, J., concurring in judgments).

That principle applies here. If rights were defined by who exercised them in the past, then received practices could serve as their own continued justification and new groups could not invoke rights once denied. This Court has rejected that approach, both with respect to the right to marry and the

¹²⁰ *El destacado es nuestro.*

rights of gays and lesbians. See *Loving* 388 U. S., at 12; *Lawrence*, 539 U. S., at 566–567.

The right to marry is fundamental as a matter of history and tradition, but rights come not from ancient sources alone. They rise, too, from a better informed understanding of how constitutional imperatives define a liberty that remains urgent in our own era. Many who deem same-sex marriage to be wrong reach that conclusion based on decent and honorable religious or philosophical premises, and neither they nor their beliefs are disparaged here. But when that sincere, personal opposition becomes enacted law and public policy, the necessary consequence is to put the imprimatur of the State itself on an exclusion that soon demeans or stigmatizes those whose own liberty is then denied. Under the Constitution, same-sex couples seek in marriage the same legal treatment as opposite-sex couples, and it would disparage their choices and diminish their personhood to deny them this right.

The right of same-sex couples to marry that is part of the liberty promised by the Fourteenth Amendment is derived, too, from that Amendment’s guarantee of the equal protection of the laws. The Due Process Clause and the Equal Protection Clause are connected in a profound way, though they set forth independent principles. Rights implicit in liberty and rights secured by equal protection may rest on different precepts and are not always coextensive, yet in some instances each may be instructive as to the meaning and reach of the other. In any particular case one Clause may be thought to capture the essence of the right in a more accurate and comprehensive way, even as the two Clauses may converge in the identification and definition of the right. See *M. L. B.*, 519 U. S., at 120– 121; *id.*, at 128–129 (KENNEDY, J., concurring in judgment); *Bearden v. Georgia*, 461 U. S. 660, 665 (1983). This interrelation of the two principles furthers our understanding of what freedom is and must become.

(...)

This dynamic also applies to same-sex marriage. It is now clear that the challenged laws burden the liberty of same-sex couples, and it must be further acknowledged that they abridge central precepts of equality. Here the marriage laws enforced by the respondents are in essence unequal: same-sex couples are denied all the benefits afforded to opposite-sex couples and are barred from exercising a fundamental right. Especially against a long history of disapproval of their relationships, this denial to same-sex couples of the right to marry works a grave and continuing harm. The imposition of this disability on gays and lesbians serves to disrespect and subordinate them.

And the Equal Protection Clause, like the Due Process Clause, prohibits this unjustified infringement of the fundamental right to marry. See, e.g., *Zablocki*, supra, at 383–388; *Skinner*, 316 U. S., at 541.

These considerations lead to the conclusion that the right to marry is a fundamental right inherent in the liberty of the person, and under the Due Process and Equal Protection Clauses of the Fourteenth Amendment couples of the same-sex may not be deprived of that right and that liberty. The Court now holds that same-sex couples may exercise

the fundamental right to marry. No longer may this liberty be denied to them. *Baker v. Nelson* must be and now is overruled, and the State laws challenged by Petitioners in these cases are now held invalid to the extent they exclude same-sex couples from civil marriage on the same terms and conditions as oppositesex couples.

IV

There may be an initial inclination in these cases to proceed with caution—to await further legislation, litigation, and debate. The respondents warn there has been insufficient democratic discourse before deciding an issue so basic as the definition of marriage. In its ruling on the cases now before this Court, the majority opinion for the Court of Appeals made a cogent argument that it would be appropriate for the respondents' States to await further public discussion and political measures before licensing same-sex marriages. See *DeBoer*, 772 F. 3d, at 409.

(...)

The dynamic of our constitutional system is that individuals need not await legislative action before asserting a fundamental right. The Nation's courts are open to injured individuals who come to them to vindicate their own direct, personal stake in our basic charter. An individual can invoke a right to constitutional protection when he or she is harmed, even if the broader public disagrees and even if the legislature refuses to act. The idea of the Constitution "was to withdraw certain subjects from the vicissitudes of political controversy, to place them beyond the reach of majorities and officials and to establish them as legal principles to be applied by the courts." *West Virginia Bd. of Ed. v. Barnette*, 319 U. S. 624, 638 (1943). This is why "fundamental rights may not be submitted to a vote; they depend on the outcome of no elections." *Ibid*

(...)

Indeed, faced with a disagreement among the Courts of Appeals—a disagreement that caused impermissible geographic variation in the meaning of federal law—the Court granted review to determine whether same-sex couples may exercise the right to marry. Were the Court to uphold the challenged laws as constitutional, it would teach the Nation that these laws are in accord with our society's most basic compact. Were the Court to stay its hand to allow slower, case-by-case determination of the required availability of specific public benefits to same-sex couples, it still would deny gays and lesbians many rights and responsibilities intertwined with marriage.

The respondents also argue allowing same-sex couples to wed will harm marriage as an institution by leading to fewer opposite-sex marriages. This may occur, the respondents contend, because licensing same-sex marriage severs the connection between natural procreation and marriage. That argument, however, rests on a counterintuitive view of opposite-sex couple's decisionmaking processes regarding marriage and parenthood. Decisions about whether to marry and raise children are based on many personal, romantic, and practical considerations; and it is unrealistic to conclude that an opposite-sex couple would choose not to marry simply because same-sex



couples may do so. See *Kitchen v. Herbert*, 755 F. 3d 1193, 1223 (CA10 2014) (“[I]t is wholly illogical to believe that state recognition of the love and commitment between same-sex couples will alter the most intimate and personal decisions of opposite-sex couples”). The respondents have not shown a foundation for the conclusion that allowing same-sex marriage will cause the harmful outcomes they describe. Indeed, with respect to this asserted basis for excluding same-sex couples from the right to marry, it is appropriate to observe these cases involve only the rights of two consenting adults whose marriages would pose no risk of harm to themselves or third parties.

Finally, it must be emphasized that religions, and those who adhere to religious doctrines, may continue to advocate with utmost, sincere conviction that, by divine precepts, same-sex marriage should not be condoned. The First Amendment ensures that religious organizations and persons are given proper protection as they seek to teach the principles that are so fulfilling and so central to their lives and faiths, and to their own deep aspirations to continue the family structure they have long revered. The same is true of those who oppose same-sex marriage for other reasons. In turn, those who believe allowing same-sex marriage is proper or indeed essential, whether as a matter of religious conviction or secular belief, may engage those who disagree with their view in an open and searching debate. The Constitution, however, does not permit the State to bar same-sex couples from marriage on the same terms as accorded to couples of the opposite sex.

V

These cases also present the question whether the Constitution requires States to recognize same-sex marriages validly performed out of State. As made clear by the case of *Obergefell and Arthur*, and by that of *DeKoe and Kostura*, the recognition bans inflict substantial and continuing harm on same-sex couples.

Being married in one State but having that valid marriage denied in another is one of “the most perplexing and distressing complication[s]” in the law of domestic relations. *Williams v. North Carolina*, 317 U. S. 287, 299 (1942) (internal quotation marks omitted). Leaving the current state of affairs in place would maintain and promote instability and uncertainty. For some couples, even an ordinary drive into a neighboring State to visit family or friends risks causing severe hardship in the event of a spouse’s hospitalization while across state lines. In light of the fact that many States already allow same-sex marriage—and hundreds of thousands of these marriages already have occurred—the disruption caused by the recognition bans is significant and ever-growing.

As counsel for the respondents acknowledged at argument, if States are required by the Constitution to issue marriage licenses to same-sex couples, the justifications for refusing to recognize those marriages performed elsewhere are undermined. See Tr. of Oral Arg. on Question 2, p. 44. The Court, in this decision, holds same-sex couples may exercise the fundamental

right to marry in all States. It follows that the Court also must hold—and it now does hold—that there is no lawful basis for a State to refuse to recognize a lawful same-sex marriage performed in another State on the ground of its same-sex character.

* * *

No union is more profound than marriage, for it embodies the highest ideals of love, fidelity, devotion, sacrifice, and family. In forming a marital union, two people become something greater than once they were. As some of the petitioners in these cases demonstrate, marriage embodies a love that may endure even past death. It would misunderstand these men and women to say they disrespect the idea of marriage. Their plea is that they do respect it, respect it so deeply that they seek to find its fulfillment for themselves. Their hope is not to be condemned to live in loneliness, excluded from one of civilization’s oldest institutions. They ask for equal dignity in the eyes of the law. The Constitution grants them that right.

The judgment of the Court of Appeals for the Sixth Circuit is reversed.

It is so ordered.

SUPREME COURT OF UNITED STATES
26 de junio de 2015

http://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/14-556_3204.pdf
(26 de junio de 2015)

[Volver al Índice](#)

Voto de minoría del Ministro Thomas (selección)

JUSTICE THOMAS, with whom JUSTICE SCALIA joins, dissenting.

The Court's decision today is at odds not only with the Constitution, but with the principles upon which our Nation was built. Since well before 1787, liberty has been understood as freedom from government action, not entitlement to government benefits. The Framers created our Constitution to preserve that understanding of liberty.

Yet the majority invokes our Constitution in the name of a "liberty" that the Framers would not have recognized, to the detriment of the liberty they sought to protect. Along the way, it rejects the idea—captured in our Declaration of Independence—that human dignity is innate and suggests instead that it comes from the Government. This distortion of our Constitution not only ignores the text, it inverts the relationship between the individual and the state in our Republic. I cannot agree with it.

I

The majority's decision today will require States to issue marriage licenses to same-sex couples and to recognize same-sex marriages entered in other States largely based on a constitutional provision guaranteeing "due process" before a person is deprived of his "life, liberty, or property." I have elsewhere explained the dangerous fiction of treating the Due Process Clause as a font of substantive rights. *McDonald v. Chicago*, 561 U. S. 742, 811–812 (2010) (THOMAS, J., concurring in part and concurring in judgment). It distorts the constitutional text, which guarantees only whatever "process" is "due" before a person is deprived of life, liberty, and property. U. S. Const., Amdt. 14, §1. Worse, it invites judges to do exactly what the majority has done here—"roa[m] at large in the constitutional field" guided only by their personal views" as to the "fundamental rights" protected by that document. *Planned Parenthood of Southeastern Pa. v. Casey*, 505 U. S. 833, 953, 965 (1992) (Rehnquist, C. J., concurring in judgment in part and dissenting in part) (quoting *Griswold v. Connecticut*, 381 U. S. 479, 502 (1965) (Harlan, J., concurring in judgment)).

(...)

II

Even if the doctrine of substantive due process were somehow defensible—it is not—petitioners still would not have a claim. To invoke the protection of the Due Process Clause at all—whether under a theory of "substantive" or "procedural" due process—a party must first identify a deprivation of "life, liberty, or property." The majority claims these state laws deprive petitioners of "liberty," but the concept of "liberty" it conjures up bears no resemblance to any plausible meaning of that word as it is used in the Due Process Clauses.

A

As used in the Due Process Clauses, “liberty” most likely refers to “the power of loco-motion, of changing situation, or removing one’s person to whatsoever place one’s own inclination may direct; without imprisonment or restraint, unless by due course of law.” 1 W. Blackstone, *Commentaries on the Laws of England* 130 (1769) (Blackstone).

That definition is drawn from the historical roots of the Clauses and is consistent with our Constitution’s text and structure.

Both of the Constitution’s Due Process Clauses reach back to Magna Carta. See *Davidson v. New Orleans*, 96 U. S. 97, 101–102 (1878). Chapter 39 of the original Magna Carta provided, “No free man shall be taken, imprisoned, disseised, outlawed, banished, or in any way destroyed, nor will We proceed against or prosecute him, except by the lawful judgment of his peers and by the law of the land.” Magna Carta, ch. 39, in A. Howard, *Magna Carta: Text and Commentary* 43 (1964). Although the 1215 version of Magna Carta was in effect for only a few weeks, this provision was later reissued in 1225 with modest changes to its wording as follows: “No freeman shall be taken, or imprisoned, or be disseised of his freehold, or liberties, or free customs, or be outlawed, or exiled, or any otherwise destroyed; nor will we not pass upon him, nor condemn him, but by lawful judgment of his peers or by the law of the land.” 1 E. Coke, *The Second Part of the Institutes of the Laws of England* 45 (1797). In his influential commentary on the provision many years later, Sir Edward Coke interpreted the words “by the law of the land” to mean the same thing as “by due proces of the common law.” *Id.*, at 50.

After Magna Carta became subject to renewed interest in the 17th century, see, e.g., *ibid.*, William Blackstone referred to this provision as protecting the “absolute rights of every Englishman.” 1 Blackstone 123. And he formulated those absolute rights as “the right of personal security,” which included the right to life; “the right of personal liberty”; and “the right of private property.” *Id.*, at 125. He defined “the right of personal liberty” as “the power of loco-motion, of changing situation, or removing one’s person to whatsoever place one’s own inclination may direct; without imprisonment or restraint, unless by due course of law.” *Id.*, at 125, 130.¹²¹

The Framers drew heavily upon Blackstone’s formulation, adopting provisions in early State Constitutions that replicated Magna Carta’s language, but were modified to refer specifically to “life, liberty, or property.”¹²² State decisions

¹²¹ *The seeds of this articulation can also be found in Henry Care’s influential treatise, English Liberties. First published in America in 1721, it described the “three things, which the Law of England . . . principally regards and taketh Care of,” as “Life, Liberty and Estate,” and described habeas corpus as the means by which one could procure one’s “Liberty” from imprisonment. The Habeas Corpus Act, comment., in English Liberties, or the Free-born Subject’s Inheritance 185 (H. Care comp. 5th ed. 1721). Though he used the word “Liberties” by itself more broadly, see, e.g., id., at 7, 34, 56, 58, 60, he used “Liberty” in a narrow sense when placed alongside the words “Life” or “Estate,” see, e.g., id., at 185, 200.*

¹²² *Maryland, North Carolina, and South Carolina adopted the phrase “life, liberty, or property” in provisions otherwise tracking Magna Carta: “That no freeman ought to be taken, or imprisoned, or disseised of his freehold, liberties, or privileges, or outlawed, or exiled, or in any manner destroyed, or deprived of his life, liberty, or property, but by the judgment of his peers, or by the law of the land.” Md. Const., Declaration of Rights, Art. XXI (1776), in 3 Federal and State Constitutions, Colonial Charters, and Other Organic Laws 1688 (F. Thorpe ed. 1909); see also S. C. Const., Art. XLI (1778), in 6 id., at 3257; N. C. Const., Declaration of Rights, Art. XII (1776), in 5 id., at 2788. Massachusetts and New Hampshire did the same, albeit with*

interpreting these provisions between the founding and the ratification of the Fourteenth Amendment almost uniformly construed the word “liberty” to refer only to freedom from physical restraint. See Warren, *The New “Liberty” Under the Fourteenth Amendment*, 39 Harv. L. Rev. 431, 441–445 (1926). Even one case that has been identified as a possible exception to that view merely used broad language about liberty in the context of a habeas corpus proceeding—a proceeding classically associated with obtaining freedom from physical restraint. Cf. *id.*, at 444–445.

(...)

2

Even assuming that the “liberty” in those Clauses encompasses something more than freedom from physical restraint, it would not include the types of rights claimed by the majority. In the American legal tradition, liberty has long been understood as individual freedom from governmental action, not as a right to a particular governmental entitlement.

The founding-era understanding of liberty was heavily influenced by John Locke, whose writings “on natural rights and on the social and governmental contract” were cited “[i]n pamphlet after pamphlet” by American writers. B. Bailyn, *The Ideological Origins of the American Revolution* 27 (1967). Locke described men as existing in a state of nature, possessed of the “perfect freedom to order their actions and dispose of their possessions and persons as they think fit, within the bounds of the law of nature, without asking leave, or depending upon the will of any other man.” J. Locke, *Second Treatise of Civil Government*, §4, p. 4 (J. Gough ed. 1947) (Locke). Because that state of nature left men insecure in their persons and property, they entered civil society, trading a portion of their natural liberty for an increase in their security. See *id.*, §97, at 49. Upon consenting to that order, men obtained civil liberty, or the freedom “to be under no other legislative power but that established by consent in the commonwealth; nor under the dominion of any will or restraint of any law, but what that legislative shall enact according to the trust put in it.” *Id.*, §22, at 13.¹²³

This philosophy permeated the 18th-century political scene in America. A 1756 editorial in the *Boston Gazette*, for example, declared that “Liberty in the State

some alterations to Magna Carta’s framework: “[N]o subject shall be arrested, imprisoned, despoiled, or deprived of his property, immunities, or privileges, put out of the protection of the law, exiled, or deprived of his life, liberty, or estate, but by the judgment of his peers, or the law of the land.” Mass. Const., pt. I, Art. XII (1780), in 3 *id.*, at 1891; see also N. H. Const., pt. I, Art. XV (1784), in 4 *id.*, at 2455.

¹²³ Locke’s theories heavily influenced other prominent writers of the 17th and 18th centuries. Blackstone, for one, agreed that “natural liberty consists properly in a power of acting as one thinks fit, without any restraint or control, unless by the law of nature” and described civil liberty as that “which leaves the subject entire master of his own conduct,” except as “restrained by human laws.” 1 Blackstone 121–122. And in a “treatise routinely cited by the Founders,” *Zivotofsky v. Kerry*, ante, at 5 (THOMAS, J., concurring in judgment in part and dissenting in part), Thomas Rutherford wrote, “By liberty we mean the power, which a man has to act as he thinks fit, where no law restrains him; it may therefore be called a mans right over his own actions.” 1 T. Rutherford, *Institutes of Natural Law* 146 (1754). Rutherford explained that “[t]he only restraint, which a mans right over his own actions is originally under, is the obligation of governing himself by the law of nature, and the law of God,” and that “[w]hatever right those of our own species may have . . . to restrain [those actions] within certain bounds, beyond what the law of nature has prescribed, arises from some after-act of our own, from some consent either express or tacit, by which we have alienated our liberty, or transferred the right of directing our actions from ourselves to them.” *Id.*, at 147–148.

of Nature” was the “inherent natural Right” “of each Man” “to make a free Use of his Reason and Understanding, and to chuse that Action which he thinks he can give the best Account of,” but that, “in Society, every Man parts with a Small Share of his natural Liberty, or lodges it in the publick Stock, that he may possess the Remainder without Controul.” *Boston Gazette and Country Journal*, No. 58, May 10, 1756, p. 1. Similar sentiments were expressed in public speeches, sermons, and letters of the time. See 1 C. Hyneman & D. Lutz, *American Political Writing During the Founding Era 1760–1805*, pp. 100, 308, 385 (1983).

The founding-era idea of civil liberty as natural liberty constrained by human law necessarily involved only those freedoms that existed outside of government. See Hamburger, *Natural Rights, Natural Law, and American Constitutions*, 102 *Yale L. J.* 907, 918–919 (1993). As one later commentator observed, “[L]iberty in the eighteenth century was thought of much more in relation to ‘negative liberty’; that is, freedom from, not freedom to, freedom from a number of social and political evils, including arbitrary government power.” J. Reid, *The Concept of Liberty in the Age of the American Revolution* 56 (1988). Or as one scholar put it in 1776, “[T]he common idea of liberty is merely negative, and is only the absence of restraint.” R. Hey, *Observations on the Nature of Civil Liberty and the Principles of Government* §13, p. 8 (1776) (Hey). When the colonists described laws that would infringe their liberties, they discussed laws that would prohibit individuals “from walking in the streets and highways on certain saints days, or from being abroad after a certain time in the evening, or . . . restrain [them] from working up and manufacturing materials of [their] own growth.” Downer, *A Discourse at the Dedication of the Tree of Liberty*, in 1 Hyneman, *supra*, at 101. Each of those examples involved freedoms that existed outside of government.

B

Whether we define “liberty” as locomotion or freedom from governmental action more broadly, petitioners have in no way been deprived of it.

Petitioners cannot claim, under the most plausible definition of “liberty,” that they have been imprisoned or physically restrained by the States for participating in same-sex relationships. To the contrary, they have been able to cohabit and raise their children in peace. They have been able to hold civil marriage ceremonies in States that recognize same-sex marriages and private religious ceremonies in all States. They have been able to travel freely around the country, making their homes where they please. Far from being incarcerated or physically restrained, petitioners have been left alone to order their lives as they see fit.

Nor, under the broader definition, can they claim that the States have restricted their ability to go about their daily lives as they would be able to absent governmental restrictions. Petitioners do not ask this Court to order the States to stop restricting their ability to enter same-sex relationships, to engage in intimate behavior, to make vows to their partners in public ceremonies, to engage in religious wedding ceremonies, to hold themselves out as married, or to raise children. The States have imposed no such

restrictions. Nor have the States prevented petitioners from approximating a number of incidents of marriage through private legal means, such as wills, trusts, and powers of attorney.

Instead, the States have refused to grant them governmental entitlements. Petitioners claim that as a matter of “liberty,” they are entitled to access privileges and benefits that exist solely because of the government. They want, for example, to receive the State’s imprimatur on their marriages—on state issued marriage licenses, death certificates, or other official forms. And they want to receive various monetary benefits, including reduced inheritance taxes upon the death of a spouse, compensation if a spouse dies as a result of a work-related injury, or loss of consortium damages in tort suits. But receiving governmental recognition and benefits has nothing to do with any understanding of “liberty” that the Framers would have recognized.

To the extent that the Framers would have recognized a natural right to marriage that fell within the broader definition of liberty, it would not have included a right to governmental recognition and benefits. Instead, it would have included a right to engage in the very same activities that petitioners have been left free to engage in—making vows, holding religious ceremonies celebrating those vows, raising children, and otherwise enjoying the society of one’s spouse—without governmental interference. At the founding, such conduct was understood to predate government, not to flow from it. As Locke had explained many years earlier, “The first society was between man and wife, which gave beginning to that between parents and children.” Locke §77, at 39; see also J. Wilson, Lectures on Law, in 2 Collected Works of James Wilson 1068 (K. Hall and M. Hall eds. 2007) (concluding “that to the institution of marriage the true origin of society must be traced”). Petitioners misunderstand the institution of marriage when they say that it would “mean little” absent governmental recognition. Brief for Petitioners in No. 14– 556, p. 33.

(...)

III

The majority’s inversion of the original meaning of liberty will likely cause collateral damage to other aspects of our constitutional order that protect liberty.

A

The majority apparently disregards the political process as a protection for liberty. Although men, in forming a civil society, “give up all the power necessary to the ends for which they unite into society, to the majority of the community,” Locke §99, at 49, they reserve the authority to exercise natural liberty within the bounds of laws established by that society, *id.*, §22, at 13; see also Hey §§52, 54, at 30–32. To protect that liberty from arbitrary interference, they establish a process by which that society can adopt and enforce its laws. In our country, that process is primarily representative government at the state level, with the Federal Constitution serving as a backstop for that process. As a general matter, when the States act through

their representative governments or by popular vote, the liberty of their residents is fully vindicated. This is no less true when some residents disagree with the result; indeed, it seems difficult to imagine any law on which all residents of a State would agree. See Locke §98, at 49 (suggesting that society would cease to function if it required unanimous consent to laws). What matters is that the process established by those who created the society has been honored.

That process has been honored here. The definition of marriage has been the subject of heated debate in the States. Legislatures have repeatedly taken up the matter on behalf of the People, and 35 States have put the question to the People themselves. In 32 of those 35 States, the People have opted to retain the traditional definition of marriage. Brief for Respondents in No. 14–571, pp. 1a– 7a. That petitioners disagree with the result of that process does not make it any less legitimate. Their civil liberty has been vindicated.

B

Aside from undermining the political processes that protect our liberty, the majority’s decision threatens the religious liberty our Nation has long sought to protect.

The history of religious liberty in our country is familiar: Many of the earliest immigrants to America came seeking freedom to practice their religion without restraint. See McConnell, *The Origins and Historical Understanding of Free Exercise of Religion*, 103 Harv. L. Rev. 1409, 1422– 1425 (1990). When they arrived, they created their own havens for religious practice. *Ibid.* Many of these havens were initially homogenous communities with established religions. *Ibid.* By the 1780’s, however, “America was in the wake of a great religious revival” marked by a move toward free exercise of religion. *Id.*, at 1437. **Every State save Connecticut adopted protections for religious freedom in their State Constitutions by 1789, *id.*, at 1455, and, of course, the First Amendment enshrined protection for the free exercise of religion in the U. S. Constitution. But that protection was far from the last word on religious liberty in this country, as the Federal Government and the States have reaffirmed their commitment to religious liberty by codifying protections for religious practice.** See, e.g., Religious Freedom Restoration Act of 1993, 107 Stat. 1488, 42 U. S. C. §2000bb et seq.; Conn. Gen. Stat. §52–571b (2015). Numerous amici—even some not supporting the States—have cautioned the Court that its decision here will “have unavoidable and wide-ranging implications for religious liberty.” Brief for General Conference of Seventh-Day Adventists et al. as Amici Curiae 5. In our society, marriage is not simply a governmental institution; it is a religious institution as well. *Id.*, at 7. Today’s decision might change the former, but it cannot change the latter. It appears all but inevitable that the two will come into conflict, particularly as individuals and churches are confronted with demands to participate in and endorse civil marriages between same-sex couples.

The majority appears unmoved by that inevitability. It makes only a weak gesture toward religious liberty in a single paragraph, ante, at



27. And even that gesture indicates a misunderstanding of religious liberty in our Nation’s tradition. Religious liberty is about more than just the protection for “religious organizations and persons . . . as they seek to teach the principles that are so fulfilling and so central to their lives and faiths.” Ibid. Religious liberty is about freedom of action in matters of religion generally, and the scope of that liberty is directly correlated to the civil restraints placed upon religious practice.¹²⁴

Although our Constitution provides some protection against such governmental restrictions on religious practices, the People have long elected to afford broader protections than this Court’s constitutional precedents mandate. Had the majority allowed the definition of marriage to be left to the political process—as the Constitution requires—the People could have considered the religious liberty implications of deviating from the traditional definition as part of their deliberative process. Instead, the majority’s decision short-circuits that process, with potentially ruinous consequences for religious liberty.

IV

(...)

Human dignity has long been understood in this country to be innate. When the Framers proclaimed in the Declaration of Independence that “all men are created equal” and “endowed by their Creator with certain unalienable Rights,” they referred to a vision of mankind in which all humans are created in the image of God and therefore of inherent worth. That vision is the foundation upon which this Nation was built.

The corollary of that principle is that human dignity cannot be taken away by the government. Slaves did not lose their dignity (any more than they lost their humanity) because the government allowed them to be enslaved. Those held in internment camps did not lose their dignity because the government confined them. And those denied governmental benefits certainly do not lose their dignity because the government denies them those benefits. The government cannot bestow dignity, and it cannot take it away.

The majority’s musings are thus deeply misguided, but at least those musings can have no effect on the dignity of the persons the majority demeans. Its mischaracterization of the arguments presented by the States and their amici can have no effect on the dignity of those litigants. Its rejection of laws preserving the traditional definition of marriage can have no effect on the dignity of the people who voted for them. Its invalidation of those laws can have no effect on the dignity of the people who continue to adhere to the traditional definition of marriage. And its disdain for the understandings of liberty and dignity upon which this Nation was founded can have no effect on the dignity of Americans who continue to believe in them.

¹²⁴ *Concerns about threats to religious liberty in this context are not unfounded. During the hey-day of antimiscegenation laws in this country, for instance, Virginia imposed criminal penalties on ministers who performed marriage in violation of those laws, though their religions would have permitted them to perform such ceremonies. Va. Code Ann. §20-60 (1960).*



* * *

Our Constitution—like the Declaration of Independence before it—was predicated on a simple truth: One’s liberty, not to mention one’s dignity, was something to be shielded from—not provided by—the State. Today’s decision casts that truth aside. In its haste to reach a desired result, the majority misapplies a clause focused on “due process” to afford substantive rights, disregards the most plausible understanding of the “liberty” protected by that clause, and distorts the principles on which this Nation was founded. Its decision will have inestimable consequences for our Constitution and our society. I respectfully dissent.

[Volver al Índice](#)

C. Sentencia de la Corte Suprema que rechaza incluir a Israel, como lugar de nacimiento, en pasaportes de norteamericanos nacidos en Jerusalén debido a que Estados Unidos no reconoce la soberanía de ningún país sobre esa ciudad (selección)¹²⁵

Opinion of the Court

NOTICE: This opinion is subject to formal revision before publication in the preliminary print of the United States Reports. Readers are requested to notify the Reporter of Decisions, Supreme Court of the United States, Washington, D. C. 20543, of any typographical or other formal errors, in order that corrections may be made before the preliminary print goes to press.

SUPREME COURT OF THE UNITED STATES
No. 13–628
MENACHEM BINYAMIN ZIVOTFSKY, BY HIS PARENTS
AND GUARDIANS, ARI Z. AND NAOMI SIEGMAN
ZIVOTFSKY, PETITIONER v. JOHN KERRY,
SECRETARY OF STATE
ON WRIT OF CERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF
APPEALS FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA CIRCUIT

[June 8, 2015]

JUSTICE KENNEDY delivered the opinion of the Court.

A delicate subject lies in the background of this case. That subject is Jerusalem. Questions touching upon the history of the ancient city and its present legal and international status are among the most difficult and complex in international affairs. In our constitutional system these matters are committed to the Legislature and the Executive, not the Judiciary. As a result, in this opinion the Court does no more, and must do no more, than note the existence of international debate and tensions respecting Jerusalem. Those matters are for Congress and the President to discuss and consider as they seek to shape the Nation’s foreign policies.

The Court addresses two questions to resolve the interbranch dispute now before it. First, it must determine whether the President has the exclusive power to grant formal recognition to a foreign sovereign. Second, if he has that power, the Court must determine whether Congress can command the President and his Secretary of State to issue a formal statement that contradicts the earlier recognition. The statement in question here is a congressional mandate that allows a United States citizen born in Jerusalem to direct the President and Secretary of State, when issuing his passport, to state that his place of birth is “Israel.”

(...)

II
A

¹²⁵ El texto íntegro de la sentencia puede consultarse en nuestro sitio web <http://www.celir.cl/v2/Jurisprudencia/CSEEUUpasaportesJerusalen.pdf>

Recognition is a “formal acknowledgement” that a particular “entity possesses the qualifications for statehood” or “that a particular regime is the effective government of a state.” Restatement (Third) of Foreign Relations Law of the United States §203, Comment a, p. 84 (1986). It may also involve the determination of a state’s territorial bounds. See 2 M. Whiteman, *Digest of International Law* §1, p. 1 (1963) (Whiteman) (“[S]tates may recognize or decline to recognize territory as belonging to, or under the sovereignty of, or having been acquired or lost by, other states”). Recognition is often effected by an express “written or oral declaration.” 1 J. Moore, *Digest of International Law* §27, p. 73 (1906) (Moore). It may also be implied—for example, by concluding a bilateral treaty or by sending or receiving diplomatic agents. *Ibid.*; I. Brownlie, *Principles of Public International Law* 93 (7th ed. 2008) (Brownlie).

Legal consequences follow formal recognition. Recognized sovereigns may sue in United States courts, see *Guaranty Trust Co. v. United States*, 304 U. S. 126, 137 (1938), and may benefit from sovereign immunity when they are sued, see *National City Bank of N. Y. v. Republic of China*, 348 U. S. 356, 358–359 (1955). The actions of a recognized sovereign committed within its own territory also receive deference in domestic courts under the act of state doctrine. See *Oetjen v. Central Leather Co.*, 246 U. S. 297, 302–303 (1918). Recognition at international law, furthermore, is a precondition of regular diplomatic relations. 1 Moore §27, at 72. Recognition is thus “useful, even necessary,” to the existence of a state. *Ibid.* Despite the importance of the recognition power in foreign relations, the Constitution does not use the term “recognition,” either in Article II or elsewhere. The Secretary asserts that the President exercises the recognition power based on the Reception Clause, which directs that the President “shall receive Ambassadors and other public Ministers.” Art. II, §3. As Zivotofsky notes, the Reception Clause received little attention at the Constitutional Convention. See Reinstein, *Recognition: A Case Study on the Original Understanding of Executive Power*, 45 U. Rich. L. Rev. 801, 860–862 (2011). In fact, during the ratification debates, Alexander Hamilton claimed that the power to receive ambassadors was “more a matter of dignity than of authority,” a ministerial duty largely “without consequence.” *The Federalist* No. 69, p. 420 (C. Rossiter ed. 1961).

At the time of the founding, however, prominent international scholars suggested that receiving an ambassador was tantamount to recognizing the sovereignty of the sending state. See E. de Vattel, *The Law of Nations* §78, p. 461 (1758) (J. Chitty ed. 1853) (“[E]very state, truly possessed of sovereignty, has a right to send ambassadors” and “to contest their right in this instance” is equivalent to “contesting their sovereign dignity”); see also 2 C. van Bynkershoek, *On Questions of Public Law* 156–157 (1737) (T. Frank ed. 1930) (“Among writers on public law it is usually agreed that only a sovereign power has a right to send ambassadors”); 2 H. Grotius, *On the Law of War and Peace* 440–441 (1625) (F. Kelsey ed. 1925) (discussing the duty to admit ambassadors of sovereign powers). It is a logical and proper inference, then, that a Clause directing the President alone to receive ambassadors would be understood to acknowledge his power to recognize other nations.

(...)

C

Having examined the Constitution's text and this Court's precedent, it is appropriate to turn to accepted understandings and practice. In separation-of-powers cases this Court has often "put significant weight upon historical practice." *NLRB v. Noel Canning*, 573 U. S. ___, ___ (2014) (slip op., at 6) (emphasis deleted). Here, history is not all on one side, but on balance it provides strong support for the conclusion that the recognition power is the President's alone. As Zivotofsky argues, certain historical incidents can be interpreted to support the position that recognition is a shared power. But the weight of historical evidence supports the opposite view, which is that the formal determination of recognition is a power to be exercised only by the President.

The briefs of the parties and amici, which have been of considerable assistance to the Court, give a more complete account of the relevant history, as do the works of scholars in this field. See, e.g., Brief for Respondent 26–39; Brief for Petitioner 34–57; Brief for American Jewish Committee as Amicus Curiae 6–24; J. Goebel, *The Recognition Policy of the United States* 97–170 (1915) (Goebel); 1 Moore §§28–58, 74–164; Reinstein, *Is the President's Recognition Power Exclusive?* 86 *Temp. L. Rev.* 1, 3–50 (2013). But even a brief survey of the major historical examples, with an emphasis on those said to favor Zivotofsky, establishes no more than that some Presidents have chosen to cooperate with Congress, not that Congress itself has exercised the recognition power.

From the first Administration forward, the President has claimed unilateral authority to recognize foreign sovereigns. For the most part, Congress has acquiesced in the Executive's exercise of the recognition power. On occasion, the President has chosen, as may often be prudent, to consult and coordinate with Congress. As Judge Tatel noted in this case, however, "the most striking thing" about the history of recognition "is what is absent from it: a situation like this one," where Congress has enacted a statute contrary to the President's formal and considered statement concerning recognition. 725 F. 3d, t 221 (concurring opinion).

The first debate over the recognition power arose in 1793, after France had been torn by revolution. See Prakash & Ramsey, *The Executive Power over Foreign Affairs*, 111 *Yale L. J.* 231, 312 (2001). Once the Revolutionary Government was established, Secretary of State Jefferson and President Washington, without consulting Congress, authorized the American Ambassador to resume relations with the new regime. See *Letter to Gouverneur Morris* (Mar. 12, 1793), in 25 *Papers of Thomas Jefferson* 367, 367–368 (J. Catanzariti ed. 1992); Goebel 99–104. Soon thereafter, the new French Government proposed to send an ambassador, Citizen Genet, to the United States. See *id.*, at 105. Members of the President's Cabinet agreed that receiving Genet would be a binding and public act of recognition. See *Opinion on the Treaties with France* (Apr. 28, 1793), in 25 *Papers of Thomas Jefferson*,

at 608, 612 (“The reception of the Minister at all . . . is an ackno[w]le[d]gement of the legitimacy of their government”); see also Letter from A. Hamilton to G. Washington (Cabinet Paper) (Apr. 1793), in 4 Works of Alexander Hamilton 369, 369–396 (H. Lodge ed. 1904). They decided, however, both that Genet should be received and that consultation with Congress was not necessary. See T. Jefferson, Anas (Apr. 18, 1793), in 1 Writings of Thomas Jefferson 226, 227 (P. Ford ed. 1892); Cabinet Opinion on Washington’s Questions on Neutrality and the Alliance with France (Apr. 19, 1793), in 25 Papers of Thomas Jefferson, at 570. Congress expressed no disagreement with this position, and Genet’s reception marked the Nation’s first act of recognition—one made by the President alone. See Prakash, *supra*, at 312–313.

(...)

III

As the power to recognize foreign states resides in the President alone, the question becomes whether §214(d) infringes on the Executive’s consistent decision to withhold recognition with respect to Jerusalem. See *Nixon v. Administrator of General Services*, 433 U. S. 425, 443 (1977) (action unlawful when it “prevents the Executive Branch from accomplishing its constitutionally assigned functions”).

Section 214(d) requires that, in a passport or consular report of birth abroad, “the Secretary shall, upon the request of the citizen or the citizen’s legal guardian, record the place of birth as Israel” for a “United States citizen born in the city of Jerusalem.” 116 Stat. 1366. That is, §214(d) requires the President, through the Secretary, to identify citizens born in Jerusalem who so request as being born in Israel. But according to the President, those citizens were not born in Israel. As a matter of United States policy, neither Israel nor any other country is acknowledged as having sovereignty over Jerusalem. In this way, §214(d) “directly contradicts” the “carefully calibrated and longstanding Executive branch policy of neutrality toward Jerusalem.” 725 F. 3d, at 217, 216.

If the power over recognition is to mean anything, it must mean that the President not only makes the initial, formal recognition determination but also that he may maintain that determination in his and his agent’s statements.

This conclusion is a matter of both common sense and necessity. If Congress could command the President to state a recognition position inconsistent with his own, Congress could override the President’s recognition determination. Under international law, recognition may be effected by “written or oral declaration of the recognizing state.” 1 Moore §27, at 73. In addition an act of recognition must “leave no doubt as to the intention to grant it.” 1 Oppenheim’s International Law §50, at 169. Thus, if Congress could alter the President’s statements on matters of recognition or force him to contradict them, Congress in effect would exercise the recognition power.

As Justice Jackson wrote in *Youngstown*, when a Presidential power is “exclusive,” it “disabl[es] the Congress from acting upon the subject.” 343 U.

S., at 637–638 (concurring opinion). Here, the subject is quite narrow: The Executive’s exclusive power extends no further than his formal recognition determination. But as to that determination, Congress may not enact a law that directly contradicts it. This is not to say Congress may not express its disagreement with the President in myriad ways. For example, it may enact an embargo, decline to confirm an ambassador, or even declare war. But none of these acts would alter the President’s recognition decision.

If Congress may not pass a law, speaking in its own voice, that effects formal recognition, then it follows that it may not force the President himself to contradict his earlier statement. That congressional command would not only prevent the Nation from speaking with one voice but also prevent the Executive itself from doing so in conducting foreign relations.

Although the statement required by §214(d) would not itself constitute a formal act of recognition, it is a mandate that the Executive contradict his prior recognition determination in an official document issued by the Secretary of State. See *Urtetiqui v. D’Arcy*, 9 Pet. 692, 699 (1835) (a passport “from its nature and object, is addressed to foreign powers” and “is to be considered . . . in the character of a political document”). As a result, it is unconstitutional. This is all the more clear in light of the longstanding treatment of a passport’s place-of-birth section as an official executive statement implicating recognition. See 25 F. 3d, at 224 (Tatel, J., concurring). The Secretary’s position on this point has been consistent: He will not place information in the place-of-birth section of a passport that contradicts the President’s recognition policy. See 7 FAM §1383. If a citizen objects to the country listed as sovereign over his place of birth, then the Secretary will accommodate him by listing the city or town of birth rather than the country. See *id.*, §1383.6. But the Secretary will not list a sovereign that contradicts the President’s recognition policy in a passport. Thus, the Secretary will not list “Israel” in a passport as the country containing Jerusalem.

The flaw in §214(d) is further underscored by the undoubted fact that the purpose of the statute was to infringe on the recognition power—a power the Court now holds is the sole prerogative of the President. The statute is titled “United States Policy with Respect to Jerusalem as the Capital of Israel.” §214, 116 Stat. 1365. The House Conference Report proclaimed that §214 “contains four provisions related to the recognition of Jerusalem as Israel’s capital.” H. R. Conf. Rep. No. 107–671, p. 123 (2002). And, indeed, observers interpreted §214 as altering United States policy regarding Jerusalem—which led to protests across the region. See *supra*, at 4. From the face of §214, from the legislative history, and from its reception, it is clear that Congress wanted to express its displeasure with the President’s policy by, among other things, commanding the Executive to contradict his own, earlier stated position on Jerusalem. This Congress may not do. It is true, as Zivotofsky notes, that Congress has substantial authority over passports. See *Haig v. Agee*, 453 U. S. 280 (1981); *Zemel v. Rusk*, 381 U. S. 1 (1965); *Kent v. Dulles*, 357 U. S. 116 (1958). The Court does not question the power of Congress to enact passport legislation of wide scope. In *Kent v. Dulles*, for example, the Court held that if a person’s “liberty” to travel “is to be regulated” through a

passport, “it must be pursuant to the lawmaking functions of the Congress.” See *id.*, at 129. Later cases, such as *Zemel v. Rusk* and *Haig v. Agee*, also proceeded on the assumption that Congress must authorize the grounds on which passports may be approved or denied. See *Zemel*, *supra*, at 7–13; *Haig*, *supra*, at 289–306. This is consistent with the extensive lawmaking power the Constitution vests in Congress over the Nation’s foreign affairs.

The problem with §214(d), however, lies in how Congress exercised its authority over passports. It was an improper act for Congress to “aggrandiz[e] its power at the expense of another branch” by requiring the President to contradict an earlier recognition determination in an official document issued by the Executive Branch. *Freytag v. Commissioner*, 501 U. S. 868, 878 (1991). To allow Congress to control the President’s communication in the context of a formal recognition determination is to allow Congress to exercise that exclusive power itself. As a result, the statute is unconstitutional.

* * *

In holding §214(d) invalid the Court does not question the substantial powers of Congress over foreign affairs in general or passports in particular. This case is confined solely to the exclusive power of the President to control recognition determinations, including formal statements by the Executive Branch acknowledging the legitimacy of a state or government and its territorial bounds. Congress cannot command the President to contradict an earlier recognition determination in the issuance of passports.

The judgment of the Court of Appeals for the District of Columbia Circuit is
Affirmed.

SUPREME COURT OF UNITED STATES
8 de junio de 2015

http://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/13-628_3dq3.pdf
(15 de junio de 2015)

[Volver al Índice](#)

Guatemala

A. Comunicados de prensa de la Conferencia Episcopal de Guatemala ante la contaminación reciente del río La Pasión¹²⁶

*VICARIATO APOSTÓLICO DE PETÉN
Ante el ecocidio del río La Pasión*

COMUNICADO

(VEMOS QUE LA CREACIÓN ENTERA SUFRE CON DOLORES DE PARTO; Rm 8,22)

Ante los recientes sucesos de contaminación ocurridos en el Río Pasión, los cuales han producido una elevada mortandad de la fauna local, la contaminación de su cauce y un gran impacto en la población local que depende del mismo, el Vicariato Apostólico de Petén quiere expresar a través de este comunicado su solidaridad con todo el municipio de Sayaxché y las demás comunidades afectadas y manifestar su preocupación.

Ya en el año 2000 la iglesia de Petén en su carta pastoral "El Grito de la Selva en el año jubilar" expresaba casi de manera profética –a raíz de lo sucedido– su inquietud ante el tema:

"La belleza y riqueza de los lagos y lagunas se está convirtiendo en cloacas y vertederos de los desechos humanos, aguas negras y tóxicos químicos, donde priman intereses económicos y silencios políticos. Estamos agotando las fuentes de la vida.

Un verdadero ecocidio se está dando en el departamento contra la fauna, la flora y la misma población humana, ya que las mayorías pobres sufren las graves consecuencias condenadas a vivir en condiciones de extrema pobreza.¹²⁷ Estamos cortando la rama donde estamos parados."

El Papa Francisco en su encíclica "Laudato Si" la cual verá la luz el próximo jueves 18 nos recuerda que las fuentes de agua dulce suministran los sectores sanitarios, agropastorales e industriales (LS 28) invitándonos a todos/as ante el desafío ecológico a una profunda reflexión: estas situaciones provocan los gemidos de la hermana tierra que se unen a los gemidos de los abandonados de este mundo, con un lamento que reclama de nosotros otra ruta. (LS 53); cuando se propone una visión de la naturaleza como objeto de lucro e interés, esto tiene graves consecuencias para la sociedad. (LS 82) y recordando que la creación del mundo como regalo divino no está subordinada a la propiedad privada sino al destino universal de los bienes (LS 93), o dicho de otra forma y con otras palabras: el río es de todos y para todos.

Por todo ello el Vicariato Apostólico de Petén pide a las autoridades competentes:

¹²⁶ Con fecha 22 de junio de 2015 la Comisión Episcopal de Justicia y Solidaridad emitió un pronunciamiento que puede consultarse en nuestro sitio web www.celir.cl/v2/Otros/ComisionepiscopalGuatemala.pdf, en relación a los mismos hechos.

¹²⁷ El destacado es nuestro.



• **Que se esclarezcan las responsabilidades sobre lo sucedido poniendo medios para que no vuelva a repetirse en un futuro.**

- Que con la ayuda de expertos se haga todo lo necesario para restablecer la salud del cauce del Río Pasión así como la vida de todo el ecosistema que posibilita.
- Que se vea la forma más justa y racional en como compensar o rehabilitar a los más afectados. Este punto nos parece de vital importancia.
- Que se garanticen los suministros de agua potable a toda la población.
- Que se posibiliten y garanticen los mecanismos de higiene y salubridad necesarios para que el impacto del suceso dañe lo menos posible a la población.
- Es importante que en el diálogo con la población se busque la forma de ayudarla, no de dividirla, buscando en todo momento el bien común y respondiendo de forma especial a las necesidades de los más pobres y vulnerables.

Dado en ciudad de Flores, Petén, Guatemala a los dieciséis días del mes de Junio del año dos mil quince.

Parroquia de San Antonio de Padua, Sayaxché Pastoral Social VAP
Enrique Sáez Palazón -Vicario de pastoral-
16 de junio de 2015

<http://www.iglesiacatolica.org.gt/20150616.pdf>
(25 de junio de 2015)

[Volver al Índice](#)

B. “Nos duele Guatemala”, comunicado de prensa de la Conferencia Episcopal de Guatemala ante la situación actual que vive el país

1. Los Obispos de Guatemala, unidos al clamor popular ¡Basta ya, queremos una Guatemala distinta!, sumamos nuestra palabra en esta coyuntura histórica que atraviesa nuestro país, definida por dos factores: **el descubrimiento de la corrupción organizada en entidades estatales que ha puesto en crisis la institucionalidad del Estado y el horizonte electoral que define tiempos y plazos constitucionales sin que se perfilen opciones políticas capaces de conducir a la consolidación de la democracia participativa y del estado de derecho mientras se acercan las elecciones que tendrán lugar el 6 de Septiembre en las que se elegirán presidente, vicepresidente, diputados al Congreso y al PARLACEN, y alcaldes con las corporaciones municipales en todo el país.**¹²⁸

2. Los primeros procesos electorales de la época democrática estaban signados por la existencia de algunos partidos políticos históricos, con principios propios y con una capacidad de convocatoria a segmentos importantes del electorado. El paso del tiempo ha ido mostrando un deterioro profundo del sistema político guatemalteco. Los partidos surgen y desaparecen en ciclos breves, se caracterizan más por la personalidad de quien los organiza y menos por la propuesta política que los inspira, el clientelismo es parte de su naturaleza misma, la fidelidad de sus militantes es mínima como lo comprobamos por el transfuguismo cada vez mayor de diputados y alcaldes. Los partidos carecen de una plataforma ideológica sólida y coherente con la realidad pluricultural del país y de propuestas serias, viables e integrales que garanticen la gobernabilidad y la solución de los problemas estructurales que afrontamos. Cada día se incrementa más la brecha entre la ciudadanía y los partidos que hace ya mucho dejaron de ser interlocutores válidos de la población. Día a día crece el escepticismo ante los mismos, pues hacen promesas no cumplidas, no muestran transparencia en el manejo de sus fondos y crean sospechas sobre el origen ilícito de tal financiamiento .

3. Estas características de nuestro sistema político han ido generando un creciente desencanto entre la población que cada vez cree menos en los partidos y en sus líderes cuyo comportamiento ha creado la mentalidad de considerar la participación política como quebrar una piñata: un golpe de fortuna, palos al azar, unos dulces caídos y poco más se espera de los partidos. Esta mentalidad muestra también lo fácil que es engañar y ser engañado en nuestro país.

4. Las elecciones, cuya convocatoria ya se publicó para cumplir así con lo mandado por la Constitución, no deben retrasarse, pues hacerlo significaría romper el orden constitucional, sin embargo las mismas se darán en medio de

¹²⁸ El destacado es nuestro.

la crisis generalizada que se hizo evidente a raíz del descubrimiento del enorme fraude fiscal ocurrido en la Superintendencia de Administración Tributaria y en la que había conexiones claras con funcionarios de gobierno, con empleados aduanales sindicalizados y con empresarios que recurrían al soborno para facilitar la importación y exportación de productos. A esta crisis inicial han seguido nuevos descubrimientos de corrupción multimillonaria: el contrato para la "limpieza" del lago de Amatitlán, el contrato con la droguería Pisa que no solo ha significado corrupción y capturas de personajes importantes sino que ha producido daños irreversibles y hasta la muerte de una serie de enfermos renales pésima y fraudulentamente atendidos. Esto es tan sólo una gota en el océano de corrupción e impunidad que nos ahoga, este cuadro constituye un pecado social inmenso que clama al cielo.

5. Los hechos evidencian la inmundicia de corrupción en que el Estado guatemalteco se ha convertido y ha constituido el colmo de la desfachatez que ha provocado manifestaciones multitudinarias que expresan la indignación y la ira de grandes mayorías de ciudadanos que puede ser una ventana a la esperanza pero también un riesgo de entrar en procesos caóticos y turbulentos, si no se responde con inmediatez a las demandas legítimas que se vienen planteando en las calles y plazas de nuestra patria.

6. Las movilizaciones han seguido y en ellas descubrimos tanto la genuina indignación popular frente a tanta corrupción y latrocinio como agendas de grupos variados que quieren ser pescadores en el río revuelto de la corrupción actual y que avanzan propuestas de distinta importancia y con sesgos que muestran deseos no siempre realizables y garantes del bien común.

7. El proceso electoral es importante pero también es evidente que la incapacidad -por ineptitud y malicia- del Congreso de la República para cambiar la Ley Electoral y de Partidos Políticos hace que los ciudadanos se enfrenten a unas elecciones en que hay mucho de lo mismo de antes y en muchos sentidos aún peor. Lo que hasta ahora hemos visto y oído son más colorcitos, más mensajes sin sustancia y más maquilla je para mercadeo electoral.

8. Necesitamos fortalecer la democracia que tenemos para hacerla más expresiva de la defensa del bien común y de la promoción de la dignidad humana, que garantice el imperio de la ley para todos los sectores sin exclusión. Necesitamos que el proceso se realice con nuevas reglas, y las más urgentes deben aprobarse de inmediato para que incidan en estas elecciones, urgimos la participación de gente proba y honesta que se mantenga tal en la gestión del Estado en todos sus niveles e instituciones. Necesitamos ciudadanos y funcionarios honestos, con conciencia ética y sentido de responsabilidad moral en el manejo de los asuntos públicos y privados.

9. Participar en las elecciones es importante para todos, a sabiendas de que los márgenes en los que podemos elegir son insuficientes. En la mayoría de los casos, habrá que elegir no tanto al mejor cuanto al menos malo. Pedimos a los ciudadanos responsables continuar con la presión sobre el Congreso de la República para que haga los cambios que deben hacerse en la ley electoral y de partidos políticos. El Congreso actual así como el próximo deberán redefinir su agenda para establecer mecanismos de reforma de sus actuaciones y de la normatividad institucional del país.

10. No podemos olvidar que en nuestro país la mitad de los niños viven en estado de desnutrición crónica, los jóvenes ven que se les niega un futuro digno, más de la mitad de la población vive en pobreza, el flujo migratorio no se detiene, siete de cada diez trabajadores se desempeñan en el sector informal, la violencia se expresa en todos los sectores del país y el crimen organizado es muy probablemente el mayor empleador del país.

11. Frente a este panorama queremos gritar también con indignación: ¡basta ya! Necesitamos romper el ciclo de corrupción, impunidad y conflictividad para proponernos ser una Guatemala distinta, que no tema a la verdad pero que tampoco busque imponer como absolutas verdades parciales, que promueva la justicia y el derecho, que rompa con los ciclos de exclusión y que tampoco postule nuevas exclusiones que corrijan las anteriores pero que perpetúen la conflictividad. Es el momento de abrir bien los ojos, razonar con claridad, para hacer una elección responsable y consciente. Es el tiempo de exigir a los candidatos veracidad, transparencia y honestidad.

12. Queremos una Guatemala distinta y nos comprometemos para que la verdad del Evangelio, la que libera integralmente, sea nuestra mayor contribución al cambio social y ético que como país necesitamos.

Guatemala, 3 de junio de 2015.

+ Rodolfo Valenzuela Núñez Obispo de la Diócesis de La Verapaz Presidente de la CEG.

+ Domingo Buezo Leiva Obispo del Vicariato Apostólico de Izabal Secretario General de la CEG

<http://www.iglesiacatolica.org.gt/20150603.pdf>

(10 de junio de 2015)

[Volver al Índice](#)

Marruecos

Nota del Consejo de Comunidades Marroquíes en el Extranjero sobre el Primer Encuentro Internacional sobre "El Imán y los desafíos del contexto europeo"

Abdellah Boussouf: trabajaremos para producir un conocimiento religioso partiendo del modelo marroquí y difundirlo en varios idiomas europeos

El Consejo de la Comunidad Marroquí en el Extranjero (CCME) clausuró ayer domingo 31 de mayo de 2015, por la tarde, en Marrakech, las obras del primer Encuentro Internacional sobre "el Imán y los desafíos del contexto europeo" que se enmarca dentro de los encuentros que giran en torno a la cuestión del "Islam en Europa y los desafíos de la convivencia".

Durante su discurso de clausura, el Secretario General del CCME, Sr. Abdellah Boussouf, afirmó en que los temas discutidos en este encuentro iluminaron el camino del Consejo, que seguirá reflexionando para encontrar las maneras más eficaces para realizar lo que se ha alcanzado en este encuentro. "Hemos decidido seguir trabajando en forma de talleres temáticos partiendo de lo que se ha dicho, y los puntos que se han alcanzado colectivamente, recurriremos a las instituciones implicadas en este tema y vamos a trabajar para sensibilizarlas con el fin de ayudarnos a construir y reconstruir los conceptos que habéis tratado y convertir lo que se discutió durante estos dos días en pensamiento, conocimiento y ciencia", subrayó el Sr. Boussouf.

Por otra parte, el Sr. Boussouf criticó la ausencia de trabajos científicos e intelectuales con idiomas extranjeros sobre la referencia religiosa islámica basada en la moderación y la escuela Maliki, y expresó el deseo del CCME en la producción de un conocimiento científico a partir del modelo marroquí y difundirlo en varios idiomas europeos a través de métodos modernos, recordando el papel fundamental del Imán en la difusión de este modelo.

También afirmó que el Consejo está dispuesto a asumir los gastos de aprender el idioma del país de residencia para los imanes participantes que no dominan el idioma del país en que viven ya que la comunicación se convirtió en un acto obligatorio, además de su disposición a formar los Imanes en el arte de la comunicación, así como proporcionar guías sobre los antecedentes históricos de la legislación europea. "Para saber que algunas de las tensiones que se encuentran en las sociedades occidentales no están dirigidas a los musulmanes, pero forman parte del proceso histórico de estos países en su relación con la religión en general", añadió.

En otro sentido, el Sr. Boussouf hizo un llamamiento, en la sesión de clausura, presidida por Abdellah Redouane, presidente del grupo de trabajo "Religión y educación religiosa" en el CCME, a los imanes para unirse y para que puedan

hacer oír su voz en Europa y imponerse en los medios de comunicación y expresar sus posiciones.

En otro contexto, el Sr. Boussof anunció la determinación del Consejo para establecer cinco talleres temáticos relacionados con una serie de temas religiosos en Europa, como la gestión de las mezquitas para determinar la diferencia entre la función del Imán y la función de la gestión de las mezquitas y la renovación de las élites en la gestión de las mezquitas a través de recibir a los jóvenes e incorporarlos en la gestión, así como poner de relieve el papel de la mujer en el espacio islámico europeo, además del tema de un libro islámico dirigido a la sociedad Europea.

El Secretario General del Consejo de la comunidad Marroquí en el extranjero concluyó su intervención invitando a reflexionar sobre la situación social del imán en Europa. "Porque si el Imán no era estable psicológica y económicamente, no puede ser un elemento de estabilidad para los otros", concluyó el Sr. Boussof.

Al clausurar las obras de este encuentro, y después de la presentación de las recomendaciones por parte del investigador Montasir Hamada, Jawad Chakouri, encargado de misión en el CCME, leyó un telegrama de lealtad y fidelidad a Su Majestad el Rey Mohammed VI presentada por el Secretario General del Consejo de la Comunidad Marroquí Residente en el Extranjero, Abdellah Boussof, en nombre de los participantes en el primer Encuentro Internacional sobre "El Imán y los desafíos del contexto europeo."

Es de destacar que este encuentro internacional, que forma parte de una serie de encuentros sobre el tema del "Islam en Europa y los desafíos de la convivencia", contó con la presencia de más de 100 participantes entre imanes, gerentes de mezquitas, investigadores y académicos que vinieron de Francia, España, Italia, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Países Bajos, así como de Marruecos.

Copyright CCME 2013
1º de junio de 2015

<http://www.ccme.org.ma/es/actividades/43671>
(5 de junio de 2015)

[Volver al Índice](#)

México

Tesis Jurisprudencial de la Corte Suprema que se pronuncia sobre la constitucionalidad del matrimonio homosexual, declarando como contraria a la Carta Fundamental una norma que considere la procreación como finalidad del matrimonio o que lo defina como un contrato celebrado entre un hombre y una mujer

TESIS JURISPRUDENCIAL 43/2015 (10a.)

MATRIMONIO. LA LEY DE CUALQUIER ENTIDAD FEDERATIVA QUE, POR UN LADO, CONSIDERE QUE LA FINALIDAD DE AQUÉL ES LA PROCREACIÓN Y/O QUE LO DEFINA COMO EL QUE SE CELEBRA ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER, ES INCONSTITUCIONAL. Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social. Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales. La distinción es discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso. Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como "entre un solo hombre y una sola mujer". Dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión. Al respecto cabe recordar que está prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Así pues, bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual. Por tanto, no es factible hacer compatible o conforme un enunciado que es claramente excluyente.

Amparo en revisión 152/2013. 23 de abril de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretarios: Karla I. Quintana Osuna y David García Sarubbi.

Amparo en revisión 122/2014. 25 de junio de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario

Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez.

Amparo en revisión 263/2014. 24 de septiembre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada.

Amparo en revisión 591/2014. 25 de febrero de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto aclaratorio, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez.

Amparo en revisión 704/2014. 18 de marzo de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna.

LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis jurisprudencial fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión privada de tres de junio de dos mil quince. México, Distrito Federal, cuatro de junio de dos mil quince. Doy fe.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
MÉXICO
4 de junio de 2015

[Volver al Índice](#)

Reino Unido

A. Nota de prensa relativa a la prohibición, en dos escuelas primarias judío ortodoxas del norte de Londres, para que las madres condujeran automóviles al llevar a sus hijos a clases

Ultra-Orthodox Jewish schools drop ban on mothers driving

London schools back down over proposed ban on religious grounds, which the Equality and Human Rights Commission said was unlawful

The school run near Beis Malka school in North London on a rainy Friday in May. Beis Malka is one of two Ultra-Orthodox Jewish sect schools to advise mothers to stop driving

Two ultra-Orthodox Jewish schools have backed down on a proposed ban on mothers driving children to school after the Equality and Human Rights Commission warned them that it was unlawful and discriminatory.

In a letter sent after consultation with the Department for Education, Onora O'Neill, chair of the commission, described the actions of the Belz sect, which runs the two schools in Stamford Hill, north London, as illegal.

On Wednesday, the commission wrote to the sect saying its "actions are unlawful under the Equality Act 2010". The group runs Talmud Torah Machzikei Hadass, a boys' primary school, and Beis Malka, a primary school for girls.

The schools had said that, from August, any child driven to school by their mother would be turned away at the gates. The letter said the ban was based on the recommendations of Rabbi Yissachar Dov Rokeach, the Belzer spiritual leader in Israel.

But now Ahron Klein, chief executive of the schools, said the ban was made without the approval of the governors and that mothers would be able to drive to the schools.

"The headteacher sent out the letter on behalf of the spiritual heads of the community, who had not taken into account the implications of such a policy," he said in a statement.

He added: "The school believes that women have a choice about whether they want to drive or not, and our policy is to accept all children who are members of our community, which we have been doing for the last 40 years."

Klein pointed out that the letter to parents setting out the ban explained "our values may be compromised in [women] driving a vehicle". But he added that it also said the schools respected individual choices.

And he revealed the backdown over the proposed ban, saying: "However, the message that children will be excluded has not come from the school's board of governors, who did not approve the letter in advance."

A spokesperson for the Equality and Human Rights Commission said: "We have written to the school's proprietors to seek assurances that they are complying with the law. While we broadly welcome this statement, we hope to receive a formal response to our letter soon providing full clarification and confirmation that they will meet their legal obligations."

Gloria De Piero, the shadow minister for women and equalities, wrote to the commission last week asking for "urgent clarification of the law" over whether religious freedoms trumped other rights. "Our laws protect individuals in the enjoyment of their basic rights and freedoms from discrimination because of their sex and I have serious concerns about the implications of the ban as reported," she wrote.

Lady O'Neill's reply said: "In our view, the actions of the proprietor of the two schools in question are likely to constitute direct discrimination [contrary to section 13] by association with the sex of another person [in this instance their mothers, when driving them to school]."

Nicky Morgan, the education secretary, has also condemned the ban as "completely unacceptable in modern Britain".

Parents in the area have defended the ban, which was first reported by the Jewish Chronicle last week, as part of living within the Belz community. Women rejected the characterisation that they were oppressed and the schools wrote to Morgan, saying the notice had been misrepresented.

Matthew Weaver and Jane Martinson
Friday 5 June 2015
The Guardian

© 2015 Guardian News and Media Limited or its affiliated companies. All rights reserved.

<http://www.theguardian.com/world/2015/jun/05/ultra-orthodox-jewish-schools-drop-ban-on-mothers-driving>
(10 de junio de 2015)

[Volver al Índice](#)



B. Iglesia Metodista publica informe sobre 1.885 casos de abuso en su interior, desde 1950 a 2014. En representación de la iglesia, el Secretario de la Conferencia Metodista, el reverendo Martyn Atkins, ha expresado una disculpa sin reservas en nombre del metodismo¹²⁹.

Church issues 'full and unreserved apology' to abuse survivors

The Methodist Church in Britain has today published the report of an independent review of past safeguarding cases related to the Church from 1950 to 2014.

Speaking on behalf of the Church, the Secretary of the Methodist Conference and General Secretary the Revd Dr Martyn Atkins has issued a full and unreserved apology to survivors and victims of abuse in response to the report:

"On behalf of the Methodist Church in Britain I want to express an unreserved apology for the failure of its current and earlier processes fully to protect children, young people and adults from physical and sexual abuse inflicted by some ministers in Full Connexion and members of the Methodist Church. That abuse has been inflicted by some Methodists on children, young people and adults is and will remain a deep source of grief and shame to the Church.

"We have not always listened properly to those abused or cared for them, and this is deeply regrettable. In respect of these things we have, as a Christian Church, clearly failed to live in ways that glorify God and honour Christ.

"I am certain that the Methodist Conference will want to resolve to do all in its power to improve its systems to protect children, young people and adults from abuse within the life of the Church and on Church premises, and to review them diligently on a regular basis."

The independent Past Cases Review considered all safeguarding cases for which there were written records and those recalled from memory by ministers and members of the Church going back to 1950. These included cases that occurred within a church context as well as those which were reported to the church as a matter of pastoral concern but which occurred away from the church.

In each identified case, the Church's response was reviewed on whether it had been safe, pastorally appropriate and compliant with current legislation and policy. Where possible and appropriate cases have been referred to the police or other remedial action has been taken. The aim of conducting the review and writing the report has been to learn the lessons of the past so that

¹²⁹ El informe completo puede consultarse en nuestra página web: www.celir.cl/v2/Otros/InformeAbusosMetodistaRU.pdf

safeguarding work within the Methodist Church is of the highest possible standard and the Church is safe for all.

The review identified 1,885 past cases, which included sexual, physical, emotional and domestic abuse as well as cases of neglect. In approximately one quarter of these cases, church ministers or lay employees were identified as the perpetrators or alleged perpetrators. In 61 of these cases there was contact with the police and there are 6 ongoing police investigations as a result.

The review, which has taken three years, was led by former Deputy Chief Executive of Barnardo's Jane Stacey, who has had a long career in senior management of organisations in the child welfare field.

"It was a courageous act for the Methodist Church to launch such a comprehensive Past Cases Review. Even more courageous was the response from the survivors or victims who relived very difficult experiences to contribute to the review, either directly or through a third party. However thorough the review has been, there are undoubtedly cases that have not been reported and the Church would encourage survivors and victims and those with any information to contact the Safeguarding Team: safeguarding@methodistchurch.org.uk. They will be listened to and support will be offered.

"There are many lessons to be learnt, but the most challenging are those that require a significant culture change throughout the church, and particularly for ministers and church leaders. The Church will need further courage to implement the review's recommendations, which are far-reaching and call for major changes in both practice and culture. The Methodist Church has already taken measures to improve safeguarding across the Connexion and implementing the learning from this review will be the next step to ensuring that the Church can be a safe place for all."

The Methodist Conference, meeting in Southport from 25 June to 2 July, will discuss the findings of the Past Cases Review and will be invited to establish an implementation group to take forward the report's 23 recommendations.

Methodist Church
Copyright ©2014
28 de mayo de 2015

<http://www.methodist.org.uk/news-and-events/news-releases/church-issues-%E2%80%98full-and-unreserved-apology%E2%80%99-to-abuse-survivors>
(5 de junio de 2015)

[Volver al Índice](#)

Venezuela

A. Comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana en relación a la violación de Derechos Humanos del ex alcalde Daniel Ceballos

COMUNICADO: Violación de los DDHH de Ceballos y presos políticos

"El Señor... me ha enviado a llevar la buena nueva a los pobres, a curar los corazones deshechos, a proclamar la libertad a los cautivos y retorno de la luz a los presos... a consolar a todos los que están dolientes..." Is. 61,1-2

La comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana, en el ámbito de su competencia, ve con preocupación el traslado del ex alcalde Daniel Ceballos al "Centro de reclusión para procesados judiciales - 26 de - julio", ubicado en San Juan de los Morros, aproximadamente a 150 kilómetros de Caracas, durante la madrugada del 23 de mayo. El sorpresivo traslado en condiciones humillantes, se hizo sin informarles a sus familiares ni abogados, y pone en grave e inminente peligro al ex alcalde Ceballos, quien se encontraba detenido en el centro de procesados militares (CENAPROMIL) en Ramo Verde desde hace más de un año.

El ex alcalde Ceballos, así como el dirigente político Leopoldo López, según han informado sus familiares, se mantienen en huelga de hambre desde finales de mayo; esto ha generado deterioro en la salud física, aunado a las condiciones inhumanas, ponen en riesgo su vida e integridad personal.

Tal como lo ha recomendado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, exhortamos con carácter de urgencia a las autoridades venezolanas para que todos los detenidos por razones políticas y en especial el ex alcalde Daniel Ceballos, quien está en precario estado de salud, tenga acceso a atención con un médico de su confianza y puedan reunirse con sus abogados y familiares.

Igualmente solicitamos que se permita la visita de organismos de carácter humanitario, entre ellos la Cruz Roja Internacional y esta comisión de Justicia y Paz de la CEV, a quienes se encuentran en esta situación. El derecho humano a la vida y la salud prela ante cualquier posición ideológica y el Estado está obligado a respetarlo y garantizarlo.

Entre los objetivos específicos de estas visitas humanitarias están: constatar el estado de reclusión de las personas detenidas, recibir directamente sus inquietudes y comentarios al respecto y observar de manera independiente el cumplimiento de las condiciones de detención que estas personas tienen siguiendo los estándares de derechos humanos establecidos en nuestra Constitución y en la normativa internacional vinculante para la República en esta materia.



En Caracas, a los 04 días del mes de Junio 2015

+ Mons. Roberto Lückert León
Presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la CEV

<http://www.cev.org.ve/index.php/noticias/121-comunicado-violacion-de-los-ddhh-de-ceballos-y-presos-politicos>
(10 de junio de 2015)

[Volver al Índice](#)

B. Carta del Arzobispo de Caracas al líder opositor, Leopoldo López, para que deponga su huelga de hambre

CARDENAL JORGE UROSA SAVINO: CARTA A LEOPOLDO LOPEZ

CDNO. LEOPOLDO LÓPEZ,
Ramo Verde.

Estimado Leopoldo:

Recibe un cordialísimo saludo. Me dirijo a ti en medio del sacrificio que, según tu conciencia, estás haciendo por Venezuela. En mi condición de Arzobispo de Caracas, Pastor de todos los fieles de nuestra querida ciudad capital, hoy, Día del Padre, además de felicitarte por tus dos pequeños hijos, te invito encarecidamente a concluir la huelga de hambre que desde hace cuatro semanas estás realizando.

Sin duda has dado un ejemplo de firmeza en tu propósito de solicitar acciones que tienen que ver con las elecciones parlamentarias que deben realizarse este año y, sobre todo, con la exigencia de libertad de los presos políticos que actualmente sufren una terrible situación en nuestro país.

Tu valiente gesto es, sin embargo, peligroso para tu vida, contrariando los designios de Dios, y podría tener un desenlace fatal, lo cual causaría gran sufrimiento a tus seres queridos, especialmente a tu madre, tu esposa y tus niños, que tanto te quieren y necesitan.

Por eso, en el nombre de Dios y con gran afecto sacerdotal, te pido que concluyas tu huelga de hambre, a fin de preservar tu vida y continuar la lucha por la libertad y la democracia que son tus ideales y propósito de tu existencia.¹³⁰

Te encomiendo en mis plegarias a Dios Nuestro Señor, e invoco para ti la maternal protección de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Caracas y de toda Venezuela.

Con mi afectuosa bendición episcopal,

+JORGE L. UROSA SAVINO,
Cardenal Arzobispo de Caracas
22 de junio de 2015

http://www.arquidiocesisdecaracas.com/iglesia_comu/popup_noticias/noticias_210615.html

(25 de junio de 2015)

[Volver al Índice](#)

¹³⁰ El destacado es nuestro.

Tierra Santa

Comunicado de prensa de la Asamblea de Ordinarios Católicos de Tierra Santa que condena el atentado incendiario contra la Iglesia de Tabgha

*Comunicado de Prensa
Condena del atentado incendiario contra la Iglesia de Tabgha*

Esta mañana, 18 de junio, mientras se escuchaba el noticiero en la radio de Israel sobre un incendio en la Iglesia de la Multiplicación de los Panes y Peces en Tabgha, los cristianos de Tierra Santa, obispos y fieles, quedaron profundamente consternados al enterarse de que se trataba de un acto intencional durante la noche, y que un monje y un voluntario alemán, fueron intoxicados por el humo y fueron trasladados al hospital.

Es otro acto de violencia perpetrado por individuos intolerantes y escrupulosos que dañan la imagen de Tierra Santa, ofenden a los cristianos en este país y a la Iglesia en su conjunto, y afecta la idea de un Estado que se define como democrático, tolerante y seguro.

Compartimos la angustia de los Padres Benedictinos, guardianes del santuario y expresamos nuestra solidaridad.

Esta es la tercera vez que la comunidad benedictina de Tierra Santa se ha visto afectada por ataques delictivos similares. El 27 de abril de 2014, en el mismo lugar, en Tabgha, jóvenes extremistas judíos profanaron cruces y un altar. En la Abadía de la Dormición benedictina, en el Monte Sión, cerca del Cenáculo, un incendio se inició el 26 de mayo 2014, a pocos minutos después de la partida del Papa Francisco. Los benedictinos de Monte Sión también han sido frecuentemente objeto de actos de desprecio y violencia.

Tales actos criminales dañan gravemente la convivencia de las comunidades religiosas en el país.

Judíos, cristianos y musulmanes, juntos, deben luchar contra este tipo de manifestaciones de violencia y extremismo. La educación de los jóvenes en las escuelas religiosas, debe enfatizar estar a favor de la tolerancia y la convivencia.

En los últimos meses, otros ataques fueron perpetrados contra sitios cristianos o mezquitas y no se ha dado seguimiento a las investigaciones. Dada la gravedad de estos incidentes, exigimos investigación inmediata y que los autores de este acto de vandalismo sean llevados ante la justicia.

Agradecemos a los líderes políticos y religiosos que han condenado este acto y expresado su solidaridad.



Nuestra sociedad necesita nuestro testimonio de respeto por la dignidad de cada hombre y mujer, el respeto de su fe y proteger la santidad de todos los lugares santos y su libre acceso a los creyentes.

Los Obispos Católicos de Tierra Santa

<http://es.lpj.org/wp-content/uploads/2015/06/ES-Communiqu%C3%A9-incendie-Tabgah-juin-2015.pdf>
(25 de junio de 2015)

[Volver al Índice](#)



Centro de Libertad Religiosa Derecho UC

Facultad de Derecho UC, 4° Piso

Av. Libertador Bdo. O'Higgins 340. Santiago de Chile

tel: (56 - 2) 2354 2943 - (56 - 2) 2354 2759 *código postal:* 8331010

e-mail: celir@uc.cl www.celir.cl